

Revista Foro

Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia

No. 34

Junio de 1988

Valor \$6.000.00

Violencia y desplazamiento forzado

Ilustración: Hernán Mauricio Suárez



Ediciones Foro Nacional por Colombia

DOS
PUNTOS DE
VISTA CON
CANALES DE
DISCUSIÓN
DURANTE
15 AÑOS



FORO QUINCE AÑOS

Fundación Foro Nacional por Colombia

Eduardo Vidal Díaz - Presidente

Cra. 4A No. 27-62 Tels.: 2822550 - 3340967 - 2836045 Fax.: 2861299
Santa Fe de Bogotá.

Eduardo Vidal - **Director Foro Centro**

Cra. 3A No. 26-52 Tels.: 2433464 - 2840582
Santa Fe de Bogotá.

Diógenes Rosero - **Director regional Foro Costa Atlántica**

Calle 41 No. 43-115 P. 4 Tel.: 3403033 - 3405041
Barranquilla

Esperanza González - **Directora regional Foro Valle del Cauca**

Diag. 34 No. 6-35 Tel.: 5141141 Fax: 5581534
Santiago de Cali

Aura Hernández - **Directora Foro Regional Tolima (Ciret)**

Calle 7 No. 4-44 Tels.: 611441 - 610960
Ibagué



Director:

Pedro Santana Rodríguez

Editor:

Hernán Suárez

Comité Editorial:

Eduardo Pizarro Leongómez
Orlando Fals Borda
Ricardo García Duarte
Rocío Londoño Botero
Jorge Bernal Medina

Colaboradores Internacionales:

Eduardo Galeano(Uruguay), Jorge Enrique Hardoy†, Hilda Herzer, Mario Dos Santos† (Argentina), Edison Nunes (Brasil), Alfredo Rodríguez, Alex Rosenfelt (Chile), Gustavo Riofrío, Rossana Reguilo (Mexico), Federico Arnillas (Perú), Fernando Carrión, Jorge García (Ecuador), John Turner (Inglaterra) David Slater (Londres), Juan Díaz A. (Francia), Alejandro Angulo (Roma), Cándido Grybowski (Brasil), Carlos Guerra Rodríguez (España).

Junta de Socios:

Humberto Arboleda, Francisco Mejía, Eduardo Pizarro, Pedro Santana, Fabio Velásquez, Adolfo Alvarez, María Clara Echeverría, Rocío Londoño, Eduardo Vidal Díaz, Diógenes Rosero, Esperanza González, Aura Hernández.

Gerente:

Sandra Tatiana Jiménez López

Ilustraciones:

Mauricio Suárez y Andrés Yepes

Impresión:

Gente Nueva Editorial

Distribución y suscripciones:

Cra. 4A No. 27-62
Teléfonos: 2835982 - 2822550 - 2861488 -
3340967
Fax: 2836045
Apartado Aéreo 10141
Santa Fe de Bogotá - Colombia

Licencia:

No. 3886 del Ministerio de Gobierno

Tarifa Postal reducida: No. 662

ISSN: 0121-2559

Contenido

Editorial

- 2 Colombia: Violencia y Derechos Humanos

Violencia y Desplazamiento Forzado

- 5 Desplazamiento en Colombia:
perspectivas de género *Nora Segura Escobar*
- 12 De la infamia a la esperanza, la incertidumbre
persistente: El caso La Miel *Francisco Taborda Ocampo*
- 19 Víctimas y sobrevivientes de la guerra:
tres miradas de género *Donny Meertens*
- 36 Violencia y desplazamiento:
el drama continúa *Jorge E. Rojas Rodríguez*

Política Nacional

- 41 Ecos del Mandato por la Paz *Luis Carlos Restrepo*
- 47 Elección de alcaldes y
cultura política *Pedro Santana Rodríguez*
- 57 ¿Hay una renovación de la política? *Medófilo Medina*

Ciudad y Gobernabilidad

- 68 Desafíos para el gobierno de la ciudad
en América Latina.
Fuerzas globales, expresiones locales *Alfredo Rodríguez*

Economía y Sociedad

- 86 Política cafetera, gobernabilidad y
representación gremial *Oscar Arango Gaviria*

Ideología y Sociedad

- 99 Cornelius Castoriadis: pensador de la
creación *Fabio Giraldo Isaza*
- 107 Transformaciones actuales del
capitalismo y sus impactos sociales
y económicos *Cornelius Castoriades*

Libros y Reseñas

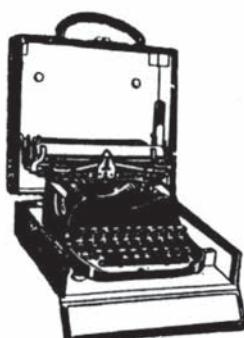
- 118 Ontología de la creación
Cornelius Castoriadis *Oscar Epinosa*

Colombia: Violencia y Derechos Humanos

Las cifras sobre la violencia en Colombia son escalofriantes. Más de 25.000 asesinatos cada año que sumados a los cerca de 7.000 muertos en accidentes de tránsito nos coloca frente a una cifra de 32.000 muertes violentas. Durante los últimos 10 años han sido asesinadas ante nuestros ojos más de 250.000 personas, que es algo así como todos los habitantes de una ciudad como Montería, la capital del departamento de Córdoba. Más de la mitad de los secuestros que suceden en todo el planeta se cometan en Colombia y, para rematar, uno de cada tres enfrentamientos armados ocurridos en todo el mundo también se registra aquí.

Nuestro país ocupa el tercer lugar entre los más corruptos del orbe y además ha ingresado en la lista de las naciones en las cuales hay una flagrante y creciente violación de los derechos humanos. Año tras año durante los meses de marzo y abril, cuando se reúne la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, vemos el desfile de funcionarios gubernamentales, dizque responsables de los Derechos Humanos, tratando de explicar lo inexplicable, es decir, cómo se ha llegado y se mantienen estas cifras y qué hace o no el gobierno para tratar de controlar la situación.

Pero lo más horripilante es que la mayor parte de los crímenes permanece en la impunidad. Según los datos más optimistas, más del 83% de todos los asesinatos permanece impune, solo una parte de los crímenes es denunciada. La mayor parte de los asesinatos corresponde a la llamada delincuencia común y con respecto a la delincuencia ligada con los crímenes políticos o contra la población civil los principales responsables son los grupos paramilitares. Según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos correspondiente al año de 1997, los numerosos grupos paramilitares cometieron el 69% de todos los asesinatos extrajudiciales de índole política. En ese mismo informe se dice que «el gobierno no tomó medidas significativas para frenar el poder de los grupos paramilitares». El informe denuncia la colaboración activa entre organismos de las fuerzas armadas y grupos paramilitares. Esta afirmación del Departamento de Estado ha sido confirmada por múltiples fuentes: el alcalde de Puerto



Así lo ratificó recientemente, un juez relacionó a las Fuerzas Armadas con los grupos que perpetraron la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, estos nexos son muy claros en regiones como Urabá. La lógica que ha llevado a estas relaciones se basa en la teoría de la Seguridad Nacional según la cual el enemigo interno debe ser aniquilado, «hay que quitarle el agua al pez» se decía en el informe de Santafé dos, en el cual se fijaron las reglas del juego para enfrentar la lucha de las guerrillas latinoamericanas.

Las guerrillas no se quedan atrás en cuanto a barbarie y violación de los Derechos Humanos. Los grupos subversivos, según el informe que hemos comentando, cometieron el 23.5% de todos los asesinatos extrajudiciales de índole política ocurridos en Colombia en 1997. La guerrilla, además, ha venido siendo un actor de la guerra que afecta cada vez más las libertades civiles de los colombianos. Fueron durante dicho año los responsables de más del 50% de todos los secuestros, han impedido en zonas vastas del territorio el libre desplazamiento de los ciudadanos colombianos, han retenido personas civiles, ajenas por completo al conflicto armado y además en el último período afectaron las elecciones municipales al declarar como objetivo militar a más de 1.500 candidatos a las alcaldías, a los concejos municipales y a las asambleas departamentales. Como es obvio, todas estas acciones afectan las libertades democráticas de los colombianos y las colombianas.

La situación sigue agravándose día tras día. Los grupos paramilitares y la extrema derecha han tomado como objetivo militar a los activistas y profesionales defensores de los derechos humanos, lo mismo que a los líderes de las iniciativas de paz y de convivencia ciudadana. Han sido asesinados decenas de defensores de los derechos humanos, las ONGs han sido estigmatizadas, y en regiones enteras del territorio colombiano los campesinos y la población civil han tenido que abandonar sus cultivos y sus pocas pertenencias para tratar de proteger sus vidas. Y decimos que para tratar porque las manos armadas de los paramilitares los persiguen hasta sus ranchos de invasores en las ciudades como ocurrió recientemente en la ciudad de Bello en el Valle del Aburrá. Hoy son más de un millón de personas las que han abandonado los campos como producto de la violencia desenfrenada que se ha degradado hasta asumir formas abiertas de terrorismo y violación de las más elementales normas aún del Derecho Internacional Humanitario.

Por todo ello hay que decir que la primera y más apremiante necesidad de la sociedad colombiana es la construcción de un orden democrático basado en el respeto por los derechos humanos. Dicho orden debe ser el producto de una negociación política de la guerra y del establecimiento de unas reglas de juego mínimas que permitan que la ley sea igual para todos, que la impunidad sea doblegada y que no existan cárceles de cinco estrellas para los delincuentes de



cuello blanco y cárceles totalmente inadecuadas para los seres humanos como son las pocilgas donde vive actualmente más del 95% de los presos, donde exista el debido proceso y se elimine la Justicia sin rostro y en donde brille por fin la justicia democrática. Todos sabemos que esta sociedad es precisamente a la que se niegan los grupos de intereses y violentos. Hay que construir una sociedad más igualitaria en términos sociales, económicos y políticos. Todo ello pasa por acordar en la negociación una profunda reforma agraria y urbana, un plan de erradicación de los cultivos ilícitos, una reforma política que democratice la sociedad política y, en primer término, a los partidos y que recupere la acción política para el bien común.

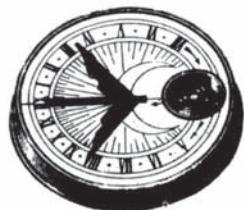
La refundación de la sociedad política y la reforma económica y social son los pilares para ir construyendo una sociedad en paz, al mismo tiempo que una reforma judicial es fundamental para combatir y doblegar la impunidad. Por todo ello vemos como positivas las acciones tendientes a movilizar a la sociedad colombiana para lograrla. Esta iniciativa la vemos muy bien reflejada en la propuesta de construir una agenda para la paz alrededor de una asamblea permanente de la sociedad civil. Esta asamblea debe ser la heredera natural de los más de 10 millones de colombianos que en octubre votamos por el Mandato por la Paz. La cita está aprobada por todos los actores que buscamos la paz y la movilización de la sociedad civil en una acción contundente en contra de la guerra y por la negociación inmediata del conflicto armado. Esta cita es en Bogotá el 30, 31 de julio y el 1 de agosto del presente año.

Santafé de Bogotá
Mayo de 1997.

* * *

Un agradecimiento especial

Los números 33 y 34 de la Revista FORO han contado con el auspicio y colaboración económica de la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres. Queremos agradecer públicamente dicha colaboración.



Nora Segura Escobar
Socióloga, investigadora-consultora independiente, profesora de la Universidad Externado de Colombia y ex-profesora titular de la Universidad del Valle.

Desplazamiento en Colombia: perspectivas de género

Nora Segura Escobar

"...Uno trata de sobrevivir y seguir pero son muchas las heridas que no cicatrizan. Los nietos son como la semilla de mis hijos...Lo que jamás voy a perdonar es que hayan matado al papá delante de los hijos"¹.

"...Aquí uno se siente seguro porque si lo matan, lo matan y listo!

En cambio allá sacan la persona, la amarran y le dan con hacha, lo torturan, es una muerte muy cruel, le mochan a uno la cabeza, en cambio aquí son dos tiros y listo"².

"...Esta es una región machista. Por eso la mujer del campo es más sumisa. La mujer del pueblo sabe enfrentarse a nuevas situaciones y decide. En el campo el hombre manda sin discusión y la mujer tiene hijos y atiende la cocina. Es muy triste porque no sabe ser mujer... La mujer desplazada que ha llegado a la ciudad logra características distintas, más importantes que las de la mujer del campo"³.

1

El conflicto armado y la violencia que han permeado la vida colombiana en la segunda mitad del siglo, inevitablemente están en la base de múltiples y sucesivos procesos de fractura descomposición y reestructuración de las comunidades agrarias y rurales. Las historias de expulsión y desarraigo constituyen un pasado común de millones de colombianos y su lógica implacable continúa perfilando selectivamente las biografías individuales y familiares de las actuales generaciones.



De la denominada violencia partidista de mediados de siglo que generó más de dos millones de “migrantes forzados”⁴ estamos llegando, al final de siglo, a cerca de un millón de “desplazados” contados a partir de 1985⁵. Aparte de las diferencias nominales, es claro que en comparación con el pasado, “el problema de los desplazados” hoy existe para la agenda pública nacional e internacional y se cuenta con un amplio repertorio de recursos jurídicos, organizativos y de información, entre otros⁶. Pero es claro, también, que la violencia actual es incomparable con la de ayer en términos de la multiplicidad de actores, los territorios comprometidos, el volumen de recursos económicos y tecnológicos, la capacidad destructiva y los niveles de degradación, de tal manera que hoy resultan más dramáticas las asimetrías entre los grupos armados y la población desarmada.

Desde mediados de los años 80 los ciclos de conflicto-violencia-desplazamiento presentan características más agudas en cuanto los distintos proyectos de control territorial se articulan con proyectos de desplazamiento-repoblamiento en la lógica paranoica de “quien no está conmigo está contra mí”⁷.

2

En el terreno analítico y en las propuestas de interpretación, los últimos años muestran una mayor abundancia de fuentes y de estudios, que presumiblemente apuntan a una comprensión más precisa de las dinámicas estructurales que subyacen al desplazamiento forzoso. Como es inevitable, aquí se expresan la diversidad ideológica, teórica y técnica de los analistas, las diferencias de enfoques, las miradas, alcances y límites inherentes a las disciplinas académicas involucradas, todo lo cual arroja un panorama muy desigual de desarrollo⁸.

En este punto vale destacar que aun cuando teóricamente es previsible y empíricamente comprobable, el **sexo** y la **edad** son variables muy importantes frente al desplazamiento, este reconocimiento apenas comienza a orientar la recolección de la información y la oferta de servicios

institucionales, y en mucha menor escala a nutrir los niveles descriptivos e interpretativos. A la luz de estas preocupaciones en el presente trabajo se intenta ilustrar el género como una óptica convergente con otros esfuerzos analíticos⁹.

Por otra parte, en los estudios sobre el tema parecen gravitar tensiones entre enfoques macro y micro estructurales, y correlativamente entre opciones metodológicas

1 Entrevista- Montería, 1996.

2 Entrevista- Montería, 1995.

3 Entrevista -Barrancabermeja, 1996. Luis Enrique Osorio, Párroco de Yondó durante 6 años.

4 Alejo Vargas V. “Conflictido interno en Colombia y desplazamiento forzado”. Ponencia presentada en el Seminario ‘Desplazamiento forzado y conflicto social en Colombia’, Universidad Nacional, Bogotá, noviembre de 1997.

5 Jorge Rojas. “Desplazamiento forzado, conflicto social y derechos humanos”. Ponencia presentada en el Seminario ‘Desplazamiento forzado y conflicto social en Colombia’, Universidad Nacional, Bogotá, noviembre de 1997.

6 Según el Informe de Investigación titulado “Estructura familiar, niñez y conflicto armado” de septiembre 2, 1997, p. 27, el gasto del Estado colombiano para la atención de la población desplazada asciende a \$36.807.000.000 mientras que la cobertura no alcanza al 25% de la población destinataria.

7 En algunos análisis de la confrontación política se peca, a mi juicio, de una visión excesivamente “objetivista” en la cual los componentes objetivos, el cálculo racional y los juegos de intereses estratégicos, ocupan toda la escena. Sería preciso hacerle espacio a las visiones fantasmiales sobre el “otro”, el miedo y la hipertrofia de su poder como resortes de la irracional escalada de las armas, de la instrumentalización de la población civil, y de la no responsabilización de las consecuencias de sus acciones. En esta lógica no hay responsables sino reacciones a las acciones del otro, y las víctimas son costos inevitables. Una presentación sucinta de los discursos y auto-representaciones de cada una de las partes aparece en la Separata Especial “El desplazamiento forzado en Colombia” del Cinep y la Fundación Social, de la Revista *Alternativa*, No. 16, dic. ‘97-feb. ‘98.

8 J.A. Castro y Mauricio García clasifican en 5 tipos las perspectivas analíticas más frecuentes: descriptiva y anecdótica, “científista”, “terrorismo de Estado”, historias de vida, y comprensión estructural y dinámica. Cfr. “Desplazamiento por la violencia, una lectura teológico-espiritual”. (Borrador para la discusión) s.f.

cuantitativas y cualitativas, que pueden tener alguna correspondencia con esquemas de división del trabajo no ajenas a la preocupación antes mencionada¹⁰.

Si bien, no es este el espacio ni el momento para abordar esta discusión, cabe anotar que los análisis políticos y económicos, generalmente más formalizados e interpretativos, tienden a situarse en el eje del *desplazamiento*, mientras que los que focalizan los *individuos* y los *hogares* tienden al análisis psicológico y cultural, a los enfoques fenomenológicos, a la descripción de casos mediante el recurso a historias de vida y formas testimoniales. En relación con lo anterior, en la vertiente de los estudios de género pueden encontrarse claves muy sugestivas hacia el quiebre de estas dicotomías poco conducentes y, quizás, hacia un diálogo de saberes y de modos de relación más fecundos.



3

Los desplazamientos forzados de población (tanto si se trata de refugiados como de desplazados internos según una distinción ya consagrada) se han asociado conceptualmente con características de nacionalidad y/o etno-raciales (vistas como problemas de minorías, de sus identidades y relaciones), con dimensiones de clase y de dominación política, entre otras, pero apenas recientemente se ha comenzado a hacer conciencia sobre otros marcadores sociales de diferencia que, como el *género* y lo *generacional*, actúan como vectores selectivos de expulsión territorial.

La edad y el sexo de las personas suponen formas peculiares de relación con la violencia, que se traducen en grados y tipos de riesgos de agresión, de probabilidades de

morir o de sobrevivir y de ser desplazado. Estas diferencias implican también impactos diferenciales sobre la calidad de vida de los hogares y de re-edición de proyectos de vida individuales y colectivos¹¹. A partir de las observaciones de campo y del trabajo sobre distintas fuentes puede hacerse el siguiente esquema analítico. Al hacer esta tipificación abstracta, simplificada por definición, sobre los lugares **predominantes** de inserción social no se desconoce la riqueza empírica de formas paralelas que, sin ser centrales, señalan tendencias de cambio, modalidades de rebeldía y disensión, casos desviados u otras, con implicaciones distintas frente a la muerte y a la agresión.

A) El género, como construcción simbólica de las diferencias entre hombres y mujeres y como principio de estructuración de las relaciones sociales, opera consecuentemente haciendo de los hombres, jóvenes y adultos, el eje de gravitación de los gru-

9 Aquí se utiliza el término sexo como el referente empírico del género. Pese a que para algunas autoras es un concepto aún insuficientemente desarrollado, busca dar cuenta de la construcción socio-cultural compleja, históricamente variable de lo femenino y lo masculino. Para efectos de la presente discusión interesa resaltar cómo las diferencias sexuales (aparentes y funcionales) entre hombres y mujeres se traducen en un sistema estereotipado y más o menos rígido de papeles y lugares sociales, que articulan las relaciones de poder-dominación en un contexto de guerra. En Arango, León, Viveros (Comp.) **Género e Identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino.** Bogotá, Tercer Mundo-Uniandes-U.Nacional, se recogen líneas centrales de los debates sobre el tema.

10 Aunque encuentro discutibles algunos puntos, es sugestivo el documento "Estructura familiar, niñez y conflicto armado. Informe de Investigación", septiembre de 1997. Facultad de Derecho, Universidad Nacional.



pos armados, de las organizaciones políticas, sindicales, cívicas, comunitarias. Por tanto, son también las víctimas prioritarias y directas de los asesinatos, las masacres, las torturas, las desapariciones, en su calidad de agentes sociales. Así, aunque la población masculina desplazada está sub-representada con respecto a su participación en el total de la población colombiana, los hogares con jefatura masculina duplican los encabezados por una mujer según cifras de Codhes-Sisdes-I, entidad que ha estado registrando sistemáticamente estos movimientos.

A su turno, las mujeres adultas y las jóvenes, muchas de las cuales han entrado en esa categoría en virtud de una maternidad temprana, son víctimas de violencia por sus relaciones afectivas con combatientes presuntos o reales, por ser habitantes de una localidad, como señuelo del terrorismo u otras razones que no tienen una referencia explícita a la condición de actor social. Esta relación, vicaria relativamente, con la violencia les da mayores probabilidades de supervivencia, por lo cual tienen una sobre-representación porcentual entre los desplazados y un papel central en la re-estructuración de la vida cotidiana.

Pero para ellas la violencia sexual es una modalidad específica de agresión que si bien no suele desembocar en la muerte, conlleva secuelas de varios órdenes, desde embarazos no deseados, contagios venéreos y otras

marcas visibles en el cuerpo y la salud, hasta marcas no visibles ni reconocibles de orden emocional. La violación sexual tiene una doble connotación de poder: el dominio y la afirmación del macho sobre la hembra y simultáneamente la humillación del “enemigo” vencido y la descalificación de su hombría para defender su territorio. Por eso, la violación sexual sistemática o episódica de las mujeres es un elemento inherente a la guerra y común denominador atávico de las formaciones del género¹².

11 Cfr. Nora Segura Escobar, otros. “La mujer desplazada y la violencia”. Informe de Investigación para la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Bogotá, marzo de 1996. Varios trabajos elaborados con Donny Meertens aportan, con un buen soporte empírico, algunas hipótesis preliminares sobre la relación género y violencia. Véanse de Nora Segura y Donny Mertens. “Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia”, en Revista *Nueva Sociedad*, No. 148, marzo-abril 1997. “Uprootedness, Gender and Internal Displacement in Colombia” en *Beyond Law*, Vol. 6, Issue 17, January 1997.

12 Para un panorama más amplio pueden verse los múltiples testimonios del caso colombiano incorporados en la bibliografía aquí mencionada. En el plano internacional véase, por ejemplo de Gloria L. Alibaruho “The rebuilding and reconstruction of fractured communities” Background paper for the Symposium 24-26 November 1997, Colin Powell Center for Public Policy, City College New York.

La incorporación activa de la mujer en organizaciones armadas, políticas, sindicales, comunitarias, religiosas le implica ampliar sus formas de exposición a la violencia directa (similares a las del hombre) sin que desaparezcan las de su condición femenina¹³.

B) La edad, como se mencionó antes, maximiza en los jóvenes de ambos sexos los riesgos de muerte, agresión y suspicacias por parte de los distintos agentes de violencia así como de presiones para incorporarse en sus filas. Los menores de edad¹⁴, que se suponen no reclutables a la luz del Derecho Internacional Humanitario, en el contexto de la guerra quedan librados a sus riesgos desde muy temprana edad.

Ahora bien, la presencia de niños y jóvenes en los grupos armados no procede del reclutamiento forzoso ni expresa motivaciones simples o decisiones racionales como distintas lecturas interesadas lo proponen. Es necesario reconocer un amplio repertorio de dimensiones, imágenes y agentes en combinaciones distintas y relativas al contexto familiar y al entorno específico. La fascinación por las armas, el uniforme y el poder que comportan, la falta de alternativas económicas y culturales en su entorno familiar y comunitario, la huida de relaciones de violencia intrafamiliar, la promesa de aventura y/o de relaciones afectivas, la incorporación previa de parientes o vecinos, son algunos de los elementos por examinar. No obstante, dentro de la población desplazada los menores de 14 años de ambos sexos tienen un peso importante aunque mayor para las mujeres.

13 Aparte de la insurgencia armada sobre lo cual se tiene más información, es difícil precisar el grado de incorporación femenina como combatiente en grupos paramilitares, y menos aún su grado de compromiso y sus modalidades en el ejercicio de la violencia. Por otra parte, en la aplicación de torturas y otras maneras de quebrar la resistencia de las mujeres, presunta o efectivamente vinculadas a la insurgencia, su sexualidad es receptora privilegiada de agresión como ha sido ampliamente documentado en la historia latinoamericana reciente, Colombia incluida. Para un tratamiento más sistemático véase el artículo de Donny Meertens en esta misma edición.



14 En las sociedades campesinas la categorización por edad es más simple que en las urbanas, por referencia a las estructuras laboral, escolar y familiar. Así, en las prácticas sociales y en los imaginarios colectivos, infancia, juventud, madurez, vejez, tienen referentes normalmente discrepantes de sus equivalentes urbanos y desde luego con especificidades propias para hombres y mujeres. Legalmente en Colombia es menor de edad quien esté bajo los 18 años, edad que rige más en lo penal que en lo civil y aún menos en lo laboral. Para las estadísticas oficiales la actividad laboral existe desde los 12 años de edad, puesto que las condiciones económicas y sociales de la mayoría de los hogares, en grados variables, imponen a niños y adolescentes responsabilidades propias de los adultos. Para las niñas de sectores populares la sustitución de la madre en tareas domésticas es, con mucha frecuencia, una de las estrategias de supervivencia y la condición para la generación de

4

Conceptualmente el desplazamiento puede pensarse por referencia a la reconstrucción del mundo cotidiano y la re-edición de un proyecto de vida¹⁵. Operacionalmente puede concretarse en un *periodo de transición*, que media entre el éxodo y la georeferenciación concreta de un proyecto de vida, independientemente que ésta remita al retorno, la re-ubicación o la permanencia en el lugar de llegada.

Metafóricamente el desplazamiento es el paréntesis que la violencia impone en el marco vital individual y familiar, pero no opera en un vacío socio-político, tampoco implica la ruptura absoluta con el pasado ni es neutro a la luz de las estructuras y prácticas signadas por el género. Lo que sucede en ese paréntesis, la temporalidad y los procesos que involucra es una función de la relación fragilidad-desprotección familiar y riqueza-seguridad del medio receptor.

Esto último reclama la movilización real y efectiva de distintos actores con grados distintos de responsabilidad frente al problema. Pero también un cúmulo de condiciones individuales y familiares de las víctimas (redes de apoyo, capital socio-cultural acumulado, profundidad de los traumas económicos y emocionales, etc.) y a las características del éxodo, que en su conjunto configuran el grado y profundidad de las fracturas y continuidades, cuya evaluación permite establecer grados de necesidad diferencial y estrategias más adecuadas de atención.

Ahora bien, las diferencias de género y generacionales en el proceso de transición cobran una enorme importancia en esta perspectiva, ya que no es suficiente focalizar la diferenciación inter-hogares sino, también, las que operan en el interior de estos, so pena de desestimar recursos internos para la superación y formas de desprotección específicas que la entorpecen.

Nuestras experiencias de trabajo y las provistas por organizaciones y personas que trabajan con la población desplazada arrojan suficiente evidencia sobre lo que



ingresos de la madre. Además el ingreso temprano en las relaciones sexuales y en la maternidad, con lamentable frecuencia de manera incestuosa y/o violenta, acortan aún más las fronteras de su infancia.

15 En un proyecto de investigación en curso, con Donny Meertens, trabajamos la idea de “proyecto de vida” como un intento conceptual y técnico de mediación entre lo público y lo privado, y lo individual y lo colectivo. Muy preliminarmente corresponde a lo siguiente: La idea de ‘proyecto de vida’ connota futuro, prefiguración, planeación, control, por contraste con la idea de ‘estrategias de supervivencia’ que hace énfasis en el presente, a una visión de mera subsistencia. Por el contrario, en nuestra propuesta el énfasis se sitúa en la intención, la voluntad de superación, el deslinde con la posición de víctima inerme, de objeto pasivo de la adversidad. Aunque sea un producto individual supone, tanto en su “diseño”, como en su desarrollo la inclusión en una trama de relaciones y de recursos “externos”.

hemos llamado provisionalmente el “balance de género” que grosso modo corresponde al impacto diferencial del desplazamiento por sexo y edad.

Muy esquemáticamente formulada, la idea es que en virtud de la asimetría en las trayectorias existenciales y relaciones articuladas al género, las pérdidas son igualmente asimétricas. Las mujeres se ven más afectadas por la fuerza destructora del éxodo y el desarraigamiento de lo que era su mundo limitado de relaciones primarias en el campo, mientras que los hombres, en el lugar de llegada sufren con mayor rigor la pérdida de la preeminencia masculina fundamentalmente centrada en su papel de proveedor económico.

En otras palabras, el trabajo doméstico constituye para la mujer un vehículo de la reparación, no solo por la continuidad en el punto de llegada, sino por su re-definición laboral y la ampliación del marco vital (servicio doméstico, acceso a ingresos, nuevas sociabilidades y destrezas). Por otra parte, la maternidad es otro vehículo de continuidad y una fuente de arraigo ligado a su prioridad en la identidad femenina (frente a otras relaciones, incluida la conyugal). Por el contrario, en el varón normalmente la magnitud de las pérdidas no se corresponde con recursos hacia la reparación que le permitan re-editar un proyecto de vida. La ruptura laboral y de las redes relationales en torno de ella, así como las pérdidas en la identidad y en la auto-estima ligadas al desempleo se condensan en la pérdida de la autoridad legitimada en la provisión económica.

A su turno, la menor edad relativa de los sobrevivientes actúa a favor de un proceso de transición más corto y de elaboración de un proyecto de vida personal (que incluye o no la familia de origen) mientras que la edad avanzada es un factor de dificultad que tiende a su prolongación.

Con la discusión anterior se ha pretendido sugerir claves interpretativas, provocar miradas desprevenidas, formular líneas de trabajo y discusión en la convicción de que un conocimiento más completo de los dramas de la guerra y de sus víctimas puede redundar en una mayor capacidad de la sociedad colombiana para actuar sobre sí

misma. Por otra parte, se ha intentado entender en qué medida el desplazamiento, no es solo destrucción sino, también, construcción de alternativas, de qué manera la destrucción no es necesariamente negativa en todas sus dimensiones y en qué formas es posible hacer menos traumáticos sus efectos corrosivos sobre el tejido social y sobre sus víctimas.

«...Nosotros trabajamos en zonas en las que hay una estructura jerárquica centrada en el varón y al producirse el desplazamiento, las mujeres tienen mucha más plasticidad para adaptarse a sus nuevos roles. Entonces se produce algo así como la inversión del status y es la mujer quien asume la cabeza del hogar. El hombre siente que se devalúa.. los hombres se tornan retráidos, pero no es el retramiento de la placidez de no hacer nada sino de la desesperanza, porque sienten que ya no sirven para nada, es muy frecuente la violencia física. De todas formas, son las mujeres quienes tienen mayor capacidad adaptativa, por ejemplo, tenemos estudios sobre viudos y viudas y se ve que los hombres hacen mucho más problemas psicológicos y físicos después de la pérdida de sus compañeras. Y los hemos visto también en los niños: se afectan más que las niñas con los hechos violentos...»¹⁶.

«....Aquí en Villavicencio es más fácil encontrar trabajo para la mujer que para el hombre...uno no encuentra qué hacer. Hay mucha deserción escolar, por parejo las muchachas y los muchachos, a ellas les sale trabajo en una casa de familia y ellos se van para Miraflores a raspar coca....Allí viene el acabó de la familia...»¹⁷.

«...En el barrio están los «champetas» pero la ley no hace nada. Claro que uno sí ve que cada rato pasa la gente del DAS y de la Sijin, uno los reconoce porque son unas camionetas con los vidrios oscuros y eso es seguro que pasa una semana y a la otra se desaparecen los muchachos y aparecen muertos...»¹⁸.

16 Entrevista-Barrancabermeja, 1996 (Dr. Ricardo Sánchez, Avre).

17 Entrevista-Villavicencio, 1995.

18 Entrevista-Montería, 1995.

De la infamia a la esperanza, la incertidumbre persistente: *El caso La Miel*

Francisco Taborda Ocampo¹

*"Tantas cosas han sido y han pasado...
...Tan pocos quedan ya, tantos se han ido".
Exodo. Piedad Bonnett*

"Llegaron sin nada. Se bajaron del bus en la entrada a La Miel, sólo con la bendición y la ropa en la maleta. Una vez instalados, hicieron gala de su tenacidad e imaginación campesina y el primer oficio que realizaron fue elaborar con pedazos de machetes y de varillas viejas las primeras armas de un cultivador: *el machete y el azadón*. Porque había que rebuscarse la yuca como fuera, de hambre no nos dejamos morir"². Así registró *El Nuevo Día*, periódico de Ibagué, en su edición del 29 de diciembre de 1996, la llegada a esta ciudad de los campesinos cesarenenses desplazados por la violencia que contra ellos ejercían grupos paramilitares en la hacienda Bellacruz, al sur del Cesar, y que dejó como resultado varias muertes, vejámenes sin cuenta y el consabido desplazamiento que llevó a decenas de familias a tomarse las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Bogotá durante

varios meses mientras el gobierno les resolvía algo.

El caso de los desplazados de Bellacruz, en todo su itinerario desde la残酷到a que fueron sometidos por grupos paramilitares ante la mirada indiferente y por demás connivente del Estado³, hasta la reubicación en Ibagué y Armero - Guayabal, merece todo un estudio sistemático que dé cuenta de la complejidad de la violación a los derechos humanos (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, en su integridad, indivisibilidad e interde-



1 Este artículo fue posible gracias al trabajo que desarrollé como coordinador del Proyecto Casa de Derechos Humanos del Ciret Foro en Ibagué, entidad que ha venido tendiendo puentes entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del nivel nacional y los desplazados reubicados en La Miel. El autor reconoce las aportaciones conceptuales de Alberto León Gómez, miembro de la Comisión Colombiana de Juristas y de Alirio Uribe Muñoz, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ellos han sido testigos áticos del devenir de los desplazados de Bellacruz. A otros amigos les debo otro tanto no menos significativo.

2 Periódico *El Nuevo Día*, Ibagué, domingo 29 de diciembre de 1996, p. 1A.

pendencia), del inadecuado tratamiento que le ha dado el gobierno y de las relaciones familiares y sociales que se fracturan con ocasión del desplazamiento, entre los aspectos principales. Este artículo sólo quiere dar cuenta, a través de momentos importantes, de lo que fue el proceso de reasentamiento en la hacienda La Miel, ubicada a diez minutos de Ibagué, lugar al cual llegaron en la navidad de 1996. Es bueno anotar que un grupo más pequeño de familias fue reubicado en la hacienda Cámbulos que se encuentra entre los municipios de Lérida y Armero - Guayabal, también en el Tolima.

En efecto, entre el 28 y el 29 de diciembre de 1996, comenzaron a llegar las familias de desplazados del Cesar a la hacienda La Miel en Ibagué, un predio de 600 hectáreas aproximadamente con serias falencias en lo relativo a suelos, agua potable, saneamiento básico y condiciones de vivienda. Al principio se asentaron 43 familias (de un total de 80 que se tenían previstas y que han ido llegando a lo largo de 1997 y, en lo que va del presente año), dentro de las cuales se contaban 116 menores y 43 mujeres, muchas de ellas viudas y cabezas de hogar.

En lo relativo a la población que se asentó en los Cámbulos (Armero - Guayabal) llegaron inicialmente 12 familias de un total de 25 que se tenían previstas⁴. Este proceso merece recuento aparte, pero no podemos dejar de señalar que uno de los aspectos más graves es el hecho de que fueron ubicados en zona de riesgo por la influencia del volcán Nevado del Ruiz. Ante esta situación, señalaremos brevemente que la Defensoría del Pueblo, regional Ibagué, propuso una acción de tutela que buscaba amparar el respeto a la vida y otros derechos fundamentales de estas personas, pero el Tribunal Superior del Tolima negó en la sentencia todas las pretensiones de la Defensoría, argumentando que sólo una parte de esa finca estaba ubicada en zona de riesgo, sin mayores consideraciones y sin ahondar en las implicaciones del caso⁵.

No cabe duda de que la reubicación de estos campesinos en tierra tolimense fue sorpresiva e improvisada, pero ello se debió, quizás, a que el gobierno nacional no quería correr el riesgo de que se suscitaran reac-

ciones como las de la gobernadora y algunos alcaldes de Cundinamarca, a finales de 1996, que rechazaron de plano la presencia de estos campesinos en su departamento. Por no hablar de la inexperiencia del gobierno en esta materia y porque no se han implementado adecuadamente las recomendaciones de organismos multilaterales ni las de organizaciones de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.

Ya habían pasado los desplazados varios meses en condiciones infráhumanas en la Defensoría del Pueblo de Bogotá en donde,

3 La idea que desarrolló la Corte Constitucional en la Sentencia T-227/97 (Peticionario: Brigadier Ropero y otros desplazados de Bellacruz, Apoderado: Alberto León Gómez, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero, 5 de mayo de 1997), tomada textualmente de la página 13 de la sentencia fue la siguiente: "Se dice que hay derecho a protección cuando un titular de derechos fundamentales le exige al Estado se lo defienda frente a intervenciones injustas de terceros o del mismo Estado. El caso clásico es la protección a la vida. Pero en circunstancias particularmente complicadas, como es el caso de la violencia en Colombia, la posición no puede ser del todo o nada, sino que el propio Estado puede efectuar una *Competencia de Pronóstico* (el subrayado es nuestro, no las mayúsculas sostenidas) para ponderar cuándo y hasta dónde puede dar el Estado una protección real y no teórica. Por supuesto, que el Estado está obligado a hacer todo lo posible para proteger la vida de los asociados, pero, también, puede ponderar si la mejor manera de protección consiste en favorecer un desplazamiento. Si el grado de intolerancia es alto y el peligro para la vida de los asociados es inminente, es justo que el pronóstico incluya la opción del desplazamiento protegido, máxime cuando el Estado debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados" (art. 13-2 C.P.).

Vale decir que, en la interpretación de la Corte de dicho artículo de la Constitución, lo que hizo el Estado en el caso Bellacruz, fue reconocer la incapacidad de ejercer su poder de control regulador y sancionatorio de las relaciones sociales y optar más bien por propiciar el desplazamiento de estas personas, situación bastante grave a la luz del derecho internacional de los derechos humanitarios y del derecho humanitario y que crea bastantes incertidumbres respecto a la eficacia y contundencia del Estado en la persecución y sanción de los grupos paramilitares (N. del A.).

4 Primer informe rendido por el Comité Municipal de Derechos Humanos de Ibagué, que se reunió extraordinariamente para analizar la situación, enero 31 de 1997.

incluso, alcanzaron a nacer algunos niños. Ya habían sido llevados de un lado a otro y rechazados en diversos lugares, en lo que alguien podría llamar “itinierarios de la historia colombiana de la infamia”. Varios representantes de esa comunidad, ante la grave situación en la hacienda Bellacruz, viajaron a Bogotá, luego retornaron a Pelaya, luego volvieron a Bogotá y posteriormente consiguieron que 143 personas fueran trasladadas a Bogotá con el apoyo de un operativo que montó el gobierno. Posteriormente se les buscó albergue por parte del Ministerio del Interior, pero fueron rechazados en los municipios de Cundinamarca. La persistencia y tenacidad de estos cesarenses finalmente los puso en el Tolima, a pesar de que en un comienzo los mandatarios locales de Ibagué y Armero - Guayabal y algunos sectores reaccionaron airadamente contra la actitud del gobierno nacional.

Lentamente se ha ido creando conciencia en la sociedad tolimense de que era necesario ser solidarios con los desplazados y de que había que ponerse por encima de las incoherencias del gobierno nacional y ser imaginativos para ir creando soluciones concertadas con el gobierno, las ONG y los desplazados. Alvaro Ramírez, alcalde de Ibagué hasta el año pasado, le manifestó a *El Nuevo Día*: “Sorpresivamente recibimos a unos señores de la Cruz Roja Internacional para algo que no teníamos ni idea, que unas familias nos llegaban aquí, que nos las mandaba el gobierno nacional, sin siquiera consultarnos a nosotros como autoridades municipales”. Igualmente “dejó ver su disgusto el alcalde por lo que calificó como una importante decisión de la cual (sic) los ibaguereños tienen arte y parte, porque se trata de hacerse cargo de más gente en la ciudad. La verdad no nos ha gustado esto que está suce-



riendo porque, por lo menos, se debe consultar la opinión de los ciudadanos para ver si esto es posible hacerlo y no mandarnos ya la gente”⁶.

Algunas declaraciones sirvieron para atemperar la situación y, sobre todo, para aclarar las cosas, buscando crear conciencia sobre la magnitud de que el Tolima mirara con otros ojos, en el marco de una ética de responsabilidades colectivas, el fenómeno presentado con la llegada de los campesi-

nos cesarenses. Por ejemplo, Carlos Alberto Giraldo, delegado de la Cruz Roja Colombiana, y Alfredo Mallet, del Comité Internacional de la Cruz Roja, le manifestaron a *El Nuevo Día* el mismo 29 de diciembre del 96 que “el caso de La Miel es el primero de estas características dado en Colombia”.

Fue la misma Cruz Roja la que tuvo a cargo, a través de un convenio con el Ministerio del Interior, el cuidado de los desplazados durante los 3 primeros meses de presencia en el Tolima. Las familias fueron ubicadas en carpas aportadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y la Cruz Roja, en donde permanecieron varios meses después de que terminó el convenio con la Cruz Roja, sometidos a situaciones que atentaron contra su salud física y emocional, pues las enfermedades se propagaban con facilidad.

Quizá fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) uno de los entes que más rápido prestó apoyo a estos nuevos habitantes del Tolima. A finales de enero de 1997, a través de un convenio con la aso-

⁵ Tribunal Superior del Distrito Judicial. Sala Civil de Decisión. Ibagué, enero 21 de 1998, Magistrado Ponente: Hernán V. Verástegui García.

⁶ *El Nuevo Día*, domingo 29 de diciembre de 1996, p. 1 B

ciación de madres comunitarias de un barrio aledaño a La Miel, prorrogó el funcionamiento de dos hogares comunitarios para menores de 7 años y uno para menores de 2 años; así mismo ofreció la disponibilidad de tres clubes juveniles, estableció rápidamente un diagnóstico nutricional y comenzó a hacer trabajo con varias madres, entre ellas cinco embarazadas que hasta ese momento no habían recibido control prenatal ni ginecológico.

Sin embargo, la descoordinación fue la nota predominante en las acciones de los entes gubernamentales en el ámbito nacional y regional comprometidos en el asunto. En una visita que realizaron a Ibagué para tratar el tema, a mediados de enero de 1997, los ministros del Interior, de Salud, de Agricultura y la gerente del Incora, no quedó nada claro ni se ofrecieron soluciones puntuales, creando más desconcierto entre las instituciones estatales a nivel local⁷. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que si no hubiera sido por la ayuda internacional que recibían y por la solidaridad de diversos sectores del Tolima, además de la convicción y optimismo de los mismos desplazados, la situación infrahumana en la que vivieron durante casi todo el año de 1997 no se estaría superando en este momento.

Otro punto importante para presionar acuerdos y pautas de asistencia del gobierno nacional lo constituyó la creación de una Veeduría Cívica a ese proceso, integrada por diversos sectores gremiales de Ibagué y liderada por la Cámara de Comercio y la seccional de la Andi.

El 21 de enero de 1997 dicha Veeduría dio a conocer en un primer informe 10 puntos relacionados con irregularidades en el



proceso de titulación de la tierra, la información sobre el desarrollo de la reubicación, la obtención del agua potable que abastecería ese nuevo asentamiento humano, la educación para más de 100 niños y el tema de la vivienda. Muchos de estos asuntos resaltados por la Veeduría Cívica no han sido solucionados en este momento. Estos nuevos habitantes del Tolima ya no viven en carpas, pero tienen que soportar la falta de agua, de luz y de teléfono en pequeñas "casas" construidas en madera, donde viven hacinados niños y adultos⁸, la única solución de vivienda que han tenido consiste en 60 construcciones en adobe de 3 por 3 metros cada una, que han destinado a cocinas (con techo de zinc en una temperatura que muchas veces supera los 30 grados centígrados), los servicios sanitarios consisten en pozos sépticos, no cuentan con un servicio médico adecuado que garantice, al menos, una visita semanal y hay cerca de 20 niños que no han podido ser registrados como tiene derecho todo colombiano, por vacíos en la legislación y por desinterés de los entes encargados. No se han nombrado profesores de primaria para la escuela y no se les ha brindado apoyo suficiente para la consolidación de su Junta de Acción Comunal. Cabe aclarar que el lugar

⁷ Al día siguiente de esta visita, el editorial de El Nuevo Día, terminaba así: "Tal parece que del fugaz periplo quedaron las usuales promesas y las intensas declaraciones de siempre. Así que lo que se le vaya a brindar a los desplazados debe ser con base en la inventiva y recursos locales" (Edición del viernes 17 de enero de 1997, p. 4 A), perspectiva ésta que causa consternación, ya que hay una responsabilidad palmaria del Estado en su conjunto, y en especial del nivel central, sin descartar, por supuesto, la correspondencia y complementariedad que tienen a su cargo los entes locales y regionales.

ha sido llamado vereda "La nueva esperanza", que es así como se llama la Asociación de los desplazados que realiza las negociaciones en lo relacionado con el sector productivo de la hacienda y otros temas de interés de la comunidad.

Sin embargo, vale la pena ser críticos, no sólo frente a la atención que le ha prestado el Estado al caso La Miel sino, incluso, frente a algunos aspectos de la organización de los desplazados, y el tipo de apoyo que han recibido de la comunidad internacional que, no se puede negar, ha sido decisivo. El nivel de injerencia de las mujeres en las decisiones que se toman no es claro, y no existen lineamientos por parte de las instituciones que intervienen en el proceso que garanticen la equidad de género; en el grupo de líderes más reconocido por su gestión, no se destaca ninguna mujer y en muchos casos las decisiones han sido centralizadas en cabeza de 2 o 3 líderes. En todo esto no cabría ni siquiera una excusa referida a la idiosincrasia del colombiano o del latino, es un asunto ostensible de la igualdad de derechos de las mujeres. Todo lo anterior ha creado conflictos que pueden ser entendibles si se tiene en cuenta el tipo de atención que se presta en situaciones de emergencia como ésta. El apoyo de gobiernos y agencias extranjeras ha consistido, la mayoría de las veces, en asistencia humanitaria y técnica, dinero para el sector productivo e implementos necesarios en la explotación de la finca, pero no se han planteado temas como el de la democratización en la toma de decisiones, la participación adecuada de mujeres y jóvenes, la resolución de los conflictos internos* y la cualificación del liderazgo, así como la incorporación a la dinámica cultural y económica de la sociedad tolimense para evitar procesos de ghetificación que los aislen del ejercicio de una ciudadanía activa y participante, en el marco de su incorporación a la vida cotidiana tolimense. Esto resulta particularmente grave, toda vez que el caso La Miel es emblemático, no sólo por la残酷和 el cinismo con que fueron despojados de sus tierras en el Cesar, sino porque podría ofrecer pautas claves para otros procesos de reubicación de desplazados y, además, por la presión internacional y la aten-



ción que ha prestado especialmente la comunidad europea a este caso.

En el caso La Miel aún hay muchas preguntas por resolver: ¿Qué de las investigaciones por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de que han sido víctimas?

8 "... el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza... Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte... El Comité (nos referimos al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU -N. del A.-) considera que el concepto de "vivienda adecuada" comprende los siguientes factores: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, situación y adecuación cultural". (*Derechos Humanos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Folleto Informativo No. 16 -Rev.1-, Campaña Mundial por Derechos Humanos, publicación del Centro de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, agosto de 1996*, p. 20).

* Un pequeño grupo abandonó La Miel en el segundo semestre del año pasado y se fue a la hacienda Valparaíso, ubicada en el municipio de Icononzo Tolima (lugar donde se reubicaron otros campesinos provenientes de diferentes lugares del país), por no estar de acuerdo con la manera como se tomaban las decisiones en La Miel.

¿Qué suerte han corrido los predios de Bellacruz? ¿Cuándo se les resolverá definitivamente en La Miel el problema de la vivienda y del agua potable, de la electricidad, de la educación? ¿Por qué les corresponde pagar el 30% del valor total de la hacienda si su desplazamiento se produjo porque el Estado admitió ser incapaz de garantizarles sus derechos en el Cesar? ¿Cómo se restablecen, en el ámbito emocional, los lazos familiares rotos por la violencia a que fueron sometidos y por el destierro interno en que viven? ¿Cómo enfrentará la nueva administración de Ibagué los vacíos y descoordinaciones que heredó de la anterior en la atención de este caso? ¿Qué programas está adelantando el ICBF en este sentido? No sólo de pan vive el hombre y es un hecho que este último tema se ha descuidado, no sólo por parte del Estado sino, también, por las ONGs que los han apoyado, ya que en muy pocos casos se han llevado a cabo actividades que analicen con ellos la reconstrucción de su proyecto de vida, la elaboración del duelo, la restauración de un sentido de familia, entre otros aspectos. Ha habido esfuerzos aislados, sí, pero la dimensión humana se ha descuidado y se han abandonado, igualmente, las repercusiones sociales del fenómeno por el que una comunidad con expectativas, sueños y anhelos diferentes ingresa a un departamento con dinámicas, expectativas de desarrollo y condiciones culturales también diferentes.

Esto no se ha contestado, hace falta un estudio serio de este caso, como lo indiqué al comienzo del artículo, hecho con todas las voces que han participado, con el gobierno, las ONGs de derechos humanos y las de asistencia social, la comunidad internacional que los ha apoyado y, por supuesto, *last but not least*, los mismos desplazados, porque su voz ha estado ausente por completo de muchas deliberaciones del gobierno sobre el tema. Por ejemplo, el año pasado dentro de los muchos actos que programan las ONGs y las instituciones del Estado tuve la oportunidad de asistir a dos sobre el tema desplazamiento forzado y perspectiva de gé-



nero. Curioso, en el primero de ellos realizado en junio del año pasado por el Corpes centro oriente, apenas se hicieron alusiones aisladas a la situación de la mujer dentro de las comunidades desplazadas y, en el otro, (realizado en diciembre) no sólo las alusiones a la mujer fueron menos sistemáticas sino que, como en el de junio, no habló ningún desplazado y mucho menos una desplazada.

¿Llegaremos a tener una idea de la situación de la mujer en el desplazamiento forzado por la violencia si no las escuchamos en los encuentros donde supuestamente se fija la política por seguir frente al tema? Lo dudo mucho.

De contera:

“Crecimos en penosas circunstancias; vivimos en un país triste, violento. Un sitio horrendo y egoísta donde la gente no se quiere. Se quiere matar. Necesitamos, pues, un manjar de alegría”⁹.

9 En *Tratado de culinaria para mujeres tristes*, Héctor Abad Faciolince, Celacanto Editores, Medellín, Segunda edición, junio de 1996, p. 87.

SUSCRIBASE A

REVISTA FORO

VALOR DEL EJEMPLAR HASTA EL No. 27	\$	3.500.oo
VALOR DEL EJEMPLAR DESDE EL No. 28	\$	5.000.oo
VALOR DEL EJEMPLAR DESDE EL No. 31	\$	6.000.oo
SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO (4 NÚMEROS)	\$	21.000.oo
SUSCRIPCIÓN POR DOS AÑOS (8 NÚMEROS)	\$	40.000.oo
PROMOCION: NUMEROS 8 AL 15 Y 17 (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)	\$	22.000.oo
PROMOCION: NUMEROS 20 AL 27 (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)	\$	22.000.oo

NÚMEROS AGOTADOS: 1, 2, 3, 6, 16, 18 Y 19

Según opción acogida, puede consignar a nombre de **Revista Foro** en la cuenta 03901601-9 del Banco Santander, sucursal San Martín de Bogotá y enviarnos copia de la consignación vía fax (2861299) o por correo (Cra 4A No. 27-62) con los siguientes datos:

Nombre completo, nit/c.c., dirección, teléfono, ciudad.

Donny Meertens

Antropóloga, profesora del Programa de estudios de género, mujer y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.

Víctimas y sobrevivientes de la guerra: tres miradas de género¹

Donny Meertens



Las consecuencias sociales del conflicto armado en Colombia no son indiferentes al género. En este artículo se reflexiona sobre la cambiante simbología de género en las manifestaciones de violencia; se mira brevemente la presencia relativa de hombres y mujeres entre sus víctimas y se analizan los efectos diferenciados de género del desplazamiento forzado, desde el momento de la *destrucción* y el desarraigo, hasta la supervivencia y la *reconstrucción* de proyectos de vida y de lazos sociales en la ciudad. Siguiendo los trayectos de hombres y mujeres, repletos de traumas y tensiones, se vislumbran también, en medio del reordenamiento social, nuevas posibilidades de transformación de las relaciones entre los sexos.

Introducción

El “género” constituye una categoría de análisis que nos permite analizar la diferencia entre hombres y mujeres como una construcción cultural y simultáneamente como una relación social asimétrica². Desarrollamos aquí tres miradas de género sobre las dinámicas actuales de la guerra y sobre las secuelas que varias décadas de violencia política han dejado para hombres y mujeres, a veces participantes en el conflicto armado pero, en general, simples integrantes de la población civil, vivientes de la violencia. Esas tres miradas son, en primer lugar, las *representaciones simbólicas* de la masculinidad y la feminidad que encontramos en las manifestaciones de la violencia política. En todo acto de violencia se expresan, implícita o explícitamente, las representaciones culturales de quien es definido como el *enemigo* y de las relaciones sociales de las cuales agresor y víctima forman parte. Género, como uno de los principios estructuradores básicos de la sociedad siempre está presente en ellas, pero “la violencia de género” se configura con intensidades y manifestaciones variadas según el momento histórico y la moda-

lidad del conflicto. La segunda mirada es la de *la participación diferenciada* de hombres y mujeres en la violencia, en calidad de *víctimas* de ella³. La tercera mirada enfoca a los *sobrevivientes* de la guerra, específicamente aquellos que han tenido que huir de la violencia de los campos e internarse en las ciudades. Con el desplazamiento forzado por violencia abordamos lo que se ha considerado la problemática sociopolítica y psicológica de mayores proporciones de las últimas dos décadas del siglo XX. Intentaremos descifrar algunas especificidades de género a lo largo de lo que consideramos el proceso de desplazamiento que incluye varias etapas, desde la destrucción hasta la reconstrucción de la vida individual y de los lazos sociales. En los momentos cruciales de ese proceso, hombres y mujeres se ven afectados de manera diferenciada.

Primera mirada: las representaciones simbólicas de género en la violencia

Desde finales de los años ochenta, y por segundo período en este siglo, la violencia política en Colombia es noticia de todos los días. Pocas veces la información suministrada en esas noticias va más allá del conteo de los muertos, el registro de algunas características mínimas de las víctimas, la expresión de indignación por la sevicia del acto y, si acaso, una hipótesis sobre los presuntos autores. Frecuentemente encontramos relatos de prensa, o informes de los organismos de derechos humanos, que nos hablan de asesinatos o masacres “indiscriminadas” contra la población civil, entre cuyas víctimas se cuentan mujeres, niños o ancianos.

Cabría preguntarnos si aquellos realmente son actos indiscriminados. ¿Cuáles han sido las construcciones de la feminidad/masculinidad presentes en las acciones violentas? Resulta casi imposible obtener información en torno a las subjetividades de un conflicto armado que domina todavía diariamente la vida política y social del país. Por ello recurrimos a una reflexión histórica sobre las representaciones del género en *la Violencia* de los años cincuenta y sesenta,

para llegar, a partir de allí, a una breve y todavía hipotética mirada sobre la dinámica actual.

Sobre el período ya “clásico” de *la Violencia* durante los años cincuenta y sesenta, cuando inicialmente las fuerzas públicas del gobierno conservador arrasaban las tierras pobladas por campesinos liberales, y guerrillas campesinas de filiación liberal atacaban la población conservadora, se han hecho varias referencias a la enorme carga simbólica presente en las acciones bélicas. Pero antes de mirar más a fondo las posibles representaciones de género en ella hay que destacar una dimensión nueva que diferencia ese período del siglo XX de las guerras civiles del siglo XIX: mientras en éstas últimas se trataba predominantemente de confrontaciones entre ejércitos de hombres que arrojaban víctimas masculinas⁴, durante *la Violencia* de este siglo se atacaba en mayor medida a la población civil y por primera vez las víctimas se distribuían sistemáticamente en ambos sexos. Una de las expresiones más frecuentes y horripilantes de involucrar a la población civil eran las masacres de familias campesinas enteras, incluyendo mujeres y niños, pertenecientes al bando político opuesto, fuera éste liberal o conservador. En esas masacres, las mujeres no eran simplemente víctimas por añadidura, sino que su muerte violenta –y frecuentemente su violación, su tortura y su mutilación cuando estaban embarazadas– cumplía un fuerte papel simbólico.

*“A todos los mataron, los trozaron, poco a poco, los cortaron en pedacitos y los pedacitos brincaban. Cuando amaneció había muertos por todas partes. A una señora embarazada le habían sacado el muchachito y le habían metido un miembro en la boca. Yo lloraba mucho, y no sabía que hacer”*⁵.

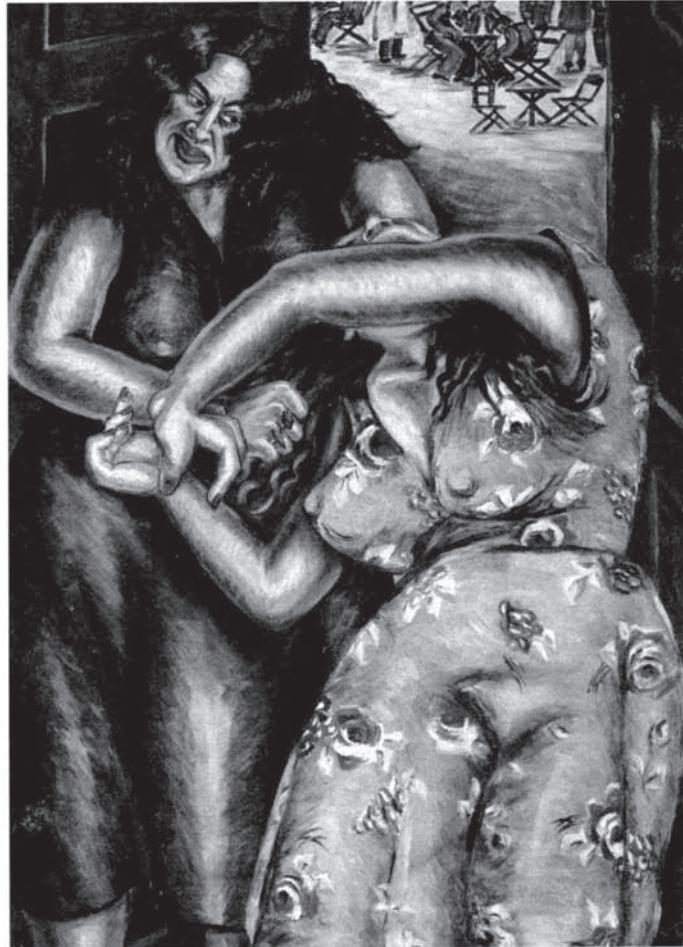
Al instrumentalismo de aquellos actos violentos (ya que en ellos conjugaban motivos políticos y económicos y cumplían funciones probatorias las partes cortadas de los cadáveres) se agregaba un profundo odio, alimentado por una filiación política arraigada en la tradición familiar y constitutiva de la identidad social.

*"Las torturas más comunes eran amarrar a las víctimas con los brazos por detrás y violar a las mujeres de la casa delante de los hombres (...) El útero se vio afectado por un corte que se practicaba con las mujeres embarazadas, por medio del cual se extraía el feto y se localizaba por fuera, sobre el vientre de la madre"*⁶.

En el primero y clásico estudio de la violencia por Guzmán, Fals y Umaña⁷ se hacen recurrentes referencias a esas prácticas, acompañadas de una expresión: "no hay que dejar ni la semilla" de los representantes del partido opuesto. A las mujeres, pues, se les veía exclusivamente en su condición de madres, es decir, como actuales o potenciales procreadoras del enemigo odiado. La violación era también una práctica frecuente y en ella se expresaba, no sólo el deseo de máxima dominación masculina sobre el género opuesto, sino también, como en muchas otras guerras, la máxima humillación y la expresión del más absoluto desprecio hacia el enemigo y toda su colectividad. Contaba un campesino del Quindío:

*"Los bandoleros amenazan a las gentes diciéndoles que hacen lo que hacían en Córdoba, amarrando los esposos y hombres de la casa y en presencia de ellos violar las mujeres y después el consabido "corte de franela,..." "*⁸.

La violación también podía cumplir funciones de terror y de procurar el silencio. "Decían que nos hacían todo esto para que no habláramos de tanta vergüenza y para mostrar de lo que eran capaces" comentaba una joven mujer⁹. Pero estos motivos más bien parecían haber sido secundarios en compa-



ración con la función simbólica de dominación del enemigo y vulneración de lo que podríamos considerar el aspecto más constitutivo e íntimo de su identidad. Cuando los grupos alzados en armas realizan sus actos de violación fuera de ese marco simbólico, impulsados por apetitos sexuales o afanes de asegurar su dominio total, es decir, cuando lo aplican, no a las mujeres del enemigo sino a las de su propia zona o comunidad de apoyo, firman su propia sentencia de muerte. En efecto, el hecho de haber recurrido a esas prácticas al final de su existencia en el monte constituyó uno de los factores que mermaron seriamente el apoyo de la población campesina a bandoleros como *"Desquite"* y *"Sangrenegra"* que operaban a finales de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta en el norte del departamento del Tolima.

Desde una mirada de género del conjunto de las expresiones de violencia en ese período podríamos afirmar que a las mujeres se violaba por torturar a sus padres o esposos; y que a las mujeres se mataaba, no por su papel en la danza de la muerte, ya que en ello no eran protagonistas sino, contradictoriamente, por ser generadoras de la vida.

Este carácter de la violencia ha dejado un impacto en la sociedad colombiana mucho más allá de ser antecedente histórico de los conflictos políticos actuales: su cruel penetración en las esferas más íntimas de la familia campesina ha generado una reproducción de violencia en las historias personales. *Hijos e hijas de la violencia* convirtieron la violencia en un mal inevitable, en un modo de vivir. Las referencias al pasado aparecen recurrentemente en los estudios de las violencias modernas: sean ellas rurales, urbanas, o domésticas¹⁰.

Esas referencias al pasado violento, no sólo establecen continuidades y reproducciones del fenómeno sino, también, diferencias en cuanto a la especificidad simbólica de género en las manifestaciones de la violencia actual. Hemos encontrado algunas comparaciones implícitas en los relatos de vida de mujeres colonizadoras de las zonas de selva húmeda del Guaviare y del Caquetá, quienes durante la década de los años ochenta sufrieron las consecuencias de los enfrentamientos entre ejército y guerrilla, los bombardeos, las persecuciones y los desplazamientos hacia la capital provincial Florencia. Las de mayor edad, generalmente oriundas de los departamentos de Tolima y Huila, que fueron fuertemente azotados por la *violencia* anterior, la de los años cincuenta, recordaban vivamente ese viejo período. La *violencia* de aquel entonces apareció como el primer y principal referente vital, que afectó profundamente el trascurrir de su niñez, además de ser la causa principal de migración a la zona de colonización. Más aún, la palabra *violencia* para ellas se refería solamente a ese período de los años cincuenta y sesenta, cuando era envolvente, difuso, omnipresente y dirigido a las mujeres y niñas, no sólo por “indiscriminación” sino, también, por su condición de género. En cambio, los episodios violentos posteriores, de los años ochenta, tuvieron otra connotación psicológica. De estos últimos hechos, las mujeres hablaban en otros términos, utilizando la palabra *guerra* –una guerra entre dos bandos de adversarios–, en que la población civil se había visto mezclada. También en esta ocasión las mujeres se contaban entre las víctimas: como parte de la población civil afectada por los bombardeos indiscriminados; como viudas o como detenidas y torturadas para sacarles información acerca de sus familiares guerrilleros o activistas campesinos. Pero, al parecer, no fueron víctimas sistemáticas a causa de su condición de género, representada fundamentalmente por la maternidad, como ocurría durante el propio período de *la violencia*¹¹; entre ellas tampoco encontramos referencias a la violación como una práctica sistemática de guerra.

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que las construcciones de género no

estén presentes en las acciones de la guerra actual. Sólo necesitamos pensar en el poco interés de reconocer públicamente la autoría de una masacre que involucra a mujeres. Con ello se expresa una resistencia a definirlas como parte del conflicto armado al igual que los hombres; a despojarlas de su condición de seres indefensos, madres, cuidanderas, generadoras de vida y paz. Pues son precisamente estas representaciones de la feminidad que más apelan a la sensibilidad pública acerca de la violación del Derecho Internacional Humanitario (el cual, desde luego, tiene la misma vigencia, tanto para hombres como para mujeres).

También la maternidad y la sexualidad, sobre todo la femenina, puntos claves en las relaciones de género, son temas candentes en el manejo cotidiano de la guerra, pero más en la organización interna de los grupos armados¹² que en la definición de quien es el enemigo o en el ejercicio de la violencia sobre “el otro”. Intuimos aquí un cambio no sólo en las representaciones sociales de las mujeres –en creciente medida *actores* sociales y políticos–, sino, también, en las dimensiones culturales de la guerra. En la dinámica actual del conflicto armado interno, donde se presentan procesos de ideologización y los enfrentamientos entre proyectos políticos se mezclan con las defensas de intereses económicos y de dominios territoriales, hasta los actos de retaliación y venganza están dominados por una alta dosis de instrumentalismo. En esa dinámica, la identidad cultural, política y social del enemigo pierde importancia frente a otros determinantes: su condición socioeconómica, su efectivo apoyo a uno u otro bando o simplemente su ubicación geográfica del momento. Igualmente, pierde vigencia la idea del “exterminio hasta la semilla” del otro, para dar lugar a un interés en amedrentar, sujetar y conquistar la población y su territorio, o causar el desplazamiento de la gente para apropiarse de sus tierras. En ese contexto, acabar con la maternidad como generación de vidas enemigas, o humillar profundamente el honor sexual de una comunidad, perdió sentido como práctica de guerra.

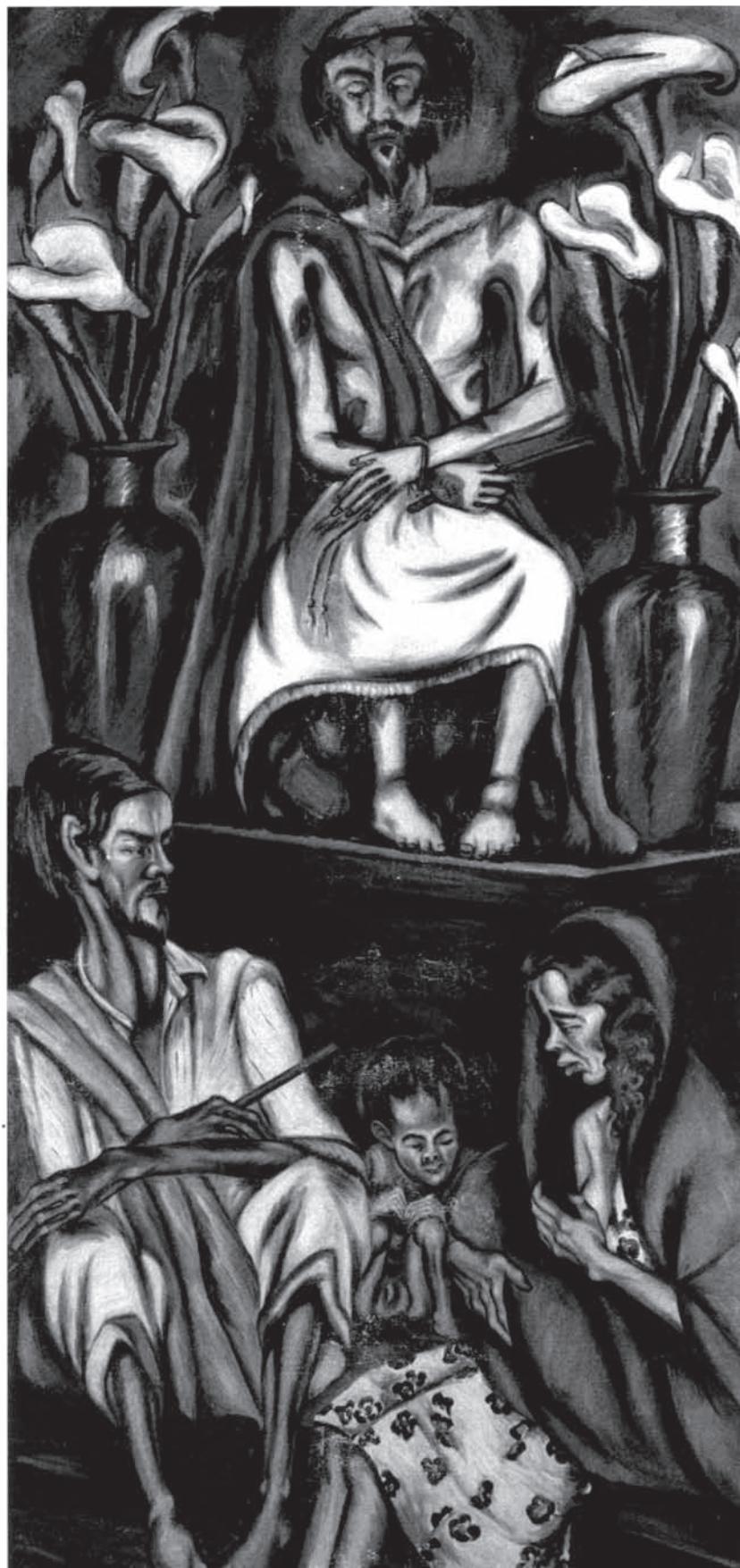
La violación sexual, sin embargo, no está ausente en las acciones bélicas, como ejercicio máximo del poder sobre “el otro”, como violencia de género subterránea y pocas veces públicamente reconocida. Las denuncias son escasas y dispersas, abarcan desde el sur del país hasta la costa Atlántica e involucran a todos los actores armados: ejército, guerrilla, grupos paramilitares. La precariedad de la información y la continuidad del conflicto armado impiden un análisis sistemático que vaya más allá de la denuncia.

Segunda mirada: Las víctimas directas de la violencia

Durante la década de los años ochenta confluieron varios procesos políticos que aumentaron e intensificaron la dinámica de violencia en las zonas rurales. Se registró un incremento en las fuerzas guerrilleras, en los movimientos cívicos, en la influencia del narcotráfico y en la presencia de grupos paramilitares. En efecto, a partir del año 1988 se disparó el número de muertos por homicidio y asesinato llegando, y manteniéndose a partir de ese año, a una tasa anual promedio de 74 por 100.000 habitantes¹³.

Detrás de estos hechos políticos protagónicos se ocultan realidades sociales dramáticas en las que cada vez más, no sólo los hombres sino, también, las mujeres se ven involucradas. En cuanto a cifras generales (no específicamente de violencia política), la muerte violenta ha dejado de ser monopolio de los hombres, manifestándose ahora como la segunda causa de mortalidad entre las mujeres de 15 a 39 años¹⁴. En cuanto a la participación relativa de hombres y mujeres como víctimas directas de la violencia política ésta diferenciación por sexo ha sido sólo escasamente registrada. El primer intento de diferenciación lo encontramos en las estadísticas del Cinep de los años 1989, 1991 y 1993. Luego, en su informe anual de 1996, la Comisión Colombiana de Juristas incluye por primera vez datos específicos sobre mujeres y niños, víctimas de las diferentes modalidades de violencia política.

En el primer cuadro¹⁵ se destaca la intensidad de la violencia política en 1989, tanto



para hombres como para mujeres. La más alta participación de las mujeres como víctimas de los hechos violentos, es de 10.8% en los asesinatos (1991), 9.4% en las desapariciones (1989) y 16.3% en “otros hechos” (1989), con un promedio a través de los años y de las categorías, de 8.8%.

Resulta interesante comparar 1989 y 1991 en cuanto a tendencias generales y presencia de mujeres entre las víctimas. En 1989, el año de más violencia, se registró también la más alta cifra de mujeres asesinadas o víctimas de “otros hechos” (secuestros, torturas, detenciones, amenazas etc.). En 1991, la violencia, en general, y particularmente los asesinatos políticos disminuyen en cantidad, pero la participación femenina en sus víctimas aumenta (10.8%). Una posible explicación para esas tendencias serían los cambios en las modalidades de la violencia, sobre todo en las de la represión oficial: de acciones indiscriminadas hacia la población civil a unas persecuciones más selectivas, acompañadas de una actitud más radical (de eliminación) hacia mujeres sopechosas de pertenecer o apoyar a los grupos subversivos. Otros datos del Cinep indican que la presencia femenina entre los muertos pertenecientes a grupos guerrilleros se eleva por encima del promedio mencionado y asciende a 15.5% en 1989 y 10.3% en 1991.

El siguiente cuadro, que registra las víctimas hombres y mujeres por modalidad de acción violenta en 1996, nos permite hacer algunas comparaciones. Los cuadros 1 y 2 resultan sólo comparables en cuanto a sus primeras dos categorías: la primera se refiere a asesinatos en 1989-1993, que luego se denominan homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales en el 1996; y la segunda remite en ambos cuadros a las desapariciones. En 1996, la presencia femenina entre las víctimas de homicidios políticos y ejecuciones alcanza el 10.4% del total, con el cual se vuelve al mismo nivel del año 1991, el más alto del primer cuadro, pero en una situación de mayor violencia, ya que las cifras absolutas arrojan ahora el doble de víctimas. La presencia de mujeres entre las víctimas de desaparición se mantiene estable. Mientras que la guerra nuevamente se in-

Cuadro 1
Número y porcentaje de mujeres como víctimas de hechos políticos violentos

Modalidad	1989			1991			1993		
	Total	mujeres	%	Total	mujeres	%	Total	mujeres	%
Asesinatos*	1.978	173	8.7	560	61	10.8	890	72	8.0
Desapariciones*	137	13	9.4	117	8	6.8	64	4	6.0
Otros hechos **	1.741	284	16.3	2.422	135	5.6	1.960	153	7.8
Total hechos políticos violentos*	3.856	470	12.2	3.099	204	6.5	2.914	229	7.8

Fuente: cuadro elaborado con base en estadísticas del Cinep.

*Para 1989 y 1991 se sumaron hechos políticos y hechos presuntamente políticos; para 1993, se sumaron violación del derecho a la vida y a la integridad personal por agentes políticos estatales y no-estatales. Para 1993, el término “asesinatos” cubre las categorías de ejecución ilegal (por agentes estatales) y homicidio (por agentes no-estatales).

** Incluye: Secuestrado, torturado, herido, detenido, atentado, amenazado; para 1993 también incluye allanamiento ilegal.

tensifica, el nivel de participación femenina en las víctimas de la violencia se ha sostenido.

En el Cuadro 3 se relacionan víctimas hombres y mujeres con los presuntos autores de las acciones violentas. Cabe señalar que en la autoría de los asesinatos políticos se han producido importantes cambios durante los últimos años. Se ha observado una disminución de los casos atribuidos a la fuerza pública (de 54.26% en 1993 a 10.52% en 1996), y un aumento en los casos atribuidos a los paramilitares (de 17.91% en 1993 a 62.69% en 1996). Paralelamente, se ha incrementado notoriamente el número de casos con autor conocido: de 28.14% en 1993 a 65.6% en 1996, lo cual se debe en buena parte, según la Comisión Colombiana de Juristas, “al notorio incremento de hechos atribuidos a grupos paramilitares, para los cuales el conocimiento de dicha autoría puede hacer parte del propósito de amedrentar a la población”¹⁷.

A pesar de la reducción de los casos de autoría desconocida son éstos los que mayor importancia tienen entre las muertes femeninas. En el 41.7% de las víctimas mujeres no se ha podido identificar el autor del delito –dos veces más que en el caso de las víctimas– hombres. Estas cifras remiten probablemente a la modalidad de las masacres, en las cuales una mayor proporción de mujeres cae como parte de la población civil “indiscriminadamente” asesinada. Como planteamos antes, aunque la población amenazada suele conocer los autores y entender “la advertencia”, éstos no asumen públicamente una acción que involucre a mujeres o niños entre las víctimas, para no dañar su imagen. Así mismo, congruente con su importante papel en las masacres, la autoría de los paramilitares es relativamente más alta en las muertes femeninas que en las masculinas, respectivamente con el 28.1 y el 23.6%.

En resumen, según la información recogida por la Comisión Colombiana de Juristas, “cada dos días en promedio muere una mujer como consecuencia de la violencia sociopolítica¹⁸. Entre octubre de 1995 y septiembre de 1996, 172 mujeres fueron muertas, y 12 desaparecidas. Durante el mismo período, 35 fueron torturadas y 33 fueron víctimas de amenazas y atentados. Miembros de la fuerza pública causaron la muerte de 15 mujeres (el ejército a ocho y la policía a siete), y la desaparición de dos. Los grupos paramilitares dieron muerte a 47 mujeres y desaparecieron a siete; y las guerrillas fueron causantes de la muerte de 33 mujeres. En enfrentamientos armados entre fuerza pública y guerrillas murieron cinco mujeres”¹⁹. En una cuarta parte de las masacres perpetradas en 1996 se encontraron mujeres entre las víctimas, y el número de muertes femeninas alcanzó el 6.7% del total de víctimas en esa modalidad de violencia²⁰.

La presentación numérica de las víctimas según su sexo brinda sólo limitadas posibilidades de un análisis de género. Hay otro ámbito, el de los sobrevivientes de la violencia, en cuya trayectoria de desplazados detectamos importantes diferencias entre hombres y mujeres, las cuales analizamos a continuación.

Cuadro 2
Violación de derechos humanos y violencia sociopolítica
1996
víctimas hombres y mujeres por modalidad de acción

Modalidad	Victimas					
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	% Mujeres
Homicidios políticos y ejecuciones extrajud.	1.219	43.8	142	77.2	1.361	10.4
Desapariciones	140	5.1	12	6.5	152	7.9
Homicidios contra marginados sociales	289	10.4	25	13.6	314	8.0
Muertes en acciones bélicas	1.132	40.7	5	2.7	1.137	0.4
Total	2.780	100.0	184	100.0	2.964	6.2

Fuente: elaborado con base en Comisión Colombiana de Juristas 1997, cuadros 2 y 11, p. 6 y 23.

* Porcentaje de mujeres sobre el total de víctimas por modalidad de acción.

** Porcentaje de mujeres sobre el total de víctimas por categoría de presunto autor.

En cuanto a las modalidades de acción, la gran mayoría (el 77.2%) de las muertes femeninas se produce por homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el caso de los hombres, éstas se reparten predominantemente entre los homicidios políticos y las muertes en acciones bélicas. Al parecer, la creciente participación femenina en las filas de los grupos armados¹⁶ no ha significado igual incorporación en el combate y las acciones de alto riesgo.

Cuadro 3
Violación derechos humanos y violencia sociopolítica 1996
Víctimas mujeres, según presuntos autores

Presuntos autores	Víctimas de acciones violentas*					
	Hombres	%	Mujeres	%	Total	% Mujeres**
Sin identificar	580	19.5	80	41.7	660	12.1
Agentes del Estado	746	25.0	17	8.9	763	2.2
Paramilitares	697	23.4	54	28.1	751	7.2
Guerrillas	757	25.4	33	17.2	790	4.2
Casos en estudio	201	6.7	8	4.2	209	3.8
Total	2.981	100.0	192	100.0	3.173	6.2

Fuente: elaborado con base en Comisión Colombiana de Juristas 1997, cuadro 2, p.6.

Comprenden: homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales; desapariciones; homicidios contra marginados sociales y muertos en acciones bélicas.

Los y las sobrevivientes: el desplazamiento forzado por violencia (tercera mirada)²¹

El fenómeno del desplazamiento interno por razones de violencia, si bien estaba siempre presente en la segunda mitad del siglo XX, comenzó a sentirse en toda su magnitud a partir de los años 1988 y 1989. En esos años, como vimos en la primera sección, se dispararon las cifras de asesinatos políticos y masacres, especialmente en aquellas zonas donde confluyeron varios factores: luchas campesinas en el pasado; posteriores enfrentamientos entre guerrilla y ejército; compra de tierras por narcotraficantes y llegada de paramilitares a “limpiar” la región de guerrilleros (y también de organizaciones campesinas). Una primera investigación a escala nacional sobre el fenómeno, desarrollada por la Conferencia Episcopal de Colombia, arrojó un resultado aproximadamente de 600.000 desplazados en 1994, repartidos en zonas como Urabá, Córdoba, Magdalena Medio, los Llanos Orientales, Arauca y Cauca/Putumayo, principalmente²². En 1996 y 1997 se incorporaron nuevas zonas a la dinámica de la

violencia y sus secuelas de desplazamiento masivo de la población; de ellas mencionamos dos por sus características particulares: el Chocó desde donde se produjo un movimiento temporal de refugiados internacionales hacia Panamá (devueltos por ese país), y Cundinamarca, donde se han hecho sentir los paramilitares ya en las goteras de la capital. Las últimas estimaciones (1997)²³ llegaron a una cifra entre un millón y un millón doscientos desplazados, lo cual representa más del 2.5% de la población total de Colombia (38 millones).

Según los primeros datos de la Conferencia Episcopal, el 58.2% de los desplazados son mujeres (7 puntos por encima de la proporción de mujeres en la población total de Colombia) y el 24.6% de los hogares desplazados es encabezado por una mujer. Consideramos, con base en las experiencias regionales, que esta última cifra es una subestimación y que el porcentaje de 30.8% de hogares encabezados por mujeres, mencionado en el estudio de Codhes es más ajustado a la realidad del desplazamiento forzoso²⁴. En el más reciente estudio de desplazados en Bogotá la proporción encontrada de jefatura femenina del hogar es del 38%. De esas jefes de hogar el 40% son viudas

que huyeron con sus hijos tras la muerte violenta de sus maridos, y el 18% fue abandonando después del desplazamiento a la ciudad²⁵.

Aunque el desplazamiento es un fenómeno nacional se estima que Bogotá es uno de los más grandes receptores de migrantes por violencia, que llegan directamente o en varias etapas. En 1996 su número alcanzó alrededor de 50.000 personas, integrantes de 9.700 hogares, lo cual da un ritmo de llegada de 27 hogares desplazados por día²⁶. En las regiones más lejanas de la capital que han sido afectadas por la violencia las corrientes de migración forzada se dirigen hacia las ciudades intermedias en proximidad de las zonas de expulsión —ciudades cercanas pero suficientemente grandes para garantizar cierto grado de anonimato para las familias desplazadas—. Por ello, las mismas capitales departamentales de las regiones de expulsión constituyen los sitios de recepción de la población desplazada: Medellín y Montería para los desplazados de Urabá y de la Costa Atlántica; Barrancabermeja para los del Magdalena Medio, Villavicencio para los Llanos Orientales y Florencia para los de Caquetá.

Durante los años más duros de asesinatos, masacres, desapariciones y bombardeos de zonas campesinas el desplazamiento fue de comunidades enteras. Los éxodos más organizados se desarrollaron en el Magdalena Medio durante una primera época (mediados de los años ochenta, cuando se extendieron los grupos paramilitares), y en el Caquetá a principios de los años ochenta, con la llegada del grupo guerrillero del M-19 a la zona. En cambio, las masacres que se perpetraron en la costa en los años 1988-1990 (“El Tomate”, “Los Córdobas” y otros)



dieron lugar a éxodos de muchas familias que buscaban refugio, cada una por su cuenta. En el Magdalena Medio y en la Costa Atlántica, a los éxodos más visibles ha seguido un período de hechos violentos más selectivos y, por consiguiente, de llegadas a cuentagotas de familias que se ubican silenciosamente donde conocidos en las ciudades. En Barrancabermeja la violencia se internó en la ciudad misma, provocando desplazamiento de las familias de barrio a barrio, de calle a calle, en una desesperada carrera por escapar de la muerte anunciada²⁷. En Villavicencio, la población desplazada ha sido marcada por la presencia de gran número de viudas de líderes del movimiento Unión Popular (UP), acusado de ser enlace con la guerrilla de las Farc. Estas diferencias regionales del desplazamiento, que se expresan en diferentes grados de colectividad, de organización y de conciencia política, influyen enormemente en el papel de las mujeres en el desplazamiento, pues son estas condiciones que determinan, en buena medida, la posibilidad que tienen las mujeres campesinas para anticipar el desplazamiento, para resistir los traumas psicológicos y enfrentar el desafío de supervivencia y construcción de un nuevo proyecto de vida.

Es sobre todo en los éxodos espontáneos e individuales donde podemos percibir los efectos diferenciados por género de la violencia y del proceso de desplazamiento. Los hemos agrupado en torno a dos grandes momentos: el de la *destrucción* de vidas, de bienes y de lazos sociales; y el de la *supervivencia y la reconstrucción* del proyecto de vida y del tejido social en la ciudad. Para el siguiente análisis, combinamos los ejemplos de las historias de vida recogidas en las diferentes regiones, con una mirada más

Cuadro 4
Hogares desplazados según sexo y edad del/la jefe
1994-1995

Edad	Hombre %	Mujer %	Total %
Menos 20 años	1.1	1.5	2.6
21 - 30	16.5	9.0	25.5
31 - 40	24.5	12.4	36.9
41 - 50 ^c	16.0	5.0	21.0
51 y más	10.5	2.9	13.4
Sin información de sexo	0.6	0.0	0.6
Total	69 .2%	30.8%	100.0%
N= 796	(551)	(245)	(796)

Fuente: Codhes-Sisdes-I.

cuantitativa, de datos nacionales sobre hogares desplazados, en el cual comparamos los hogares con jefatura femenina y los con jefatura masculina.

El Cuadro 4 se basa en un estudio reciente de escala nacional que reporta que los hogares con jefatura masculina representan un poco más del doble de los con jefatura femenina: de una muestra de 796 hogares, 551 (69%) están encabezados por hombres y 245 (31%) por mujeres²⁸. El volumen mayor de hogares desplazados está encabezado por personas entre los treinta y los cuarenta años, de los cuales dos terceras partes corresponden a jefes hombres y una tercera parte a jefes de hogar mujeres. Esa proporción de dos a uno entre jefatura masculina y femenina de los hogares se mantiene en todas las categorías etarias, con excepción del grupo jefes de hogar menores de 20 años donde las mujeres jefes tienen mayor presencia. Esa información nos remite a la existencia de un grupo extremadamente vulnerable, la de madres adolescentes desplazadas por violencia.

Desde el momento de la *destrucción* y del *desarraigo* se encuentran elementos diferenciales, por ejemplo, entre, los motivos que han llevado a hombres y mujeres

jefes de hogar a huir de su región. Los hombres aducen las *amenazas* como la razón determinante del desplazamiento. Al mismo tiempo, las mujeres mencionan el *asesinato* como la causa primordial de huida. Así se identifica una de las fuentes que alimenta la jefatura femenina del hogar: *la viudez*.

“A mi esposo lo llevaron a matarlo y me dieron tres horas para desocupar... llegamos a la carretera sin saber para dónde íbamos a llegar... yo recuerdo ahora que en el momento yo veía oscuro, no veía claro, era que estábamos con una linterna y yo no veía claro... yo le pedía a mi Dios que me mostrara claro el camino donde iba y que encontrara personas que me ayudaran... cuando abrimos los ojos, que llevábamos como cinco minutos de estar parados, ahí vimos como un campero... vea señor, y me puse a contarle a él, y le salían las lágrimas de lo que yo le estaba contando y ahí... nos subieron al carro”.

(Entrevista a mujer desplazada en Montería, Córdoba, mayo de 1994).

Pero los problemas específicos que enfrentan las mujeres desplazadas no sólo radican en su viudez. También tienen que ver con las diferentes trayectorias de vida que mujeres y hombres habían recorrido al mo-

mento de producirse los hechos violentos. La mayoría de las mujeres campesinas desplazadas habían sido criadas en un esquema cultural rural de rígida separación de esferas masculina y femenina, donde la última se centraba casi exclusivamente en la gestión doméstica, la maternidad, el espacio del hogar y aquellas actividades agrícolas (la huerta, el procesamiento) cercanas al recinto doméstico, y una indudable sujeción al mandato del hombre. Todas ellas, pues, tuvieron una niñez y una adolescencia caracterizadas por el aislamiento geográfico y social. Con enorme frecuencia las relaciones con el mercado, la economía monetaria, la información, las instituciones formales eran patrimonio exclusivo o predominante del hombre, y aún el contacto con organizaciones o entidades cívicas o comunitarias eran ajena a muchísimas esposas desplazadas. En otras palabras, los límites del "mundo", del contacto con la sociedad, eran dados por los jefes de hogar, primero el padre y luego el esposo²⁹. El desarraigo de ese mundo ha significado destrucción de la identidad social, en un grado mucho mayor para las mujeres que para los hombres, cuya libertad de movimiento, acceso a información y disposición de tiempo libre se daba por supuesto y quienes solían manejar un espacio geográfico, social y político más amplio.

A partir de esas especificidades de género anteriores al momento de la destrucción y el desarraigo se podría considerar a



las mujeres desplazadas triplemente víctimas: primero, del trauma que les han producido los hechos violentos (asesinatos de cónyuge u otros familiares; quema de sus casas; violaciones); segundo, de la pérdida de sus bienes de subsistencia (casa, enseres, cultivos, animales), que implica la ruptura con los elementos conocidos de su cotidianidad doméstica y con su mundo de relaciones primarias, y, tercero, del desarraigo social y emocional que sufren al llegar desde una apartada región campesina a un medio urbano desconocido.

"Entonces, después del asesinato, cuando yo estaba durmiendo en un corredor aquí en la ciudad, agachadita con mis hijos, llegó la policía a preguntar qué hacía, y yo les dije: estoy esperando que llueva para irme a tirar del puente pa'bajo, al agua con todo y pelado; yo estaba que no sabía qué más hacer, estaba como un barco sin bahía..."

(Entrevista a mujer desplazada en Montería, Córdoba, mayo de 1994).

La destrucción, en otras palabras, va mucho más allá de sus efectos materiales: se trata de una pérdida de identidad como individuos, de una pérdida de identidad como ciudadanos y sujetos políticos³⁰ y de una ruptura del tejido social a nivel de la familia y de la comunidad, que produce la sensación de estar completamente a la deriva: "como un barco sin bahía".

De las entrevistas realizadas a las mujeres jefes de hogar impacta la magnitud del

drama personal que les afecta, y simultáneamente, la entereza para asumir la *supervivencia* de sus hijos y la *reconstrucción* de sus vidas y lazos sociales. La obligación de buscar los medios de supervivencia de ella y de sus hijos no le deja tiempo para entregarse a las emociones. La supervivencia inmediata se convierte en la única meta que las mujeres desplazadas se ven obligadas a cumplir.

"Yo tenía los ojos hinchados de llorar... A los cinco días de haber llegado a la ciudad, me llamó la señora que me había dado alojamiento y me dijo: a usted no le queda bien ponerse a llorar porque usted ahí no va a conseguir nada y usted tiene que pensar en levantar a esos niños.. Póngase el corazón duro y mañana se baña bien y va por allá, así no conozca, que hable con personas, que vea que la pueden ayudar y si le toca pedir, pida, no tenga pena".

(Entrevista a mujer sobreviviente de una masacre, Córdoba, mayo de 1994).

Para esas mujeres desplazadas, viudas, cabezas de familia, severamente afectadas por la muerte de su cónyuge y sin más pertenencias que los hijos, estos mismos constituyen casi el único motivo para superar su desdicha y emprender una nueva supervivencia en la ciudad, porque "morir ya no se puede".

Otras mujeres se convierten en jefes de hogar en el lugar de exilio, ya que se presenta una tendencia a que las relaciones de pareja se rompan por las tensiones, el miedo, las dificultades de la supervivencia en el nuevo medio, las responsabilidades invertidas, e incluso por la desconfianza y las inculpaciones en los casos en que la mujer desconocía las actividades políticas de su compañero. Y aun cuando no se rompen las relaciones de pareja, muchas mujeres desplazadas terminan siendo las responsables de la supervivencia económica y emocional de la familia, mientras que los hombres se distancian o se refugian en el alcohol. La misma necesidad de supervivencia inmediata lleva frecuentemente a la prostitución como único recurso disponible y en medio de un total desconocimiento sobre, y supresión de, su propia sexualidad.

Las mujeres generalmente utilizan canales más informales que los hombres y son más recursivas para encontrar mecanismos de supervivencia. Es notorio que las mujeres buscan, ante todo solidaridad con mujeres (familiares; comerciantes de la plaza de mercado; maestras), más que con los hombres, frente a los cuales muestran cierto pudor e inhibición. Pero a la vez es importante señalar que nunca buscan solidaridad con otras viudas o desplazadas del mismo lugar³¹. Ese rechazo a compartir la misma historia deja manifiesta la necesidad de olvidarse del trauma sufrido, pero también remite al miedo y al ambiente de clandestinidad que rodea a las sobrevivientes de una masacre.

El contraste más fuerte entre mujeres y hombres se da en las oportunidades que tienen para insertarse nuevamente en el mercado laboral y asegurarse la supervivencia y la reconstrucción de sus vidas de una manera más permanente en la ciudad. En el cuadro 5 se resaltan las diferencias de género en cuanto al tipo de ocupaciones antes y después del desplazamiento, pero más que todo en cuanto al enorme incremento del desempleo entre los hombres después del desplazamiento (más de cinco veces), en comparación con un aumento mucho más modesto del desempleo de mujeres jefes de hogar.

Los hombres trabajaban antes en la agricultura y la ganadería, que son oficios de poca utilidad en su nuevo entorno urbano. Mientras que el 63.2% de los hombres había trabajado antes en la agricultura, sólo el 12.5% lo hacían después (como trabajador trashumante y dejando la familia en la ciudad); en el caso de las mujeres el declinio fue de 18.4% a 3.0%. Por consiguiente, en la ciudad les esperaba a los hombres la inutilidad y el desempleo. Pero para las mujeres, quienes antes del desplazamiento, si bien trabajaban en la agricultura, dedicaban la mayor parte del tiempo a las labores domésticas, la migración forzada no significaba igual ruptura de labores. Emplearse como aseadora, planchadora o sirvienta doméstica les ayudaba, después del desplazamiento, a insertarse de una manera más fácil, aunque precaria, en el mercado urbano del trabajo doméstico pagado. En efecto, el desempleo de las mujeres aumentó, pero en

Cuadro 5
Ocupación de los jefes de hogar según sexo, antes y después del desplazamiento
(Nº de hogares = 796)

Ocupación	Hombres				Mujeres			
	Antes	Después	Antes	Después	No.	%	No.	%
Ninguna	34	6.2	190	34.5	16	6.5	47	19.2
Asalariado agrícola	126	22.9	52	9.4	13	5.3	4	1.6
Productor/a agropec.	222	40.3	17	3.1	32	13.1	5	2.0
Educador/a	34	6.2	26	4.7	17	6.9	9	3.7
Comerciante	37	6.7	62	11.3	9	3.7	17	6.9
Funcionario/a público/a	3	0.5	3	0.5	7	2.9	6	2.3
Empleado/a	63	11.4	92	16.7	11	4.5	12	4.9
Vendedor/a ambulante	11	2.0	88	16.0	6	2.4	24	9.8
Servicios profesionales	10	1.8	5	0.9	1	0.4	1	0.4
Hogar	4	0.7	4	0.7	123	50.2	66	26.9
Servicio doméstico	0	0.0	2	0.4	10	4.1	49	20.0
Otros	2	0.4	5	0.9	0	0.0	5	2.0
Sin información	5	0.9	5	0.9	0	0.0	0	0.0
Total	551	100.0	551	100.0	245	100.0	245	99.8

Fuente: elaborada con base en cifras de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 1995³².

menos de tres veces y la ocupación de ellas en el trabajo doméstico pagado se amplió de 4.1. a 20%.

La jefatura de hogar y la responsabilidad de la supervivencia de la familia en manos de la mujer se reflejan también en la incidencia de la ocupación “ama de casa”: entre las mujeres del campo más del 50% reportaba ser ama de casa; entre las mujeres campesinas radicadas en la ciudad ese porcentaje descendió a menos de 27%. Por ende, el empleo en alguna forma de venta ambulante incrementó para ambos, aunque más fuerte para los hombres que para las mujeres desplazadas.

Enfrentarse al desempleo en la ciudad y aceptar a las mujeres como proveedores económicos principales no era cosa fácil para los hombres. En ese sentido, el desplazamiento podría incrementar las tensiones entre la pareja. La autoestima de los hombres sufría un serio golpe con la reorganización de la división del trabajo por género, como expresó uno de los hombres entrevistados en Villavicencio:

“...uno que ya está enseñado a vivir en el pueblo y se sabe defender...pero el que es propiamente campesino llega a la ciudad... ¡eso es cosa terrible! Hay familias que se han desbaratado... después de que el uno o el otro se salgan de lo normal...hay mucho libertinaje para la mujer. Hay veces que toma las decisiones la mujer, y eso es delicado porque la mujer abusa más de la libertad que el hombre...”.

(Entrevista a un hombre desplazado en Villavicencio, diciembre de 1995)³³.

Por otro lado, encontramos grandes diferencias entre las mujeres mismas en cuanto a su capacidad de enfrentar la situación de desplazamiento: entre mujeres que previamente habían participado en actividades organizativas de la comunidad campesina y las que siempre habían estado marginadas de ellas; entre mujeres que participaron en éxodos organizados y las que huyeron por su cuenta y riesgo con los hijos, sobrecogidas por una repentina viudez; entre las que tenían alguna trayectoria de líder y las que nunca salieron del solar de su casa³⁴.

Son las mujeres las que más se sienten afectadas en su diario quehacer de la supervivencia, por la imagen que la sociedad proyecta de sus familias como subversivas y culpables de su propia desgracia, aumentándose así la confusión sobre su propio ser social y, dada la repetición de hechos violentos y la impunidad de los mismos, sobre el camino por seguir para construir un nuevo proyecto de vida. Al respecto dice Bertha Lucía Castaño, psiquiatra especializada en asistencia a las víctimas de la violencia: “Como resultado encontramos que la mujer desplazada presenta alteraciones mentales con mayor frecuencia que el hombre, quien con frecuencia encuentra una mujer que lo apoya afectiva y económica”³⁵. También el desconocimiento del trabajo cívico o político que había desarrollado su marido o com-

pañero ha influido en la adopción de actitudes negativas y de miedo frente a las posibilidades de organización en su sitio de llegada:

“Me junté a vivir con él, hicimos el rancho y a él lo mataron en el 92, en una masacre que hubo ahí frente al Comisariato, en un restaurante, hicieron una matanza y mataron a tres. El trabajaba en Usuarios Campesinos, pero yo no sé qué cargo tenía. Yo no participaba en ese trabajo, porque a él no le gustaba, a él le gustaba que yo me mantuviera aquí en la casa... Casi no voy a las reuniones con otras mujeres... porque soy la que tengo que enfrentar la vida sola”.

(Entrevista a mujer desplazada en Barrancabermeja, junio de 1994).

Sin embargo, en las regiones donde la experiencia organizativa de las mujeres rurales ha sido más abierta, se consolidaron organizaciones no-gubernamentales *femeninas*³⁶ que han logrado una importante labor de asociación y apoyo mutuo como estrategias de supervivencia de las mujeres desplazadas (tiendas cooperativas, restaurantes, empresas asociativas de carpintería y zapatería, ollas comunitarias).

Uno de los grandes dilemas del desplazamiento forzoso es precisamente la perspectiva al futuro en una condición que todos los involucrados (desplazados, Estado, comunidad receptora) definen como *transitoria*³⁷. Pero, ¿transición hacia dónde? Ante la disyuntiva de *retorno* al sitio de salida o *permanencia* en la ciudad de llegada las propensiones expresadas se inclinan claramente a la permanencia (el 60% de los hombres y el 70% de las mujeres). Es que el miedo y la continuación de los conflictos en las zonas de expulsión hacen que, para muchos, el retorno no sea una opción realista. Para algunos hombres se resuelve ese dilema con la perspectiva de regresar al campo, pero a otro lugar. Sólo algunos querrían regresar y reclaman el acceso a la tierra como una condición de retorno.

Las mujeres jefes de hogar, en número aún menor optan por la alternativa de retorno: sólo el 12% reclama el acceso a la tierra como condición para volver. Recordemos que los asesinatos constituyen un motivo importante de expulsión para ellas, de modo que no sólo la imposibilidad económica sino también las

razones de seguridad y los impedimentos emocionales están presentes en el rechazo a la idea de retorno. Hay una segunda razón que inclina a las mujeres jefes de hogar hacia la permanencia en el medio urbano: el predominio de las responsabilidades maternas que coinciden con un proceso adaptativo más rápido de los hijos e hijas y con sus posibilidades escolares.

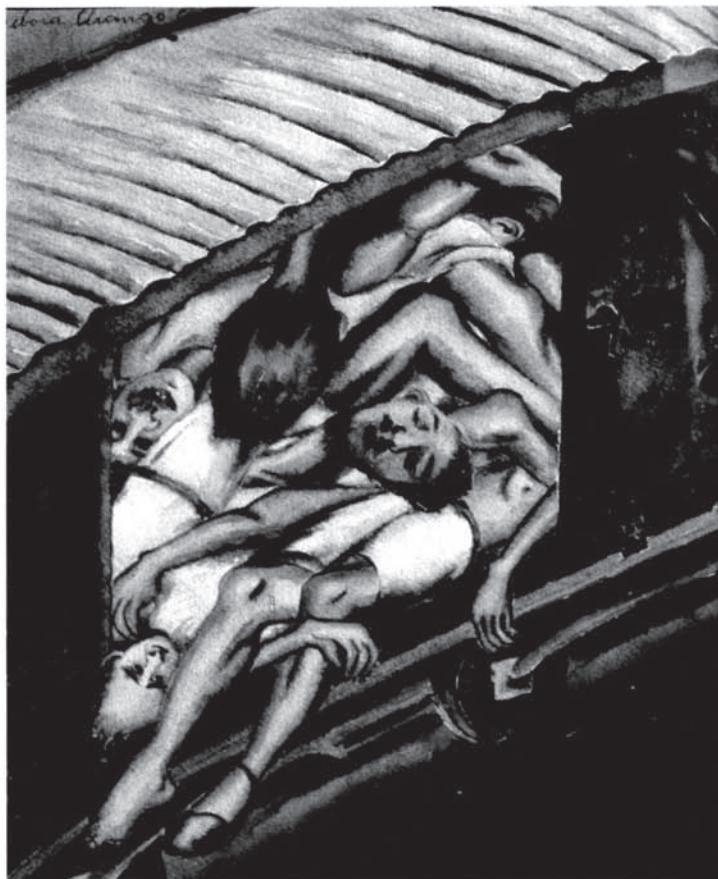
Pero también una veta muy importante aparece en la *experiencia propia* en el medio urbano. En efecto, pese a las múltiples dificultades y carencias y al cúmulo de responsabilidades, para muchas mujeres la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo urbano a través del servicio doméstico les ha dado una garantía de supervivencia de la cual carecen los hombres. Esa rápida inserción laboral, por más precaria que sea, les proporciona nuevos horizontes vitales que no existían en el campo: el contacto directo con la economía monetaria y el acceso a una nueva sociabilidad les permite romper el aislamiento, encontrarse con otras mujeres, ampliar sus relaciones con el exterior y redefinir su posición en la estructura familiar. Por ello, un número considerable de las desplazadas (25.6%) percibe las actividades urbanas como la microempresa y el trabajo asalarizado, como sus estrategias prioritarias en la generación de ingresos.

De víctimas y sobrevivientes a la construcción del futuro

La violencia política y sus consecuencias sociales han afectado de manera diferenciada a mujeres y hombres. La “violencia de género”, como dimensión de la violencia política ha cambiado de contenido e intensidad, a la par con el creciente instrumentalismo de las acciones de guerra. La presencia relativa de mujeres entre las víctimas directas se sostiene al mismo nivel desde los peores años de guerra (1988,89,91). Refleja, tanto la creciente participación de mujeres en los grupos armados insurgentes, como la intención de los agresores de intimidar a la población civil con asesinatos de *todos* sus miembros.

Entre los sobrevivientes de la guerra las mujeres campesinas desplazadas han sido es-

pecialmente trastocadas por una trágica paradoja: siendo las más afectadas en su identidad social, las menos preparadas para emprender nuevas actividades, y las más aisladas, tradicionalmente, de una vida organizativa son, sin embargo, quienes deben enfrentarse a la supervivencia física de la familia y a la reconstrucción de una identidad social en un medio desconocido y hostil. Los hombres, por su parte, parecen equipados con más experiencia social y psicológica para enfrentar los efectos destructivos de la violencia y las rupturas con el tejido social de su entorno rural, debido precisamente a su mayor movilidad geográfica y social y sus conocimientos de los espacios públicos. Pero en la fase de reconstrucción de la vida familiar las oportunidades para hombres y mujeres parecen invertirse: el impacto del desplazamiento se concentra para los hombres en su desempleo, situa-



ción que le despoja del papel de proveedor económico. En contraste, las mujeres parecen mejor equipadas para continuar las rutinas de las labores domésticas –tanto en el servicio a otros como en su propio hogar– en pos de la supervivencia familiar. A pesar de los traumas, la pobreza, los obstáculos a la organización, para las mujeres desplazadas también se presentan nuevas posibilidades y espacios de desarrollo personal. En los tímidos proyectos de generación de ingresos, o de organización comunitaria; en torno a los comités de desplazados o de derechos humanos, el papel de víctima de la violencia comienza a mezclarse con el de nueva ciudadana.

La dinámica de la guerra, pues, no sólo implica caos y trauma sino, también, un inevitable reordenamiento del tejido social, en cuya reconstrucción se presenta repetidamente la disyuntiva entre la criminalidad y la solidaridad, pero así mismo se abren posibilidades de nuevos proyectos de vida de hombres y mujeres, que impliquen una transformación de las tradicionales relaciones de género.

Notas

1 Este artículo ha sido elaborado originalmente para el libro *La Violencia en la sociedad colombiana* (título provisional), del cual son editores Myriam Jimeno, Jaime Arocha y Fernando Cubides y que saldrá próximamente con el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia.

2 Scott 1988:42-44

3 En este artículo nos limitamos a analizar los (escasos y no muy precisos) datos sobre las víctimas. Un análisis de género de los actores, es decir, de la participación en los grupos armados, merece una elaboración más amplia y especializada. Una primera

referencia a ese tema se presentó en mi artículo “Mujer y violencia política en los conflictos rurales”, *Análisis Político* No. 24, enero-abril 1995, 36-49.

4 Jaramillo, 1991: 60-74.

5 Entrevista a mujer tolimense en Armenia (Quindío), 15 de junio de 1994.

6 Uribe 1990:167,175.

7 Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 1977 (8a edición), Tomo I:340,344; Tomo II:226-234.

8 El “corte de franela” consistía en cortar la cabeza y colocar un miembro en la apertura del cuello. *Sumario ‘Asociación para delinquir’*, Radicación No. 26, iniciado en los municipios de Obando, La Victoria y Cartago, 1960 y 1961, folios 6 y 99.

9 Citado en Hobsbawm, 1981:135.

10 Ver, por ejemplo, los diversos relatos en Salazar, 1990 y 1993.

11 Entrevistas en Florencia y Belén de los Andaquíes (Caquetá), mayo de 1994.

12 Meertens (1995a). Ver también el interesante estudio sobre las guerrilleras salvadoreñas de Vásquez, Ibáñez y Murguialday (1996).

13 Ver, entre otros, Deas y Gaitán 1995 y Comisión Colombiana de Juristas 1997.

14 Presidencia de la República, Consejería para la juventud, la mujer y la familia 1993:24.

15 Como todas las estadísticas de violencia, éste y los siguientes cuadros no registran sino una parte de la realidad: la que ha sido denunciada públicamente. Para efectos de este estudio nos interesan no tanto las cifras absolutas sino la participación porcentual de mujeres y hombres.

16 Esa creciente participación ha sido señalada en múltiples testimonios y se puede inferir también de la información sobre los reintegrados: aproximadamente una cuarta parte de los reintegrados del M-19, EPL, Quintín Lame, PRT y CRS entre 1988 y 1994, eran mujeres. (Datos de la Oficina Nacional de Rehabilitación, 1995).

17 Comisión Colombiana de Juristas, 1997, p.5 y 7.

18 Según la misma fuente, casi 9 hombres (8.7) mueren diariamente por la misma causa.

19 Ibídem, p.23,24.

20 Ibídem. p.57.

21 Gran parte del texto que sigue ha sido tomado de publicaciones anteriores en coautoría con Nora Segura Escobar. Se fundamenta en dos investigaciones realizadas en 1994 (Donny Meertens, patrocinada por el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús) y 1995/1996 (Nora Segura Escobar en asocio con Donny Meertens, patrocinada por la Embajada de Holanda, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Colombia).

22 Conferencia Episcopal 1995.

23 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Codhes.

24 Conferencia Episcopal 1995:43 y Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) 1995. La subestimación

puede tener relación con los temores de las mujeres de quedar registradas como jefes de hogar y madres solteras, lo cual, en las zonas rurales, todavía representa un estigma social propagado por la Iglesia (los datos de Conferencia Episcopal fueron recogidos a través de las parroquias), o el temor a ser registradas como viudas de subversivos, lo cual tampoco les convenía en medio del clima de zozobra reinante.

25 Jorge Rojas, ponencia presentada al Seminario sobre Desplazamiento Forzado y Conflicto Social en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, noviembre de 1997. La cifra más alta de jefatura femenina del hogar, 49%, ha sido proporcionada por un estudio de familias desplazadas en Cali (Comisión Vida, Justicia y Paz y Arquidiócesis de Cali, 1977: 42).

26 Arquidiócesis de Bogotá y Codhes 1997:39.

27 Entrevista a mujeres de la Organización Femenina Popular.

28 Muestra nacional de 796 hogares del Sistema de Información de Hogares Desplazados por la Violencia-Sisdes I, elaborado por Codhes. Cubre un período de 15 meses (Julio de 1994 a octubre de 1995).

29 Las únicas excepciones las encontramos en las mujeres que de una u otra forma habían llegado al liderazgo en su organización o comunidad: sus historias de vida revelaban diferentes caminos para escapar al confinamiento del hogar de la típica familia campesina, por migración independiente, colonización o servicio doméstico en la ciudad.

30 Simbolizada a veces por la falta de documentos de identidad, que frecuentemente se pierden en la huida.

31 Al menos espontáneamente; para las Ong's que trabajan con mujeres desplazadas esta actitud es un obstáculo para la organización y requiere una labor psicológica previa.

32 Publicado por primera vez en Meertens y Segura 1996.

33 En el Informe de Investigación, Segura y Meertens 1996:46.

34 Entrevistas a mujeres desplazadas en Montería, Barrancabermeja y Florencia, abril-mayo de 1994

35 Castaño, 1994:62.

36 Entre otras, la Corporación María Cano en Montería y la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja.

37 El retorno se incorporó como primera alternativa en los objetivos de la política oficial: “*Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento logre su incorporación a la sociedad*” (Departamento Nacional de Planeación/Ministerio del Interior, 1995:13).

Bibliografía

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) (1993). *Guía para la protección de mujeres refugiadas*, Ginebra.
- America's Watch (1992). Terror no-contado: Violencia contra mujeres en el conflicto armado peruano. New York, America's Watch y Lima, Centro Flora Tristán.
- Arquidiócesis de Bogotá y Codhes (1997). *Desplazados por la violencia y conflicto social en Bogotá*, Bogotá.
- Castaño, Bertha Lucía (1994). *Violencia sociopolítica en Colombia: Repercusión en las víctimas*, Bogotá, Corporación Avre.
- Codhes (1995). Sistema de Información de Hogares Desplazados por la Violencia -Sisdes 1, Bogotá.
- Comisión Colombiana de Juristas (1997). *Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario: 1966*, Bogotá.
- Comisión Vida, Justicia y Paz y Arquidiócesis de Cali (1997). *Desplazados en Cali: Entre el miedo y la pobreza*, Cali.
- Conferencia Episcopal de Colombia (1995). *Derechos Humanos. Desplazados por Violencia en Colombia*, Bogotá.
- Deas, Malcolm y Fernando Gaitán Daza (1995). *Dos Ensayos especulativos sobre la Violencia en Colombia* Bogotá, Fonade y Departamento Nacional de Planeación
- Departamento Nacional de Planeación y Ministerio del Interior (1995). *Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia*, Documento Conpes 2804 del 13 de septiembre, Bogotá.
- Guzmán Campos, Germán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna (1977). *La Violencia en Colombia*, dos volúmenes, Bogotá, Punta de Lanza, octava edición. (primera ed. Tercer Mundo Editores 1962).
- Hobsbawm, Eric J. (1981). *Bandits*, New York, Pantheon Books (2nd revised edition).
- Jaramillo, Carlos Eduardo (1991). *Los guerrilleros del novecentos*, Bogotá, Cerec.
- Maquieira, Virginia y Cristina Sánchez (comp.) (1990). *Violencia y sociedad patriarcal*, Madrid, Ed. Pablo Iglesias.
- Meertens, Donny (1995a). Mujer y Violencia en los conflictos rurales, en *Análisis Político* No. 24.
- _____(1995b). Las Mujeres y la violencia: Conflictos rurales y sus efectos diferenciados por género, en *La Paz: Miradas de Esperanza*, Mauricio García (ed.), Bogotá y Cali, Programa por la Paz y Pontificia Universidad Javeriana.
- Meertens, Donny y Nora Segura Escobar (1996). Uprooted Lives: Gender, violence and displacement in Colombia en *Singapore Journal of Tropical Geography*, vol. 17, No. 2, pp. 165-178
- Meertens, Donny y Nora Segura Escobar (1997). Las rutas del género en el desplazamiento forzoso, en *Revista Javeriana*, No. 635, tomo 128: 361-369.
- Osorio, Flor Edilma and Fabio Lozano (1996). Pobladores rurales en situación de desplazamiento: Condiciones y perspectivas. Bogotá, Codhes
- Presidencia de la República, Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia (1993). *Política Integral para las Mujeres colombianas*, Bogotá.
- Rojas, Jorge (1997). Desplazamiento forzado, conflicto social y derechos humanos, Ponencia presentada al seminario sobre Desplazamiento Forzado y Conflicto Social en Colombia, Universidad Nacional de Colombia.
- Rueda Bedoya, Rafael (1997). *Desplazados por la violencia en Colombia: entre el miedo...la soledad ... y la esperanza*, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Cehap.
- Salazar, Alonso (1990). *No nacimos pa'semilla: La cultura de las bandas juveniles de Medellín*, Medellín, Corporación Región; Bogotá, Cinep.
- _____(1993). *Mujeres de fuego*, Medellín, Corporación Región.
- Segura Escobar, Nora y Donny Meertens (1996). *La Mujer Desplazada y la Violencia*. Informe Final de Investigación presentado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Bogotá.
- Segura Escobar, Nora and Donny Meertens (1997a). Uprootedness, Gender and Internal Displacement in Colombia, en *Beyond_Law* vol. 6, no. 17:15-34.
- _____(1997b). Desarraigo, género y desplazamiento interno en Colombia, en *Nueva Sociedad*, 148: 30-43.
- Scott, Joan W. (1988). Gender, a Usefull Category of Historical Analysis, en *Gender and the Politics of History*, New York, Columbia University Press, 28-52.
- Tobón, Gloria y Yuli Otero (1997). *Mujeres y Desplazamiento: Una realidad en la ciudad de Montería*, Montería, Corporación María Cano; Bogotá, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
- Uribe, María Victoria (1990). *Matar, rematar, contramaratar, las masacres de la violencia en el Tolima 1948-1964*, Bogotá, Cinep, Controversia No. 159-160.
- Vázquez, Norma, Cristina Ibañez y Clara Murgialday (1996). *Mujeres-montaña: Vivencias de guerrilleras y colaboradoras del FMLN*, Madrid, Horas y horas.

Jorge E. Rojas R.
Periodista, investigador social,
Director de Codhes.

Violencia y desplazamiento: el drama continúa

Jorge E. Rojas Rodríguez

El país asiste, con algunas muestras de asombro, a la ampliación y agudización del fenómeno del desplazamiento forzado por causas vinculadas directa o indirectamente al conflicto armado interno y otras manifestaciones de violencia social.

Las imágenes del campamento de Pavarandó en la región de Urabá se asimilaron a los campamentos de refugiados y desplazados de los países de los Grandes Lagos en África y permitieron evidenciar un drama humano que tiende a agravarse en la medida en que persisten las causas que lo generan.

1997 se convirtió en el año más dramático porque el número de desplazados se incrementó significativamente con la irrupción de éxodos en masa y la continuidad de una migración individual y familiar que sigue siendo la principal forma de esta movilidad forzada en el país.

Este artículo presenta una información resumida del problema del desplazamiento en 1997, con unas reflexiones sobre la persistencia de este fenómeno socio-demográfico en el marco de la violencia y el conflicto armado que vive Colombia desde mediados de siglo.

Desplazados y excluidos

El desplazamiento forzado por causas de violencia aparece como una constante en los últimos 50 años de la historia nacional, en una dinámica caracterizada por momentos críticos de violencia seguidos de procesos de colonización y migraciones involuntarias que, en algunos casos, sirvieron de escenario a nuevas formas del conflicto armado o a otras manifestaciones de violencia política y social¹.

Esta lógica de exclusión social de grupos de población tendría explicación en intereses disímiles y complejos que se inscriben en un proceso traumático de desarrollo capitalista en los niveles regional y nacional y en momentos contradictorios de la construcción de un Estado-nación.



Así, con la violencia política de mediados de siglo se produjo una recomposición sociodemográfica del país que, a su vez, consolidó nuevas formas de tenencia de la tierra, abrió espacios de desarrollo industrial y agroindustrial e incidió en unas estructuras políticas excluyentes y en un Estado esencialmente antidemocrático.

Los desplazados de entonces contribuyeron, de un lado, a la urbanización del país y, del otro, a procesos de colonización en una distribución socio-espacial que habría de generar nuevos conflictos.

Esto es válido para señalar que la categoría *desplazados* que hoy se asume en el marco del conflicto armado y la violación de los derechos humanos tiene una connotación específica en la historia reciente del país que va más allá de la definición de víctimas de la violencia y se inscribe en un contexto socioeconómico que es necesario profundizar².

Es posible que esta confusión de migrantes y desplazados haya contribuido en parte al desconocimiento del desplazamiento como un fenómeno específico en Colombia desde mediados del siglo por parte del Estado que mantuvo hasta 1993 la idea de que se trataba de migraciones normales campo-ciudad de una población que volvió costumbre o necesidad salir en busca de mejores oportunidades.

Desde luego que la adopción de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el concepto de *refugiado* para definir a quienes son obligados a salir de sus países por la ausencia de garantías para sus vidas y/o libertad y, más recientemente, la preocupación de Naciones Unidas por los *desplazados internos*, que por las mismas causas se movilizan dentro de un territorio nacional y que constituyen uno de los problemas graves del fin del siglo, contribuyeron en Colombia al reconocimiento del problema como uno en el marco del conflicto armado, del derecho internacional humanitario.

Además porque desde 1985, año de rompimiento de treguas, irrupción del paramilitarismo y comienzo de la agudización y degradación del conflicto armado interno, el fenómeno se hace más evidente y se convierte en un problema regional y nacional que sigue vigente.³

Existen pues, elementos para un análisis retrospectivo del desplazamiento forzado en el marco del comportamiento de las migraciones y otras formas de movilidad humana que han caracterizado la historia demográfica del país. Así podría explicarse por qué el Estado asume una respuesta tardía, precaria y contradictoria a un fenómeno evidente y sería posible entender los intereses y motivaciones que se mueven en torno a la construcción de políticas públicas para hacer frente a esta problemática social.

1 “Porque no faltan las continuidades bien reales. Continuidades manifiestas: las FARC son el prolongamiento de los núcleos de autodefensa campesina, el ELN y el EPL se instalan al comienzo en zonas-refugio de la violencia y se apoyan a veces sobre los restos de antiguas “guerrillas liberales”. Así explica Daniel Pécaut la línea de continuidad del conflicto, para advertir que la memoria de la violencia contribuye de múltiples maneras a que la nueva violencia no sorprenda, a que aparezca como “normal”, a que se difunda también fácilmente, a que sus dimensiones y sus retos inéditos no sean percibidos sino tardíamente”. Daniel Pécaut en análisis político *Presente, pasado, futuro de la violencia* Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional , No. 30 enero/ abril de 1997.

2 La Ley 387 de 1997, tomando como referencia la definición operativa de la Consulta Permanente sobre Desplazamiento en las Américas” precisa que en Colombia es desplazado “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”. Presidencia de la Repùblica, *Los desplazados, esa Colombia que no podemos olvidar*.

3 Se calcula que desde 1985 más de 1.200.000 colombianos fueron desplazados por la violencia. (Conferencia Episcopal, Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia).

Desplazamiento y conflicto armado

Un promedio de 6 hogares fueron desplazados cada hora durante 1997 en desarrollo de una estrategia político-militar que en algunos casos está ligada a fuertes intereses económicos y que se sustenta en el terror y la violencia indiscriminada contra la población civil ajena a la confrontación armada.

Son, más o menos, 159 familias que diariamente emigraron contra su voluntad durante 1997, lo que constituye un dramático crecimiento de las cifras de desplazados en medio de la crítica situación de derecho humano y derecho humanitario en el país.

Más de 4 mil hogares cada mes del pasado año que tuvieron que abandonar sus viviendas, trabajo y entorno socio-cultural para acomodarse en los reducidos espacios de la pobreza y la marginalidad urbana.

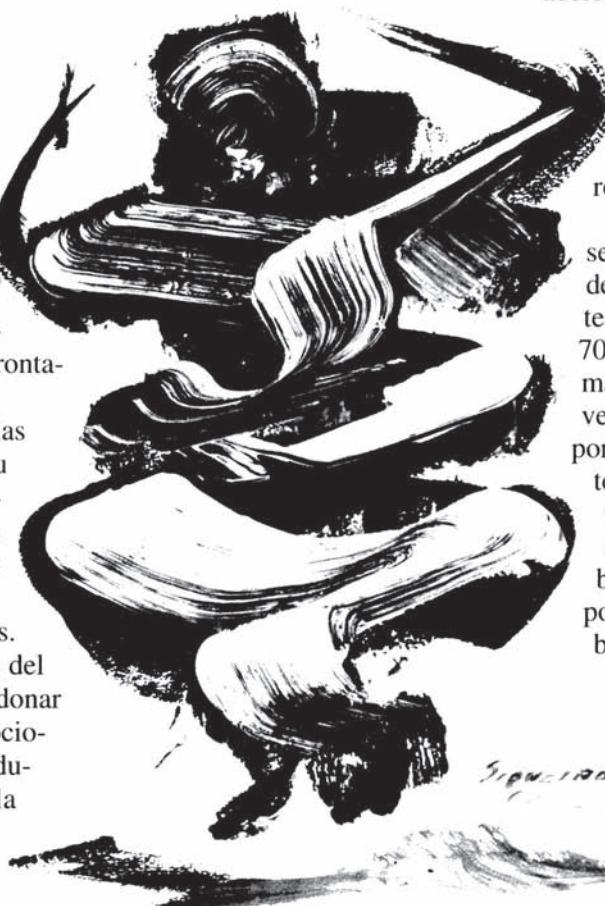
Alrededor de 257 mil personas que huyeron durante 1997 para salvaguardar sus vidas ante la incapacidad del Estado de garantizar sus derechos fundamentales y la consiguiente agudización y expansión del conflicto armado interno.

Aproximadamente 57 mil hogares en situación de desplazamiento que se suman al millón de colombianos que viven o han vivido una situación similar desde 1985.

Tal es el panorama del desplazamiento forzado durante 1997 que se ubica como el más crítico en los últimos trece años en Colombia.

Así se desprende del estudio realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes con el concurso de diversas jurisdicciones eclesiásticas del país, comunidades religiosas, entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de desplazados.

La principal característica del desplazamiento forzado durante 1997 fue la irrupción de éxodos en masa que responden a las



acciones de tierra arrasada de los actores armados, en especial, grupos paramilitares, que siguieron su estrategia de matar "guerrilleros fuera de combate... que son guerrilleros vestidos de civil"⁴.

Los éxodos en masa representan el 28% del total de los desplazados en Colombia durante 1997. Es decir, alrededor de 70 mil colombianos que huyeron masivamente dejando caseríos, veredas y pueblos abandonados porque así los decidieron los actores armados que se disputan territorios en una política de sangre y fuego en la que también tienen incidencia los grupos guerrilleros y la Fuerza Pública.

En este contexto se produjo el *refugio de hecho* de un número considerable de colombianos provenientes del Urabá chocoano al vecino país de Panamá, en otra manifestación de la agudización de un conflicto que empieza a desbordar las fronteras nacionales⁵.

Sin embargo, la gran mayoría de los desplazados por la confrontación armada y la violencia siguen siendo aquellos que huyen, individual y/o familiarmente, en un proceso de desarraigo disperso y silencioso que se asienta en ciudades grandes y medianas en precarias condiciones socioeconómicas y en medio de la desprotección y el abandono.

Son hombres y mujeres provenientes del campo o de pequeñas poblaciones rurales que huyen de las amenazas de los paramilitares, la guerrilla o la Fuerza Pública o del miedo que provocan sus acciones de muerte y destrucción. También persiste el desplazamiento individual y familiar de quienes huyen por la acción violenta de grupos privados de seguridad en el marco del conflicto por la tierra, de las Asociaciones de Seguri-

⁴ Esta guerra no da más, entrevista con Carlos Castaño, Revista Cambio 16, No. 235, diciembre 15 de 1997.

dad conocidas legalmente como Convivir y de otras expresiones de violencia rural y urbana, individual y colectiva que hacen parte de la preocupante generalización y cotidianidad de la violencia en el país.

Esta modalidad de desplazamiento individual y familiar también se explica ante las manifestaciones de intolerancia, discriminación y persecución contra los desplazados por parte de algunas autoridades territoriales a quienes la Corte Constitucional les ordenó abstenerse de “restringir la libre circulación de las personas desplazadas por la violencia y para que les preste un trato decoroso y acorde con la dignidad humana”⁵. También hay sectores de opinión que insisten en relacionar el incremento de los índices de inseguridad y delincuencia de algunas ciudades con el incremento del desplazamiento forzado (*El Heraldo*, de Barranquilla, marzo de 1997).

Son acciones y opiniones que intentan justificar un tratamiento de orden público y seguridad a un problema esencialmente humanitario que requiere de un gran esfuerzo en los niveles de atención y protección.

*“Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como le ha ocurrido a los colonos de la hacienda de Bellacruz, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo, sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado”*⁶.

¿Política estatal o incoherencia del gobierno?

La evidencia del desplazamiento forzado, la presión internacional y la decisión política del gobierno y el Congreso, que permitió un reconocimiento del problema y de la responsabilidad estatal, con-



fluyeron en un esfuerzo por generar unas políticas públicas para hacer frente a este problema de derechos humanos, cuya persistencia empieza a provocar múltiples dilemas sociales en las ciudades y poblaciones que ven crecer dramáticamente su población, en algunos casos por el asentamiento de familias desplazadas.

En consecuencia, durante 1997 se aprobó una ley de origen parlamentario (la ley 387 de junio de 1997) “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la república de Colombia” que reconoce desde el Estado el problema sociodemográfico y de derechos humanos del des-

plazamiento e intenta una normatividad e institucionalidad para hacer frente a esta problemática.

Esta ley representa, también, la continuidad de las políticas consignadas en el documento del Consejo de Política Económica y Social Conpes 2804 de septiembre de 1995, y de su reciente actualización. (Documento 2924 de mayo de 1997).

Sin embargo, esta ley no se ha reglamentado y su desarrollo aún no es claro, sobre todo si se tiene en cuenta que existen diversos y complejos niveles institucionales de atención del problema, algunos no exentos de protagonismos innecesarios.

El despacho de la primera dama (que no existe institucionalmente) la Consejería presidencial para los desplazados, la Unidad administrativa de derechos humanos del

5 Ver Boletín especial *Codhes Informa* edición especial No. 5 *Colombianos en busca de refugio en Panamá*, noviembre de 1997. Ver Boletín especial *Codhes Informa* No. 7 *Desplazamiento: problema humano y no de orden público* que contiene la Sentencia de la Corte Constitucional T-227/97.

6 Idem.

Ministerio del Interior y su Oficina de atención a desplazados, la Red de solidaridad social y algunas instituciones nacionales descentralizadas intentan, desde dinámicas y concepciones distintas, desarrollar un plan de acción, cuya principal característica es la ausencia de concertación y la imposición de criterios gubernamentales frente a otras opiniones.

Si bien es cierto que existe una política diseñada para el desplazamiento, también lo es que su ejecución es descoordinada y sus resultados altamente precarios frente a los graves sucesos de desplazamiento registrados el año pasado.

Como lo señalaron en su carta al Presidente de la República los voceros del Mandato por la Paz *el gobierno nacional debe ejecutar de manera coherente y eficaz las políticas de atención a los desplazados por la violencia en Colombia...*"(Carta del Mandato por la Paz al Presidente de la República sobre el problema de los desplazados, noviembre de 1997).

Y un aspecto final en este apretado resumen tiene relación con la propuesta gubernamental de retorno y reubicación (el gobierno no considera la *permanencia* como una opción de los desplazados), que se convirtió en el eje central de la atención humanitaria y, en algunos casos, en la condición para la ayuda humanitaria.

Los procesos de retorno y reasentamiento en la Costa Atlántica, y más recientemente en Urabá, se realizan en el marco de esta política pero se sostienen por la intervención de la Iglesia católica y de organizaciones no gubernamentales, ante el incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados con las comunidades.

Es este un panorama que advierte sobre la gravedad de la crisis del desplazamiento forzado que puede tener connotaciones de pesimismo

si tenemos en cuenta que la dinámica del conflicto prevé más confrontación, más degradación, más violaciones a los derechos humanos, más infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la continuidad de la estrategia del miedo y el terror para repoblar veredas, caseríos o, sencillamente, para desocuparlos y dar paso a importantes proyectos económicos. Es decir, más guerra, más desplazados, en un círculo vicioso que afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a la población civil ajena a un conflicto que no le pertenece, que no le beneficia y que tiende a prolongarse ante la ausencia de voluntad real de paz por parte de sus protagonistas y la inexistencia de espacios de confianza para el inicio de diálogos.

Mientras la guerrilla sigue atentando contra la población civil y cuestionando la legitimidad del gobierno, mientras el gobierno sigue insistiendo en iniciar a toda costa un proceso de diálogo sin interlocutores, mientras los militares siguen siendo objeto de duros reveses o siguen cometiendo graves errores que cuestan vidas humanas, y mientras los paramilitares siguen su ofensiva contra quienes consideran guerrilleros, o potenciales guerrilleros, la guerra interna seguirá su curso en niveles cada vez más críticos.

Persisten, en todo caso, dudas sobre las reales condiciones de seguridad que el gobierno no está en capacidad de garantizar y se requiere de esfuerzos por lograr acuerdos humanitarios entre los actores armados, en tanto que los retornos y reasentamientos se adelantan en medio de la confrontación.

La paz, como escenario de preventión del desplazamiento exige hoy del concurso de la sociedad civil, la comunidad internacional, la voluntad política de los grupos armados y un nuevo gobierno legítimo, con capacidad para iniciar un proceso serio de diálogo y negociación.



Luis Carlos Restrepo

Psiquiatra y escritor. Autor de los libros *El derecho a la ternura* y *Proyecto para un arca en medio de un diluvio de plomo*.

Ecos del Mandato por la Paz

Luis Carlos Restrepo

El 26 de octubre de 1997 un hecho insólito, aunque esperado, sacudió al país. Cada minuto y durante ocho horas seguidas, 20.000 colombianos se acercaron a las urnas para depositar el tarjetón verde de la paz, convirtiendo a las elecciones más amenazadas de los últimos años en las más participativas de la toda la historia nacional. Cada minuto, un número de ciudadanos que envidiaría cualquier ejército regular o insurgente, expresó su rechazo a la guerra, formando una cauda humana que colapsó al sistema electoral, pues miles de colombianos se quedaron sin posibilidades de votar al desbordarse las previsiones de la Registraduría.

Una oleada de opinión

El Mandato ciudadano por la paz reúne hasta el presente la más alta votación que se haya registrado en el país por candidato o propuesta alguna. Y esto sucede en una nación fracturada por la guerra, donde diferentes grupos armados se encuentran empecinados en una lucha por el dominio territorial que pasa por encima de la legalidad vigente y que busca implantar una



nueva legitimidad nacida del ejercicio de las armas.

Aunque la figura del Mandato no aparece consagrada de manera explícita ni en la Constitución ni en la ley como un mecanismo de participación ciudadana, el Consejo Nacional Electoral avaló su pertinencia y validez, abriendo las puertas legales para su realización¹. Expresión de un anhelo colectivo de paz que se ha ido fortaleciendo en los últimos años, el Mandato es un típico voto de opinión que no sigue los cauces tradicionales de la democracia representativa. De este nuevo flujo que ingresa al territorio político no puede apropiarse representante alguno, pues los ciudadanos

no eligieron dignatarios sino que afirmaron principios y señalaron finalidades. Es por eso que el Mandato tiene *mandante*, mas no *mandatario*, pues el ciudadano ejerce su poder sin delegarlo, erigiéndose él mismo en su ejecutor y veedor. Es, pues, un contrato consigo mis-

1. Concepto del Consejo Nacional Electoral del 26 de mayo de 1997; magistrado ponente: Carlos Ariel Sánchez Torres. Rad: 1223.



mo y con los asociados que decidan asumirlo en similares condiciones de igualdad².

Tal como sucede con los Derechos Fundamentales consignados en la Constitución, los contenidos del Mandato tienen el valor de afirmaciones indeclinables que siguen conservando su validez, incluso en el momento en que son violadas. El compromiso de los ciudadanos de ser constructores de paz y su exigencia a los actores de la guerra de respetar los derechos de los no combatientes y de buscar una salida pacífica a los conflictos toma el carácter de norma de normas, fuente de legitimidad para todo aquel que pretenda ejercer el poder en Colombia.

Aunque el Mandato ciudadano por la paz es, en sí mismo, un hecho desbordante e incluso parojo, son pocos los análisis políticos que se han hecho al respecto, quizás porque estamos más acostumbrados a los análisis de guerra o porque se menosprecian estos actos de poder ciudadano que rompen la lógica de confrontación que sigue prevaleciendo en el país. De allí que consideremos necesario brindar algunos elementos para este análisis, buscando mantener la objetividad a pesar de haber ocupado, en nues-

tro caso, el cargo de Coordinador General del Mandato, hecho que bien puede verse como una limitación o también como una ventaja. Correspondrá, sin embargo, al lector decidir con ponderación la validez de nuestras opiniones.

Fase de gestación

La propuesta del Mandato surgió a comienzos de 1997, en medio de la aguda crisis política que vivía el país a raíz de la infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper³. A medida que el presidente perdía legitimidad, la guerra se intensificaba, asegurando la insurgencia guerrillera un fortalecimiento militar y político y una efectiva presencia en movilizaciones populares, como las realizadas por los campesinos cocaleros en el sur del país para protestar por el manejo militar que se estaba dando al problema de los cultivos ilícitos. De manera paralela, los grupos paramilitares se multiplicaban en el norte del país, con una clara pretensión de dominio territorial y político. Los ciudadanos, agobiados e impotentes, empezaban a inclinarse, por primera vez en muchos años, hacia una salida de fuerza, generándose un caldo de cultivo propicio a la predica de líderes autoritarios.

El Mandato logró crear un ámbito de legitimidad para todas las propuestas de paz civil que se adelantan en el país. De allí que podamos hablar del “efecto mandato” como un clima político que en los últimos meses parece mantener a la opinión pública, a empresarios y candidatos, en una actitud favorable a la negociación política del conflicto armado, aún en medio de una intensificación de la guerra como la que en la actualidad vivimos.

2. Sobre los criterios de interpretación política del Mandato puede consultarse: “Mandato por la Paz: Un acto de dignidad civil”, *El Tiempo*, X-26-1997, p. 3-A; “El Mandato, un voto más que simbólico”, *El Espectador*, X-28-1997, p. 11-A.

3. La primera referencia pública a la necesidad de un Mandato Ciudadano de Paz puede encontrarse en *El Colombiano*, III-3-1996, p. 16-A, “Hay que desactivar esta guerra absurda...”, entrevista de Juan Carlos Pérez a Luis Carlos Restrepo.

Cuando la propuesta fue asumida por la VIII Asamblea Nacional de Redepaz⁴ en mayo de 1996, era clara la intención de impedir la polarización de la opinión pública creando un consenso civil sobre la necesidad de la paz, que obligara a colocarla como prioridad en la agenda de los candidatos que se disputarían la presidencia en 1998. Se daba así forma a un viejo anhelo, expresado desde la fundación de Redepaz en 1993 por parte de los representantes de la Diócesis de Socorro y San Gil, quienes insistían en la necesidad de realizar un plebiscito por la paz, proyecto en el que seguían trabajando con sus comunidades eclesiales de base.

Después de cumplirse una primera fase con la realización del Mandato de los Niños por la Paz el 25 de octubre de 1996, proyecto adelantado con la activa colaboración de Unicef y otras entidades nacionales e internacionales, quedaba claro al finalizar ese año que dos grandes manifestaciones de la sociedad civil habían emergido en el escenario nacional, respondiendo, a la vez, a los efectos de la guerra y a la profundización de la crisis política. El Mandato de los Niños, con una nutrida presencia de organizaciones locales y populares; y las marchas contra el secuestro lideradas por País Libre, donde prevaleció el sentimiento de sectores citadinos de clase media y alta desesperados ante la inseguridad reinante. Por otro lado, mientras en Redepaz prevalecía una visión de la paz con énfasis en la justicia social y participación activa de grupos de reinsertados y sectores democráticos de izquierda, en el caso de las movilizaciones promovidas por País Libre sobresalía la exigencia de una paz con seguridad ciudadana, haciendo presencia sectores que animaban consignas de derecha como la pena de muerte para los secuestradores.

El encuentro de ambos grupos a comienzos de 1997 fue fructífero, llegándose rápidamente a un acuerdo para unificar agenda y realizar una convocatoria ciudadana para que los colombianos se expresaran masivamente en torno al asunto de la paz⁵. Se abría paso una pedagogía política que permitía desarrollar alianzas entre sectores ciudadanos que hasta ese momento tenían visiones encontradas acerca de la paz y de la guerra. Superadas resistencias que se presentaron



al interior de los nuevos aliados, la nueva convergencia contó de nuevo con el apoyo de Unicef Colombia, cuyo director Cecilio Adorna había iniciado desde su llegada al país un cambio de política en la oficina a su cargo, comprometiéndose de manera decidida y valerosa con la búsqueda de salidas al conflicto armado que convertía a los niños en sus primeras víctimas.

Política de alianzas

La alianza entre País Libre, Redepaz y Unicef dio un nuevo rostro a las convocatorias por la paz, generando crecientes expectativas. Des-

4. La primera formulación programática del Mandato puede encontrarse en: "Por un Mandato Nacional por la vida y por la paz", *Revista Utopías*, Año IV, No. 36, Santa Fe de Bogotá, junio 1996, pp. 22-27.

5. Para un recuento de este proceso: "Intimidades del Mandato ciudadano por la paz", entrevistas a Francisco Santos y Ana Teresa Bernal, *Revista Irene*, Año 2, No. 4, nov. de 1997, pp. 10-40.

El “efecto mandato” fortalecerá actos como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil convocada por la Comisión de Conciliación Nacional y el Episcopado colombiano. Sin embargo, aunque en estos espacios se seguirá avanzando en la definición de criterios y agenda para la negociación, no es suficiente pensar en quienes hacen la guerra y lo que necesitarían para desistir de su acción. Es preciso pensar también en quienes la padecen pasivamente, alemando la posibilidad de que puedan emerger como fuerza con suficientes garantías para reclamar sus derechos, no obstante su condición de desarmados. Sólo el fortalecimiento de la fuerza política que representan los desarmados permite contar con un factor de equilibrio para impedir una salida de pacificación guerrera y aleantar la alternativa de una paz civil.

pués de dar los pasos iniciales para asegurar la viabilidad del proyecto, asegurándose el apoyo del gobierno a la iniciativa sin comprometer su neutralidad⁶, se decidió proceder a una nueva apertura convocando a organizaciones empresariales, ONGs y otros sectores a un diálogo sobre el contenido del tarjetón que permitió nuevamente limar asperezas y encontrar consensos. Cabe resaltar al respecto la resistencia de grupos defensores de los DDHH, sectores sindicales y de izquierda, a que se hiciera de manera explícita exigencias a los “paramilitares” sobre el cumplimiento de normas del DIH, por considerar que de esta manera se les concedía un estatuto político. Curiosamente, mientras estos grupos insistían en que sólo se hicieran exigencias al Estado en esta materia, grupos empresariales se sintieron molestos por la pretensión de pedir explícitamente al Estado que no secuestrara o asesinara. Fue por eso que en la versión final del tarjetón se optó por hacer las exigencias a los “actores del conflicto armado”, eufemismo que permitió mantener la alianza y satisfizo a todos.

Otro punto que mereció gran debate fue la exigencia de no vincular civiles a la guerra. Para los sectores de izquierda democrática el punto debía ser más explícito y condenar la existencia de las “Convivir”. Para sectores más comprometidos con las instituciones tradicionales, este punto resquebrajaba las obligaciones de los ciudadanos para con la Constitución y las Fuerzas Armadas. Finalmente, se mantuvo el punto sin que las contradicciones desaparecieran, pero conservando un sano debate al interior de la convergencia.

Es indudable que el Mandato logró uno de los más amplios consensos de que tenga noticia la historia nacional. Al momento del lanzamiento de la campaña, en septiembre de 1997, lo apoyaban cerca de 400 organizaciones representativas de todos los sectores de opinión, desde el Consejo Gremial Nacional hasta la Central Unitaria de Trabajadores⁷. El apoyo de los medios de comunicación fue también generoso y decisivo, al igual que la carta de los candidatos presidenciales aceptando de antemano los resultados del Mandato y mostrando su disposición a convertir el tema de la paz en asunto prioritario de su gobierno, más allá de cualquier interés personal o partidista. La actitud recelesta que en principio mostraron las Farc, y la postura de las Autodefensas días después de mostrarse partidarias de lo que sus enemigos criticaban, no lograron polarizar la propuesta,

silenciándose al final las críticas de la insurrección que empezó a mostrar una actitud de cautelosa espera.

El Mandato logró transmitir al país una imagen de confiabilidad y transparencia dejando claro, además, ante los actores de la guerra que esta movilización no sería utilizada para profundizar la confrontación ni favorecer censuras parciales de unos contra otros. La decisión de los dignatarios y voceros públicos del Mandato de declararse inhabilitados para participar en las elecciones en curso, ayudó también a que se disiparan temores sobre la posible utilización partidista de la opinión. Gracias a una adecuada política de alianzas, el Mandato contribuyó a fortalecer la confianza de la sociedad civil, actuando como factor catalizador en la formación de una conciencia de paz que hoy aparece como el aporte más valioso que los ciudadanos ofrecen a la reconciliación nacional.

El “efecto mandato”

El Mandato logró crear un ámbito de legitimidad para todas las propuestas de paz civil que se adelantan en el país. De allí que podamos hablar del “efecto mandato” como un clima político que en los últimos meses parece mantener a la opinión pública, a empresarios y candidatos, en una actitud favorable a la negociación política del conflicto armado, aún en medio de una intensificación de la guerra como la que en la actualidad vivimos. Este “efecto mandato”, como sucede con todo movimiento de opinión, es limitado en el tiempo. Puede cubrir máximo el primer año del próximo gobierno, debiendo aparecer, entre tanto, nuevos fenómenos aglutinadores que permitan mantener la esperanza. Si atendemos al perfil paradojal de los movimientos de opinión cabría razón a algunos críticos cuando afirman que podría producirse de pronto un fenómeno inverso, pues en caso de no abrirse paso una nego-

6. Decreto 1729 del 7 de julio de 1997, “Por el cual se apoya la iniciativa ciudadana Mandato ciudadano por la paz, la Vida y la Libertad”.

7. Un panorama de los convocantes y sus propósitos al momento del lanzamiento puede encontrarse en: “Tu voto: la victoria de la paz”, *El Tiempo*, IX-11-1997, p. 3-A.

ciación viable y en ausencia de otras manifestaciones de poder civil, los mismos ciudadanos que votaron por la paz podrían caer en el despecho y alentar salidas autoritarias.

Aunque existía en los dirigentes del Mandato una claridad en cuanto al compromiso que generaba el voto por la paz y los puntos contenidos en el tarjetón, sería ingenuo pretender que el voto de los ciudadanos respondió de manera literal a lo que se decía en la papeleta. De hecho, hoy son pocos quienes lo recuerdan. Aunque este fenómeno podría atribuirse a la ausencia de una pedagogía masiva en torno al contenido del tarjetón, también es cierto que la movilización fue, en gran medida, una expresión sentimental, una postura de rechazo a la guerra, un sentimiento ambiguo —como todo sentimiento— que no ha sido trabajado y canalizado de manera efectiva después del 26 de octubre. Después de esa fecha son obvias las dificultades para convocar acciones nacionales que permitan una presencia activa y creciente de la ciudadanía como fuerza de presión frente a los actores de la guerra.

La alianza, que fue suficiente para obtener el éxito puntual del 26 de octubre, se mostró insuficiente para mantener después de esa fecha una movilización e iniciativa que permitiera ir más allá de la millonaria votación. Después de algunos logros inmediatos representados en el compromiso gubernamental para separar a los menores de la guerra y adelantar acciones legislativas en torno a otros puntos del tarjetón, las demandas ciudadanas han caído en un discreto olvido. Las convocatorias posteriores del Comité de Seguimiento del Mandato, como es el caso de



la utilización de un símbolo para identificar los territorios de paz o el llamado a “eclipsar la guerra” el día 26 de febrero, no han logrado generar una movilización nacional que pueda verse como legítima continuación de la votación del 26 de octubre. Algunos opinan, incluso, que con estas convocatorias se está cayendo en la retórica y el simulacro. Las acciones desarrolladas en los últimos cuatro meses tienden más bien a identificarse con propósitos sectoriales de las organizaciones convocantes, que al nivel local o de sus zonas de influencia han logrado fortalecer acciones ciu-

dadanas por la paz al amparo de la legitimidad que concede el Mandato. Por su parte, algunos gobernadores y alcaldes se han apoyado en los símbolos del Mandato para fortalecer propuestas orientadas a fortalecer la convivencia.

¿Qué sigue?

El Mandato expresa, tanto el máximo momento de potencia de la ciudadanía, como su faceta de impotencia. Es la fuerza de un poder civil que se afirma frente a las pretensiones de los violentos, pero también una muestra de la impotencia ciudadana, cuyos mandatos no son cumplidos, siendo necesarios nuevos esfuerzos para que la opinión ciudadana se haga escuchar en medio de las armas. Se hace necesaria una nueva movilización que actúe como presión solidaria frente a los actores de la guerra. Esta nueva movilización podría, sin embargo, necesitar de escenarios y alianzas diferentes a las que permitieron la votación del 26 de octubre, o a las que se expresan en el actual Comité de Seguimiento.



No podemos negar, sin embargo, que el balance del Mandato es positivo. La votación del 26 de octubre aparece hoy como un capital político transparente, como un hecho de opinión difícilmente superable. Los propósitos de impedir la polarización de la ciudadanía, avanzar en la concertación dentro de la sociedad civil y comprometer a dirigentes políticos y empresariales con la búsqueda de la paz se cumplieron a cabalidad. Al nivel legal quedó establecido un nuevo mecanismo de participación ciudadana, cuyo perfil y consecuencias todavía debemos explorar. Tal como lo consideraba uno de sus promotores, el exmagistrado Ciro Angarita, el “Mandato” aparece como forma para definir nuevos consensos colectivos que adquieren el carácter de norma de alcance constitucional. Las divisiones entre una “sociedad civil popular” y una “sociedad civil privilegiada” fueron zanjadas en torno a un propósito común, que aparece en la actualidad como propósito nacional. A pesar de los intentos de algunos actores armados por dar una interpretación amañada de la votación ha sido hasta el presente imposible tergiversar esa voluntad popular, que se mantiene en pie como clara exigencia ciudadana.

Los temores expresados por algunos críticos y columnistas en torno a los peligros de provocar con el Mandato un nuevo baño de sangre se mostraron infundados. Esto no quiere decir que con el correr del tiempo esa misma opinión no pueda fluctuar hacia

la orilla opuesta, pero es responsabilidad de todos hacer lo posible por mantener el actual estado espiritual e impedir polarizaciones ciudadanas a favor de salidas autoritarias.

El “efecto mandato” fortalecerá actos como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil convocada por la Comisión de Conciliación Nacional y el Episcopado colombiano. Sin embargo, aunque en estos espacios se seguirá avanzando en la definición de criterios y agenda para la negociación, no es suficiente pensar en quienes hacen la guerra y lo que necesitarían para desistir de su acción. Es preciso pensar también en quienes la padecen pasivamente, alejando la posibilidad de que puedan emerge como fuerza con suficientes garantías para reclamar sus derechos, no obstante su condición de desarmados. Sólo el fortalecimiento de la fuerza política que representan los desarmados permite contar con un factor de equilibración para impedir una salida de pacificación guerrera y alentar la alternativa de una paz civil.

El Mandato por la Paz cumplió su cometido. Es hora de escuchar de nuevo el rumor nacional y buscar una nueva dinámica de movilización ciudadana que pueda convertirse en fuerza activa que presione por un alto al fuego y una rápida negociación. No podemos dejar que el “efecto mandato” se agote por inercia. Es responsabilidad de todos conjugar esfuerzos para dar los nuevos pasos que la paz de Colombia necesita.

El Mandato expresa, tanto el máximo momento de potencia de la ciudadanía, como su faceta de impotencia. Es la fuerza de un poder civil que se afirma frente a las pretensiones de los violentos, pero también una muestra de la impotencia ciudadana, cuyos mandatos no son cumplidos, siendo necesarios nuevos esfuerzos para que la opinión ciudadana se haga escuchar en medio de las armas. Se hace necesaria una nueva movilización que actúe como presión solidaria frente a los actores de la guerra. Esta nueva movilización podría, sin embargo, necesitar de escenarios y alianzas diferentes a las que permitieron la votación del 26 de octubre, o a las que se expresan en el actual Comité de Seguimiento.

Pedro Santana Rodríguez
Director REVISTA FORO, Presidente
Corporación Viva la Ciudadanía.

Elección de alcaldes y cultura política

Pedro Santana Rodríguez¹

Introducción necesaria. La marcha del proceso de la descentralización

El pasado 26 de octubre se realizaron, por quinta ocasión consecutiva, las elecciones para alcaldes municipales. Por tercera vez se eligieron gobernadores departamentales y, al mismo tiempo, como hace ya muchos años en Colombia, se eligieron concejos municipales y asambleas departamentales. En algunos municipios como Bogotá se eligieron también las Juntas Administradoras Locales.

Es bueno recordar, así sea someramente, que las principales apuestas o propósitos de la reforma aprobada en 1986 y refrendada y profundizada por la Constituyente de 1991 consistieron, en primer término, en una apuesta de naturaleza política que buscaba abrir espacios a una sociedad bloqueada, según afortunada caracterización de Mario Latorre. Este dosbloqueo suponía necesariamente una apertura a nuevas corrientes políticas obturadas por el asfixiante dominio del bipartidismo frentenalista impuesto al país para salir



de la guerra liberal-conservadora de mediados del siglo que expira. También buscaba poner en marcha un proceso de descentralización administrativa y financiera para poner diques al centralismo dominante en la forma de organización del Estado y con ello, como hilo conductor, buscaba una re legitimación de las autoridades públicas con base en la participación ciudadana².

1 La información ha sido procesada por la abogada Sofía Díaz Jiménez de la Fundación Foro Centro, capítulo regional de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Quiero expresar público reconocimiento a la Dra. Díaz por el tratamiento y procesamiento de la información. Obviamente que soy el único responsable por el contenido de este ensayo.

2 Al respecto puede consultarse Santana Rodríguez, Pedro. Crisis Municipal,

Las principales reformas se introdujeron a partir de 1983, las siguientes en 1986 (acto legislativo No 1 y leyes 11 y 12 de dicho año) y el paso decisivo se dio en 1988 con la primera elección popular de los alcaldes municipales. Esta reforma se acompañó de cambios significativos en las finanzas públicas tanto nacionales como municipales. En este frente la Constituyente de 1991 profundizó la reforma fiscal aumentando las transferencias a los municipios y a los sectores de salud y educación (sitio fiscal). El proceso ha contado con dificultades y desde entonces en estas mismas páginas hemos realizado un seguimiento periódico, tanto a la descentralización en sus diversos órdenes como los resultados de las elecciones para alcaldes y gobernadores³.

El boicot guerrillero a las elecciones municipales

Las elecciones realizadas el 26 de octubre de 1998 se efectuaron en medio de unas circunstancias políticas muy particulares. En primer término, y por primera vez en la historia reciente del país y como consecuencia de la generalización de la violencia y de la confrontación armada, las elecciones fueron declaradas como objetivo militar por parte de la guerrilla, tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC como del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esta decisión política afectó las elecciones de manera significativa en cerca de 80 municipios en los cuales la guerrilla prohibió la realización de proselitismo político, secuestró candidatos, amenazó a cientos de aspirantes a los concejos munici-



pales y a las asambleas departamentales. En definitiva, en cerca de 80 municipios las elecciones sufrieron traumatismos serios o fueron aplazadas y, en menor proporción, se vieron afectadas en más de 200 municipios del país.

Frente a las elecciones locales hubo un cambio trascendental en la postura política de la guerrilla. En 1983 la guerrilla planteó como parte de la agenda de discusión y negociación el tema de la descentralización y se mostró de acuerdo con la elección popular de los alcaldes, al mismo tiempo que formuló la necesidad de una reforma fiscal que fortaleciera los fiscos locales. Durante años esta postura de la guerrilla no sufrió modificaciones ni alteraciones. Por el contrario, y en muchas regiones del país se ha especulado que la guerrilla estaría interesada en tomar parte en las elecciones locales. Incluso durante años se ha afirmado sobre supuestas o reales relaciones de alcaldes elegidos popularmente con algunas de las organizaciones gue-

rrilleras existentes en el país. Estas relaciones son casi inevitables en regiones en las cuales las guerrillas mantienen control territorial y en las cuales la presencia del Estado está muy debilitada o es casi inexistente.

Movimientos sociales y reforma política en Colombia, *Revista Foro* No 1, Bogotá, 1986. Cartagena : las primeras elecciones en el nuevo régimen municipal, *Revista Foro* No 4, Bogotá, 1987. Los movimientos cívicos: el nuevo fenómeno electoral, *Revista Foro* No 6, Bogotá 1988. Modernidad, modernización y gobernabilidad en la Colombia de hoy, *Revista Foro* No 14, Bogotá, agosto de 1991. El nuevo orden territorial y la democracia, *Revista Foro* No 16, marzo de 1992. La territorialidad de la democracia, *Revista Foro* No 21, octubre de 1993. Las elecciones locales en 1994. La tercera cívica en las alcaldías. *Revista Foro* No 25, Bogotá, abril de 1995.

3 Santana R. Pedro. Legitimidad política y descentralización, *Revista Foro* No 29, 1996.

Por ello el boicot armado resultó sorpresivo. Y más aún la extensión que tomó y los resultados que se desprendieron de las amenazas, asesinatos de aspirantes y cartas intimidatorias para que los aspirantes renunciaran. Los resultados son paradójicos. En aquellos municipios con gran presencia guerrillera donde no se aplazaron las elecciones fueron elegidos alcaldes y concejales con una reducida votación planteado de paso un grave problema de legitimidad política para administraciones que actúan en zonas de gran conflicto social. Un caso muy comentado ha sido el de el municipio de Yondó en Antioquia, en donde el alcalde municipal y el Concejo fueron elegidos por siete votos. Lo más paradójico es que en dichas regiones triunfaron los candidatos más tradicionalistas. Esto de paso, no solo muestra la incoherencia de la guerrilla sino su incons-

cuencia con los procesos de democratización de la sociedad colombiana que tiene en la elección de alcaldes un instrumento privilegiado para las nuevas corrientes políticas⁴.

Los grupos guerrilleros afectaron principalmente la elección de alcaldes en zonas donde su presencia es significativa, principalmente en regiones de Antioquia, Caquetá, Meta, Casanare, Putumayo, Nariño, Guaviare, sur de Bolívar y Norte de Santander.

Los grupos paramilitares no se quedaron atrás en su empeño por afectar la libre presentación de candidatos, que es uno de los rasgos fundamentales de la democracia. En aquellas regiones donde dominan territorialmente limitaron la presentación de candidatos, sometieron a veto o al destierro mediante amenazas a candidatos de quienes ellos sospechan que colaboran con las guerrillas. En regiones de

Antioquia, Sucre, Córdoba y Chocó estos grupos amenazaron e interfirieron el libre desarrollo de las campañas electorales y sembraron el terror con la intensificación de masacres, amenazas y asesinatos selectivos contra dirigentes sociales y dirigentes cívicos locales.

En uno y otro caso se interfirió gravemente el proceso democrático y se afectó significativamente el resultado electoral final, contribuyendo además a la disminución de la tasa de participación electoral.

Otro factor muy particular en las elecciones del 26 de octubre tuvo que ver con el hecho de que ellas fueron las primeras realizadas después del llamado proceso 8.000 en que se revelaron los nexos de la

4 Santana R. Pedro. Un gobierno sin participación no es legítimo. Periódico *El Mundo*, La Metro, Revista metropolitana de El Mundo, marzo 27 de 1998 .p. p.8-9.



política tradicional con el narcotráfico. Aunque afectó principalmente a los parlamentarios no dejó de tocar a algunos personajes de la vida municipal, como al exalcalde de Cali, Mauricio Guzmán, hoy condenado por los jueces ante su reconocimiento de los nexos con el llamado Cártel de Cali. Aunque de manera indirecta también esto tuvo consecuencias sobre los resultados finales en ciudades como Cali o Ibagué, para mencionar dos casos claros. No obstante, esta influencia fue limitada por el factor ya señalado.

Un factor que influyó en las elecciones del 26 de octubre fue la campaña del mandato ciudadano por la paz. Estamos seguros que dicha campaña influyó de alguna manera para mantener un proceso de participación política que, de todas maneras, empujó hacia arriba la votación sobre todo en las grandes ciudades en donde es mayor la abstención, como lo hemos registrado en otras ocasiones. En estas ciudades, no obstante, se mantienen elevados índices de abstención y fue donde la Registraduría Nacional fracasó, pues los votantes desbordaron ampliamente los mecanismos para la recepción de los votos y al final decenas de miles de ciudadanos no pudieron sufragar.

Los resultados de las elecciones del 26 de octubre: lo que expresan las cifras

El 26 de octubre ganaron los candidatos liberales. Obtuvieron 406 alcaldías contabilizadas los votos para 943 municipios de acuerdo con el último boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En todas las elecciones realizadas hasta ahora, este partido

Cuadro No 1
Elección - Resultados finales por partido

Partido	1988	1990	1992	1994	1997
Liberal	446	522	389	490	406
Nuevo Liberalismo	8	-	-	-	-
Social Conservador	413	369	273	360	348
Coaliciones	25	24	23	28	60
Otros	101	81	301	139	34
AD-M19	-	1	1	-	2
Unión Patriótica	16	11	12	9	-
Movimiento de Salvación Nacional	-	11	13	-	
Cívicos					68
Anapo					8
Etnias					17
Sin información	-	-	13	-	-

Fuente: Fundación Foro Nacional por Colombia. Capítulo Regional Centro, con base en boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 1998.

ha ganado las elecciones locales como puede apreciarse en el cuadro No 1 que recoge los resultados por partidos desde el año de 1988. En segundo lugar se ubican los candidatos del partido conservador que solo en el año de 1992 fueron superados por los llamados «otros». En las elecciones recientes obtuvieron 348 alcaldías.

Los llamados «otros» siguen representando un poco más del 13% del total de las alcaldías. En 1997 eligieron 129 alcaldes, si en esta categoría agrupamos como en el pasado tanto a los candidatos cívicos como

a los que tienen origen en los movimientos indígenas o en movimientos políticos minoritarios. Esta tendencia, como hemos observado en otras ocasiones es muy heterogénea en su interior, puesto que en muchas ocasio-

Cuadro No 2
Tasa de participación electoral con respecto al censo vigente

1988	67.0%
1990	58.0%
1992	42.0%
1994	47.5%
1997	43.1%

Cuadro No 3
Resultados por Partidos y Movimientos

DEPARTAMENTO	Partido Liberal	Partido Conserv.	Coaliciones	Cívicos	Etnias	Otros	AD-M19	Anapo	TOTAL
AMAZONAS	1	1							2
ANTIOQUIA	57	49	10	1		3	2		122
ARAUCA	5						2		7
ATLANTICO	12	7	2	1					22
BOLIVAR	21	7	2	1					31
BOYACA	39	67	4	4		2	2		118
CALDAS	11	8	2	2					23
CAQUETA	4	2	1	4	2	1			14
CASANARE	17			1		1			19
CAUCA	17	5	3	2	4	1			32
CESAR	16	5		3					24
CORDOBA	17	5		2					24
CUNDINAMARCA	44	43	4	9		8			108
CHOCO	12	3		3	3				21
GUAINIA	1								1
GUAJIRA	4	4		2					10
GUAVIARE		1							1
HUILA	8	21	1	2		2			34
MAGDALENA	15	3	3						21
META	11	6	1	1		2	2		23
NARIÑO	15	14	6	8	7	5			55
NORTE DESIDER.	9	24	1	4				1	39
PUTUYAMO	3	4		1		1			9
QUINDIO	6	4		1					11
RISARALDA	6	3		2		1			12
SAN ANDRES						1			1
SANTANDER	34	30	8	5		4	2		83
SUCRE	15	4		4		1			24
TOLIMA	15	11	5	4					35
VALLE	18	18	6	1					43
VAUPES					1				1
VICHADA	3				1				4
TOTAL	436	349	59	68	18	33	2	9	970

Fuente: Fundación Foro Nacional por Colombia Capítulo Regional Centro, con base en boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Febrero de 1998.

nes corresponde a alianzas locales contra el gamonalismo o a etiquetas que usan ciertas maquinarias electorales para disfrazar su verdadera naturaleza.

Las coaliciones se han venido incrementando y en las pasadas elecciones ganaron en 60 municipios, lo que representó el 6.4% del total de las alcaldías. Estas coaliciones siguen siendo importantes en ciudades intermedias y expresan generalmente acuerdos para derrotar viejas maquinarias empotradas desde mucho atrás en las alcaldías (Pasto, Cúcuta, Soledad, Puerto Colombia, Florida blanca, Tuluá, Yumbo, Itagüí, etc.). Contra ese hegemonismo surgen propuestas de coalición que buscan abrir nuevas perspectivas, tanto políticas como de desarrollo.

La tasa de participación en las elecciones municipales sigue siendo alta, toda vez que el promedio de participación de los ciudadanos en todas las elecciones es apenas, en los últimos 20 años, de un 35% del censo electoral. Casi con toda seguridad, la tasa de participación para las elecciones municipales está por encima del 45% en las elecciones de 1997. Ello por dos razones adicionales que nos permiten relativizar las cifras. En primer lugar y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional los alcaldes no se eligen en Colombia el mismo día. Se eligieron el mismo día hasta 1992, pero, a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando hay vacancias absolutas, bien sea por muerte de los alcaldes titulares o por destitución o renuncia y falta más de un año para concluir el período no se elige o nombra para terminar el período sino que se elige para tres años. Son cerca de 60 municipios los que hoy eligen en fechas distintas. No obstante, el censo electoral que maneja la Registraduría del Estado Ci-

**Cuadro No. 4
“OTROS”**

Departamento	Municipio	Alcaldes elegidos	Votos
ANTIOQUIA	PEÑOL	LUZ MARINA SALAZAR MONTES	54
ANTIOQUIA	PUERTO BERRIO	HERNAN DE JESUS VASCO VELEZ	4,939
ANTIOQUIA	TITIRIBI	JUAN ALBERTO ROJAS DE OSSA	2,395
BOYACA	SANTA MARIA	RAUL ALBERIO VEGA VEGA	995
BOYACA	SOGAMOSO	GUSTAVO ENRIQUE SOSA PACHECO	10,912
BOYACA	SUTAMARCHAN	MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO	1,548
CAQUETA	FLORENCIA	LUCRECIA MURCIA LOZADA	9,713
CASANARE	MANI	MILTON DE JESUS CASTRO ARIAS	2,021
CAUCA	INZA	TULIO MOTTA MARTINEZ	2,424
CUNDINAMARCA	GUAYABAL DE SICUIMA	LUIS ANTONIO VALBUENA	484
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	JOSE ALVARO ROZO CASTELLANOS	4,985
CUNDINAMARCA	SAN BERNARDO	LIBARDO MORALES CABEZAS	1,868
CUNDINAMARCA	SAN JUAN DE RIOSECO	MISael SANCHEZ JIMENEZ	1,230
CUNDINAMARCA	SUBACHOQUE	HECTOR ALFONSO ACERO BALCAZAR	1,977
CUNDINAMARCA	SUPATA	LUIS FELIPE PULIDO BENAVIDES	1,664
CUNDINAMARCA	VILLETA	FERNANDO MONTOYA ORTEGA	4,319
HUILA	ACEVEDO	SAMUEL TOCONAS MEDINA	1,240
HUILA	RIVERA	LUIS HUMBERTO TRUJILLO ARIAS	3,347
META	CASTILLA LA NUEVA	JOSE ARNULFO PERDOMO GONGORA	813
META	SAN MARTIN	ALCIDES ROCHA ALFEREZ	2,291
NARIÑO	ALDANA	MILTON VICENTE CALVACHE CAGUAZANGO	1,400
NARIÑO	GUACHUCAL	JOSE LIBARDO BENAVIDES TAPIA	3,140
NARIÑO	LA CRUZ	HERNANDO ANTONIO REBOLIEDO BUENDIA	3,194
NARIÑO	SAN PABLO	EDUARDO TRUJILLO VASQUEZ	3,665
NARIÑO	TUMACO	NEWTON VALENCIA MARTINEZ	4,517
PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	LUIS NORBERTO BRAVO BUCHELI	916
RISARALDA	LA CELIA	SERGIO RENDON CAÑAVERAL	1,669
SAN ANDRES	PROVIDENCIA	ROY NELSON FORBES	666
SANTANDER	BUCARAMANGA	LUIS DERNANDO COTE PEÑA	87,979
SANTANDER	BARBOSA	JOSE ALBERTO CUADRADO TORRES	5,004
SANTANDER	SOCORRO	JUAN BAUTISTA NIÑO SUAREZ	3,476
SANTANDER	SURATA	JOSE JOAQUIN PLATA ALBARRACIN	687
STAFE DE BOGOTA	STAFE DE BOGOTA	ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO	619,086
SUCRE	PALMITO	ERNESTO CARLOS AGUIRRE PEREZ	1,816
			796,434

Fuente: Fundación Foro Nacional por Colombia. Capítulo Regional Centro, con base en boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Febrero de 1998.

vil no descuenta la población incluida en el censo que para las elecciones de octubre de 1997 estaba fijado en 20'431.784 ciudadanos (as).

El otro factor fue el boicot electoral que afectó, como ya dijimos, a cerca de 200 municipios, pero que fue particularmente crítico en cerca de 80 municipios del país. Finalmente, hay problemas con la falta de depuración del censo, puesto que no se han eliminado muertos, residentes en el exterior para elecciones locales, etc. Esta es una tarea básica para depurar o «limpiar» el censo, que no se ha hecho por intereses clientelistas y fraudulentos.

En resumen, la tasa de participación para las elecciones de alcaldes sigue estando por encima de la media nacional (35%), aunque en esta ocasión ha sido la segunda más baja (43.1%) después de 1992 en que apenas llegó al 42%.

La crisis política y la democracia residual en Colombia

Las elecciones del 26 de octubre se caracterizaron en todo el país por la proliferación de listas. En las principales ciudades del país se presentaron cientos de listas para la elección de las Juntas Administradoras Locales y de los Concejos Municipales. El sistema de listas abiertas y unipersonales es la causa más inmediata de dicha proliferación. Pero la causa más profunda está relacionada con la crisis de la sociedad política colombiana. Los partidos, como opciones de programa y estructuras organizadas de la sociedad no existen entre nosotros.

En las elecciones del 26 de octubre se observó la inexistencia de opciones programáticas o siquiera organizativas. Los así llamados par-

tidos o movimientos simplemente se limitaron a expedir avales por varios miles para habilitar a personas que se consideran de dichos partidos o que simplemente buscan que algún movimiento o partido los avale para no tener que conseguir las firmas o pagar la caución y arriesgarse a pagar una multa si no se obtiene el porcentaje mínimo de votos. En las principales ciudades del país los partidos tradicionales avalaron varios candidatos para las alcaldías y cientos de candidatos a concejos o juntas administradoras locales. No hubo convenciones municipales o asambleas para determinar los programas ni consultas para definir candidatos oficiales. En Bogotá, por ejemplo, se presentaron 263 candidatos al concejo municipal y más de quince candidatos a la Alcaldía Mayor de la ciudad. El candidato ganador, Enrique Peñalosa Londoño, se inscribió como candidato liberal independiente y derrotó al candidato oficial liberal Enrique Vargas Lleras. No obstante, esta alcaldía muy seguramente estará estrechamente vinculada con el Partido Liberal.

En Colombia cualquier ciudadano (a) que quiera postularse a algún cargo de elección popular puede hacerlo sin mayores restricciones. Muchos creen que la verdadera democracia consiste en que cualquier ciudadano (a) pueda postularse a cualquier cargo de elección popular. Sin embargo, esto no es así. Es mucho más democrático un sistema político que cuenta con partidos en los cuales sus aspirantes van a una consulta interna y en donde hay un debate programático para determinar los aspirantes de dicho partido a los cargos de elección popular. Es más democrático un sistema político en que las gentes votan por los partidos y no solo por las personas. Es más democrático un país en el cual hay una sociedad política en la cual existe un sistema de partidos orga-

Cuadro No. 5

Votación en las grandes ciudades

Ciudad	Votación Alcaldes elegidos
Santafé de Bogotá	619,086
Cali	160,816
Medellín	161,363
Barranquilla	158,492
Cartagena	65,806
Bucaramanga	87,979
Cúcuta	40,509
Pereira	53,114
Ibagué	49,226
Manizales	71,255
Pasto	57,235

Fuente: Fundación Foro Nacional por Colombia. Capítulo Regional Centro, con base en Boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Febrero de 1998.

nizados y con reglas del juego claras, que en aquellos en los cuales se vota por aspiraciones personales y en donde no hay ningún control organizativo ni ninguna responsabilidad política. Los electores no tienen instrumentos de control sobre aspirantes individuales o sobre candidatos que representan sus propias ambiciones y/o intereses sin que medien organismos colectivos ante quienes tengan que responder y/o rendir cuentas de sus actuaciones.

La fragmentación política afecta, además, la gobernabilidad democrática. Los gobernantes así elegidos deben negociar con los concejos y con las asambleas departamentales voto a voto, toda vez que ningún concejal o diputado se siente con res-

Cuadro No. 6
Coaliciones

Departamento	Municipio	Alcaldes elegidos	Votos
ANTIOQUIA	AMAGA	ELVIA AMPARO TORRES DE ACEVEDO	3,246
ANTIOQUIA	BARBOSA	ELEUTERIO LONDOÑO MOLINA	2,558
ANTIOQUIA	BETANIA	GUILLERMO ALBERTO RIOS RODRIGUEZ	564
ANTIOQUIA	ENVIGADO	JORGE MESA RAMIREZ	45,995
ANTIOQUIA	ITAGUI	HECTOR FERNANDO ARBOLEDA RESTREPO	26,022
ANTIOQUIA	MARINILLA	JOSE LUIS DUQUE PINEDA	5,431
ANTIOQUIA	SANTUARIO	MARCO ALEJANDRO PINEDA GIRALDO	4,124
ANTIOQUIA	SONSON	LUZ AMPARO PATIÑO BETANCUR	3,040
ANTIOQUIA	TARSO	EDUARDO DE JESUS RIOS LOAIZA	1,235
ANTIOQUIA	TURBO	JORGE LUIS HENAO BOLIVAR	4,241
ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	HUMBERTO ALONSO ROSALES DONADO	4,479
ATLANTICO	SOLEDAD	ASTRID DE LOS MILAGROS BARRAZA MORA	30,684
BOLIVAR	ARJONA	JOSE HILARIO BOSSIO PEREZ	6,127
BOLIVAR	PINILLOS	GABINO JOSE MORA MARTINEZ	3,819
BOYACA	ALMEIDA	JOSE SALVADOR DIAZ PERILLA	670
BOYACA	LABRANZAGRANDE	ENIO ALBERTO PEREZ FERNANDEZ	52
BOYACA	SAN LUIS DE GACENO	ALBERTO YEPES MORA	1,314
BOYACA	SUTATENZA	OSMANY GUTIERREZ SASTOQUE	1,021
CALDAS	ANSERMA	CARLOS ARTURO ZULUAGA GIRALDO	4,515
CALDAS	SALAMINA	FERNEY GOMEZ BARCO	5,268
CAQUETA	MILAN	JONH EDUARDTH MONJE ALVARADO	43
CAUCA	BOLIVAR	JAIRO EMIRO DORADO DORADO	4,755
CAUCA	SANTA ROSA	HELCIAS EFREN GUERRERO BRAVO	542
CAUCA	TOTORO	JAVIER ENRIQUE GALLEGOS VALLEJO	1,642
CORDOBA	SAN CARLOS	VICTOR MANUEL VALVERDE PEREZ	3,149
CUNDINAMARCA	LA CALERA	CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BONILLA	4,186
CUNDINAMARCA	PAIME	BEATRIZ DIAZ BELTRAN	1,265
CUNDINAMARCA	PULI	HUGO HERNANDO DIAZ RETAVISCA	2
CUNDINAMARCA	TABIO	JULIO EDUARDO RIVERO JUNCA	1,174
HUILA	GIGANTE	LUIS EDGAR GUTIERREZ GUTIERREZ	2,188
MAGDALENA	ARACATACA	HERNAN ISAAC DAZA RUDAS	5,423
MAGDALENA	ARIGUANI (EL DIFICIL)	GUILLERMO ENRIQUE SANCHEZ QUINTERO	4,478
MAGDALENA	SANTA ANA	SIMON DE JESUS VILLAMIZAR BENITEZ	4,634
META	CUMARAL	ALIRIO CASTRO ROMERO	2,730
NARIÑO	PASTO	JIMMY PEDREROS NARVAEZ	57,235
NARIÑO	CONSACA	JOSE EMERY CASTILLO VELASQUEZ	2,235
NARIÑO	LA UNION	GERARDO SANTACRUZ GALINDO	4,704
NARIÑO	SAPUYES	GERARDO HERNANDO REALPE OLIVA	1,636
NARIÑO	TUQUERRES	MIGUEL ANGEL NARVAEZ	7,482
NARIÑO	YACUANQUER	HERMENEGILDO H. GUERRERO RIVAS	2,180
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	JOSE ANTONIO GELVEZ ALBARRACIN	40,509
SANTANDER	CURRI	GILBERTO PEREIRA DURAN	1,578
SANTANDER	FLORIDABLANCA	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ PINZON	43,766
SANTANDER	GUAPOTA	LUIS VILLAREAL CAMACHO	652
SANTANDER	JESUS MARIA	JOSE DANilo MARTINEZ ORTIZ	521
SANTANDER	PARAMO	ALIRIO HERNANDEZ PEREIRA	866
SANTANDER	PUENTE NACIONAL	JOSELIN PARDO PARRA	3,322
SANTANDER	PUERTO WILCHES	JORGE JR. MONTES CRISTO	3,397
SANTANDER	SANTA HELENA DEL OPO	JOSE VIDAL CASTAÑEDA GUIZA	945
TOLIMA	CUNDAY	CARLOS ALBERTO TRUJILLO BAQUERO	1,641
TOLIMA	MELGAR	ARMANDO LEAL	2,354
TOLIMA	NATAGAIMA	JUAN MANUEL ROJAS	3,665
TOLIMA	PURIFICACION	HERNAN MURILLO SAAVEDRA	5,096
TOLIMA	ROVIRA	JULIO HERNANDO RODRIGUEZ RAVELO	3,054
VALLE	CAICEDONIA	HERNAN DUQUE HENAO	6,467
VALLE	DAGUA	DEICY QUINTERO	4,442
VALLE	EL CERRITO	CAMILO ESCOBAR OSORIO	7,701
VALLE	GINEBRA	MARTHA LUCIA REYES SAAVEDRA	2,811
VALLE	TULUA	RAMIRO DEVIA CRIOLLO	34,593
VALLE	YUMBO	ROSEMERIC PABON PABON	17,804
			451,272

Fuente: Fundación Foro Nacional por Colombia. Capítulo Regional Centro, con base en boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Febrero de 1998.

ponsabilidad de partido. La fragmentación impide planear de largo plazo o vislumbrar los intereses generales de la ciudad, del departamento o del municipio. Los elegidos quieren satisfacer los intereses más inmediatos de sus electores: pavimentar ciertas calles, extender las redes de servicios públicos hacia ciertos sectores geográficos, aprobar obras para beneficio directo e inmediato de su clientela. Todo ello impide discutir sobre objetivos estratégicos y generales del desarrollo municipal y/o departamental. Esto es lo que se presentó en las elecciones del 26 de octubre y se seguirá presentando a no ser que haya una reforma política o una autorrefundación de los partidos y del sistema político colombiano.

Las tendencias políticas de los resultados electorales

En las elecciones, como queda registrado más arriba, se observa un triunfo de los partidos liberal y conservador. Aunque en números los alcaldes independientes, cívicos y de coalición se mantienen, no obstante retroceden en cuanto a la importancia de las ciudades en que ganaron, ello, por lo que significa la derrota de las corrientes cívicas en Santafé de Bogotá ante el relativo fracaso de la administración de Antanas Mockus y su propuesta de ciudadanos en formación. También se observa una derrota de los candidatos independientes a los concejos municipales y en algunos casos a las asambleas departamentales. No obstante lo anterior, candidatos cívicos e independientes mantienen o han llegado a las alcaldías de municipios como Barranquilla, Pasto, Yumbo, Manizales, Tumaco, Armenia, Ibagué, para mencionar algunos pocos casos. O los triunfos resonan-



tes de Gustavo Alvarez Gardeazábal en la gobernación del Valle o de Henry Gómez Tabares para la gobernación del Quindío.

La dispersión de los sectores democráticos y la proliferación de listas, que pone de manifiesto un inusual personalismo en estas corrientes, viene conspirando contra sus pretensiones de llegar a estos cargos de representación política. No existe aún madurez dentro de los sectores democráticos para fijarse unas reglas de procedimiento democrático que permita la definición de las aspiraciones electorales para presentar listas con capacidad para llegar a dichos cargos. Quizás el ejemplo más signifi-

cativo de que sí se puede fue el proceso que condujo a la selección de Rosemberg Pabón como candidato y posteriormente alcalde en la ciudad de Yumbo. Mediante una consulta abierta y una encuesta se resolvió la aspiración de siete candidatos. Pabón se pudo presentar como candidato único del movimiento "Todos por Yumbo" que pretende iniciar un proceso democrático de cambio y rectificación. En Bogotá 17 listas independientes de sectores democráticos obtuvieron más de 80.000 votos, de haber estado representadas en una sola lista les hubiese dado la oportunidad de obtener como mínimo tres concejales. En Medellín 12 listas in-

dependientes obtuvieron más de 27.000 votos con los que también hubiesen obtenido entre tres y cuatro concejales.

Un bajo nivel de cultura política democrática

Adiez años de iniciada la elección popular de los alcaldes el balance aunque es alentador no es satisfactorio. Como importantes elementos de cultura política -cultura en el sentido de conocimientos, hábitos, debate público, fijación de prioridades, etc- pueden anotarse los esfuerzos realizados por los consejos de planeación territorial que han proyectado el debate sobre los planes municipales de desarrollo, las campañas mismas que han obligado a los candidatos a presentar propuestas, los cambios débiles, pero significativos, en el cubrimiento que los medios dan a las elecciones municipales el surgimiento de veedurías que han hecho seguimiento y evaluación de los planes de gobierno en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, etc. También como hecho positivo podemos anotar la imagen de pluralismo y amplitud que han proyectado las elecciones municipales, todo ello ha ido abriendo lentamente un nuevo proceso de reencuentro de los ciudadanos con los asuntos públicos, con los asuntos vinculados al bien común.

Sin embargo, todos estos esfuerzos aún no logran trascender a la

mayor parte de los ciudadanos que ignoran y, por tanto, no tienen en cuenta criterios como la importancia de elegir autoridades no demagógicas; exigencia a los candidatos para la presentación de planes concretos con objetivos y presupuestos que sean reales compromisos con la sociedad civil de cada municipio y que puedan ser utilizadas posteriormente para el control y que permitan poner en marcha mecanismos tales como la revocatoria del mandato frente a flagrantes incumplimientos de lo prometido por los candidatos, etc.

Se observa aún que los electores, o sea la mayor parte de los ciudadanos, no realizan ejercicios de conocimiento y debate público sobre los programas, no acuden aún masivamente al debate sobre los proyectos de planes de desarrollo, no se interesan por el destino de los recursos públicos. Los anteriores son indicadores del aún bajo nivel de comprensión de la importancia del municipio como lugar para resolver parte de los problemas de pobreza, exclusión social, infraestructura de servicios públicos, formación ciudadana, etc.

Algunos de los factores que inciden en este bajo nivel de conciencia ciudadana sobre lo público, sobre el papel del gobierno como instrumento para la resolución de los problemas y para la materialización de un bien común construido social-

mente por las comunidades municipales, están relacionados con: (1) baja comprensión y compromiso de los medios de comunicación en campañas educativas que busquen involucrar a los ciudadanos con la vida y la problemática municipal, (2) baja vinculación de los centros educativos con la problemática municipal y regional, (3) crisis de los partidos políticos que no realizan actividades de debate público sobre programas y alternativas y reducción de su actividad a las campañas electorales en donde lo que predomina son la presentación de los candidatos sobre los programas y los problemas, (4) baja convocatoria de las organizaciones de la sociedad civil para debatir y concretar agendas locales sobre los problemas de las comunidades, (5) desinterés de los propios gobiernos existentes durante los últimos diez años para brindar amplias campañas de educación y formación ciudadana, (6) desinterés del gobierno nacional que no ha cumplido con su labor constitucional de educar en los nuevos espacios de participación ciudadana.

Todos estos factores inciden sobre el desinterés de los electores que aún casi en la mitad del censo electoral se abstienen de participar en la vida pública y que permiten que las minorías clientelistas y corruptas todavía dominen en buena parte de los municipios del país.

Santafé de Bogotá,
Marzo de 1998.

Medófilo Medina
Historiador, profesor titular y emérito de la
Universidad Nacional.

¿Hay una renovación de la política?

Medófilo Medina



¿Balas o votos? ¿Votos y balas?

A punto de emprender una nueva aventura, el pragmático Sancho pregunta al idealista caballero si al cabo de la acción a la cual se aprestan se verá recompensado con el prometido pero ya un tanto esquivo gobierno de una ínsula. Don Quijote, que no quiere alimentar infundadas esperanzas en su leal escudero, le alecciona de esta manera: "Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a esta semejan-

tes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas; en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza, o una oreja menos. Tened paciencia; que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante"¹.

La mayoría de los colombianos, al menos durante los últimos cuarenta años, nos hemos acostumbrado a presenciar la fiesta de las campañas electorales y el ritual de los comicios sin ver que los cambios que hace tiempo se han percibido como fundamentales se realicen. Es como si los ajetreo electoral correspondieran apenas a ese orden de acontecimientos que la sencilla taxonomía del inmortal manchego califica como "aventuras de encrucijadas", en las que por definición, nada trascendental se resuelve. Los boletines de la Registraduría Nacional y las imágenes de la televisión sobre los comicios competían en la noche del 8 de marzo por capturar la atención del público, con los partes de guerra que llegaban del Caguán. Informaciones simultáneas que parecían haber tenido origen en países diferentes. Con respecto a los acontecimientos del Caquetá, es preciso decir que, se produjo un cambio importante en el proceso de la guerra interior, al menos en el terreno técnico-militar. A partir del aniquilamiento del batallón 52 de la Unidad Móvil No. 3 del ejército colombiano, por parte de las Farc, las conven-

¹ Miguel de Cervantes Saavedra, *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, Aguilar, Madrid, 1963, pág. 324.



ciones mediante las cuales se ha mirado el conflicto armado muestran su completa inadecuación a la realidad. Por supuesto, es posible prolongar una visión esquizoide de los hechos y relacionar de manera unilateral los dos tipos de hechos de comienzos de marzo. Es un enfoque que desafía la lógica pero que constituye una especie de hábito de pensamiento de ciertos sectores dirigentes del país y de la opinión nacional. El exministro y columnista Abdón Espinosa Valderrama, en la prosa viciosamente correcta de la vieja generación del diario **El Tiempo** introducía su balance sobre la jornada electoral de la manera siguiente: «Parece trivial pero necesario comenzar diciendo que la jornada electoral del ocho de marzo fue un triunfo de la democracia contra la violencia y de las instituciones contra la anarquía»². Palabras similares a las anteriores han salido de la pluma y de los labios de no pocos periodistas, políticos y altos mandos militares. En el plano teórico tiene sentido tomar al respecto la invitación de Michel Foucault, a partir de la vinculación entre guerra y sociedad para comprender el funcionamiento global de las relaciones de poder³. Es preciso romper con el hábito de leer los hechos jurídico-políticos que produce la guerra y los que ocurren en el mundo formal de las instituciones como *series independientes* de acontecimientos.

He creído que el estudio de los procesos electorales, no solo de los resultados

electORALES sino de las campañas que las preceden, constituye un campo muy importante de la historia política del país. En el tiempo anterior al 8 de marzo asistí a los actos de lanzamiento de candidaturas presidenciales y a las convenciones a las que me fue dado concurrir. Ello no obedeció a la falta de imaginación para encontrar maneras más placenteras de emplear el tiempo sino a la idea de que tales puestas en escena constituyen especies de psicodramas cuyo estudio permite comprender mejor las realidades políticas. Desde luego, no quisiera fatigar al lector con la narrativa de esos rituales. Lo he mencionado quizás por la rutina de los historiadores de dar alguna noticia sobre las fuentes de información.

¿Qué realidades ostentan los partidos tradicionales? Hemos aceptado que el colombiano es un sistema bipartidista. ¿Es ello cierto? Esa condición se cumple en la medida en que las dos formaciones sean intercambiables. El partido liberal y el partido conservador lo son desde el punto de vista ideológico, pero no funcionan como tales desde el punto de vista cuantitativo. El partido conservador se ha convertido desde los comienzos del Frente Nacional en el socio irreversiblemente menor. Para mantener la ilusión de victoria debe acudir a la ficción de los movimientos nacionales o suprapartidistas. Pero en Colombia no existen esos partidos del 5% o 7% que permiten que en regímenes bipartidistas surjan de verdad terceros que inclinen la balanza. El suprapartidismo, despojado del oropel de la palabra, se reduce a la cazurra maniobra del lentejismo que, a su turno, inhibe la posibilidad de gobiernos con oposición y no simplemente con opositores. Los segundos, por vehementes o agudos que sean, no están en condiciones de reemplazar a la primera.

2 *El Tiempo*, Santa Fe de Bogotá, 3 de marzo de 1998, pág. 5 A.

3 Ver Michel Foucault, *Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado*, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1992.

El partido Liberal

El partido Liberal acostumbrado al poder y habituado a ejercerlo sin una oposición política que realice una fiscalización eficaz ha devenido en un cuerpo ahogado por el unanimismo que conduce a la división por la incapacidad de resolver las diferencias sin tener que levantar carpas aparte. Las mismas reglas de juego que en horas más tranquilas se consignan en los estatutos, se declaran luego letra muerta a la hora de las decisiones cruciales, cuando resultaría más urgente aplicarlas. La consulta interna establecida por los estatutos de 1991 y 1994 como mecanismo idóneo para la selección del candidato fue desconocida después de 6 meses de frenético forcejeo entre los precandidatos.

Las dos convenciones, la oficialista y la de "los rebeldes" realizadas el 25 de enero de 1998 fueron, ante todo, asambleas de los que están de acuerdo. Con el poder de la maquinaria la primera, de personalidades la segunda. Pero el unanimismo no es algo que constituya un expediente de la cúpula del partido liberal, es un comportamiento asumido por dirigentes y masas. Los convencionistas congregados en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada entendieron y asumieron que venían a aclamar a Serpa como candidato y de manera secundaria a designarlo como director único del partido. Cualquier otro asunto lo vieron como desvío, como una innecesaria distracción.

Por supuesto, la discusión sobre programas no tiene cabida en esos foros amarrados. Producía un efecto divertido observar a un intelectual de la izquierda de hace algunos años haciendo esfuerzos desde la tribuna por explicarle a los convencionistas las líneas centrales de la plataforma del partido, aprobada en el congreso ideológico de Rionegro. Ese tiempo para la doctrina fue

utilizado por los convencionistas para ir al baño o para tomarse un tinto. Rayó en la temeridad el gesto de la convencionista Ingrid Betancourt al pedir la palabra para atacar la candidatura de Horacio Serpa. Si bien el presidente de la Convención, el irritable Balcázar Monzón se la concedió e insistió en que se le permitiera hablar, las masas liberales reunidas en aquel recinto recibieron con rugidos ensordecedores la reiterada terquedad de la joven parlamentaria para intervenir. A su turno, Ingrid estaba en su juego: todos los televidentes oí-



rían en los noticieros de la noche su breve diatriba que nadie en la sala ni quiso ni pudo escuchar. Las fronteras ideológicas entre los partidos han desaparecido hace mucho tiempo, cabría esperar, no obstante, que lo menos que puede hacer un partido liberal es garantizar el respeto a la libertad de expresión. Es cierto que el discurso que Serpa pronunció aquel día es una pieza coherente en la cual se pueden leer planteamientos, incluso el discurso del hasta entonces precandidato, senador Juan Guillermo Ángel, no carece de interés. Sin embargo, no fue lo que se dijo aquel día lo que marcó la convención, sino lo que se votó. Para el observador, aquellas imágenes atropelladas, la aplanadora sofocando implacable el intento

de William Jaramillo de explicar una proposición que sugería un procedimiento diferente al de la convención para la selección del candidato, resultan muy acordes con la realidad de un partido liberal agrietado por la corrupción, sumergido en el clientelismo, pero portador de la hegemonía. Es ese el partido que gobierna a Colombia.

Las realidades pos-electorales no han cambiado los componentes básicos del cuadro. ¿Es el antisamperismo por sí solo un programa como para colocar las esperanzas en fenómenos como el expresado por Ingrid Betancourt con la más alta votación para el Senado?

Pensando con el deseo, algunos periodistas cargan las tintas hablando de la derrota del caciquismo. Sí, algunos trasatlánticos del clientelismo se hundieron: Guerra Serna, del liberalismo, Guillermo Angulo Gómez por los conservadores y otros más. Pero al hacer una selección de 28 grandes barones de los dos partidos se advierte que entre las elecciones de 1994 y 1998, de ellos se ahogaron en las segundas 7, 11 vieron disminuir su caudal pero se mantuvieron en el Congreso; y 10 fueron reelegidos con un incremento notable de la votación. Las pérdidas totales de la votación fueron de 93.483 votos, al paso que el incremento total en el grupo fue de 478.998 votos. Por otra parte, se observa un relevo de caciques. Comienza a llegar al Congreso una generación más joven que le insuflará nuevo aire a la carcoma institucional. No es un mero recurso polémico señalar que el bipartidismo colombiano es un sistema atrasado de partidos, sumergido en una atmósfera arcaica, difuso en el plano programático, con formas antediluvianas de organización y comunicación. Sin embargo, es la fórmula que ha gobernado al país desde la primera mitad del siglo XIX y que previsiblemente lo seguirá mangoneando por mucho tiempo. De los 24 años transcurridos desde que expiró el Frente Nacional el partido Liberal ha sido durante 20 el titular del gobierno. De los dos, ha sido el más anarquizado y el mayormente alcanzado por la corrupción pero también el que ha sido favorecido por las mayorías electorales.

El partido Conservador

El partido Conservador ha dirigido el gobierno en un solo período, lo cual quizás lo haya protegido en algo de la enfermedad de los viejos aviones, la llamada "fatiga del metal". La Casa Pastrana se sigue apoyando en la antigua táctica electoral de los "movimientos nacionales" o "suprapartidistas" ahora reforzada con la adhesión de Alfonso Valdivieso. Esta ha sido la táctica invariable de los caudillos conservadores en el último cuarto de siglo como movimiento dictado, no tanto por la imaginación sino por la amarga pero realista conciencia de constituir la minoría histórica.

Sin embargo, la novedad la está aportando el viejo gamonalismo. El dirigente Valencia Cossío y Juan Camilo Restrepo, figura ésta no desprovista de carisma, pusieron en marcha una dinámica de recuperación del partido Conservador. El precandidato Restrepo de manera inequívoca escogió a sus copartidarios conservadores como los destinatarios de su discurso de precandidato presidencial. Andrés Pastrana no estuvo en condiciones de evadir esa situación que además había sido sancionada por el Directorio Nacional Conservador. Si bien el 9 de febrero en el Palacio de los Deportes de Bogotá se llevó a cabo el lanzamiento de la candidatura de Pastrana, este declaró que se sometería en materia de candidaturas a los resultados de la Convención Nacional del Partido. Este evento que tuvo lugar 11 días más tarde, merece comentario especial.

Los conservadores estuvieron en condiciones de realizar una convención en 33 capítulos y aseguraron la participación de 3.958 votantes en unas justas supervisadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El 37.4% de las preferencias alcanzado por el exministro Restrepo mostró que su candidatura no era producto de la fantasía y lo convirtió en factor político importante, sobre todo con relación al primer debate presidencial del siglo venidero. Por un momento Pastrana tuvo que reprimir su retórica "supranacional" para hacer piadosas decla-

raciones de fidelidad al partido. "De ahora en adelante, declaró, el que ha sido mi partido... se constituye en el eje esencial de mi proyecto de manos limpias que junto con liberales independientes llevaremos adelante en nombre del cambio que reclama Colombia". Por su parte Juan Camilo Restrepo creyó pertinente remarcarle a Pastrana la condición de su candidatura: "El candidato electo ha adquirido hoy un compromiso para, por y con el conservatismo"⁴.

Estos desarrollos constituyen indicios de la posibilidad que tendrían los partidos tradicionales, si por un momento rompieran con la costumbre de estar invariablemente adheridos a las ubres inagotables del aparato burocrático. ¿Podrían dar ese paso gentes como Valencia Cossi que se han nutrido por tanto tiempo en esas fuentes? Suscita curiosidad el curso que pueda tener esa pugna en las huestes azules entre recuperación del partido como opción y la muleta suprapartidista. Las agonías electorales actúan a favor de la segunda lógica.

No carece de importancia el que dentro del partido Conservador se hayan hundido dos nombres que suscitan rechazo: los de Pablo Victoria, una de las campañas más caras del debate, y Gustavo Rodríguez Vargas. El primero por sus afinidades de extrema derecha, y por sus aparentes vínculos comprometedores el segundo⁶. Habría que anotar que los resultados del ocho de marzo no muestran inclinación de grupos grandes de los votantes por fórmulas extremas.

3. El campo alternativo

En el presente análisis la expresión campo alternativo se usa en la acepción más neutra posible, como forma de designar tendencias políticas de reciente aparición y que se sitúan por fuera de los partidos tradicionales y de las agrupaciones de la que se ha conocido como la izquierda. Quizá no resulte tan arbitrario el uso del término si se tiene en cuenta que los protagonistas mismos de esas corrientes no se sienten urgidos para reclamar como suyo algún lugar preciso en las coordenadas de la representación espacial de la política: derecha-centro-izquierda. En este campo caben pues



los modelos autoritarios como el de tono castrense del general Bedoya Pizarro o aquel con modulación pedagógica de Antanas Mockus, las corrientes que pretenden representación política para nuevos sujetos sociales o grupos religiosos, el fenómeno de la búsqueda de figuración política de personas de los medios de comunicación y del espectáculo, profesores universitarios en trance de jubilación, o personas que ven en la política la oportunidad de imprimirlle tintes variopintos al horizonte grisáceo de sus parábolas de vida.

Dada la buena suerte inicial corrida en las encuestas por Bedoya Pizarro, parece imprescindible hacer una referencia individual al movimiento electoral que promueve el general, hasta hace pocos meses voz tonante del establecimiento castrense. Su marcha hacia la primera magistratura arrancó con fuerza notable el día mismo cuando se despidió de la tropa, entre las lágrimas del adiós y los denuestos contra el presidente Samper.

6. La revista *La Nota Económica* en el número 10 del 9 de marzo de 1998 en un informe titulado «Víctor Carranza», presenta las relaciones del hombre de las esmeraldas con varios políticos conservadores, entre los cuales incluye de primero a Gustavo Rodríguez Vargas. El informe se publicó en relación con las acusaciones formuladas por la Fiscalía a Carranza y que lo asocian con grupos paramilitares.

La proclamación de su candidatura se adelantó a las demás y tuvo lugar en el Salón Rojo del Hotel Tequendama al cual concurrieron unas 2.500 personas, el 17 de enero del presente año. En el paisaje de *Fuerza Colombia* primaban los rostros maduros y los cabellos muy cortos de los hombres de las reservas, pero también se podía ver a jóvenes radiantes de las academias militares. En los pasillos conversaban con animación generales en retiro, algunos de los cuales habían pasado, en su momento, por el amargo trance que el 25 de julio de 1997 había vivido el principal protagonista de la tarde.

Acudí al acto de lanzamiento de la candidatura animado por la curiosidad de saber hasta qué punto podían identificarse novedades programáticas en esa esquina de la derecha colombiana. De la intervención de Bedoya quedaron flotando, además de los agravios al «delincuente de Palacio», afirmaciones muy generales y poco realistas sobre reforma a la justicia, el apoyo a la agricultura, medidas contra la corrupción. Me impresionó la pobreza del discurso no sólo en la significación del concepto como conjunto de palabras introducidas por un código sino en la más elemental de la exposición puntual. Aparte del estridente antisamerismo y de cierto tono bronco, explicable en quien todavía no maneja del todo la diferencia entre los registros de las voces de mando y las modulaciones de la retórica proselitista, fue poco lo que quedó claro de la pieza del general. Quizá haya influido en ello el que el orador hubiera renunciado a leer el texto escrito que había preparado, con el fin de ponerse más a tono con las emociones del auditorio. Unos años atrás la doctrina de la Seguridad Nacional hubiera provisto el condensado ideológico que aún no puede ser reemplazado por una nueva elaboración doctrinal. Para una tal operación habrá que esperar un tiempo. Para los mentores intelectuales de corrientes como *Fuerza Colombia* deben resultar de difícil asimilación las implicaciones ideológicas de la liquidación del equilibrio geopolítico de la guerra fría. El discurso de mejor factura literaria fue el del general Valencia Tovar, el más derechista y programático corrió a car-

go de un civil, el ex presidente de la SAC, César de Hart.

En los comicios del pasado 8 de marzo, las candidaturas de militares en retiro sufrieron un serio descalabro, muy sensible para las listas que de manera más explícita se originaron en el movimiento por la candidatura del general Bedoya. El general Ricardo Emilio Cifuentes no alcanzó el número de votos necesarios para ingresar al Senado. Fernando Vargas no salió para la misma corporación, pero además obtuvo una cifra por debajo de los 9.000 votos. El único ex militar a quien sonrió la fortuna fue al ex suboficial Luis Elmer Arenas Parra, de *Vanguardia Moral y Social de Colombia*, partido de los reservistas de las Fuerzas Militares.

Si bien en los resultados electorales y en la evolución negativa que muestra la candidatura Bedoya luego de su fuerte impacto inicial influyen factores circunstanciales como el de la inexperiencia electoral, obran otros fenómenos de más permanente gravedad. Me referiré a uno de ellos, que a mi juicio tiene notable importancia: el *civilismo*. Esta es una ideología cuyos orígenes remotos pueden rastrearse en las controversias que agitaron a las élites en la etapa fundacional de la república y que se ha constituido en uno de los rasgos de la cultura política colombiana. De manera interesada los partidos convirtieron el *civilismo* en una especie de sinónimo de régimen democrático, sin que para ello haya obstado el que dicha ideología resulte altamente compatible con fórmulas de autoritarismo crudo. El *civilismo* se ha mostrado solidario con el discurso de la «defensa de las instituciones» antes que con la garantía de los derechos, con el culto al contrato, mejor que con el compromiso efectivo por la participación de las mayorías. El *civilismo* ha cubierto con mentiras piadosas un déficit perpetuo de la democracia en Colombia. Mediante este tipo de análisis se estará en condiciones de absolver o comprender el interrogante que desde su columna *Clepsidra* formulaba, entre desolado y anhelante, el general Valencia Tovar: «¿Por qué no un general?».⁷

7. *El Tiempo*, 21 de febrero de 1998, p. 5A.

Cuando los militares se colocaban en trance electoral los acompañaba la siguiente paradoja: se empeñan en desdibujar las huellas de su origen corporativo y se cuidan de no aparecer asociados estrechamente con modelos de ultraderecha. Pero pueden ser esas, justo, las condiciones que más atraigan a cierto electorado de zonas exacerbadas de la opinión. Al final la doctrina del civilismo termina jugándoles a los ex militares una mala pasada.

Otro tipo de propuesta alternativa se originó entre grupos de los movimientos sociales, tanto en los clásicos como en los de relativa reciente formación. Con relación a los primeros, la nota más pesimista corrió a cargo de la baja votación por el dirigente de los trabajadores de Fenaltrase, Wilson Borja, quien como candidato a la Cámara por Bogotá contó con el apoyo de la UP. En verdad no debería causar sorpresa este resultado si se tiene en cuenta que son más los casos de trabajadores independientes que en el pasado no salieron airoso de la apuesta por el voto ciudadano. Por fuera de esta anotación se deja a los sindicalistas que obtenían una curul como titulares del «renglón obrero» en las listas de los partidos tradicionales. De manera reiterada se ha probado que el prestigio alcanzado por un sindicalista en la lucha corporativa no se puede trasvasar sin mediaciones a los canales de la representación política.

La pauta anterior parece mantenerse también en relación con los movimientos sociales nuevos. Ni la dirigente feminista Ligia Galvis ni la prestigiosa antropóloga Gloria Triana harán escuchar su voz calificada en el recinto de la Cámara, no obstante haber contado con apoyos tan estimulantes como el de Martha Senn y «Totó la Momposina». Parece divertida la presentación que de sus aspiraciones parlamentarias creyeron ne-



cesario hacer las candidatas: «Lista la Mujer» se define también como un grupo *apolítico* (subrayado M.M.) pluralista y mucho más forjado en el mundo académico que en la plaza pública⁸. Resultaría sorprendente que un chef declarara al solicitar empleo en un restaurante que el último lugar en que quiera trabajar sería en la cocina.

En la búsqueda de la representación política los movimientos sociales de raíz étnica tuvieron suerte desigual. Privadas de la circunscripción especial las negritudes perdieron sus escaños al paso que los indígenas ampliaron la representación. Incluso Jesús Piñacué pudo conquistar el voto de sectores no indígenas y obtener de manera holgada su renglón en el Senado sin acudir a ninguna favorabilidad de orden legal. Detrás de esos logros está la organización indígena y el trabajo paciente de los candidatos con auditórios más amplios.

En el campo alternativo hay otros fenómenos que se manifestaron de manera notable, tanto en la campaña electoral como en los resultados de las elecciones del 8 de mar-

8. *El Tiempo*, 25 de febrero de 1998, p. 3D.

zo. La comentada postulación de los comunicadores. A su lado fueron también protagonistas algunos artistas. El fenómeno es el mismo: la presencia de gente situada de manera privilegiada en los medios de comunicación, o por razones de trabajo, en estrecho contacto con ellos. Los resultados no son asociables al ensanchamiento del campo alternativo. En efecto, la victoria del locutor deportivo Edgar Perea o de la competente periodista María Isabel Rueda son triunfos que bien pueden reclamar como suyos las corrientes del bipartidismo tradicional en las cuales los dos protagonistas se encuadraron.

A Antonio Navarro le fue dada por los electores capitalinos, con cerca de 120.000 votos para Cámara, algo que él mismo calificó como su segunda oportunidad. La primera al comienzo de los años noventa fue desperdiciada por él, cuando aplazó en aras de ambiciones inmediatas, de contera poco realistas, la posibilidad cierta de proseguir con el proyecto de constitución de una fuerza política independiente para la cual Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Gerardo Molina, Montaña Cuéllar, otras personalidades y gente corriente habían sentado bases importantes. En algún momento de la campaña Navarro habló de *la vía alterna*, movimiento que incorporaría a políticos como Gloria Cuartas, Parmenio Cuéllar, Jesús Piñacué, «...gente, dijo, que representa un camino diferente y un liderazgo colectivo»⁹. ¿Pondrá su victoria del 8 de marzo, y su ascendiente político al servicio de esa idea? En el futuro inmediato se verá.

A diferencia de Navarro, Mockus no estuvo favorecido en el pasado debate electoral por la imagen de administrador competente. Al contrario, su retiro de la alcaldía quizá tenga para sectores de la opinión el significado de una deserción. Los pobres resultados del 8 de marzo sorprenden si se tiene en cuenta la promoción de los medios de comunicación de sus propuestas y acciones proselitistas. De los nueve periodistas cuyas preferencias destacó la revista *Semana*, seis incluyeron la cabeza de lista 691 *Confiar en Antanas*, incluso por encima de Sergio Cabrera, el otro gran protegido de los comunicadores¹⁰. Echando globos, con sublime candor Carlos Duque escribía: «Ya

me imagino la valorizada que se pega Mockus donde llegue a sacar tres o cuatro, por qué no seis, senadores»¹¹. Por lo visto se produjo una rutinización del juego a la paradoja en el que se ha mostrado tan hábil Mockus. Por otro lado, los políticos excesivamente auto-referidos tienen grandes dificultades para inspirar movimientos que puedan girar sobre una órbita que no sea la de su propia persona.

Del anterior vistazo al campo alternativo no es dable esperar que de él soplen los vientos de renovación que necesita el sistema político en Colombia. La debilidad mayor radica en la incapacidad para crear bases organizativas y culturales capaces de desafiar el grueso y a la vez flexible tejido de los poderes partidistas tradicionales, asentado en factores burocráticos, económicos y emocionales. En su ambicioso modelo histórico-sociológico sobre el poder en las sociedades humanas el historiador y sociólogo Michel Mann destaca el hecho de que las cuatro fundamentales redes de poder (económico, político, militar, ideológico) se tejen en términos organizativos y son inseparables de su base logística¹². Sin incluir esta perspectiva, es decir, la del poder como organización, no se superará esa realidad de ver en cada proceso electoral el florecimiento de *novedades* que hoy son y mañana no parecen. Mientras tanto una y otra vez se recompondrá mañosamente el viejo bipartidismo con su séquito de gamonales enmocedidos pero también de caciques frescos de las nuevas hornadas.

4. ¿Réquiem por la izquierda?

Las elecciones del 8 de marzo pusieron en evidencia la desastrosa situación de la izquierda en la presente etapa. La UP y el partido comunista, así como el Moir, perdieron su representación en el Senado. El candidato comunista Edgar Ortiz

9. *El Tiempo*, 10 de febrero de 1998, p. 6A.

10. *Semana*, Santafé de Bogotá, marzo 9-16 de 1998, p. 38.

11. *El Tiempo*, 2 de marzo de 1998, p. 10A.

12. Michael Mann, *Las fuentes del poder social. I. Una historia del poder social desde los comienzos hasta 1760*, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 37 y ss.



obtuvo sólo 22.000 votos y aunque lo superó el aspirante moirista, Jorge Santos, con 33.596, tampoco éste logró la curul. Carlos Franco, Fabio Villa, ambos promovidos por la AD M-19, quedaron en posiciones muy distantes al último de los candidatos que ingresó al Senado. Tampoco los electores fueron más favorables con León Valencia de la Corriente de Renovación Socialista quien sólo llegó a los 12.213 sufragios. El anterior panorama se ensombreció aún más con la pérdida de las personerías jurídicas. El Moir y la UP tienen algunos argumentos para interponer recurso y demandar la personería, no así el PC, que tendrá que lanzarse a recoger las 50.000 firmas.

Es cierto que tuvieron lugar algunas alianzas de fuerzas de izquierda con el liberalismo, como en Santander, donde Jorge Gómez obtuvo 45.975 sufragios para Cámara de Representantes. De la misma manera la UP participó en las elecciones para Cámara en alianza con liberales en Arauca. Cada una de las corrientes derrotadas presenta factores diferentes que explican su retroceso. En unos casos fue la pérdida de la favorabilidad jurídica, para el Moir la división interna que sufrió el año pasado tuvo su incidencia en los magros resultados. En el caso de la UP obraron al menos tres facto-

res: la continuación de la guerra de exterminio, el boicoteo electoral de las Farc y la ofensiva de los paramilitares. La acción de esos últimos determinó la caída en Chocó, donde la votación por Manuel Cepeda en 1994 había sido de 1.136 votos, mientras la del 8 de marzo fue de 38 votos, en Antioquia donde de las primeras a las segundas elecciones el descenso fue de 9.178 a 1.318, los 7.860 votos de Urabá en 1994 hicieron la diferencia para la segunda fecha. Incluso en Arauca donde los paramilitares han realizado varias incursiones, la votación bajó de 6.037 a 1.938. De otra parte, para Meta, Guaviare, Caquetá, Guainía, el boicoteo guerrillero a las elecciones es la primera de las razones para la baja radical de las votaciones por el partido Comunista.

En esos departamentos la votación descendió de 7.680 a 733. Es decir, a menos del 10% de los votos logrados en 1994 para Senado.

Sin embargo, en un análisis detallado, si se suman los votos de las distintas agrupaciones de izquierdistas y se tienen en cuenta las alianzas de los izquierdistas con grupos liberales principalmente, se verá que una franja apreciable de ciudadanos votó por la izquierda. Eso sólo permite afirmar que es temprano para decir que la izquierda desapareció

del mercado electoral, pero en manera alguna disimula la hondura de la crisis. Si bien para cada grupo, como ya se anotó, existen explicaciones específicas, hay factores comunes que influyen sobre el conjunto de la izquierda. El más importante de ellos puede presentarse de la siguiente manera: la existencia de una prolongada guerra interior ha impedido que se consolide una alternativa de izquierda. En general el programa de la guerrilla colombiana ha sido, con relativa excepción del M-19, un cuerpo formal de reivindicaciones de izquierda. No podría atribuirse a la guerra fría el surgimiento del conflicto militar colombiano, pero no es menos cierto que el enfrentamiento geopolítico le transfirió a la guerra interna mucha de su formalización y su perspectiva doctrinaria.

Por parte del establecimiento, y en particular por las Fuerzas Armadas, se puso en marcha la lógica sencilla pero inexorable: la guerrilla es de izquierda, la izquierda es guerrillera o al menos proguerrillera y debe ser tratada en consonancia. Como si esto no fuera de suyo muy grave, en algunas organizaciones de izquierda echó raíces profundas la confusión o la ambigüedad en relación con «la lucha armada». La estrategia o táctica de «la combinación de todas las formas de lucha» pretendió hacer viable la cohabitación del discurso político con la acción militar. Una rica experiencia como la de la Unión Patriótica a mediados de los años ochenta resultaría estrangulada por la influencia simultánea de tres factores: la intolerancia que ha caracterizado al sistema político colombiano, la incidencia de la guerra fría con la promoción por Estados Unidos del anticomunismo como política diplomática y militar y la confusión de parte de la izquierda con respecto a los movimientos armados.

En la actualidad las Farc han pasado a una manera nueva de entender su acción que es recogida en el plan de creación de una modalidad de partido político que responderá directamente a un esquema único de dirección en cabeza del Secretariado. Se trata del *Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia* sobre el cual ha venido hablando la comandancia de las Farc desde el primer semestre de 1998¹³. Al menos en lo formal, dicho propósito aparece más coherente que el paralelismo de la fórmula

anterior y más en consonancia con el boicot a las elecciones. A su turno, el partido Comunista ha convocado a un Congreso que deberá realizarse en el curso del presente año. Hasta el momento se proyecta como un evento legal, no clandestino, condiciones que indican que también en esta parte se estarían sacando conclusiones políticas más realistas, al cabo de una saga trágica.

Una evolución muy peligrosa que se observa en el plano nacional es la escalada de la guerra sucia que ha cobrado un número crecido de víctimas entre 1996 y 1998. Los crímenes de los investigadores del Cinep y del más reciente del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, así como de numerosas personas comprometidas con la promoción de los derechos humanos muestra la disposición de sectores vinculados al poder político y militar y por fuera de él para prolongar en Colombia las coordenadas de la guerra fría cuyo derrumbe a escala mundial se produjo hace ya casi diez años. En un informe publicado en noviembre de 1997 el diario *El Espectador* daba cuenta de la difícil situación que afrontaban organizaciones no gubernamentales, judicIALIZADAS EN INFORMES DE LA INTELIGENCIA MILITAR. SEGÚN LOS VOCEROS DE ESAS ORGANIZACIONES, SUS ONGS, VINCULADAS A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL TRABAJO CON DESPLAZADOS, HABRÍAN SIDO CONVERTIDAS EN «OBJETIVOS MILITARES»¹⁴.

Lo anterior muestra que el radio de acción de la guerra contrainsurgente se ha ampliado de manera extraordinaria. En tales condiciones la guerra interna no sólo entra en choque con proyectos de la izquierda sino con cualquier polo de acción política con orientación reformista, democrática o independiente. Sin pretensión de señalar caminos para nadie, habría sí que decir que el campo más fecundo de inversión para quienes se perciban como de izquierda y para todos aquellos que alienten propuestas de cambio político y social es el de la búsqueda de la negociación como salida al conflicto interno. Esa, en las condiciones de Colombia, es una bandera verdaderamente revolucionaria, con independencia del hecho de que

13. *El Tiempo*, 2 de enero de 1998, p. 7A.

14. *El Espectador*, Santafé de Bogotá, 12 de noviembre de 1997, p. 4A.

quienes la enarbolen sean revolucionarios, reformistas, gentes de centro, e incluso de derecha. Por supuesto, el trabajo por la paz no está vinculado sólo a la condición de creación de corrientes de izquierda sino a la instauración de un ambiente que haga viable la reproducción sana de la vida de los millones de mujeres y de hombres que integran este país llamado Colombia.

5. A manera de comentario final

Los procesos electorales ofrecen condiciones excepcionales para estudiar el sistema político. El investigador está ante una escena en la que se desplie-

gan fases diversas de la política formal, pero también de la informal. Por razones de espacio en el artículo que el lector está terminando de leer se han abordado sólo algunos de los elementos que son parte de un cuadro de conjunto, pero los trazos bosquejados no han dado lugar al mapa general. Son posibles y necesarios otros ensayos que coloquen el énfasis en aspectos diferentes a los aquí tratados. Estos ejercicios contribuirán a poner bases más sólidas a la discusión, a veces muy abstracta sobre la ética, la sociedad civil, la resignificación de la política, las promesas de la utopía y demás enunciados que de entrada reconozco como exaltantes para el espíritu.

Trabajamos por la calidad del hábitat con mejores proyectos de

Vivienda Social

AVP ASOCIACION DE VIVIENDA

Av. 39 No. 14-66 • Tel. 285 29 70 • Fax 288 32 81 • Santa Fe de Bogotá
Afiliados a FEDEVIVIENDA y CAMACOL

Alfredo Rodríguez
 Director de SUR, Centro de Estudios Sociales
 y de Educación, Santiago de Chile.

Desafíos para el gobierno de la ciudad en América Latina*

Fuerzas globales, expresiones locales

Alfredo Rodríguez

Introducción

En los últimos años, las ciudades de América Latina han sido escenario de grandes manifestaciones de descontento social¹. Desde una perspectiva de “gobernabilidad”, estos estallidos sociales se pueden definir como situaciones de “ingobernabilidad democrática”. Desde una aproximación de “governance”² corresponden a conflictos que surgen al contraponerse los cambios en las estructuras económicas y sociales, de una parte, y la inercia de las estructuras políticas y sociales actuales, de otra. Por tanto, no son resultado de demandas excesivas que no pueden ser procesadas por un sistema democrático, no son asunto de gobernabilidad. Son resultado de cómo se gobierna, son cosa de governance.

La noción de governance no es una idea nueva; proveniente del campo de la ciencia política anglosajona y recientemente, en 1989, el Banco Mundial la ha incorporado en sus análisis sobre la administración del desarrollo. El Banco Mundial (1993:2) define el término como “la manera



* Una versión preliminar con el título de “Ciudad, democracia y gobernanza en América Latina”, escrita para el *International Social Science Journal* de Unesco, fue publicada en 1996 en el número 147 de la revista. Tomado de: Ciudades y gobernabilidad en América Latina. Colección Estudios Urbanos. Editado por: Alfredo Rodríguez & Lucy Winchester Ediciones SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación.

1 Caracas 1989: explosión social, el “caracazo”. Buenos Aires 1989: asaltos a supermercados y tiendas. Santiago del Estero, Argentina 1993: quema de edificios de gobierno y de las casas de políticos y

funcionarios públicos. Curanilahue, Chile 1994: toma de caminos como protesta por el cierre de las minas de carbón. Chiapas 1994, ocupación de doce ciudades.

2 Utilizamos la palabra governance (en inglés), por no contar en castellano con un término que, sin ambigüedad, comporte el significado de “ejercicio del poder”, el “acto de gobernar”. El término “gobierno” tiene esa aceptación, pero fácilmente puede confundirse con “el gobierno” en el sentido de “quien ejerce el poder”.

en que se ejerce el poder en el manejo de los recursos económicos y sociales para el desarrollo”, refiriéndolo al poder de los gobiernos para definir y resolver las políticas relacionadas con el desarrollo. Nosotros, a diferencia del Banco Mundial, consideramos el ejercicio del poder -*governance*- no como un atributo exclusivo de los gobiernos, sino también de la sociedad y del mercado. En palabras de Leftwich (1993:611) “*governance* se refiere (...) a la distribución tanto interna como externa del poder político y económico. Así, hace referencia a las estructuras de las relaciones políticas y, fundamentalmente, económicas, y las reglas por las cuales se gobierna la vida productiva y distributiva de una sociedad. En resumen, se refiere a un sistema de relaciones políticas y socioeconómicas, o, en términos generales, a un régimen”. Por tanto, la forma como el sistema resuelve los conflictos sociales y la distribución subsecuente de sus costos y beneficios dependen, tanto del régimen político, como del proceso de definición y toma de decisiones y de la capacidad para implementarlas y ejecutarlas. Es decir, la distribución final de los beneficios y costos entre los costos y actores del mercado, del Estado y de la sociedad civil depende de cómo se gobierna y de la distribución del poder entre ellos.

Conviene señalar que hay dos enfoques de *governance*, uno prescriptivo y otro descriptivo: “de acuerdo con el enfoque prescriptivo *governance* señala que la sociedad no es regida únicamente por el gobierno, sino que este es parte de una red compleja de interacciones entre instituciones y grupos. Sin implicar juicio de valor se puede decir que en un sistema abierto o democrático de gobierno la intensidad de las interacciones puede ser mayor que en uno no democrático. Lo que es claro es que el gobierno es sólo la

parte visible del *governance iceberg*” (Naciones Unidas 1995:1).

El concepto de *governance*, así definido en estos dos enfoques, enfatiza las dimensiones políticas del gobierno por sobre las dimensiones administrativas y técnicas. Como Magda Prates y Eli Diniz indican, *governance* abarca los patrones de coordinación o descoordinación entre actores políticos y sociales (1995:11), se refiere a “*la relación entre la sociedad civil y el Estado, entre gobernantes y gobernados*” (McCarney, et al. 1995:4). Así se diferencia de *gobernabilidad*, concepto que enfatiza la capacidad del Estado de contener a la sociedad civil, en su versión más conservadora.

Utilizando el enfoque de *governance*, en este artículo queremos explorar los cambios que están ocurriendo en las ciudades de América Latina, sus expresiones urbanas e implicaciones en el proceso y en la forma como se gobiernan.

Además de constituir el espacio físico donde vive la mayoría de los latinoamericanos -América Latina es la región del mundo con el más alto grado de urbanización-, la ciudad constituye una matriz física y simbólica de la modernidad de nuestras sociedades (Programa de Gestión Urbana [PGU] 1995:1). Ahí se manifiestan y se entremezclan fenómenos mundiales (la globalización, la democratización, el consumo de imágenes globales) y nacionales (el ajuste, la reforma del Estado y la especificidad del desarrollo histórico de cada Estado-nación), y es allí donde resultados “locales” (la desintegración social, la violencia, la pobreza y la reconstitución de los actores colectivos de la sociedad) se expresan y se articulan. Más aún, se ha demostrado que en las grandes ciudades latinoamericanas se concentran los sectores más dinámicos de sus economías (Cepal 1995). Y en esta conjunción de elementos extremos, el

desarrollo sustentable de las ciudades, y el de los países latinoamericanos, depende de una gestión efectiva y adecuada, y eso, a su vez, de la forma y proceso de gobernarlas.

Fuerzas globales, consecuencias locales

Desde finales de los años setenta en adelante los países de la región han experimentado, con distinta intensidad, profundos cambios en sus estructuras económicas y sociales, y en las funciones del Estado y de la sociedad. América Latina se encuentra en un proceso de transformación de su modelo de crecimiento, desde uno hacia adentro, basado en la industrialización sustantiva de importaciones, a un modelo abierto a los mercados internacionales, cuyo motor principal es el sector privado.

No ha sido ni es un proceso fácil. Los cambios que se han expresado primeramente y con mayor fuerza en el plano económico han ocurrido en el marco de una sociedad estructurada de acuerdo con otras lógicas: se han enfrentado a la inercia de la organización política y social del Estado, a las formas tradicionales de la vida política y local y a una estructura física de la ciudad que nació como expresión de modalidades de producción y reproducción diferentes a las que hoy están tomando cuerpo. Por tal razón, las consecuencias de los cambios económicos han tomado mayor tiempo en expresarse en el conjunto de la sociedad que en el campo económico propiamente tal, generando conflictos y nuevas áreas de preocupación política.

El contexto económico, social y político de la ciudad se ha modificado y sigue estando sujeto a un proceso de cambio, resultado de la globalización del sistema económico, del ajuste estructural y de la transi-

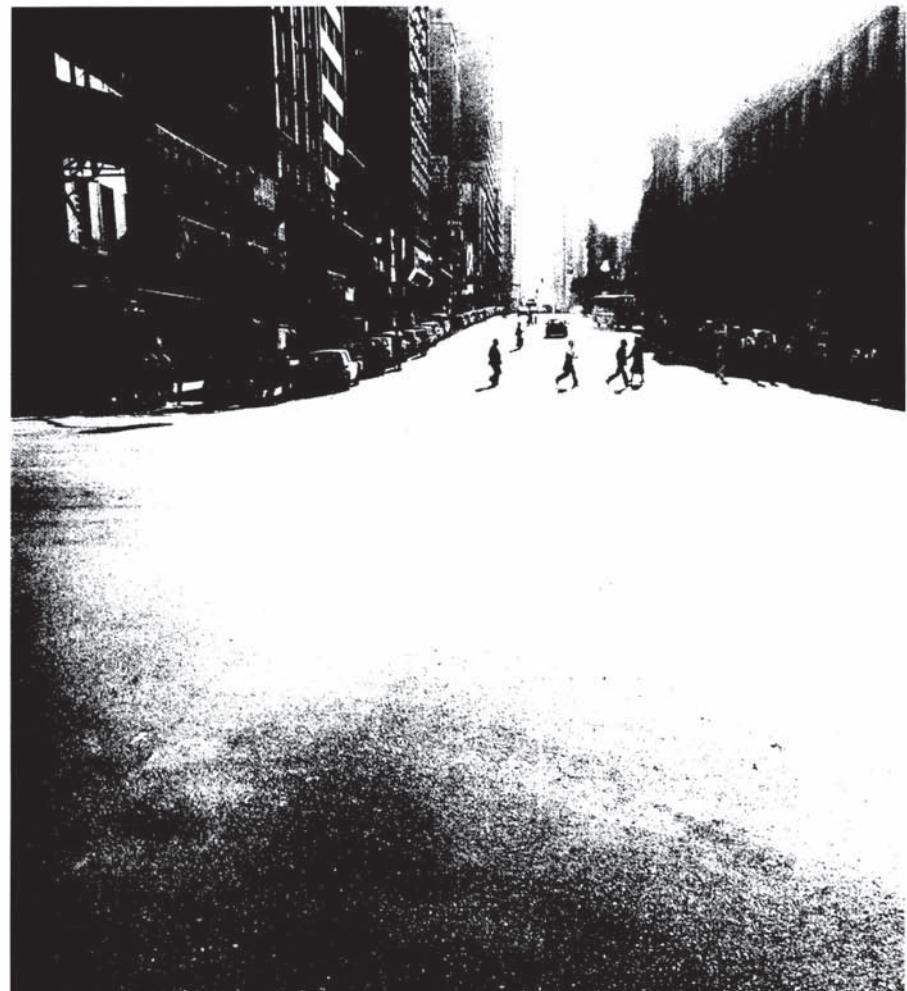
ción democrática propia de los países latinoamericanos. Estos procesos tienen y tendrán incidencia importante en la vida de las ciudades y en la capacidad que requieren y requerirán los gestores locales para asegurar el futuro desarrollo urbano.

Globalización

No hay una definición nítida de la globalización. Unos la interpretan como la internacionalización de las economías nacionales, un aumento en la importancia relativa del comercio exterior internacional y sus correspondientes instituciones -el Fondo Monetario Internacional, el Banco mundial, la Organización Mundial del Comercio- y la internacionalización del sistema de interacciones económicas. Sin duda, esta internacionalización de nuestras economías forma parte de los procesos de la globalización.

Una de las características definitorias del sistema económico mundial actual es la mayor flexibilidad en el movimiento del capital, esto es, la mayor velocidad del ciclo de capital al nivel mundial. Dado el incentivo de mantener ganancias altas, gracias a la revolución en comunicaciones e informática, el modelo económico conduce a que el capital financiero se mueva rápidamente por el mundo desde un mercado a otro, buscando mejores oportunidades de rentabilidad. Grandes transacciones, cambios de propiedad y de negocios entre actores económicos desconocidos se hacen en unos segundos.

Como consecuencia de la velocidad del ciclo de capital, el espacio económico relevante se reorienta hacia lo particular y lo global. "Hacia lo particular -señala Restrepo (1994:99)-, porque se trata de acercar lo más posible las decisiones de inversión pública y privada a las condiciones reales de los mercados específicos. Hacia lo global, porque el capitalismo ha logrado transna-



cionalizar la producción, circulación y la valorización uniendo directamente los mercados locales con el mercado mundial".

Como resultado de esta reorientación, los mercados se internacionalizan y se focalizan en lo local. La actividad de la economía urbana responde a lo específico de la dinámica del sistema económico local, vinculándose siempre con el mercado mundial a través del mercado de movimiento de capital, de información, de insumos, de productos y del consumo, por la búsqueda de nuevas oportunidades, y por el aumento de incertidumbre que comporta la velocidad de ciclo de capital. Por tanto lo local, es decir, la ciudad, su condición y su capacidad de articularse con una óptica orientada globalmente, toma mayor importancia en el sistema económico global.

Una concreción de esta dinámica financiera ha sido la consolidación de la economía global a través del comportamiento de las firmas transnacionales, que operan de acuerdo con una lógica específica, nueva y estratégica. Este comportamiento se caracteriza por una integración de la concepción del producto, su fabricación y distribución en el plano mundial. Es un "enfoque global, interdependiente, de mercados diferenciados, gestión global, de múltiples diferenciaciones territoriales", comportamiento integrado que "podrá obtenerse a través de una cierta desintegración de estructuras, de la subcontratación de ciertas tareas, de la creación de redes de pequeñas empresas satélites de grandes empresas, o no relacionadas con éstas. El punto central es que esta eventual

desintegración sobre la cual ciertos analistas colocan fuertemente el acento no debe ser el árbol que esconde el bosque, esto es, la tendencia profunda a la integración de los sistemas de producción” (Veltz 1994:29). Estas transnacionales operan en espacios muchas veces fuera del alcance de las actividades de los gobiernos nacionales, sin embargo, se localizan en territorios locales regidos por dichos gobiernos (Sassen 1994:XIII).

¿Cómo afecta a la ciudad esta nueva esfera económica globalizada? Surge una nueva ciudad que se sobrepone a las existentes. García Canclini (1995:69) describe la ciudad de México diciendo que, “además de la ciudad histórica, la de los monumentos y los barrios que atestiguan el espesor de los siglos, y la ciudad industrial, desplegada desde los años cuarenta, existe la *ciudad globalizada*, que se conecta con las redes mundiales de la economía, las finanzas y las comunicaciones”. Con esta tercera ciudad comienzan a hacerse evidentes dos fenómenos de particular importancia para nosotros por sus efectos en la estructura social y espacial de ellas: la desterritorialización y la desmaterialización.

Desterritorialización

Una expresión de los procesos de globalización en nuestras ciudades es la desterritorialización. Esto es, por una parte, el incremento del intercambio de bienes culturales con ciudades en el exterior y el incremento del flujo de información, personas, dinero y otros bienes simbólicos con ellas y, por otra, el creciente peso de la informatización en las decisiones comerciales y productivas (Duhau y Schteingart 1995:56-57, Calderón 1994:4-5). La desterritorialización, por tanto, afecta la vida de las ciudades y su sistema de toma de decisiones. La gestión de la ciudad desde la pers-

pectiva del Estado-nación ya no es suficiente para comprender la dinámica de una urbanización “desterritorializada” y responder efectivamente a ella.

Las ciudades de La Paz y Cochabamba, en Bolivia, de Arica en Chile y de Buenos Aires en Argentina, proporcionan muy buenos ejemplos de estos nuevos cambios. En el caso de la Paz, “la ciudad no sólo es una fuente de consumo internacionalizado, sino que uno de sus flujos económicos comerciales y culturales más fuertes está estructurado con la ciudad de Arica [Chile]. No se trata sólo de relaciones de intercambio, sino de multiplicación de circuitos que afectan rasgos fundamentales de su estructura urbana” (Calderón 1994:5). En el caso de Cochabamba, las redes de organización familiar dominantes en la economía no se limitan al espacio regional o nacional, se amplían con Argentina, en particular con Buenos Aires, donde vive un millón de bolivianos, principalmente cochabambinos. Casos similares, e incluso de intensidad mayor, ocurren entre ciudades de Centroamérica y particularmente de México, en relación con ciudades de Estados Unidos y Canadá (García Canclini 1990:288-305).

Desmaterialización

Cada vez más, los bienes que produce la industria requieren menos materiales, y hasta no utilizan materiales en el sentido clásico, como ocurre en el caso de producción de *software*. Jorge Schvarzer (1993:7-8), uno de los autores que mejor desarrolla este tema, demuestra cómo el precio por kilogramo de los nuevos bienes no estrictamente materiales comparado al de los bienes tradicionales da cuenta de un valor agregado en los primeros que supera con creces al de los segundos. Cita varios ejemplos: el kilo de petróleo fluctúa entre 10 y 20 centa-

vos de dólar, el de harina, 40 centavos, el kilo de automóvil, 15 a 20 dólares, de un televisor, 70 dólares, y de un computador, 600 dólares. Las drogas farmacéuticas se venden por gramos. En el límite se encuentran actividades donde hay un intenso predominio del trabajo intelectual: creación de software y comunicaciones.

Así, actualmente, la evolución industrial tiende a exigir un uso mayor del conocimiento y de la materia gris sobre la fuerza muscular. Ello comporta, por una parte, la modificación de la estructura social de la mano de obra urbana en los lugares en donde predomina, por otra, nuevas características de las plantas fabriles vinculadas a los sistemas de comunicación y transporte. Se pueden alejar de las fuentes materias primas, existe un mayor contacto con mano de obra calificada, y también el desplazamiento de las plantas de las grandes empresas desde las grandes ciudades a las pequeñas, o desde el centro de la ciudad hacia localizaciones periféricas, manteniéndose centralizadas las sedes.

Esta evolución en la manufactura - la reducción a lo largo del tiempo del número de plantas productoras, de su tamaño medio y, por consiguiente, del empleo en las grandes empresas fabriles- ha modificado las condiciones del empleo en la ciudad y la propia fisonomía de la urbe. Quizás una de las condiciones que inciden con mayor fuerza en este cambio es la tendencia a la desmaterialización de la producción, los sectores obreros tradicionales y los insumos físicos pierden importancia en el proceso productivo, lo cual supone cambios en cuanto a los actores sociales urbanos y a las formas de capacitación de la fuerza de trabajo. Para las ciudades, esta tendencia implica modificaciones adicionales. Los nuevos sectores y actividades dinámicas configuran un segmento de una economía urbana que re-

quiere soportes para productos inmateriales: patrones de localización diferentes, un mercado de trabajo con un nuevo tipo de trabajador, menos obreros.

Desde la perspectiva de estos cambios, la ciudad latinoamericana, centro y soporte material de la industrialización substitutiva, experimenta fuertes tensiones al desaparecer el modelo económico que la hizo crecer en los últimos cuarenta años. En una imagen: las zonas cercanas al centro de la ciudad, esas viejas áreas industriales abandonadas, los rieles de ferrocarriles que ya no existen, los muelles vacíos: Montevideo, Santiago, Buenos Aires...

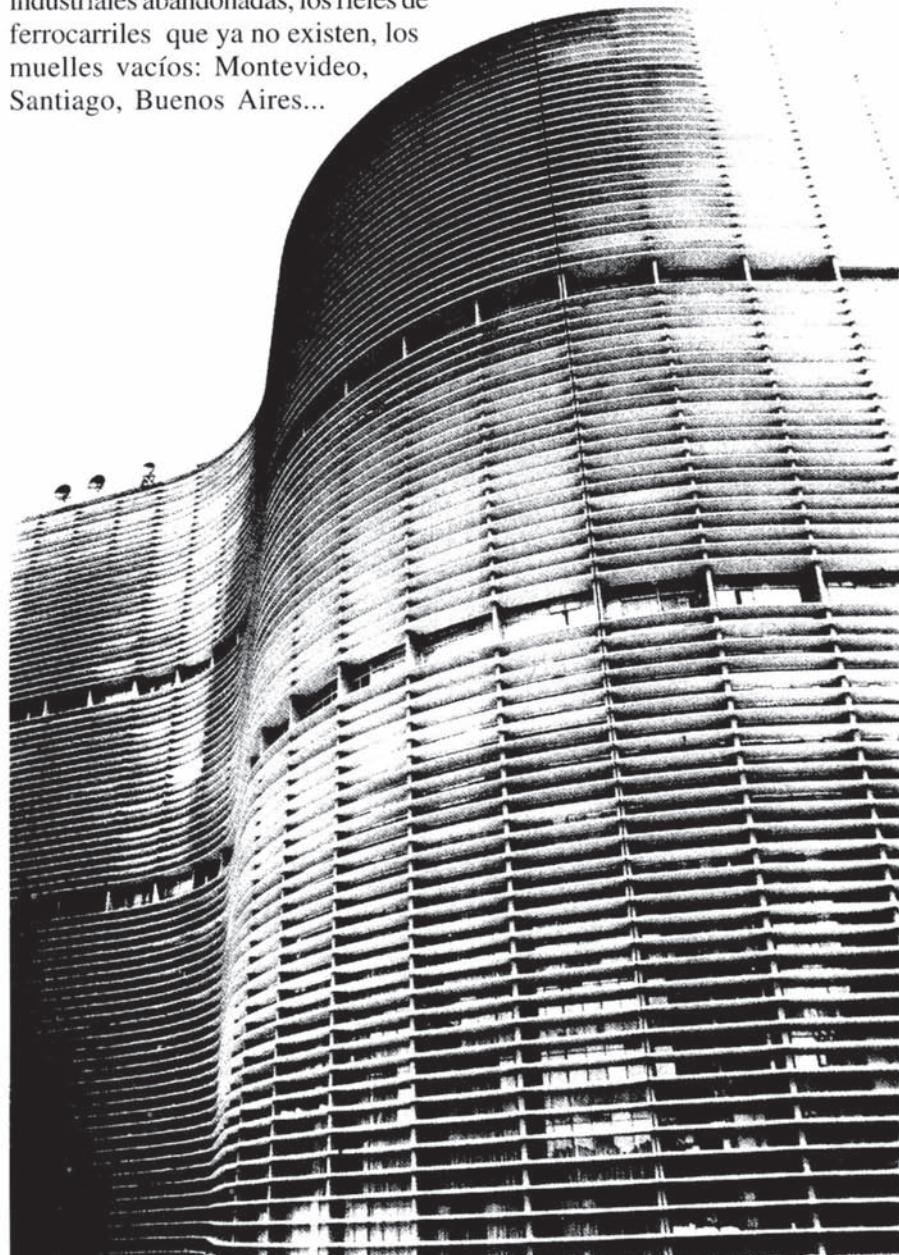
Areas que, a su vez, se convierten en atracción para grandes operaciones inmobiliarias y la posibilidad de una recuperación del espacio público de la ciudad.

Los ajustes estructurales aplicados en la región durante la última década y media reflejan, tanto la adopción de políticas económicas neoliberales por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y muchos gobiernos occidentales, como la aplicación de ese

modelo para la recuperación y el crecimiento de las economías del mundo. En general, los ajustes estructurales contemplan una devaluación del tipo de cambio, un incremento en las tasas de interés, una reducción de importaciones, más flexibilidad y libertad para los capitales externos, la reducción o eliminación de distintas medidas de protección, la privatización de empresas estatales y la disminución del gasto público vía recortes en los subsidios estatales en alimentos, transporte, educación, etc. (Walton y Seddon 1994:101).

Actualmente, este paquete de medidas, que tiende a ser caracterizado por la austeridad, contempla tres etapas: la primera de ajuste y estabilización, la segunda, de transformaciones estructurales profundas y, finalmente, una etapa de consolidación de las reformas y una recuperación de los niveles de inversión. La primera busca establecer una base sólida para la estabilidad macroeconómica y "corresponde a la etapa de las políticas de *shock* y de austeridad". En la segunda etapa se busca aumentar la competitividad de los mercados de bienes, insumos y financieros y racionalizar el sistema institucional. Este último típicamente se refiere a la privatización de los servicios públicos y la modernización del aparato estatal y financiero. La tercera apunta a legitimar las dos etapas previas y así recuperar niveles de inversión (Leiva y Afacino 1995:11-12).

Como señalamos anteriormente, estas políticas han afectado profundamente las estructuras económicas, políticas y sociales de los países latinoamericanos y de sus ciudades. Nos parece de particular importancia destacar dos aspectos de esta reestructuración: los efectos e implicaciones en el mercado laboral urbano y el proceso de descentralización como componente de la reforma del Estado latinoamericano.



Mercado laboral urbano

En los países de la región la apertura de las economías y las reformas de ajuste estructural afectaron negativamente el mercado laboral urbano en dos dimensiones: el empleo y el salario (Infante 1993:6).

Hay tres grandes cambios en la naturaleza de los problemas del empleo. Primero, se ha producido un aumento de la oferta de fuerza de trabajo urbana, producto del incremento de la tasa de participación de las mujeres -en parte por exclusión de los hombres, que tradicionalmente tienen salarios más altos- y el mantenimiento de la migración hacia zonas urbanas (Infante 1993).

Sumado a lo anterior hay un proceso de pérdida en la calidad de las ocupaciones. Dado el menor requerimiento de fuerza de trabajo por parte del sector moderno de la economía se está produciendo un aumento de empleos en el sector informal urbano. Asimismo, la menor estabilidad laboral y el aumento en la subcontratación por empresas grandes ha precarizado la calidad, incluso de los empleos formales urbanos (Díaz 1993).

Finalmente, también se ha producido un aumento y un cambio de composición del desempleo. Por ejemplo, tal como señala Hilda Herzer (1992), por primera vez en Buenos Aires el número de desempleados hombres supera al de mujeres.

Los cambios económicos han significado también el deterioro de los ingresos laborales urbanos en la región, por ajuste de los salarios³ y por la contracción de los ingresos reales del sector informal urbano⁴.

Como ilustración de lo anterior, en el Cuadro 1 se presentan las variaciones porcentuales del ingreso por habitante y del salario mínimo urbano para ocho países de América Latina. Las cifras muestran la reduc-

Cuadro 1
Variaciones porcentuales reales de ingreso y salario mínimo urbano
(8 países), 1980-92

País	Período	Ingreso por habitante	Salario mínimo urbano
Argentina	1980-1992	-14.2	-56.0
Bolivia	1980-1992	-25.7	
Brasil	1980-1992	-6.3	-45.0
Chile	1980-1992	6.7	0.0
Colombia	1980-1992	10.6	1.6
México	1980-1992	-2.5	-41.8
Uruguay	1980-1992	2.9	-42.0
Venezuela	1980-1992	-23.9	-29.6

Fuente: CEPAL (1994:127-128), Cuadro 1.

ción del ingreso por habitante y de los salarios mínimos urbanos; ambas tendencias son expresión del empobrecimiento, tanto de los trabajadores informales, como de los trabajadores asalariados (Díaz 1993), y de la alta concentración del ingreso.

El resultado más nítido de estos cambios en el mercado laboral ha sido la precarización de la fuerza de trabajo urbana: esto es, una fuerza de trabajo con altos índices de desempleo e inestabilidad, con condiciones de trabajo desreguladas, con reducción en los salarios mínimos y altos índices de informalidad. Esta precarización genera nuevas demandas sociales y económicas en el espacio público de la ciudad.

Descentralización

Es un proceso de cambios institucionales reciente e acabado en América Latina⁵. Es apoyado, tanto por aquellos que lo perciben como un mecanismo para disminuir el tamaño del Estado y el control de éste sobre el capital, como por aquellos que ven en él la posibilidad de una mayor democratización

del Estado y de la sociedad civil. Sin duda, la descentralización forma parte de la estrategia de los países latinoamericanos para racionalizar sus sistemas institucionales. Y como componente de la modernización, busca, en su aspecto técnico-administrativo, racionalizar inversiones y mejorar la eficiencia y efectividad del aparato estatal.

3 Según Prealc (1992), en la década de los ochenta, las remuneraciones en el sector público se redujeron en 30 por ciento en términos reales, y los salarios mínimos en 33 por ciento en la década (Infante 1993).

4 Según Prealc (1992), la caída del ingreso real de los ocupados en el sector informal urbano habría alcanzado un 42 por ciento en la década (Infante 1993).

Chile, 1992; Bolivia, 1985; Colombia, 1986, Venezuela, 1989; México, 1983, Reforma Constitucional; El Salvador, 1993, Acuerdo de Paz (Rodríguez y Winchester 1995; Duhal y Schteingart 1995)

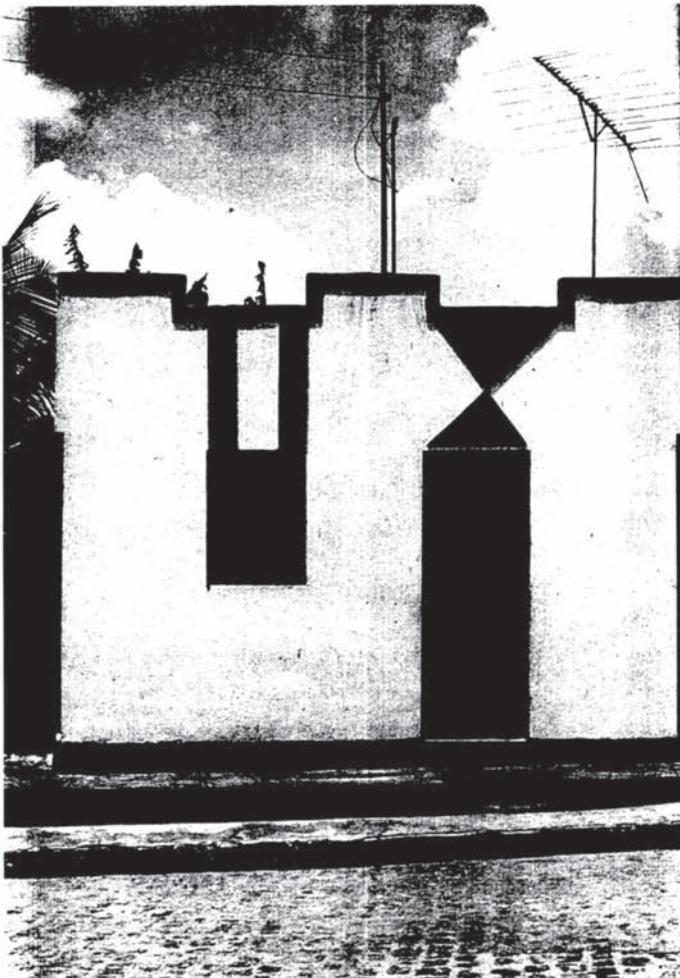
5 Las reformas municipales son recientes. Elecciones populares de autoridades municipales.

Emilio Tenti (1993a), al discutir los efectos de las políticas de descentralización en Argentina señala que una de las claves de interpretación del proceso de descentralización reside en que las decisiones han estado impuestas a las regiones o provincias por el gobierno central. La experiencia histórica muestra que el debate centralización / descentralización no es únicamente una cuestión técnica, o de simple eficacia en la utilización de los recursos en juego. El juego entre el valor de la eficacia y el de la equidad crea tensiones. No hay que olvidar que en América Latina los estados modernos nacieron a partir de un centro que, entre otras cosas, se impuso creando una cierta homogeneidad y eliminando particularismos culturales, lingüísticos, económicos. Históricamente está embebida en la cultura latinoamericana una idea o expectativa de igualdad, producto de la intervención de un centro de poder dotado de medios políticos, militares y financieros que le permiten proceder a una redistribución autoritaria de los recursos. Sin un centro, pareciera que la constitución de sistemas de transporte, de educación, de salud pública, no tendría lugar.

Todo parece indicar que se trata de una nueva repartición de tareas y responsabilidades –descentralización– más que de una repartición efectiva de poder. No obstante, los cambios en el *rol* del Estado y el traspaso de funciones y tareas a unidades territoriales, más allá de la discusión de si se trata propiamente de descentralización, o de descentralización, dan lugar a nuevos espacios políticos: los gobiernos locales. Y, a su vez, la coincidencia de

intereses respecto a las administraciones o gobiernos locales en la región es un hecho político que otorga a estas instancias de gobierno un gran potencial de cambio y modernización.

Nunes (1994:185) nos indica que “a la descentralización del Estado corresponde así una igual descentralización del conflicto, lo que en la práctica



tica implica la transformación de los gobiernos locales en espacios de lucha y de experiencias de conquista para la ciudadanía”. Los actores sociales urbanos, el sector privado nacional y extranjero, los gobiernos locales y el Estado comparten el ámbito público de la ciudad, representado tanto, por la infraestructura de la ciudad y los servicios públicos, como por el sistema de toma de decisiones so-

bre el desarrollo urbano y los conflictos derivados de ello.

En este proceso, la identidad local puede verse fortalecida. Si bien esto tiene aspectos positivos y posibilita una proximidad que facilita la participación también tiene limitaciones y no debe ser sobrevalorado. La legitimidad del espacio de gobierno local -en cuanto ofrezca acceso equitativo a la sociedad civil urbana, participación efectiva y transparencia en la toma de decisiones- es asunto de discusión o estudio. Para algunos tiende a ser vulnerable a la vida política local, mientras otros ven en lo local bloques a los cambios y reforzamiento de los aspectos más tradicionales, tales como el caciquismo o el clientelismo (Prates y Diniz 1995:44-5; González 1994: 12).

La explosión de lo social⁶

Los cambios en la economía urbana se expresan en el orden social por la pérdida de importancia “de los grandes actores colectivos nacionales clásicos, particularmente de la burguesía y de la clase obrera, organizados en el marco de una economía volcada hacia el mercado interno” (Tenti 1993a). Las transformaciones sufridas por el mercado del empleo y por el marco jurídico institucional que lo rige han contribuido a la desestructuración del mundo obrero. En la mayoría de las ciudades de la región el aparato sindical cuenta con menos adherentes, ha perdido capacidad de mo-

⁶ Seguimos el argumento de Tenti (1993b) sobre “la explosión de lo social”, entendida como multiplicación y como incremento de la complejidad, pero no como ‘muerte’ de lo social”.

vilización y negociación frente a patrones y al Estado y, cada vez es menos capaz de participar en acciones colectivas de interés general.

Los procesos de diferenciación creciente de las condiciones de trabajo e ingreso constituyen un obstáculo para la identificación de clase entre los asalariados. Tenti (1993b: 251-56) nos indica que el principal estructurador es ahora el de los modos de incorporación al sistema productivo. El “nuevo trabajador”, propio de una producción desmaterializada ilustra este punto. Se caracteriza por su capacidad de adaptarse rápidamente y asumir las responsabilidades de calidad y confiabilidad, por su responsabilidad y autonomía; su capacidad de integrarse e integrar sus funciones estratégicas; y su disponibilidad de apertura hacia el exterior de la firma. La existencia de este tipo de trabajador, todavía de menor grado pero concentrado en áreas urbanas, cambia la distribución social de los premios y recompensas asociados con el empleo.

La reestructuración de los actores colectivos no representa una muerte de lo social, al contrario, es señal de una explosión de ella. Las antiguas identidades nacionales y de clases tienden a ser reemplazadas por una multitud de identidades particularistas (de empresa, profesionales, regionales, religiosas, etc), y por identidades supranacionales (el consumo, la asimilación de estereotipos o estilos de vida supranacionales) (Tenti 1993a:76). Ellos se expresan y actúan en la ciudad, y se aglutan desde lo espacial (movimientos barriales, regionales); desde lo cultural (movimientos étnicos, de mujeres, ecológicos); y desde las condiciones para la reproducción (servicios públicos: agua, vivienda, educación; servicios sociales).

En el nuevo contexto urbano, caracterizado por un Estado que ha limitado sus actividades como agente redistribuidor y en materia de políticas sociales, los grupos sociales que

Cuadro 2
América Latina: cambios en la distribución urbano / rural de la población pobre, 1970-1990

Año	Pobres (miles de personas)			Pobres (porcentaje)		
	Urbano	Rural	Total	Urbano	Rural	Total
1970	44.200	75.600	119.800	37	63	100
1980	62.900	73.000	135.900	46	54	100
1986	94.400	75.800	170.200	55	45	100
1990 (b)	114.500	80.400	195.900	59	41	100

(a) Personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Incluye a las personas que viven en situación de indigencia.

(b) Estimación para 19 países de la región.

Fuente CEPAL (1994), Cuadro 21, pág.157.

antes basaban su reproducción en las políticas e iniciativas estatales se han visto obligados a buscar mecanismos de autorresolución de sus necesidades y generar estrategias de supervivencia, de autoproducción de sus servicios esenciales (Herzer 1992: 38).

En este contexto, durante los últimos años las organizaciones no gubernamentales (ONGs) adquirieron gran importancia en la implementación de acciones vinculadas al desarrollo social. La transferencia de responsabilidades desde el Estado al mercado con el contexto de políticas macroeconómicas ha colocado a las ONGs como microlaboratorios donde se ensayan formas de participación, propuestas, implementación de programas, información (González 1994:9-11).

Al retirarse el Estado, parte del espacio de apoyo es ahora ocupado por las ONGs. “Entre estos grupos se encuentran organizaciones de apoyo a grupos de base relativamente bien estructuradas, que proporcionan bienes y servicios a grupos de bajos ingresos, organizaciones de base como cooperativas y asociaciones vecinales y movimientos sociales locales, regionales o nacionales de po-

blación de bajo ingreso, que tienden a ser más efímeros, aunque con frecuencia más vibrantes y están dedicados a un problema específico” (Reilly 1994:1; Herzer 1992:38), y valorarlas como “laboratorios” para ensayar y prestar servicios a sectores de bajos recursos, pero que están sobrepasadas por la magnitud de los problemas de pobreza y de distribución de la riqueza⁷.

La ciudad ingobernable

La pobreza en la ciudad

En los años noventa, en América Latina, los pobres - personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza- se concentran en las ciudades. Este es un fenómeno nuevo y creciente, que ha ocurrido en los últimos veinte años.⁸

7 Además porque, tal como Reilly (1994: 8-9) señala, “muchos de sus dirigentes de ONGs se resisten a poner en práctica decisiones tomadas por terceros. La meta de esos hombres y mujeres no es convertirse en proveedores sustitutos de servicios estatales, especialmente en vista de que no tienen voz en la formulación de políticas y programas”.

Cuadro 3
América Latina: porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza en áreas urbanas, 1970-1992

Año	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	México	Perú	Uruguay	Venezuela
1970	5		35	12	38	15	20	28	10	20
1980	7		30 (b)		36	16		35 (b)	9 (d)	18 (d)
1986	12		34 (c)	37 (c)	36	21	28	45	14	25
1990		50 (a)	39	34	35	22	34		12	23
1992		6		27	38	25	30		8	32

(a) 1987, (b) 1979, (c) 1987, (d) 1981. Fuente: CEPAL (1994), Cuadro 22, pp.158-159.

Si en 1970 en las áreas rurales se encontraba el 63 por ciento de los pobres de América Latina, hoy el 59 por ciento de ellos está en áreas urbanas. En cifras absolutas significa que el número de pobres que habita en las ciudades ha pasado de 44 millones a 115 millones de personas.

Las cifras que proporciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas indican que, en todos los países de la región, el efecto de la crisis económica de fines de los setenta y del ajuste estructural de los ochenta en adelante ha sido más fuerte en las áreas urbanas que en las rurales. Las mejorías recientes son sólo recuperación parcial de índices logrados en el pasado (Cepal)⁸.

Es en las ciudades donde se concentran los problemas de la pobreza y se expresan territorialmente las desigualdades económicas, sociales y culturales. Esta concentración de pobreza en las áreas urbanas crea nuevas y crecientes demandas por el suelo urbano, vivienda, infraestructura, servicios, integración y participación, demandas no satisfechas por las autoridades. Sin embargo, la gente sobrevive, construye sus propias alternativas en condiciones muy difíciles, organizándose, interviniendo en la ciudad, creando asentamientos, organizaciones productivas.

Heterogeneidad de la pobreza

Hoy está aceptado que no se puede hablar de pobreza como una categoría homogénea. Desde el punto de vista cuantitativo sobre la pobreza estructural –que comprende a aquellas personas que nunca han conocido una situación distinta a la de la pobreza–, los procesos de ajuste han agregado dos nuevas categorías de pobreza: la constituida por las personas cuyos ingresos han caído por debajo de la línea de pobreza y que no pueden alcanzar a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuyos ingresos son mayores que la línea de pobreza (Minujin y Kessler 1995). En ambos grupos es especialmente precaria la situación de las familias en que la mujer es la jefe del hogar.

Pero es especialmente desde perspectivas no cuantitativas que la pobreza es heterogénea. Individuos y familias “pobres” utilizan distintas estrategias para enfrentar su situación particular de pobreza dentro del mismo hogar. Más globalmente, existen en el mundo de la pobreza urbana culturas radicalmente diferentes, aquellas que Martínez y Palacios (1996) diferencian como “cultura de la decencia” y “cultura de la pobreza”, separadas ambas por

el dilema simple de “sobreponerse o dejarse estar”. Al respecto, lo central es que las políticas sociales orientadas a aliviar situaciones de pobreza que no incorporen esta diversidad, no necesariamente logran los impactos deseados.

La pobreza urbana tampoco tiene hoy necesariamente las características de “marginalidad”, tal como ésta se entendía en décadas pasadas. Afecta a familias que han vivido por varias generaciones en la ciudad, y que son parte de una cultura netamente urbana. Por otra parte, las expectativas de integración también han cambiado. En los años cincuenta, los procesos de industrialización, de crecimiento del Estado y de urbanización acelerada parecían ofrecer vías abiertas a la incorporación social. Hoy, cuando predomina el capi-

8 Si bien el porcentaje total de personas pobres en la región ha crecido levemente en términos porcentuales, la población urbana pobre en el período entre 1970 y 1990 pasó del 29 al 39 por ciento, mientras que la población rural disminuyó porcentualmente del 67 al 61 (Cepal 1994).

9 Los datos presentados en el Cuadro 3 muestran que con la sola excepción de Uruguay, en el resto de países los porcentajes de hogares bajo la línea de pobreza alrededor de los años noventa son mayores que los que existían en los años setenta.



tal financiero, cuando el tamaño del Estado se ha reducido y la urbanización está consolidada, los pobres urbanos viven en una situación de vulnerabilidad, caracterizada por la inseguridad ante un medio ambiente económico y social que cambia y los excluye. Frente a este mundo están desprotegidos: ya no cuentan con recurrir a la comunidad rural ni al Estado benefactor (Bengoa 1996).

No obstante, ante la ausencia o debilidad de estas formas de protección históricas, las familias y comunidades pobres han desarrollado respuestas y recursos diversos para enfrentar la crisis. Es lo que algunos estudios denominan como "capital social", constituido por "las normas, la confianza y las redes de reciprocidad que facilitan la cooperación mutuamente beneficiosa en una comu-

nidad" (Moser 1995). En otros términos, "capital social" se refiere a la cultura de una comunidad, a la sociabilidad interna de los pobres, a la capacidad colectiva de responder a la crisis (Bengoa 1996).

Segregación

Desde una perspectiva territorial, la concentración de pobreza en las ciudades ha forzado la tradicional segregación espacial, llegándose a casos en que "es difícil seguir hablando de una sola ciudad, ya que los grupos así segregados siguen vidas diferentes, confinadas - por preferencia o por fuerza- a diferentes contornos espaciales" (Portes 1989).

El paisaje de la segregación de las ciudades es hoy, sin embargo, diferente al de antes. Los bolsones de

pobreza ya no son la única variable. A ella se suma la autosegregación de los grupos de altos ingresos, el nuevo elemento de este paisaje. Algunas imágenes: Santa Fe de Bogotá, los grupos de altos ingresos del norte, sectores medios entre los enclaves altos y el centro de la ciudad, al sur y sudoeste barrios obreros y después, hasta los cerros, los pobres en subdivisiones ilegales (Portes 1989). Lima, los grupos de altos ingresos concentrados al sur y sudoeste de la ciudad, mientras las barriadas pobres cubren toda la periferia. Santiago, los grupos de ingresos medios al sudoeste, y los pobres en las zonas norte y sur de la ciudad. Rio de Janeiro, la pobreza aparece en la periferia de la ciudad.

La pobreza de la ciudad

Deterioro y fragmentación

Además de la concentración de pobres en la ciudad, del aumento de las desigualdades de ingresos de los habitantes urbanos, la ciudad en sí misma se ha empobrecido en las dos últimas décadas (Herzer 1992).

En el caso de Argentina, Minujín y Kessler (1995) estiman que entre 1980 y 1990 el conjunto de la sociedad perdió casi un 40 por ciento de sus ingresos. Señalan que "al empobrecernos como sociedad hemos perdido también bienes y servicios que colectivamente nos pertenecían en cuanto ciudadanos: hospitales deteriorados, escuelas sobrecargadas, rutas pagas que reemplazan a las gratuitas, espacios privatizados que antes eran públicos, un medio ambiente descuidado, servicios encarecidos, nuevos impuestos sin un aumento de los ingresos, son algunos capítulos del empobrecimiento colectivo de una ciudadanía". El empobrecimiento de las ciudades se expresa así en la re-

ducción de su capacidad para mantener al día los servicios públicos, la infraestructura física y, en casos extremos, para mantener la seguridad de la población.

Cuando las ciudades entran en esos procesos de crisis, los barrios funcionan gracias a que diferentes grupos sociales -organizaciones de vecinos, de pobladores, de padres y apoderados en establecimientos educacionales, ONGs, centros de madres- asumen tareas compensatorias de prestación de servicios públicos (Pírez 1994b). Sin embargo, existen casos en los cuales los usuarios van más allá de realizar actividades compensatorias o complementarias, y se autonomizan. Por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo han desarrollado servicios parciales de transporte y de energía eléctrica (generadores individuales) (Douzant y Faxas 1991); o en Buenos Aires existen cooperativas que prestan servicios autónomos de dotación de agua potable (Brunstein 1991; Montaño y Coig 1991; Rodríguez 1991).

El colapso de los servicios urbanos tiene efectos, en primer lugar, sobre la estructura física y social de la ciudad. Al colapsar los servicios públicos, sectores urbanos se desgajan de la ciudad, autonomizándose; la ciudad deja de funcionar como una entidad interrelacionada (Pírez 1994a). Y también afecta la eficiencia de las actividades productivas urbanas. Al no existir servicios públicos -en su sentido literal-, el conglomerado urbano pierde sentido y limita la competitividad de las actividades allí localizadas. Coing (1989) señala, como ejemplo, las dificultades que existen para el desarrollo de actividades económicas de punta en ciudades que no pueden asegurar un servicio de energía eléctrica sin cortes diarios.

Como hemos visto, en términos generales el panorama urbano no es muy alentador: empobrecimiento tan-

to de los habitantes, como de las mismas ciudades. Sin embargo, en términos de Reilly (1994), "hay una buena noticia: una tendencia hacia la democracia y el (re) descubrimiento de la sociedad civil, lo que existe fuera de la familia, pero sin llegar al Estado".

Violencia en la ciudad

America Latina es un continente violento. De acuerdo con las cifras oficiales, Colombia tiene la tasa más alta de homicidios del mundo; le siguen Brasil, Panamá y México (F. Carrión 1994). En las encuestas, la delincuencia o la inseguridad aparecen mencionadas cada vez con más frecuencia como problemas de gran relevancia para quienes viven en las ciudades. Algunos autores (Vanderschueren 1994, Martínez) señalan que en las ciudades el origen de la violencia está relacionado con una crisis de integración.

Los cambios económicos y sociales que están ocurriendo en América Latina significan pasar de sistemas de movilidad social colectiva a sistemas de movilidad social individual. "La gran transformación que se produce es la aparición de lo que Merton llamaba la anomia innovativa, es decir, la aceptación de los fines

-en este caso, éxito económico- junto con la no aceptación de los medios, porque los medios que están a disposición del mundo popular no conducen ciertamente a los fines de la riqueza que la sociedad valora. Así aparecen las conductas desviadas" (Martínez 1995).

Ciertamente los valores de un mundo urbano popular, en donde predominaba una cultura obrera, desaparecen en los cambios recientes. La desmaterialización de la producción industrial y las medidas de ajuste estructural han modificado el mercado de trabajo, reduciendo el número de empleos permanentes y aumentando los requisitos de calificación de la fuerza laboral. Dos consecuencias: se genera un mercado de la informalidad el que además, es el lugar donde "los pobres de la ciudad se educan técnica e ideológicamente"; y disminuye el papel de los sindicatos y partidos políticos, que en décadas anteriores "constituían escuelas de formación de los trabajadores y sus familias" (Vanderschueren 1994)¹⁰.

Como se puede ver, estos cambios tienen importancia en las conductas de los habitantes de las ciudades. Por una parte, producen atomización social: "el individualismo, la

Cuadro 4
Tasa de homicidios en algunos países de América Latina (1986-1989)

Países	Homicidios	Población (millones)	Tasa por cienmil
Asia y sudeste asiático	19.902	1.504,1	1.3
Europa y América del Norte (sin México)	31.509	676,0	4.7
América Latina (sin Colombia)	58.226	344,9	19.8
Colombia	25.030	32,3	77.5
Brasil	37.279	151,6	24.6
Panamá	573	2,5	22.9
México	17.804	86,3	20.6
Uruguay	137	3,1	4.4

Elaborado a partir del Cuadro 1 en F. Carrión (1994).

angustia, la inseguridad y el marginamiento” de los más pobres atentan contra la creación de identidades colectivas necesarias para constituir ciudadanía. Y, por otra, segregación espacial: el temor, la inseguridad traen como contraparte espacial urbana la pérdida de los espacios públicos físicos, la creación de ghettos residenciales amurallados de los grupos de altos ingresos (F. Carrión 1994).

En el límite de la atomización y de la segregación social aparece la privatización de la seguridad pública. Agencias de seguridad se hacen cargo de resguardar la seguridad de casas, conjuntos o barrios de quienes pueden pagar por sus servicios; los escuadrones de la muerte se hacen cargo de los sospechosos (Oviedo 1995).

Además de la violencia delictiva, hay en las ciudades de América Latina una violencia social latente que periódicamente se expresa: el Caracazo, Chiapas, Curanilahue, Buenos Aires, Córdoba. En Argentina, por ejemplo, durante los últimos años han estallado conflictos violentos en las capitales de provincias: en Ushuaia, Tierra del Fuego, muertes en protestas ante el desalojo de una planta armadora; en Córdoba incendiaron la Casa Radical (partido gobernante en la provincia); en Chaco hubo enfrentamientos con la policía, y en San Juan, manifestaciones destruyeron una propiedad del Secretario de desarrollo humano de la ciudad, quemaron autos policiales y vehículos de bomberos.

La pobreza urbana y “governance”

¿A qué se deben los actos de violencia urbana?

Que los pobres salgan a las calles de Santiago del estero e incendien el edificio del Le-

gislativo y las casas de políticos locales y funcionarios públicos es, para Pedro Pérez (1994a), una respuesta a “una ruptura anterior producida por los responsables de las decisiones políticas. La ruptura desencadenadora parece salir de la suma de la privatización de la política -acumulación política y económica por parte de los políticos- y de las medidas de ajuste”.

Es un asunto de *governance*: “por una parte, pobreza y grandes necesidades, aparatos productivos muy débiles y fuerte peso del empleo público. Por la otra, falta de transparencia, utilización privada de bienes públicos, acumulación de poder y corrupción, necesidad de integrar clientelas para recibir bienes públicos. Lo nuevo es la llegada del ajuste, en especial la reducción del empleo público, y el mantenimiento, tal vez la ampliación, de la dominación patrimonialista plagada de vicios” (Pérez 1994a).

Estos estallidos de los últimos años en las ciudades de la región expresan la reacción de la gente frente a la profundidad de los cambios ocurridos. Son manifestaciones de los nuevos conflictos y demandas sociales surgidos de la interdependencia e interpretación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Su resolución depende de cómo ejercen el poder estos actores en el ámbito urbano, es decir, la forma y proceso de *governance*.

La ciudad, espacio importante en el desarrollo de la sociedad, vive hoy transformaciones fundamentales en sus estructuras políticas, sociales y económicas, una situación cambiante generadora de mucha incertidumbre. Un aspecto relevante de este proceso es la renovación de la importancia relativa del espacio local respecto al Estado central y a los espacios nacionales. Tanto la expresión de problemas y conflictos relacionados con la pobreza urbana y los problemas sociales -desigualdad,

precarización de la fuerza de trabajo y el empobrecimiento de la ciudad- como la resolución de estos parecen dirigirse a lo local y a experimentarse allí. Estos problemas representan demandas insatisfechas y conflictos no resueltos derivados de la contraposición de intereses económicos, sociales y políticos en el ámbito urbano.

Por tanto, es condición clave para la sustentabilidad de la ciudad su capacidad de conjugar las distintas demandas originadas en el mercado, en la sociedad civil y en el Estado, y distribuir los beneficios y costos sin perjudicar la estabilidad y continuidad del desarrollo de la sociedad. Nos parece importante preguntarnos cuáles son las estrategias de resolución de conflicto (y sus implicaciones: la incorporación de las demandas de sectores sociales a la ciudad) que operan, y que podrían operar, en nuestras ciudades.

¿Cómo se incorporan los pobres a la ciudad?

Pérez (1994a) responde a esta pregunta señalando que los gobiernos incorporan a los pobres de dos maneras fundamentales: ya sea a través de la integración formal y política, en el caso de estrategias democráticas; o de la represión y exclusión territorial, en las estrategias autoritarias. Estas estrategias no se refieren solamente a la incorporación de “los pobres”, sino también a la de sectores sociales sujetos a otros problemas sociales.

Las estrategias democráticas de gobernar tienden a desarrollar experiencias basadas en alguna forma de integración. Esta puede estar relacionada con la representación política, la representación simbólica, formas de clientelas políticas o la participación (Pérez 1994a).

10 Estos procesos son particularmente prevalecientes en el Cono Sur de América Latina.

Los casos de participación efectiva de los sectores populares en los gobiernos locales son escasos. Tomando en cuenta diversas experiencias de participación popular en América Latina, Herzer y Pérez (1988) observan dos condiciones fundamentales para que ella ocurra: la existencia de organizaciones populares con cierta presencia en el nivel local, y la ocupación de cargos en el municipio por partidos o individuos favorables a la participación popular. Concluyen indicando que de estas dos condiciones, la segunda es determinante. Apuntan así al hecho de que el Estado y la sociedad civil "están directamente coordinados: no hay sociedad civil si no hay un Estado que la acepte y que la fomente" (Hinkelammert 1992:199).

El hecho de identificar dos formas tipo para incorporar a sectores sociales de la ciudad -democrática y autoritaria-, no quiere decir que una sola de estas formas prevalezca, ni que no se entremezclen. En este sentido, Pérez (1994a) muestra que la ciudad, y sus procesos económicos, sociales y políticos se mueven entre la ilegalidad y la legalidad, y entre el enfrentamiento y el consenso político.

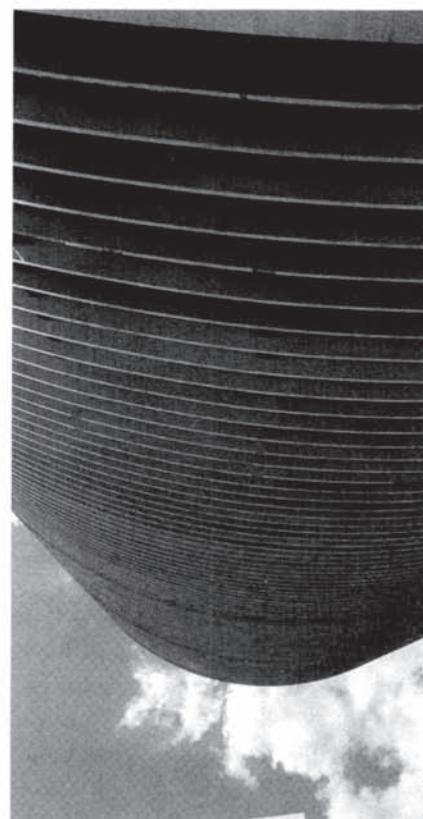
El gobierno de la ciudad

Nuevas respuestas a nuevas demandas

Frente a la pregunta respecto a cómo se resuelven los conflictos sociales en esta nueva escena urbana surgen diferentes respuestas.

¿Fortalecimiento del municipio?

Muchos ven en la institución del municipio la instancia de gobierno en la ciudad con la capacidad de articular y conjugar las distintas demandas emergentes desde la sociedad civil, el mercado y



el Estado. Así asignan al municipio un *rol* protagónico en el desarrollo sustentable de las ciudades latinoamericanas.

Es cierto que los municipios han comenzado a tener más importancia política durante los últimos diez a quince años y que seguirán adquiriendo más importancia en el futuro. Esta revalorización del municipio ha sido resultado de los procesos de democratización experimentados en los años ochenta, de las reformas del Estado, de la descentralización y desconcentración administrativa y de la aplicación de políticas sociales compensatorias para aliviar la pobreza, entre otras causas.

El municipio latinoamericano, no obstante, no está consolidado, experimenta un proceso de cambio institucional. Con la descentralización se ha visto fortalecido en aspectos administrativos, pero frecuentemente el traspaso de competencias que ello significa se ha hecho sin un traspaso correspondiente de autoridad efectiva ni acceso a recursos financieros adecuados. Con el proceso de democratización se ha visto el comienzo de la creación de mecanismos de participación política y de participación ciudadana y comunitaria, pero con escasa capacidad de respuesta a las necesidades de la población. Los municipios son instituciones generalmente débiles, de poco poder económico, político e ideológico, limitados en su autonomía, autoridad, legitimidad y capacidad de gestión. Y, a veces, con poca claridad sobre su *rol* en la vida política local de la ciudad. Los estallidos sociales ocurridos en distintas ciudades lo demuestran.

¿Participación de la sociedad civil?

El camino para la resolución de conflictos sería, para otros, una mayor democratización de los aparatos decisionales: que la so-

ciedad civil participe en la gestión del desarrollo, transmitiendo sus demandas reales hacia los niveles de toma de decisiones. Piensan en los movimientos sociales tan protagónicos en el paso de la democracia en todo el mundo, y en particular en América Latina. Durante los años ochenta estos movimientos eran agentes políticos, con agendas concretas, y con una relación horizontal con el Estado. Ellos, y "la tercera ola" de organizaciones no gubernamentales que los apoyaban, eran una oposición política al poder del Estado.

Actualmente, la realidad es otra. Con la implementación del nuevo modelo de gestión pública descentralizado, pero aún vertical y privatizado en la prestación de servicios, las ONGs se han visto "estatizadas". Son contratadas y financiadas por el Estado para entregar un servicio social público. De su eficiencia y de su capacidad de competir, depende su contratación. La participación, en este modelo, típicamente se vuelve pasiva y de naturaleza informática y no se acerca, en general, a la participación activa y reivindicativa de los años ochenta (Gaete 1995:2).

¿Intermediación de partidos políticos y mercado?

Se plantea también que la política y la economía pueden ofrecer vías para la solución de conflictos. En teoría, los partidos políticos son uno de los canales "legítimos" para la expresión, negociación y resolución de las demandas sociales. Sin embargo, los partidos políticos en América Latina han caído en el descrédito, como dice el presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el panameño Ricardo Arias, "la lucha por la democratización de nuestros países fue por mucho tiempo la gran meta de nuestros pueblos. Pero ahora la gente tiene otras necesidades, y son estas las que nos cuesta reconocer" (*El Mercurio*, Santiago, 27 agosto 1995).

Para muchos, el mercado parecía ahora contener las soluciones a los problemas sociales. Pero, como hemos visto con los efectos del ajuste en el mercado laboral urbano, el mercado no soluciona todos los problemas. Además, produce distorsiones. Por ejemplo, siempre existen externalidades relacionadas a las decisiones de producción, sea que éstas se generen en el ámbito estatal o en el mercado. Y si, como dice Heilbroner (1992:89), la producción ocurre principalmente en el sector privado, los problemas -los conflictos generados por externalidades- se originan allí, en el mercado. Sin embargo, la sociedad civil, los individuos y sectores sociales sufren las consecuencias -los costos- de esos conflictos.

Entonces, ¿cómo se podría gobernar para efectivamente incorporar las demandas sociales emergentes en las ciudades? Es una pregunta difícil, porque no se puede responder sin un *empowerment* de la ciudadanía y un cambio y fortalecimiento institucional paralelo. Para ello es clave una comprensión de la vida local, de tal manera que tanto los cambios como los reforzamientos tengan en cuenta los rasgos culturales y mecanismos de funcionamiento particulares de la sociedad local¹¹. Desconocerlos o ignorarlos es mala *governance* y crea problemas de gobernabilidad, y quizás requiere reinventar el gobierno de la ciudad.

Reinventando el gobierno de la ciudad

Para poder reinventar el gobierno de la ciudad hay que primero comprenderlo. La perspectiva de *governance* -referida al patrón de relaciones formales e informales entre los actores que operan en y a través de la ciudad, y a cómo ellos deciden sobre el desarrollo urbano- nos hace ver que el gobierno de la ciudad no está represen-

tado únicamente por la institución de gobierno local¹². Abarca no sólo las instancias gubernamentales -el municipio, el gobierno regional, las instancias locales del gobierno central- y sus funciones, sino también a los actores que están fuera de la esfera del Estado: el empresario local, nacional e internacional, los partidos políticos, los movimientos sociales, las ONGs, etc. Además, incluye sus relaciones oficiales y jurídicas y sus relaciones informales basadas en la cultura y en la vida política local (Naciones Unidas 1995:4-10).

Tomando este punto de vista, nuestra hipótesis, como señalamos al principio de este artículo, es que el descontento social, los problemas sociales, la pobreza, etc., son conflictos que surgen porque las estructuras políticas, administrativas y sociales no se han adaptado a los cambios en la realidad de la ciudad latinoamericana. Esta realidad se expresa tanto en una economía urbana cada vez más globalizada, como en el empobrecimiento y polarización de la so-

11 García Canclini (1995:178-80) nos ilustra este punto describiendo la complejidad del trabajo social -modernización- en una comunidad de migrantes bolivianos en un barrio de Buenos Aires. En un programa "orientado a democratizar el acceso a la cultura y promover nuevas prácticas de participación política que removieron el autoritarismo existente en el tejido social se dio el paradójico dilema: los promotores con intenciones democratizadoras descubrieron que era necesario pactar con caciques internos del barrio para lograr poder de convocatoria e insertarse en las estructuras socioculturales locales".

12 Cuando hablamos de decisiones sobre el desarrollo nos referimos tanto a las decisiones visibles -las políticas, los programas, etc.- como a "las decisiones no visibles". Además, pensamos que es en aquellas decisiones no visibles -es decir, el proceso por el cual aquellos problemas o temas de preocupación que no llegan a ser legítimos en el proceso de toma de decisiones- donde hay claves sobre cómo se distribuye el poder y los costos entre los actores en la ciudad (Bachrach y Baratz, 1969).

ciedad civil urbana como resultado de los cambios económicos mundiales y el ajuste, y en las dimensiones culturales de la vida local -políticas y otras- en la ciudad.

El desarrollo sostenible de la ciudad latinoamericana implica una incorporación efectiva de los conflictos sociales y de las demandas emergentes de ellos en el proceso de toma de decisiones sobre la gestión del desarrollo urbano y en el aparato para ello -el gobierno de la ciudad-. Esto cubre una parte de la construcción de la ciudad democrática, la dimensión política. La otra dimensión es la económica, y escapa al alcance de este artículo¹². Pero, en principio, cualquier acción debe hacer confluir las políticas sociales y las políticas económicas. "Su aplicación supone superar las intervenciones aisladas o las políticas homogeneizantes, como también los modelos de planteamiento urbano tecno-burocráticos, que estén dirigidos, no sólo a mantener una plataforma de exportación, sino también a conformar un tercer polo económico que es mucho más que un medio ambiente para las empresas orientadas al mercado mundial" (Coraggio 1994:252-3).

En general, los estudios urbanos realizados en América Latina no analizan la ciudad desde esta perspectiva, e incluso el conocimiento empírico es muy limitado en este campo. Sin embargo, es un área de investigación de mucha importancia, tanto en relación con la búsqueda de soluciones para los problemas manifestados en las ciudades, como a la necesidad de gestionar la ciudad de una manera estratégica, considerando su inserción global, nacional, regional y local.

Reinventar el gobierno de la ciudad implica un proyecto de ciudad: una concertación entre municipios, la ciudadanía, los otros actores socia-



les, los partidos políticos, el empresariado y otras instancias del gobierno nacional y sus instituciones (Borja 1995). La construcción de este proyecto consiste en una efectiva democratización del espacio público de la ciudad, donde los distintos intereses tengan acceso igualitario a los procesos de toma de decisión sobre la gestión, producción y reproducción de la ciudad, y participación real en ellos. Es en el espacio público donde se manifiesta la interconectividad de las decisiones políticas y de sus resultados sobre el uso de los recursos económicos y sociales para el desarrollo. Allí convergen los actores del mercado, de los distintos sectores sociales de la sociedad civil y del Estado y se hace manifiesta su interdependencia. Y es en el espacio público donde el sistema de toma de decisiones resuelve los problemas y conflictos sociales, económicos y políticos generados por la producción para el desarrollo.

Reinventar el gobierno de la ciudad significa entonces la creación de

una visión compartida sobre la ciudad y un compromiso de largo plazo con ella. Este proyecto se construye sobre la base de un proceso continuo de planificación estratégica y comporta un fortalecimiento de las instituciones locales democráticas: la ciudadanía, los municipios, los partidos políticos y las otras instancias de gobierno del ámbito local (Borja 1995). Es un proceso de cambio institucional y cultural que, como todo cambio social, despierta cierta resistencia en muchos frentes:

- en los agentes del gobierno central que no confían en la capacidad de gestión de las instancias regionales y locales, o que temen que el proceso caiga preso en el clientelismo;

- en los actores políticos tradicionales, cuyo poder siempre fue apoyado por el Estado central y que ven en el cambio la posibilidad de que su acumulación política sea redistribuida;

- en aquellos actores políticos locales que se oponen a la participación de nuevos actores con poder político;

- en los funcionarios municipales que sienten el cambio amenazante a su estilo de gestión pública;

- en los actores sociales, cuya referente siempre fue el gobierno central, vía las redes de la clientela (Velázquez 1994).

Queremos destacar dos aspectos que requieren atención en la reinención de los gobiernos locales en América Latina (Stren y Gombay 1995:7). El primero se refiere a la dimensión política de los gobiernos locales, en particular a la participación política, esto es, a la relación entre sociedad civil y sociedad política, y que a escala local se expresa por la creación de una ciudadanía activa. El segundo se refiere a la dimen-

sión estructural de *governance* local y tiene relación con la reforma del Estado y el desarrollo de nuevos modelos de relaciones intergubernamentales a nivel local.

Incorporando estas dimensiones, en la siguiente sección sugerimos varias propuestas específicas relacionadas con el fortalecimiento de tres instituciones locales necesarias para la democratización del espacio público de la ciudad: la ciudadanía, el municipio y las áreas metropolitanas.

La ciudadanía

En general, existe una ciudadanía latente en América Latina que se hace visible en circunstancias particulares: en situaciones límites, como desastres naturales, emergencias locales, crisis políticas, carencias extremas, en la concurrencia a elecciones, en las ocasionales identificaciones simbólicas con el lugar de nacimiento y/o de residencia -el pueblo, el barrio, la esquina-; en movimientos sociales urbanos, entre otras.

¿Cómo activar y desarrollar esta ciudadanía? Primero, hay que hacer que las personas se identifiquen positivamente con el lugar donde viven. Son varios los factores que inciden aquí. Uno, que el lugar ofrezca una buena calidad de vida (infraestructura, servicios, paisaje, etc.), y que esa calidad de vida esté reconocida por otras comunidades. Otro factor es que el lugar tenga una historia de la cual el habitante se sienta actor o heredero. O que el lugar tenga una cultura local propia e identifiable, o un "imaginario" que dé identidad simbólica valorizada (Borja 1995).

Cuando esta identificación positiva no existe hay que comenzar a construirla, para lo cual hay variados caminos. Hay que crear una identificación física con hitos espaciales (plazas, monumentos, espacios públicos, áreas verdes, centros comerciales). Hay que modificar una historia mala,

o crear una positiva, mediante actos y rituales que generan una cultura propia, tales como campañas, fiestas, eventos. Y, por supuesto, asegurar una dotación básica en bienes y servicios públicos (García Canclini 1995:89-90).

Segundo, hay que desarrollar el interés por incidir en la vida de un lugar que hace referencia a la satisfacción personal que traería una acción orientada a influir positivamente en la comunidad, por pequeño que sea su impacto. Este sentimiento está bien. Es lo que se considera valor cívico. Pero no necesariamente crea ciudadanía. El interés por incidir en la vida de un lugar está directamente vinculado con el logro de gratificaciones objetivas: "mejorar el barrio", y ser un interlocutor válido frente a las autoridades, no en el sentido de ser reconocido, sino de tener poder. Tras la gratificación hay un resultado concreto. Aquí el municipio tiene un papel clave. El municipio puede desarrollar o liquidar el interés por incidir en la vida local. Si quiere facilitarlo tiene que establecer mecanismos y canales de participación donde realmente otorgue poder a la gente en el marco de la legitimidad, tanto del poder decisional que le es privativo, como del que corresponde a la ciudadanía. También por el lado de la gente se puede desarrollar o liquidar el interés por incidir en la vida local. La poca flexibilidad de las organizaciones, su rigidez, su "espíritu burocrático" no sirven exactamente al desarrollo de ciudadanía.

Tercero, recordar que "las identidades se constituyen, no sólo en el conflicto polar entre clases, sino también en contextos institucionales de acción -una fábrica, un hospital, una escuela-, cuyo funcionamiento es posible en la medida en que todos sus participantes, hegemónicos o subalternos los conciben como 'un orden negociado'" "(García Canclini 1995: 175). Así, desde una perspectiva cul-

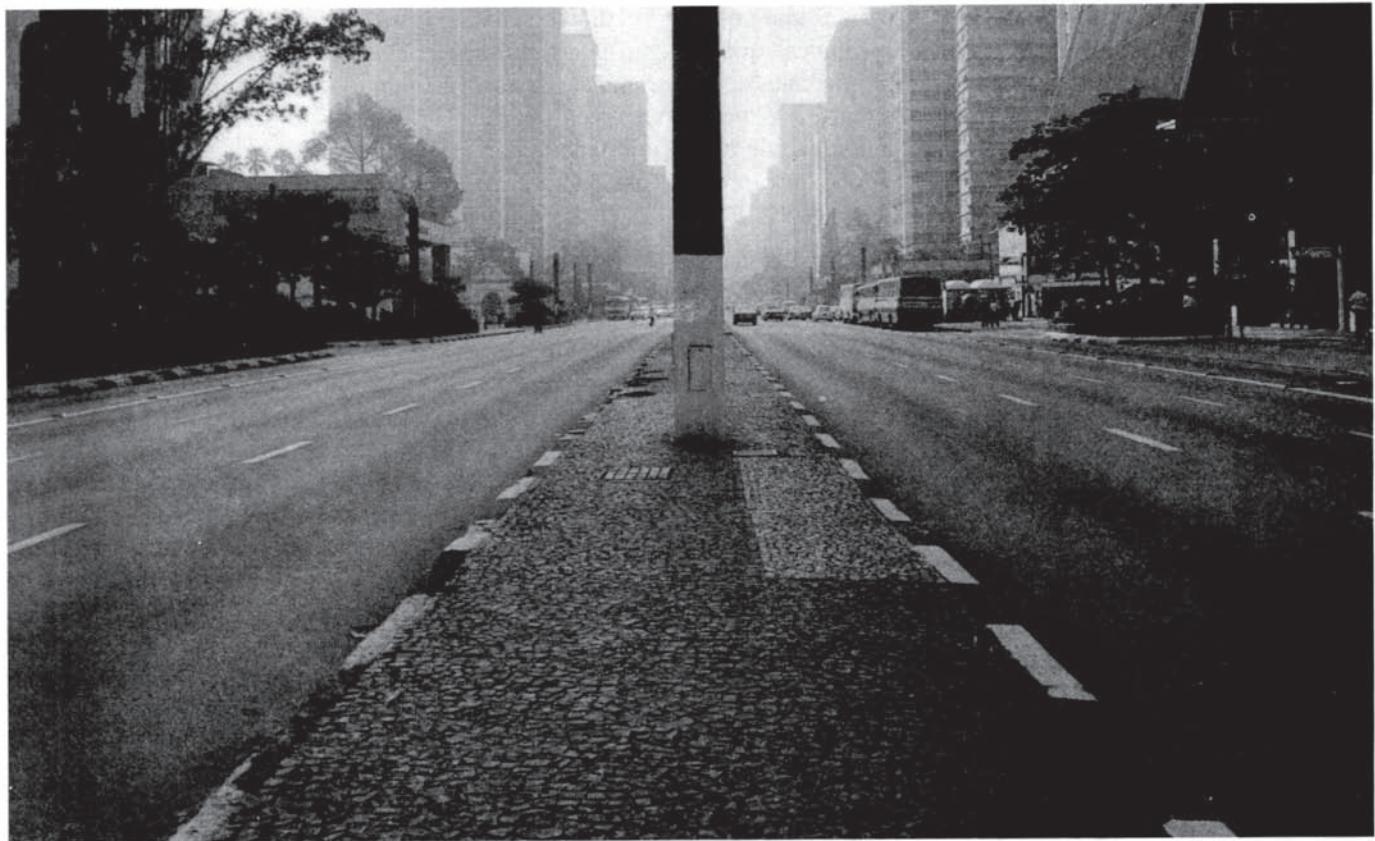
tural se rescata la importancia de la negociación en la constitución de las identidades urbanas. No sólo son importantes los conflictos de los movimientos sociales con los gobiernos locales, sino también las negociaciones entre ambos, y la realización de actividades conjuntas. "La noción de ciudadanía está relacionada con la creación de una esfera de lo 'público', la cual no está subordinada al Estado, ni disuelta en la sociedad civil, sino que se reconstituye en la tensión entre ambos" (García Canclini 1995:189).

Finalmente, en este proceso de "creación de ciudadanía" hay que asegurar las posibilidades reales de incidir en la vida del lugar. Y, en un contexto de descentralización y desconcentración, el eje central de este sistema es la participación en el municipio.

El municipio

Como señalamos anteriormente, en los últimos años ha habido reformas en el sistema municipal en casi toda América Latina: elección de alcaldes, aumento de rentas municipales, transferencia de competencias, leyes que facilitan la participación en aspectos de la gestión local, entre otras. Esto es un gran avance, pero de por sí no asegura las posibilida-

13 Existen muy pocas propuestas alternativas al enfoque neoliberal dominante. José Luis Coraggio propone una estrategia de desarrollo urbano que contempla un fortalecimiento estratégico de la economía popular urbana (Coraggio 1994). Michael Storper (1994:58) indica que hay dos trayectorias para el desarrollo económico: la tecnología y las conven-ciones. Propone la construcción de institu-ciones que promueven la confianza, la seguridad y la cooperación. Estas institu-ciones deben "estar situadas dentro del contexto actual de los actores, no deben estar impuestas como reglas formales contra la voluntad de los actores involu-crados".



des reales de incidir en la vida del lugar. Para ello, hay pocos canales realmente efectivos. Y, a pesar de existir instituciones formales hay una cultura burocrática que frecuentemente inmoviliza o obstaculiza -o, en todo caso, no facilita- la incidencia de la gente en la vida local. El interés -existente o creado- por participar en la gestión de la vida local requiere un "conductor": un sistema -formal o informal- que le dé forma, le dé dirección y le permita fluir. Para cumplir esa función se requiere crear mecanismos de participación allí donde no existan, o cambiar la cultura municipal allí donde la existente obstruya los canales o trabe los mecanismos. En este sistema, un elemento esencial es el flujo de información. El municipio debe comunicarle a la ciudadanía, no sólo sus deberes, sino sus derechos en la gestión de su comunidad. A la vez, la ciudadanía debe ir más allá de

manifestar a través del voto su preferencia por uno u otro proyecto de gobierno local, por uno u otro candidato, y realmente ocupar los conductos que canalizan su posibilidad de incidir. Lo que nos retrotrae al interés por participar.

Para participar efectivamente en el proceso de coordinación de las demandas de distintos intereses en el ámbito de la ciudad, la institución del municipio tiene que combinar eficiencia administrativa con una real capacidad de gobernar. Esta capacidad de gobernar requiere de un Estado descentralizado, que haya traspasado poder al municipio. Para ejercer ese poder el municipio debe tener tres capacidades: de mando y conducción; de coordinación; y de implementación de sus decisiones (Prates y Diniz 1995). Es decir, requiere de un municipio que tenga control efectivo sobre la definición de sus prioridades y sus estrategias; que sepa administrar el

conflicto inherente al proceso político, integrándose a otros niveles de gobierno y a otros intereses en la ciudad y negociando con ellos, y que tenga el liderazgo y la autoridad para implementar sus políticas y programas. Esto implica, en muchos países latinoamericanos, reformas adicionales en las leyes orgánicas municipales, que otorguen a los gobiernos locales poderes y recursos adicionales y más flexibilidad en la administración de sus deberes, por ejemplo, sobre el tipo de arreglos inter o intragubernamentales para implementar y administrar las políticas y programas locales.

Areas metropolitanas y relaciones intergubernamentales

La resolución de conflictos en la ciudad requiere de diferentes niveles de negociación y decisión: local, regional, nacional, e

incluso internacional. El marco metropolitano es un buen ejemplo de esto. A pesar de que en su mayoría las grandes ciudades latinoamericanas comprenden extensas áreas metropolitanas, con la sola excepción de Quito, no existen gobiernos metropolitanos efectivos en la región. En las demás ciudades se encuentra, en general mucha fragmentación institucional y geográfica al nivel gubernamental. El reinventar el gobierno de la ciudad requiere una clarificación de responsabilidades y funciones de los

distintos niveles de instancias de gobierno que operan en la ciudad (Pírez 1994b). Esto podría manifestarse en la creación de un área metropolitana como autoridad gubernamental basada en las funciones que debiera cumplir, y sin perjudicar la autonomía y autoridad de los municipios y la identidad de las comunidades locales (Naciones Unidas 1995:15). También en otros casos, podría referirse a un fortalecimiento institucional de los ministerios centrales.

Sin duda, muchos de los conflictos que se manifiestan en la ciudad

no se solucionan sólo desde el municipio y, en algunos casos, se requiere cierto grado de resolución desde el nivel central. Pero, más allá de qué nivel intervenga, lo importante es no contener la ciudad ingobernable recurriendo a la restricción de las demandas sociales o a la búsqueda de eficiencia a ultranza. Lo importante es comenzar a entender cómo de hecho se está gobernando la ciudad, y buscar soluciones a partir de esa comprensión. Es, así, un asunto de *governance*.



**Los espacios de Foro Nacional por Colombia han crecido a la medida
de las esperanzas de un país que reclama propuestas que
consoliden nuestra democracia**

Con solidaridad

CORPORACION CASA DE LA MUJER DE BOGOTA

Oscar Arango Gaviria
Profesor Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente de la Fundación Espiral.

Política cafetera, gobernabilidad y representación gremial

Oscar Arango Gaviria

En este artículo se revisan las condiciones de la crisis cafetera colombiana durante 1996, se describen las formas de intervención de la federación nacional del gremio y de sus comités departamentales, al igual que el impacto de las decisiones adoptadas en el Congreso Nacional Cafetero. Estudiados esos procesos y la relación de fuerzas derivada de los mismos, se pasa luego a explicar los componentes de la situación creada a partir de la reactivación internacional de los precios en 1997, proponiendo una lectura que integre la economía y la política en los nuevos escenarios de la producción del grano y destaque los procesos ambientales. Las notas terminan con unas propuestas de trabajo que integren la responsabilidad política, tanto de las autoridades gubernamentales como de las organizaciones de la sociedad civil.

La Colombia cafetera de 1996

Para empezar, recordemos que con muy pocos antecedentes en su historia, los presidentes de los comités departamentales y municipales de cafeteros de Colombia aparecieron, con nombre propio, suscribiendo una carta a los miembros *gremiales* del Comité Nacional¹ en donde expresaban su preocupación por los devastadores efectos de la revaluación del peso frente al dólar: en cinco años se habían dejado de per-



cibir por este concepto 2.600 millones de dólares, el equivalente a dos cosechas anuales². De continuarse, la política revaluacionista habría ocasionado la inviabilidad financiera del Fondo Nacional del Café (FNC) y, por este conducto, la garantía de compra de la cosecha cafetera en 1997 habría quedado en entredicho.

En opinión de estos dirigentes, “el problema no se resuelve con el aumento de la productividad. De hecho no hay sector en el mundo que se le pueda someter a la prueba de incrementarla en un promedio de casi el 10% anual como se nos ha exigido a los caficultores desde 1991 y parece planearse en el futuro debido a la proyectada bonanza minera de Colombia.

“Basta recordar cómo los salarios, que integran el 75% del costo de producir café,

son hoy los más altos de América Latina y casi el doble frente a los demás países cafeteros de la competencia, por el simple fenómeno de la revaluación, sin que se pueda sostener que los jornaleros hayan aumentado su poder de compra". La carta finalizaba con estas tres preguntas: sigue siendo viable la caficultura colombiana? ¿Es viable Colombia con un 'apagón' en su industria cafetera? ¿Qué harían los tres millones de colombianos que viven del café?, Eran, pues, interrogantes estructurales.

La respuesta no se hizo esperar y por los mismos medios, y con el mismo título³ los miembros *gremiales* ensayaron a dejar en claro que, compartiendo el diagnóstico, reclamarían del gobierno una modificación sustantiva de la política macroeconómica porque "el proceso de revaluación ha colocado a la caficultura en un nivel de costos (por efecto del mayor valor de la mano de obra, los servicios e insumos), muy por encima de los demás países productores, en los cuales se ha registrado una menor inflación y una tasa adecuada de devaluación".

Adicionalmente, esta comunicación nacional buscó clarificar que en la interlocución con el presidente de la República éste, no sólo dijo compartir los planteamientos de los cafeteros, sino que expresó su impotencia para intervenir la tasa cambiaria, un instrumento en manos de la Junta del Banco de la República, creándose así un auténtico círculo vicioso para los caficultores, quienes mantenían su confusión al momento de decidir ante quién exactamente debían dirigir sus reclamaciones esenciales.

Para los observadores, esta forma de acceder a la opinión pública nacional se explicaría por las difíciles condiciones de la coyuntura y por los muy limitados logros que había obtenido el Comité Nacional en sus negociaciones con las autoridades económicas del país (léase Ministerio de Hacienda y Junta Directiva del Banco de la República). Pero detrás de la comunicación también se escondía, sin duda, la necesidad de recuperar legitimidad política para la Federación, otorgando el protagonismo a sus comités departamentales y municipales, y mostrando ante el país una dirección nacional y una gerencia general que recibía en ese momento difícil el monolítico respaldo de sus

bases, las cuales, al tenor de la misiva citada, sólo esperarían las orientaciones de sus jerarquías para proceder en consecuencia.

Por otra parte, debe recordarse que entre 1993 y 1996 había ido en ascenso la capacidad de convocatoria y de movilización de Unidad Cafetera -UC-, lo cual representaba para la Federación una pérdida de control político que era preciso frenar tomando la iniciativa, porque seguramente se consideraba que más tarde se podría estar recorriendo el camino del no retorno por cuanto la suerte de la propia estructura organizativa de la Federación se mantenía atada orgánicamente a lo que le ocurriera con las finanzas del Fondo. El colapso de éste sería, inexorablemente, la progresiva extinción de aquella. Al menos así empezaba a manifestarse en la cada vez menor presencia de las obras e inversiones sociales que los comités habían ofrecido históricamente y ya no estaban en condiciones de financiar.

La proximidad del Congreso Cafetero⁴, máxima autoridad del gremio, era otro factor que ayudaba a comprender el significado político de los movimientos estratégicos que por aquellos días se desplegaron. De hecho, este sería un evento donde las presiones para una clara rendición de cuentas y para la adopción de soluciones integrales no darían tregua y, por tanto, era de gran utilidad política preparar a la opinión pública acerca de los temas que ocuparían la parte sustantiva de la discusión.

1 Debe recordarse que en dicho Comité, además de los representantes de los caficultores también participa el gobierno nacional. El Congreso cafetero de diciembre de 1996 aprobó una reforma estatutaria donde se confirma que "el ministro de Hacienda tendrá tantos votos cuantos sean necesarios para equilibrar el poder de voto entre el gobierno y los representantes cafeteros. Cuando ocurrán empates al votarse una medida los dirimirá el Presidente de la República". Por supuesto, esta disposición le otorga a la Federación un carácter sui generis.

2 Alerta Cafeteros (aviso pagado de página entera). El texto apareció en los principales diarios del país el martes 12 de noviembre de 1996.

3 Alerta Cafetero. En *El Tiempo*. Nov., 24, 1996. P. 15-B (aviso pagado).

4 Evento que se realizó efectivamente en la primera quincena de diciembre.

La gran preocupación de los cafeteros por la tendencia revaluacionista se entiende si se recuerda que cada punto de revaluación en 1996 les significaba \$17 mil millones y que por esta razón el Fondo Nacional del Café terminaría el año con un déficit superior a los \$350 mil millones. No extrañaba, en consecuencia, que aparecieran editoriales invocando la necesidad de "salvar el Fondo... pues a este ritmo tiene sus días contados"⁵. A lo anterior se agregaba la preocupante caída en los indicadores de compra de café, síntomas de los que no se tenían antecedentes (al menos en Risaralda). En efecto, según la Cooperativa Departamental de Cafeteros las compras acumuladas entre enero y octubre pasaron de 865 mil sacos en 1994 a 1.061 mil en 1995, pero en 1996 esta cifra sólo era de 539 mil sacos, es decir, la mitad de lo comprado en aquella oportunidad⁶.

Y por si fuera poco, todas las informaciones coincidían al señalar como evidente la tendencia a la disminución del consumo per cápita de café, hecho que continuaba cobrando mayor notoriedad en las zonas urbanas y en los grupos más jóvenes de la población. Adicionalmente, los registros del consumo externo de café tampoco eran halagadores. Los estudios de la Organización Internacional de Café -OIC- indicaban que en 1962 un 75% de la población norteamericana consumía café. La investigación de 1996 concluyó que esa cifra había descendido al 49%. Para los mismos años, el consumo per cápita disminuyó de 3.1 tazas por día a sólo 1.7 tazas diarias (ver Anexo 3).

El Congreso Cafetero disminuye el precio interno

Al concluir 1996, los dirigentes y el gobierno coincidieron ante el Congreso Cafetero en la necesidad de disminuir el precio. Esta decisión se justi-



ficó públicamente con los siguientes argumentos: en primer lugar, el gobierno se comprometió con el gremio a desembolsar en corto tiempo, la deuda de \$42 mil millones con los cafeteros por concepto de los dos puntos porcentuales del aumento del IVA aprobados en la reforma tributaria y que tenían como destino específico la condonación de las deudas para los pequeños productores. En segundo lugar, se estimaba que el déficit del FNC podía llegar en 1997 a los \$350 mil millones, como consecuen-

cia de factores ajenos a la misma industria (caso de la revaluación). Aunque se acordó 'parar' la apreciación de la moneda, el daño sobre las finanzas sectoriales ya estaba causado. En tercer término, el ministro de Hacienda prometió, aunque sin precisar la fuente, obtener un esfuerzo adicional mediante una adición presupuestal, para 1997 de \$120 mil millones. Y, en cuarto lugar, una comisión parlamentaria⁷ se encargaría de estudiar una reforma al régimen cambiario adoptado desde 1990 que derrumbó el sistema de control de cambios, vigente desde 1967, y que permitió a los cafeteros obtener algunos beneficios⁸.

En todo caso, aunque hubo algunas voces de desacuerdo con la decisión, ésta le fue presentada al país como el resultado de un Congreso que actuó con medida y pensando esencialmente en el futuro de la producción cafetera.

Al avalar políticamente este acuerdo, *El Tiempo* editorializó: "el sacrificio de los ca-

5 El Espectador. Editorial, nov., 14, 1996.

6 Ver *La Tardé*, nov., 12 de 1996, p. 9-A.

7 Integrada por Juan Camilo Restrepo, Víctor Renán Barco, Omar Yepes, Juan Martín Caicedo y Luis Guillermo Vélez.

8 Cfr. Portafolio, *El Tiempo*, diciembre 9, 1996, p. 16.

feteros es un buen ejemplo y señala que si todos los colombianos nos proponemos superar los problemas del momento y buscar una mejor economía es posible lograrlo” (Dic., 16, 1996). En consecuencia, la decisión había mostrado la gravedad de la crisis en las finanzas del Fondo⁹ y simultáneamente expresaba la firmeza de una dirigencia cafetera dispuesta a jugarse todo su prestigio ante unos cultivadores que habían soportado durante dos años consecutivos el impacto de las bajas cotizaciones.

El Congreso Cafetero aprueba una modificación estatutaria

Adicionalmente, la Federación había venido soportando diferentes críticas orientadas a presentarla como una organización ajena a los procesos y estructuras democráticas previstas en la Constitución. En este sentido, el Congreso respaldó una reforma estatutaria que si bien no avanzó todo lo deseado, sí progresó en la definición de canales y procedimientos más participativos.

En adelante, el nombramiento de los seis miembros (y sus suplentes) que integran los respectivos comités departamentales tendrá un origen democrático y serán elegidos para períodos de tres años “en las circunscripciones uninominales creadas para tal efecto” (art. 28). Se desmonta así aquel mecanismo que le permitía al Comité Nacional nombrar dos de ellos (los cuatro restantes eran acordados por los comités municipales). Además, se dispuso que sólo existirán comités departamentales allí donde se demuestre que la producción cafetera excede el 2% del total nacional, y no el 1% como se contemplaba anteriormente.

No fue atendida la proposición que recomendaba el nombramiento por votación directa y nacional del gerente general de la Federación y éste será designado por el Congreso de una terna elaborada por el Comité Nacional (art. 11).

Los nuevos estatutos precisan los alcances de los procedimientos electorales (Cap. X) en la conformación de las circunscripciones para el nombramiento de los delegados al Congreso, en la inscripción de listas, en la

definición de fechas, períodos, inhabilidades e incompatibilidades (Cap. XIV). En todo caso, es de resaltar que desaparece de una vez por todas aquella disposición frentenacionalista que obligaba a la conformación bipartidista de los comités de cafeteros y que cerraba el paso a cualquiera otra opción política al interior del gremio.

Así pues, al finalizar 1996 se combinó la presencia de una de las mayores crisis cafeteras en la historia nacional con la decisión política de disminuir el precio interno del grano y aprobar una reforma estatutaria que entregue una mayor participación a todos los federados en la conducción general de su organización.

Las condiciones cafeteras en 1997

A continuación se resumen algunas de las condiciones que recuperan la economía y la política cafetera como un eslabón estratégico para la definición de la economía política colombiana.

La lucha por la representación gremial

Para empezar digamos que se está en presencia de nuevas condiciones socio-económicas y políticas que fortalecen el rol protagónico de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en el manejo de un proceso que por momentos pareció salírsele de las manos, cuando una organización alterna como la UC, no sólo vio crecer su número de afiliados sino que, con el respaldo de la Iglesia católica, propició la realización de varias marchas y paros que le significaron ampliar significativamente su capacidad de interlocución frente al gobierno.

Aunque en los documentos oficiales de UC no figura el propósito de disolver la Federación y no pocos de los dirigentes de aquella organización pertenecen a ésta, es

9 En diciembre de 1996 se contabilizó en este Fondo un déficit de tesorería cercano a los \$200 mil millones.

10 El precio interno se fijó al comenzar mayo de 1997 en \$388 mil, es decir, casi el doble de lo pagado al terminar 1996.

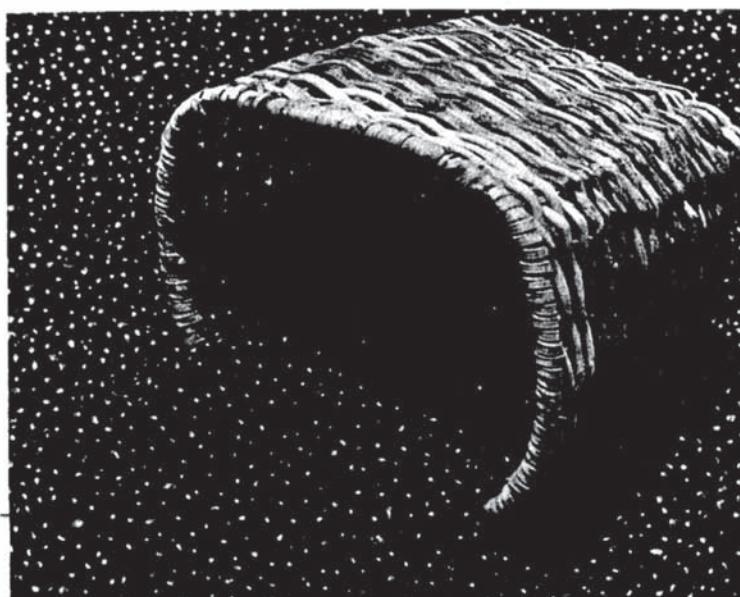
claro que una profundización de la crisis deslegitima y debilita más a ésta que a aquella.

Mientras el respaldo a UC se asocia con su talento para manejar los términos de una situación conflictiva y representar la inconformidad social en esta región, los apoyos a la institucionalidad histórica de la FNC proceden de su capacidad para conservar unas reglas básicas de relación con el Estado construidas en más de medio siglo. Al tiempo que UC crece en la protesta, la Federación se preserva en la calma de los buenos precios¹⁰.

Así, por ejemplo, en la evaluación de la coyuntura generada a partir de febrero de 1997 cuentan hechos como que la FNC ahora dispondrá del manejo de recursos del FNC (se anuncia un superávit de \$300 mil millones al terminar el año) para aplicar en diferentes programas que se habían suspendido en 1996 y que le habían restado credibilidad pública.

Por otra parte, el problema del alto nivel de endeudamiento de los productores constituyó a comienzos de 1997 la bandera principal de UC para movilizar la atención de los cafeteros. En su reunión de Pereira, esta organización invitó a una desobediencia civil que se expresara en el desconocimiento generalizado de las deudas. Nadie imaginó que dos meses después la propia Federación tomaría la iniciativa y obtendría, con cargo al presupuesto nacional, un alivio para los casi cinco mil pequeños cafeteros que son deudores (a diciembre 31 de 1994) menores de \$5 millones en la Caja Agraria y en Bancafé¹¹, con lo cual se produjo un fuerte golpe político a UC¹² y se restableció en gran parte la legitimidad organizativa perdida en el último período.

Los antecedentes de este proceso no dejan de resultar paradójicos. A fines del año pasado hasta los más avezados analistas compartían un pronóstico nada halagador.



Prácticamente se tenía consenso en admitir que se enfrentaría una perspectiva de acumulación de cuantiosos excedentes y de disminución aún mayor de los precios internacionales, lo que llevaría a una inevitable liquidación del Fondo. Esto fue tanto así, que entre las propuestas de mayor aceptación figuró aquella que le reclamaba al gobierno su voluntad para otorgar cuantiosas ayudas al gremio procedentes de la actividad petrolera como una manera de reconocer la impotencia de la economía cafetera para preservar con recursos propios su sostenibilidad.

En el Congreso Cafetero de 1996 se dijo: "los problemas que enfrentará la industria cafetera dependerán en gran parte del comportamiento futuro de la revaluación del peso, de la inflación interna, de la magnitud de los déficit fiscales, de la política de endeudamiento público y privado, del manejo de los recursos petroleros y de las privatizaciones, para lo cual las autoridades ca-

teras y sus dirigentes desarrollarán una permanente vigilancia para buscar soluciones que permitan la viabilidad y mantenimiento, tanto del Fondo Nacional, como de la caficultura colombiana".

11 El Comité Nacional redujo los intereses y amplió los plazos a los créditos superiores a \$5 millones y a aquellos contraídos en los dos últimos años. Además decidió que si el precio externo supera los \$US2,20 la libra, un 25% de los recursos se destinará a fortalecer las finanzas del Fondo y el resto será para los productores. Más adelante se supo (Semana, abril 28 de 1997) que el gobierno espera reservar como ahorro para el Fondo el 58% de unos recursos calculados en 650 millones de dólares.

12 Aún después de hacerse pública la decisión de la Federación en materia de endeudamiento, UC mantuvo vigente su política de desobediencia civil hasta comienzos de abril. Cfr. *La Tarde*, marzo 8. 1997 y *El Diario del Otún*. abril 8, 1997.

De esta forma, en medio de las más bajas cotizaciones en los últimos años, la Federación decidió en su Congreso ordinario disminuir el precio interno en un 6%, correspondiente a \$14 mil por carga (la porción del precio que se cancelaba con la emisión de Títulos de Ahorro Cafetero, TAC). Esta conclusión era un eslabón más en la cadena de determinaciones que le había implicado aceptar recortes presupuestales para la inversión y el funcionamiento de la agremiación del orden de \$70 mil millones para 1997.

Como alternativa, los exportadores privados (un gremio que no hace parte institucional de la FNC) reiteraban la necesidad de introducir cambios en la estructura del gasto público¹³, de suprimir el acuerdo de la retención de países productores en la búsqueda de nuevos precios (libertad absoluta para que actúe la ley de oferta y demanda), de mejorar la comercialización del grano incorporándole mayor valor agregado y garantizándole un mayor espacio al libre mercado, y de disminuir los costos de producción¹⁴ iniciando, claro está, con los salarios de los jornaleros.

Por esta razón, entre las iniciativas que se escucharon a fines de 1996 y que aparecían como redentoras para el gremio, estaría la de "importar mano de obra más barata en el Ecuador, para el período de cosecha, porque allí es más barata... del mismo modo que Costa Rica está 'importando' recolectores de Nicaragua"¹⁵. Naturalmente, una solución de este tipo tenía de por medio dos inconvenientes: el primero, un desempleo abierto sin precedentes en zonas cafeteras cercano al 14%, y el segundo el que el salario real de los jornaleros cafeteros no ha crecido en los últimos tres años.

Así pues, nadie contemplaba en sus predicciones la cercanía de un incremento sustitutivo del precio externo. Los cálculos oficiales suponían que las exportaciones cafeteras de 1997 serían de 11,6 millones de



sacos (sobre una producción total de 12,8 millones de sacos), por las cuales el país recibiría 1.650 millones de dólares y que el déficit real del Fondo sería de \$150 mil millones al finalizar el año¹⁶.

Pero con la sorpresiva alza de los precios en el mercado mundial se cambiaron radicalmente las reglas de juego para la política, la institucionalidad y la economía cafetera. El precio interno se fija hoy atendiendo el comportamiento semanal de las cotizaciones internacionales pero sobre una base que garantiza un relativo equilibrio en las operaciones cafeteras del Fondo, de manera que por ese concepto no acumule ni desacumule recursos¹⁷. Así, en épocas de auge, la diferencia entre el precio internacional y el precio base es transferido a los productores; mientras que en épocas de crisis el diferencial les es sustraído. Aunque algunos temen que este mecanismo sólo funcionará para cuando los precios estén subiendo, ya están de por me-

13 Pues su acelerado crecimiento "ha incidido sobre la inflación de los salarios y esto ha contribuido a deteriorar la competitividad de la industria". *El Tiempo*, nov. 13, 1996, p. 1-B.

14 Se estima que en Colombia producir una libra de café cuesta US\$1,10 mientras en otras naciones dicho valor sólo es de US\$0,60.

15 Ver la revista *Diners. La crisis cafetera: ¿sin remedio?* noviembre de 1996, pp. 34-35.

16 Los nuevos precios se explican, entre otras, por las siguientes razones: estamos frente a un relativo desabastecimiento del mercado mundial; la cosecha brasileña de 1997-98 prevista en 28 millones de sacos parece que sólo terminará en 23 millones y los países centroamericanos han tenido dificultades climáticas que les impedirán cumplir a cabalidad sus compromisos y se espera que la producción cafetera colombiana no supere lo obtenido durante 1996.

17 Por ejemplo, el superávit de \$300 mil millones previsto ahora para 1997 corresponde principalmente a la liquidación de inventarios de café y a otros activos. Ver revista *Semana*, marzo 3, 1997, p. 52.

dio los antecedentes de una disminución de precio interno autorizada expresamente por los congresos cafeteros¹⁸.

Y como si lo anterior fuera poco, a favor de la organización tradicional de los caficultores cuenta el que la emergencia económica decreta por el gobierno en enero de 1997 (y declarada luego inexequible por la Corte Constitucional) contenía diferentes componentes que contribuirían a detener la marcha de la revaluación y por consiguiente beneficiarían, entre otras, las exportaciones del grano. Se atiende así una reclamación insistente presentada por cultivadores y exportadores del grano. Y, por supuesto, se beneficiaba la imagen pública de la Federación que es la que ha aparecido como la vocera de esta reivindicación ante el gobierno.

Café, campañas electorales y planes de desarrollo

La profundización de la crisis cafetera ocasionó diferentes efectos, pero no todos fueron negativos. De manera positiva nos ha permitido producir una lectura distinta de las responsabilidades que en la superación de las dificultades cafeteras tienen tanto los gobiernos departamentales, como las propias municipalidades.

Porque la verdad sea dicha, una de las características más sobresalientes del manejo cafetero ha consistido en sustraer de toda polémica sobre las políticas, los planes y programas cafeteros a los gobernadores y alcaldes. Unos y otros eran convocados de piedra en tal proceso y, cuando mucho, su participación quedaba reducida a la ejecución cofinanciada de determinadas obras públicas.

En las administraciones territoriales se generó una cultura de gestión pública donde se aceptaba, sin beneficio de inventario, que el problema cafetero debía ser procesado y decidido en otras instancias y, por consiguiente,



te, carecía de sentido ocuparse del mismo en forma metódica y persistente. Lo cual simplemente reflejaba un comportamiento público mayor: ni en el Ministerio de Agricultura o del Medio Ambiente, ni en Planeación Nacional se polemizaba sobre el tema cafetero. Para ello estaban -se decía- los comités nacionales y departamentales de cafeteros.

Es de prever que en el futuro cercano se asista a una coyuntura de relativa estabilidad política y mayor margen de gobernabilidad. Este será, a nuestro juicio, el escenario de las campañas para alcaldías y gobernaciones en la región cafetera durante 1997. Ahora existen mejores condiciones para la incorporación de los temas propios del desarrollo integral cafetero en los programas políticos ofrecidos por las diferentes campañas electorales. Puede esperarse y debe trabajarse, en consecuencia, para que la competencia política se acompañe de una gran discusión pública sobre las ofertas programáticas en esta materia.

¿Bonanza?

Más allá de las consideraciones precedentes sobre el impacto político de las nuevas condiciones del mercado cafetero, es importante reconocer que no se trata de una situación con firmes signos de estabilidad. Aún es demasiado pronto para hablar de bonanza cafetera. El empobrecimiento de los caficultores ha sido progresivo desde 1989, las deudas acumuladas son gigantescas y nada garantiza una continuación de las buenas cotizaciones externas pues se desconoce, entre otros factores, cuál será el comportamiento de la producción de los cafés suaves en países como Vietnam, Guatemala, Costa Rica o México. Además, todavía estamos muy por debajo de los precios obtenidos por nuestro café en 1976-77; un dólar compra hoy mucho menos que hace 20 años y

18 También durante el año cafetero 1992-1993 la iniciativa del presidente Gaviria de disminuir el precio interno contó con el beneplácito del Congreso Cafetero.

el crecimiento de la demanda cafetera mundial sigue siendo imperceptible.

Pero si la euforia ciega es perjudicial, tampoco caben los cantos de sirena de aquellos que se resisten a admitir que se están creando nuevas condiciones, tanto en el mercado mundial, como en el doméstico y que de nada sirve sentarse a esperar el apocalipsis.



El escenario previsto

Lo que está en juego en todo este análisis no es sólo un problema gremial. El tema hace parte de uno más general: las relaciones entre el Estado y el café. O, para ser aún más precisos, entre el Estado y la sociedad civil en la región cafetera. Subrayamos este punto porque en el país también se fue imponiendo una lectura del problema cafetero en donde la única interpretación legítima era la que sólo se ocupaba de la dimensión económica.

Vistas así las cosas, es de gran importancia llegar a acuerdos políticos (de política económica y de política social) acerca del más probable escenario económico, social y ambiental que se tendrá para el futuro inmediato de la producción y la institucionalidad cafetera colombiana. En esta dirección se ubican las siguientes notas.

Aspectos económicos

Es de prever, en primer término, una relativa reactivación de la actividad económica regional pues los mayores ingresos de los productores posibilitarán una mayor demanda agregada; las mayores exportaciones contribuirán a disminuir el déficit en la balanza de pagos y se facilitará el ajuste fiscal al mejorar las finanzas del Fondo. Simultáneamente, y como un aspecto adverso, debe considerarse que se puede repetir la experiencia de procesos similares donde una importante alza en el

precio del café ha traído aparejado un incremento desbordado del costo de la vida transformando así la relativa prosperidad ocasional de los cafeteros en un empobrecimiento generalizado de la población.

Ahora bien, despejado el panorama de acuerdos esenciales entre la Federación y el gobierno nacional en materia de precios y manejo de recursos, seguramente asistiremos este año a un intenso forcejeo entre los jornaleros del café y los empleadores de todos los tamaños, pues, según se explicó atrás, el costo de la fuerza de trabajo se considera un factor estratégico para la competitividad del producto colombiano.

Al tiempo que se confirman las nuevas condiciones del mercado mundial se hace previsible que los cultivadores se inclinen, una vez más, por una utilización intensiva de la tierra y por la aplicación de tecnologías que, al aumentar la productividad, los acerque más a usufructuar los precios favorables del grano en una coyuntura que nadie sabe cuánto podrá durar. Pero la búsqueda de mayores volúmenes de producción por parte de los cultivadores probablemente nos colocará frente a procesos inmediatos de activa renovación, saqueo de cafetales y una decidida aplicación de fertilizantes. Del mismo modo, resulta comprensible la importancia de respaldar una mayor incorporación de nuevas tecnologías para la producción limpia y para el aumento de la productividad.

La dinámica económica auspiciada por las nuevas relaciones entre oferta y demanda cafetera también permite presagiar una progresiva revalorización de la propiedad rural.

Tal como se ha venido decidiendo por parte de las autoridades respectivas, en el escenario futuro de corto plazo se debe incluir un alivio de los compromisos financieros contraídos por los cultivadores y la renovación parcial de su capacidad de endeudamiento. Por supuesto, también es presumible una disminución de inventarios (en 1996 se contabilizaban 6.2 millones de sacos en

existencias) con todas sus implicaciones en materia económica.

Por último, en la visualización futura del escenario económico del negocio cafetero es imprescindible contar con un nuevo deterioro de los precios internacionales. Por supuesto, la destorcia será tanto mayor cuanto que las transnacionales que controlan algo más del 70% del mercado sean las que vuelvan a ejercer un control total de los precios.

Aspectos sociales

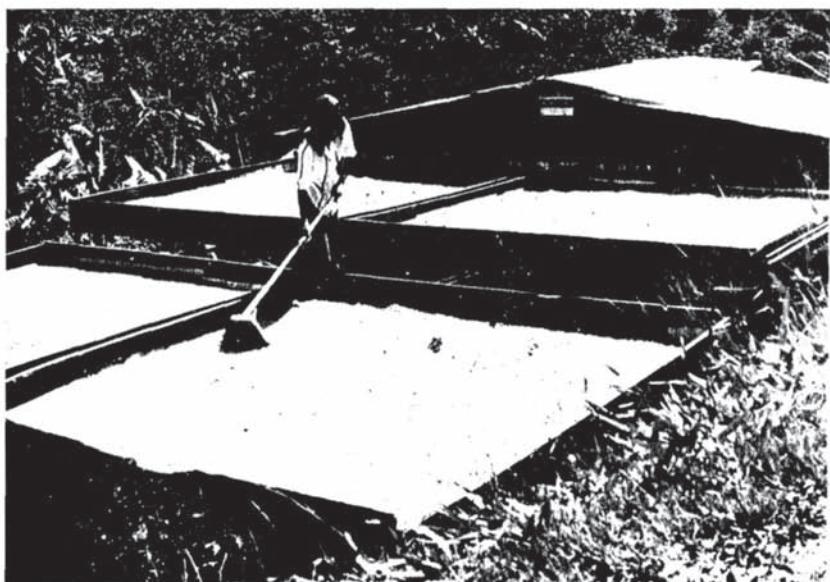
Por otra parte, en la construcción del teatro de los acontecimientos probables debe incluirse, aunque ahora con menor intensidad, la permanencia del proceso migratorio. Se trata de una dinámica que conduce, no sólo a un repoblamiento de las zonas urbanas con grupos campesinos, sino con familias procedentes de los cascos urbanos de las pequeñas localidades adyacentes a las capitales. Así, estas y aquéllas ven disminuidas sus posibilidades de superación. Algunos de nuestros municipios ya empiezan a ser considerados inviables, no sólo por sus dificultades presupuestales, sino por un despoblamiento que parece irreversible. Por lo pronto, y mientras duran las condiciones favorables del precio, es de esperar la presencia de una gran población flotante.

Al tiempo, todo indica que continuaremos asistiendo a un envejecimiento progresivo de la población que implicará distintos tipos de compromisos y responsabilidades. Como sucede en otras partes del país y del mundo, este proceso obligará a la adopción de precisos programas de atención para la tercera edad y para suplir las necesidades laborales de una fuerza de trabajo joven que decide migrar. Será urgente, así, una política poblacional que se coloque en condiciones de atender grupos humanos cada vez más viejos, con mayor proporción de mujeres y con tasas de crecimiento negativas.

La institucionalidad ambiental

En materia ambiental se pueden avizorar los siguientes componentes de un escenario cafetero de corto plazo. Para resaltar está, en primer lugar, el incierto futuro de la capacidad operativa y

de gestión de las corporaciones autónomas regionales y, en general, de la institucionalidad ambiental. El cambio de ministro, a un año largo de terminación del período presidencial, seguramente contribuirá a hacer incluso más frágiles las perspectivas de una provechosa relación entre las corporaciones, el ministerio y las entidades territoriales. Por tanto, es de presagiar que cada día será más difícil la incorporación real de temas estratégicos -el café en este caso- en la agenda institucional ambiental.



Por otra parte, son previsibles unas finanzas públicas con severas limitaciones para atender los programas ambientales (el gobierno nacional decretó un recorte presupuestal a la Carder cercano a los \$1.200 millones en 1997). A su turno, los municipios y departamentos se han visto afectados en su dinámica presupuestal porque es clara la voluntad del alto gobierno para desmontar gradualmente la cofinanciación y, por esta vía, sufrirán un serio deterioro los proyectos ambientales. Pese a todo, se puede estimar que con la relativa recuperación económica las finanzas públicas territoriales mejorarán su capacidad de maniobra y que impuestos como el predial -que respresenta un componente sustutivo de los recursos de las corporaciones autónomas- volverán a ser cancelados sin tanto retardo.

En tercer lugar, cada día son más notorios los rasgos de la transición institucional

en el manejo de los acueductos rurales y en la financiación de las obras de infraestructura, vías, salud y educación. Progresivamente las relaciones entre los comités de cafeteros y las autoridades locales y departamentales han ido orientándose hacia una decisión tal, que serán éstas últimas las que atiendan una parte -si no toda- de la responsabilidad para sufragar los gastos de los acueductos rurales y la infraestructura y el equipamiento de servicios como salud o educación y de las obras viales y de energía. Como se sabe, al caso del agua potable y el saneamiento básico contribuye en forma decidida el nuevo marco jurídico determinado

En todo caso, debe recordarse que gran parte de los antecedentes en esta materia confirman que las favorables condiciones económicas en que se desenvolvió la FNC durante décadas enteras pareció eximirla de tener aliados o concertantes institucionales para sus programas sociales, educativos o ambientales y la transformó en una institución que por momentos desbordaba la capacidad de actuación del propio Estado colombiano.

Algunas opciones

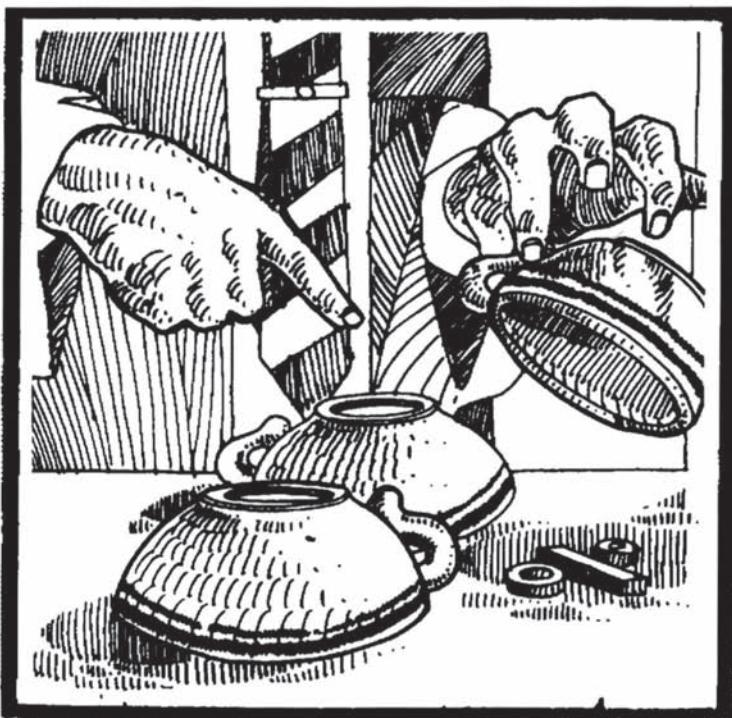
Retornar a un análisis integral de la economía política cafetera es a todas luces conveniente.

Los cambios políticos

En materia política es indispensable continuar el proceso que conduce al fortalecimiento de la democratización de la Federación. Los colombianos debemos trabajar para que, incluso las autoridades nacionales de esta organización, sean producto de una elección universal, libre y secreta entre los federados.

De otro lado, aceptando que efectivamente los problemas de los cafeteros trascienden la jurisdicción del gremio se requiere para aprovechar las normas legales que posibilitan una modificación de los planes locales y departamentales de desarrollo, de tal manera que se obtengan los ajustes necesarios y los nuevos mandatarios locales y seccionales respondan con eficacia a las nuevas demandas de la realidad económica y social de la región cafetera.

Las campañas electorales y los programas políticos deben incorporar su diagnóstico y sus iniciativas específicas en materia cafetera. También es preciso aprovechar las nuevas circunstancias institucionales para la planificación municipal y departamental convocando, una vez más, los consejos territoriales de planeación y los consejos de desarrollo rural para que sirvan de escenario participativo de discusión y, en concertación con las organizaciones de cafeteros, recomiendan medidas para que la acción y los recursos privados y públicos se coloquen con grandeza al servicio de la ciudadanía, la democracia y el desarrollo.



por la Ley 142/94 y la aguda crisis que hasta enero de 1997 venían soportando las finanzas del FNC y, por su conducto, las posibilidades reales de inversión de los comités departamentales.

En cuarto lugar se prevé la permanencia de un complejo proceso de concertación interinstitucional. Aún carecemos de las experiencias que señalen los caminos adecuados en esta materia y todavía hacen presencia en la gestión ambiental las conductas excluyentes de funcionarios para quienes lo determinante sigue siendo el titular de prensa.



Los cambios económicos

En este terreno es menester ampliar la discusión a propósito de la forma como se manejan y se deberían manejar los recursos parafiscales que sirven de soporte material a la Federación y al Fondo del Café. Al momento de terminar este artículo (mayo de 1997) se están preparando las condiciones de renegociación entre los caficultores y el gobierno para determinar las condiciones en que continuará operando dicho Fondo, los alcances de su papel estabilizador y el papel cumplido por la propia Federación en la comercialización externa del grano¹⁹. Muy seguramente la Federación insistirá en la necesidad de contar con unas instituciones cafeteras modernas y eficientes, que se puedan concentrar más en su labor esencial, de tipo parafiscal, y le dejen al Estado y al gasto público sus funciones fiscales propias. De los resultados de este debate dependerá, sin duda, gran parte del rumbo que adopte la caficultura colombiana.

De otra parte, la consigna de moda parece ser la reconversión. La Federación financió un estudio integral sobre el tema. Ahora los voceros gubernamentales, con el Ministerio de Agricultura a la cabeza, repiten, una y otra vez, la necesidad de "iniciar un proceso de reconversión de la caficultura", sin que aún se tenga noticia de cuáles son sus componentes básicos ni cómo se evitará que la calidad de vida en las regiones productoras continúe

deteriorándose. El país está a la espera de las recomendaciones específicas de esta investigación.

Admitiendo que se enfrentan dificultades estructurales del sector se requieren soluciones que trasciendan la coyuntura. En primer término, una participación de la Junta Directiva del Banco de la República, que intervenga la tasa de cambio y las tasas de interés. Y apoyándonos en el alza de precios es indispensable atender con urgencia los estragos de la dura etapa recesiva y adoptar medidas que permitan reactivar la industria cafetera y mejorar el nivel de vida de las 350 mil familias productoras, aumentando el ingreso del productor y consiguiendo que parte de ese dinero le sirva para mejorar su atención a las fincas²⁰. Es imperativo recuperar la producción cafetera para el empleo productivo y acordar niveles salariales que dejen atrás la indignidad de hombres y mujeres trabajando el día entero por la sola alimentación. La diversificación se mantiene a la orden del día.

Por supuesto, debe insistirse en la búsqueda de una mayor productividad (en el país se obtienen, en promedio 100 arrobas por hectárea y el objetivo determinado por la Federación es doblar esa cifra buscando mantener una producción de 12 millones de sacos reduciendo el área cultivada a las zonas consideradas como óptimas). Sin embargo, no todas las condiciones son propicias para aumentar la productividad en el corto plazo: la edad promedio de los cafetales es de ocho años, la renovación de los cultivos

19 El contrato que termina en 1998 establece, entre otros aspectos, quiénes, cuándo y en qué condiciones pueden exportar. Para los exportadores privados esta es una limitación a sus propias posibilidades económicas y que otorga condiciones ventajosas a la Federación. Ellos piden, en consecuencia, ampliar la oferta cafetera.

20 Se estima que al menos US\$200 millones podrían ir directamente a los productores cafeteros durante 1997. Ver *El Tiempo*, marzo 5, 1997, p. 1-B..



se ha venido aplazando y las prácticas culturales de mantenimiento se han vuelto conductas excepcionales.

Pero más allá de los aspectos monetarios, el manejo de la positiva coyuntura debe servir para avanzar en la búsqueda de nuevas formas de productividad que posibiliten un desarrollo integral de las zonas cafeteras, en particular, y del país, en general. Por supuesto, las circunstancias desventajosas en que nos movemos en el mercado mundial deben servirnos de aliciente para ampliar nuestro horizonte de mercado de tal manera que la incorporación de un mayor valor agregado a la producción exportable se transforme en un propósito nacional. También es claro que nuestro futuro en estos escenarios está ligado a la capacidad que demostremos para diferenciar las calidades del café ofrecido. Complementariamente es necesario adoptar nuevas estrategias de publicidad y mercadeo que permitan -como mínimo- el aumento del consumo de café entre la población joven.

En materia de información urge respaldar un proceso de socialización acopiando, procesando, suministrando, reciclando e interpretando datos e informes especializados. Para ello es importante que se fortalezcan instituciones como el Centro de Información para Risaralda -CIR- y los sistemas nacio-

nales de información. La Encuesta Nacional Cafetera, al igual que las diferentes caracterizaciones socioeconómicas y biofísicas desarrolladas por las corporaciones autónomas deben integrar el sistema de información cafetero y ambiental para ser colocado al alcance de todos los ciudadanos.

Las obligaciones de alcaldes y gobernadores

Por último, describamos los frentes donde pueden y deben actuar las gobernaciones y las alcaldías.

Es impostergable la necesidad de tomar la iniciativa en las asambleas departamentales y en los concejos municipales a fin de velar por la adopción o reforma de planes de desarrollo que consulten la perspectiva del desarrollo sostenible en las zonas cafeteras. Pero, también, para defender la obligación constitucional de ampliar el gasto público social.

Por otra parte, resultaría de gran importancia la intervención de los gobiernos locales y departamentales abordando el tema cafetero en su verdadera jurisdicción. Específicamente se debería fortalecer la deliberación en la región que conforman el norte del Valle, el suroeste de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.

En igual forma convendría precisar las tareas de las corporaciones autónomas, los comités de cafeteros, las secretarías de desarrollo agropecuario y las Umatas encaminadas a promover la diversificación de cultivos y a garantizar una producción cafetera limpia; lo mismo que las acciones dirigidas a preservar la calidad y cantidad de nuestros suelos y aguas, protegiendo simultáneamente la biodiversidad.

En materia de comercialización de productos agropecuarios, es urgente que se concreten las metas y los objetivos por perseguir. ¿Hasta dónde llegará el compromiso para que, por fin, se dé vía libre a una gran comercializadora de estos productos?

En cuanto a la experimentación de cultivos, semillas o similares para estimular la diversificación, para reforestar o para proteger la biodiversidad es fundamental mantener y ampliar el respaldo económico a los centros e instituciones de investigación que vienen desarrollando diferentes investigaciones en estas áreas.

La dimensión cultural de la crisis cafetera tiene una particular relevancia. Se pueden y se deben apoyar grandes y eficaces programas y campañas educativas y publicitarias que progresivamente persuadan a los productores de las bondades de las nuevas políticas económicas y ambientales cafeteras.

Si bien la mayor representación orgánica de los productores cafeteros la tiene la Federación (los comités) ella no es, sin embargo, la única. Por consiguiente, se debe mantener un espíritu abierto para ampliar la base de interlocutores interesados en el problema cafetero. Unidad Cafetera, la Anuc, las juntas comunales, las juntas administradoras de los corregimientos o las ONGs representan organizaciones y expresiones de la sociedad civil con las cuales las administraciones territoriales deben acordar soluciones a los problemas cafeteros.

La concertación más cercana y la de mayor viabilidad es, por supuesto, la que se pueda obtener entre las gobernaciones y los municipios cafeteros. Las propuestas salidas de la administración departamental son de gran interés, pero ellas no pueden sacrificar una conducta y una mentalidad abierta a incentivar otras que surjan desde la provincia o aquellas que se puedan coordinar con el conjunto de instituciones estatales que se ocupan del problema agrario (ICA, Caja Agraria, Banco Cafetero, DRI, PNR, Incora, Corpes, Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Urpas, Umatas).

Es probable que la adopción de estas medidas no traiga la felicidad, pero con seguridad permitirá que a las zonas cafeteras retorne la esperanza colectiva, condición básica de cualquier proyecto democrático.



Llegamos a todo el mundo!

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR A COLOMBIA Y AL MUNDO

Estos son nuestros servicios:

- Venta de productos por Correo
- Servicio de Correo Normal
- Correo Internacional - Correo Promocional
- Correo Certificado - Respuesta Pagada
- Post Express - Encomiendas
- Filatelia - Corra - Fax

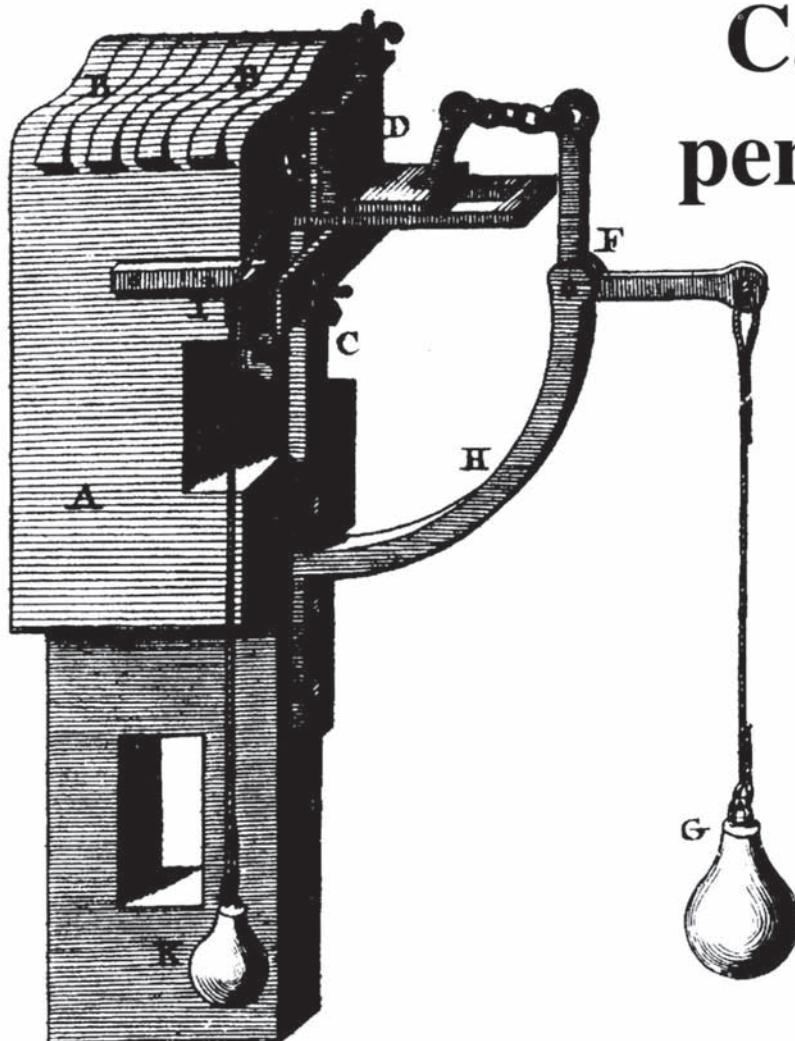
LEA ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS

243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34

980015503

FAX: 283 33 45

Fabio Giraldo Isaza
Economista, ensayista,
director de la Revista Ensayo y Error



Cornelius Castoriadis nació en 1922 en Grecia donde estudió derecho, economía y filosofía; es, sin duda, uno de los grandes pensadores de nuestra época. Su obra, difícil, polémica e innovadora constituye un sólido cuestionamiento al pensamiento filosófico, ofreciendo una nueva perspectiva teórica y crítica. Residió en París desde 1945 hasta el pasado mes de diciembre cuando falleció. En los últimos treinta años de su vida consolidó una extensa obra intelectual¹, la cual supo acompañar con sus cátedras como director de la École de Hautes Études y su labor clínica como psicoanalista.

Cornelius Castoriadis: pensador de la creación

Fabio Giraldo Isaza

Castoriadis nos lega una nueva ontología para pensar el Ser de una manera completamente diferente en los campos filosófico, político, antropológico y psicoanalítico. Su crítica, producto de un serio y vigilante trabajo en torno a las preguntas esenciales del Ser recrea una seria discusión con los filósofos del pasado y revitaliza, como él mismo lo dictaminara, la democracia filosófica, el *ágora* intemporal en donde filósofos vivos y muertos se reúnen por encima de los siglos y discuten sobre el corazón de las preguntas que han gobernado el cavilar del ser humano.

Esta nueva ontología, a la que hemos llamado *Ontología de la Creación* por elucidar al Ser como Ser creador de sí mismo y de su sociedad, esto es, de sus significaciones imaginarias sociales e instituciones sociales, pone en “jaque” la tradición del pensamiento filosófico desde los griegos hasta nuestros días, negando la sentencia del pensamiento occidental: “cuando decimos de una cosa que es, decimos que está completamente determinada, determinada de principio a fin”. Empero, el imaginario no está completamente determinado en el sentido en que lo estaría un concepto matemático o una ley física.

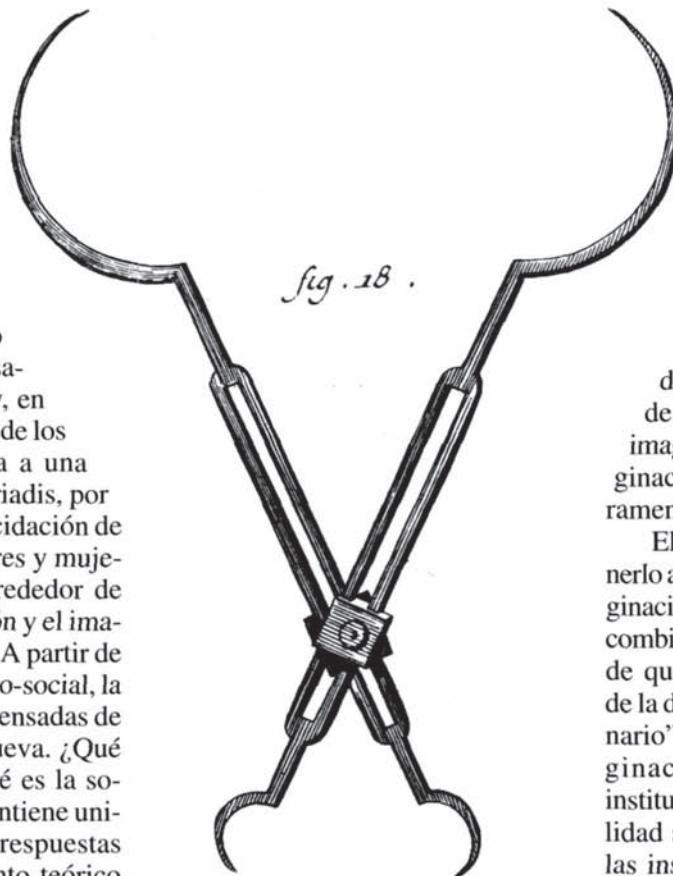
¹ La institución imaginaria de la sociedad (1975), Les Carrefours du Labyrinthe I (1978), Le Carrefours du Labyrinthe II, Domaines de L'Homme (1986), Le Monde Morcelé. Les Carrefours du Labyrinthe III (1990), La Montée de la Insignifiance. Les Carrefours du Labyrinthe IV (1996), Faite et à Faire. Les Carrefours du Labyrinthe V (1997), son sus publicaciones principales.

En su reflexión se da, igualmente, una revisión profunda de la teoría y la práctica. Las teorías elaboradas por el pensamiento occidental suponen que un saber exhaustivo es posible y, en consecuencia, que la acción de los humanos está subordinada a una teoría infalible. Para Castoriadis, por el contrario, la teoría es elucidación de la acción efectiva de hombres y mujeres, la cual se organiza alrededor de un eje central: la imaginación y el imaginario radical instituyente. A partir de allí, la cuestión de lo histórico-social, la psique y la institución son pensadas de una manera enteramente nueva. ¿Qué es lo histórico-social?, ¿qué es la sociedad y qué es lo que la mantiene unida?, son preguntas cuyas respuestas presuponen un planteamiento teórico sobre cómo se crea el mundo social en el que nos constituimos.

El mundo y el Ser son la creación de lo que él llama imaginario radical e imaginario social instituyente, significaciones centrales para la reflexión a partir de las cuales el conjunto del pensar occidental puede y debe ser reconstruido, dando lugar a una nueva concepción de la historia y la sociedad: lo social-histórico se apoya en el imaginario radical, en tanto productor de la institución; cada vez se instituye y cada vez es surgimiento de lo nuevo. Una sociedad nunca está fijada definitivamente, ella es autoconstrucción y autoalteración permanente. La sociedad, al no quedar subordinada a sus instituciones, siempre se encuentra porser. Con esta nueva ontología queda abierta su propuesta filosófico-política central, la autonomía individual y colectiva.

Imaginación e imaginario radical

Abordar estos conceptos implica necesariamente remitirse a la pregunta sobre la especificidad del ser humano buscando explicar cómo y por qué



el homo sapiens-sapiens ha sido la única especie animal que “saltó” sobre su propia condición biológica y se diferenció para siempre del resto de los vivientes. Castoriadis responderá: el orden humano es el orden de la imaginación radical y de lo imaginario radical; es decir, de la imaginación desfuncionalizada y no enterradamente determinada.

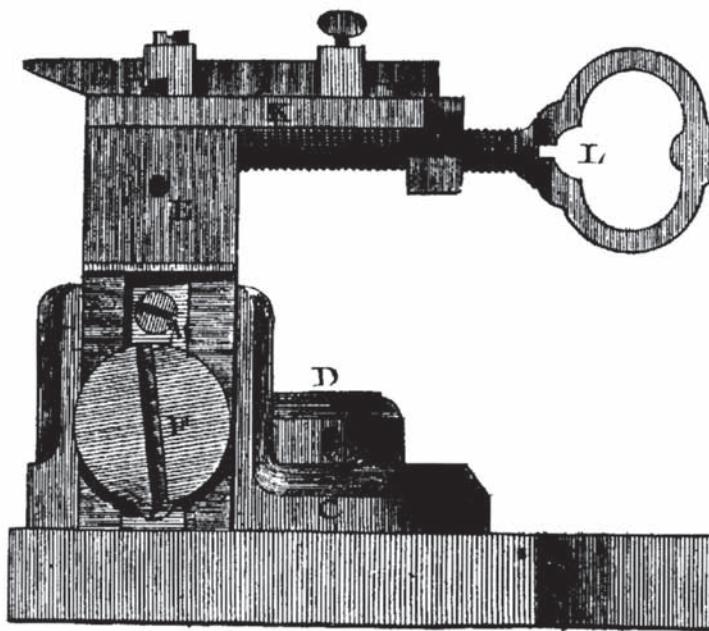
El utiliza el término radical para operarlo a la imaginación “segunda”—imaginación simplemente reproductiva y/o combinatoria—, y para subrayar la idea de que esta imaginación viene **antes** de la distinción de lo “real” y lo “imaginario” o “ficticio”. Es porque hay imaginación radical e imaginario instituyente que hay para nosotros “realidad social”, que no es otra cosa que las instituciones y las significaciones imaginarias sociales creadas ex-nihilo —no in-nihilo ni cum-nihilo—. Esta no crea “imágenes” en el sentido habitual sino formas, que pueden ser imágenes en sentido general pero que centralmente son significaciones e instituciones, las dos siempre solidarias.

La imaginación radical se refiere al ser humano singular y se define como el flujo perpetuo de representaciones, deseos e intenciones. Es la capacidad o propiedad exclusiva del ser humano de representar, simbolizar, crear con contenidos diferentes y no determinados, su realidad. El imaginario radical instituyente, en su dimensión colectiva produce la institución social y socializa, a su vez, la psique individual. Es el colectivo anónimo que instituye la realidad y a través de la institución social fuerza al individuo a ingresar a su cultura. Castoriadis no define la imaginación como ilusión, falsificación o ensueño, sino como imaginación radical desfuncionalizada propia de la psique del individuo, fuente de creación ontológica, de surgimiento de nuevas formas, origen de lo nuevo radical.

Así establece Castoriadis la diferencia entre el psiquismo animal y el psiquismo hu-

mano. Hay en el ser humano un proceso de rompimiento de la psique animal donde la función representativa –componente esencial de la imaginación–, provee al animal con los mismos productos, determinados y canónicos siempre, mientras que ésta se separa y se distorsiona en el humano. Deja para siempre de ser funcional. En otras palabras, para los animales hay un representante canónico de la pulsión, un representante obligado: el objeto sexual para un perro no puede ser más que una perra, y esta pulsión no puede ser satisfecha sino por un coito canónico. Para el humano el objeto sexual puede ser cualquier cosa, y la pulsión sexual puede ser satisfecha por los actos más inverosímiles.

En la psique animal la representación está definida fijamente por el **instinto** y es funcional –la sexualidad entra en el proceso que lleva a la reproducción– la representación humana no está regida por la funcionalidad biológica, es “desfuncionalizada” y tiene la capacidad de experimentar placer mediante la representación, es decir, la desligazón entre placer de representación y el placer de órgano. La creación de representaciones, afectos y deseos por la imaginación humana es condicionada pero nunca predeterminada. La imaginación radical está también en la base de otra capacidad extraordinaria del ser humano: el simbolismo, ver una cosa en otra cosa, tener algo más que la señal, tener símbolos, tener lenguaje.



De esta manera es posible entender cómo el ser humano es psyché, psique profunda, inconsciente; y simultáneamente es sociedad. Es en estos dos niveles donde se reencuentra la capacidad de creación. Hay imaginación radical de la psique, pero no es la psique la que puede crear instituciones; no es el inconsciente el que crea la ley o incluso la idea de la ley, ésta es recibida por ella. No es la psique la que puede crear el lenguaje, ésta debe recibirla a través del proceso de socialización. La estructuración del psiquismo se articula por medio de la “puesta en sentido”, de significación, como característica esencial de la psique y de la sociedad: “el proceso de socialización se juega en y por el proceso de socialización”. La sociedad es esencialmente un magma² de significaciones imaginarias sociales que da sentido a la vida colectiva e individual. La socialización no es otra cosa que la entrada y el funcionamiento en ese magma instituido de significaciones imaginarias: la sociedad otorga sentido, aporta con sus significaciones la puesta de sentido que satisface

2 Este término se refiere a una organización irreducible a la lógica de conjuntos: no posee elementos discretos ni hay relación de identidad, oposición, o tercero excluido, pues supone la biunivocidad. Es un modo de coexistencia sui géneris que contiene fragmentos de múltiples organizaciones lógicas, pero que no es reducible a una organización lógica. Las significaciones imaginarias sociales, las creaciones de la imaginación radical desfuncionalizada se dan como magma, o sea como aquello de lo cual se puede extraer o construir una cantidad indefinida de operaciones conjuntistas pero que jamás podrá ser reconstruido por composición conjuntista de esas organizaciones. Es una organización abierta cuyos componentes se relacionan por remisión unos con otros en forma multívoca, es un modo indescriptible de coexistencia de los diferentes elementos o procesos allí contenidos. Aunque el mundo humano se presta indefinidamente a organizaciones ensílicas éste no se agota en estas organizaciones; estos dos enunciados definen un modo de ser, el magma.

la necesidad imperiosa de la psique. Lo histórico-social es esencialmente emergencia de nuevas significaciones. Su institución, la dinámica entre lo instituyente –la imaginación radical– y lo instituido –las instituciones ya creadas– es secundaria respecto de esta característica esencial que es la capacidad de los colectivos humanos de crear nuevas significaciones, nuevos sentidos. La imaginación radical no existe sólo al nivel de la psique individual, sino también a nivel histórico-social en tanto imaginario radical.

La relación entre la institución y la psique es en el humano, vital. Sapiens-Sapiens habría sido condenado a desaparecer si no hubiera una sociedad, es decir, una institución: la institución obliga a la psique a aceptar la realidad, la realidad social, la existencia de otras personas: es el imaginario el que crea la institución y la institución socializa la psique singular.

Castoriadis profundiza esta problemática a través de la categoría de lo social-histórico, con la que continúa desarrollando los alcances y dimensiones de la imaginación y el imaginario radical. Lo social-histórico nos permite comprender un estrato o dimensión consustancial al ser humano, que aparece cuando hay un colectivo anónimo, es decir, un número indefinido de seres humanos que se encuentran juntos en forma permanente. A partir de ese momento hay una creación que no puede ser imputada a otra instancia distinta al colectivo: como es el caso del lenguaje: no hay sociedad, no hay ser humano sin lenguaje, lo histórico social va a la par de una idea ontológica: el ser es creación, el tiempo es creación, y el ser histórico-social se crea a sí mismo y sigue creándose a través de la historia.

Para acceder al centro de esta problemática es bueno meditar, aunque de paso, en el mito filosófico por excelencia, el mito del origen. Uno no puede decir “primero esto y luego aquello”, se da todo en un mismo movimiento. Así por ejemplo: ¿La ciudad, la polis ateniense se constituye como sociedad democrática? ¿Quién la creó? ¿Decimos que es la sociedad? ¿Cuál sociedad? ¿La anterior?...y ... ¿Quién creó a los individuos?, es un círculo, es el círculo de la creación: los diferentes elementos deben ser planteados

simultáneamente. Sin ellos lo creado no puede ser, pero ellos mismos no son lo que son sino por medio de su “resultado”, la creación. El origen, la causa, el fundamento de la sociedad es la sociedad misma como sociedad instituyente. Este es el aporte central de Castoriadis, revelar este nuevo estrato del ser que, como tal, hasta ahora no ha podido ser reconocido.

Lo histórico social: Significaciones imaginarias e instituciones

Lo histórico-social son las significaciones imaginarias sociales insituidas o no; es esencialmente emergencia de nuevas significaciones, estas son en sí mismas creaciones que el Ser realiza de y sobre su realidad, son la simbolización de su mundo. Ellas establecen en cada sociedad lo que es y lo que no es, lo que vale y lo que no: y esta interpretación del mundo es, a su vez, creado por ella misma a partir de significaciones nuevas cuya fuente es el imaginario social en cuanto dimensión colectiva de la imaginación radical. Las nuevas formas sociales, la creación, es obra de lo imaginario social, de la sociedad instituyente que es el modo de ser del campo histórico-social, modo en virtud del cual ese campo es. La sociedad nos enseña Castoriadis es autocreación que se despliega como historia.

Castoriadis con este planteamiento teórico elucida no solamente el problema del ser humano como un “animal simbólico”, –problema clásico dentro de la teoría filosófica y social–, sino también ofrece interpretaciones sobre la “construcción de la realidad social”, la creación de ésta y, a su vez, la de los individuos. Su recepción del psicoanálisis y la integración de sus aportes fundamentales a una teoría general del Ser, nos coloca en un terreno teórico en sumo interesante para la lectura de nuestra sociedad. En un sentido estricto deja en firme las bases con las cuales se puede pensar la articulación y la diferenciación de lo psíquico y lo social. Si durante buena parte del siglo XX asistimos al intento y fracaso de poner

Castoriadis nos lega una nueva ontología para pensar el Ser de una manera completamente diferente en los campos filosófico, político, antropológico y psicoanalítico. Su crítica, producto de un serio y vigilante trabajo en torno a las preguntas esenciales del Ser recrea una seria discusión con los filósofos del pasado y revitaliza, como él mismo lo dictaminara, la democracia filosófica, el ágora intemporal en donde filósofos vivos y muertos se reúnen por encima de los siglos y discuten sobre el corazón de las preguntas que han gobernado el cavilar del ser humano.

en concordancia los aportes de Marx y Freud para esclarecer el malestar y la transformación de nuestra “civilización”, con Castoriadis hay una respuesta lúcida sobre esta búsqueda.

Su reflexión interroga igualmente sobre la relación ciencia natural-ciencia social. No se trata de tener un saber global en el sentido de un saber total o absoluto, pero en modo alguno se trata de ignorar que la elucidación toma en consideración el **todo** de su objeto. Igual ocurre con la sociedad, con ella la consideración del todo es inevitable. La conclusión sobre este tema trascendente muestra la vitalidad y pertinencia del pensamiento de Cornelius Castoriadis: “Es menester superar la oposición entre la ilusión de un saber global sobre la sociedad y la ilusión de que uno podría contar con una serie de disciplinas especializadas y fragmentarias. Lo que hay que destruir es el terreno mismo en que se da esta oposición”³.

Pero lo más importante de toda su reflexión es que ella nos conduce de lleno a preguntarnos sobre las propias instituciones que encarnamos como hombres y mujeres en una sociedad, asumiendo con ello la condición autónoma que como sujetos socio-históricos, como individuos y como sociedad, se nos demanda. La conciencia de nuestra propia creación, de manera obligada nos re-

mite a la pregunta política sobre nuestra propia institución de la sociedad. Es el ejercicio reflexivo y deliberante frente a nuestra existencia lo que nos permitirá pensar en la posibilidad de transformar nuestro propio orden socio-histórico.

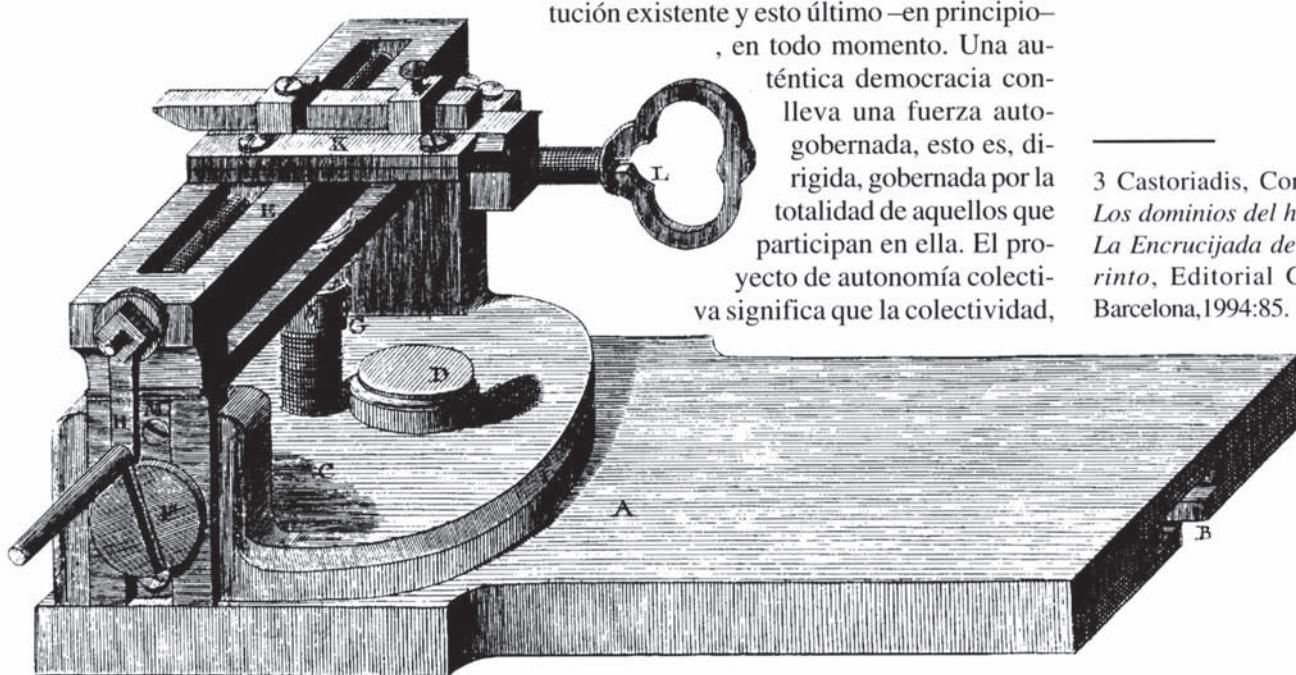
Autonomía política

Todo el trabajo de reflexión de Castoriadis sobre la creación de instituciones políticas autónomas lo lleva a la creación de la filosofía y la democracia en Grecia. No por azar éstas nacieron en la misma época y en el mismo sitio. “Su solidaridad resulta de que ambas expresan el rechazo a la heteronomía –el rechazo a las pretensiones con validez de reglas y a las representaciones que se encuentran allí sin más, la negativa a toda autoridad externa (aún y especialmente, «divina») y de toda fuente extrasocial de la verdad y la justicia; en suma, el cuestionamiento a las instituciones existentes y la afirmación de la capacidad de la colectividad y el pensamiento para instituirse a sí mismos de manera explícita y reflexiva.

La democracia es lucha por un verdadero autogobierno. El propósito del autogobierno no acepta ningún límite *externo*, el verdadero autogobierno implica una auto-institución explícita que, evidentemente, presupone el cuestionamiento de la institución existente y esto último –en principio

, en todo momento. Una auténtica democracia lleva una fuerza auto-gobernada, esto es, dirigida, gobernada por la totalidad de aquellos que participan en ella. El proyecto de autonomía colectiva significa que la colectividad,

3 Castoriadis, Cornelius, *Los dominios del hombre: La Encrucijada del Labyrinth*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1994:85.

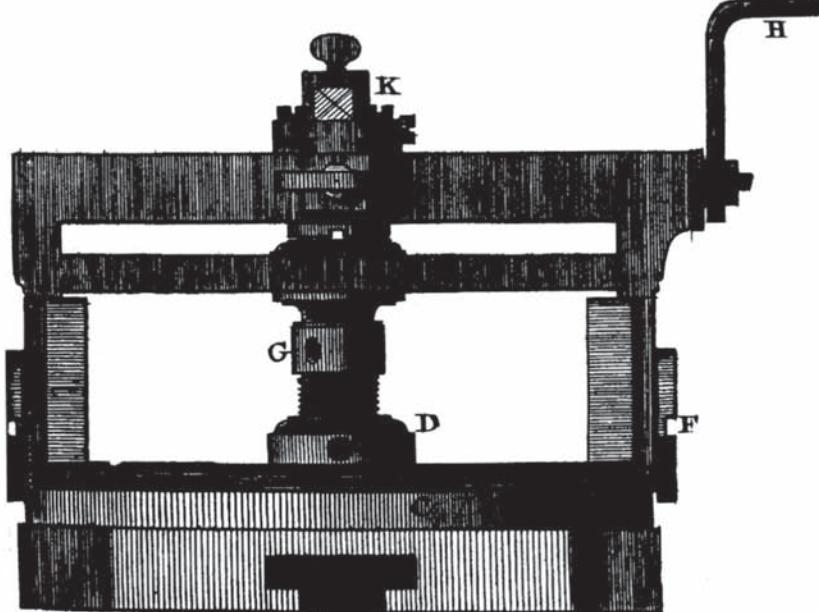


reconoce su carácter instituyente y lo recupera explícitamente, y se cuestiona a sí misma y a sus propias actividades. En otras palabras, la democracia es el régimen de la autorreflexividad (política)⁴.

Esta autorreflexividad es posible y viable, dado que la historia se retoma como el hacer efectivo de los seres humanos, en el sentido de la creación y no como el desarrollo de leyes inexorables. La historia no sigue etapas predeterminadas y no hay leyes que nos lleven a paraísos o edenes prometidos (del capitalismo al socialismo como Marx nos lo propuso). Tampoco hay conceptos abstractos cuya fundamentación se encuentra por fuera del hacer, el pensar y el crear de las sociedades consideradas. No hay una esencia del valor, la igualdad, la libertad o la justicia que deberíamos encontrar para fundamentarlas.

Desde esta nueva forma de ver, podemos dar cuenta de la crisis y el conflicto de la sociedad a través de sus significaciones imaginarias instituidas, posibles de transformar desde el ejercicio de la autonomía de individuos y sociedades que se dan su propia ley. No la ley que a cada individuo le parezca, sino aquella que todo individuo razonable reconocería como la norma para una acción en discusión. Nuestras sociedades, propias del capitalismo tardío periférico, sustentan su crisis en el predominio de la significación imaginaria central del mundo contemporáneo (el crecimiento pseudo-racional ilimitado) sobre la otra significación recreada con el surgimiento del capitalismo (el proyecto de autonomía social individual). La eliminación de esta polaridad fecunda conduce a lo que Castoriadis llama "la época del conformismo generalizado", donde la libertad está del todo amenazada, tras ésta no sólo están los regímenes totalitarios o autoritarios, lo están también, de un modo más oculto pero no menos fuerte, la atrofia del conflicto y la crítica, la expansión de la amnesia y la irrelevancia, la creciente incapacidad para cuestionar el presente y las instituciones existentes, ya sean éstas propiamente políticas o ya bien contengan las concepciones del mundo.

Si hablamos de descomposición en la sociedad, la sociedad de la tontería y la banalidad, no es sólo porque en la sociedad ca-



pitalista contemporánea exista un creciente deterioro de sus significaciones imaginarias sociales –progreso, crecimiento, bienestar, enseñanza “racional”– o porque tengamos una gran dificultad para dotar de sentido nuestra vida individual y colectiva, sino también porque nosotros funcionando acríticamente producimos y reproducimos este tipo de sociedad: hemos caído en una heteronomía radical, ocultando la posibilidad de la autocreación.

La actualidad de este pensamiento es inminente. Los individuos de la sociedad contemporánea se encuentran presos del imaginario que hace época. Nos encontramos “privatizados”, “globalizados”, en una palabra, “embrutecidos” en búsqueda de más dinero para tener más artefactos eléctricos, más televisores, más máquinas de tontería y banalidad. Todo parece indicar que fuera del consumismo massmediático no tenemos otros objetivos en la vida. Hemos caído en el vacío obnubilados por la ofensiva neoliberal que nos ha llevado a una preocupante “invención” en la esfera política, y a una descomposición de los mecanismos de dirección de la sociedad que se han convertido en una especie de lobby donde todo se compra y se vende, y donde los intelectuales han sido relevados por los tecnócratas, los mercadotecnistas, los lectores de encuestas de opinión y los presentadores de televisión.

La búsqueda de la autonomía es urgente. La sociedad se hunde en la privatización material y psíquica, abandonando el dominio

⁴ Castoriadis, Cornelius, *El fin de la filosofía*, Revista Ensayo y Error No.4, Santafé de Bogotá, 1998. Este planteamiento también se desarrolla en “La polis griega y la creación de la democracia” (1983), incluido en *Los dominios del hombre: La encrucijada del Laberinto*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1994.

público y dejándole a las burocracias empresariales y financieras el poder real y efectivo. Permitiendo que individuos y sociedades sin memoria ni proyectos, ávidos a responder a una máquina económica, destruyan nuestra psique y la biosfera para seguir produciendo realidades llamadas mercancías: "la población en su casi totalidad ha participado. Cobardemente replegada en su esfera privada se contenta con el pan y los espectáculos. Los espectáculos están principalmente asegurados por la televisión y los deportes; el pan por todos los objetos banales disponibles a diversos niveles de rentabilidad"⁵.

Esta tendencia generalizada se consolida y refuerza con el advenimiento de lo que Ignacio Ramonet llama el "pensamiento único"⁶, aquel salido del triunfo del imaginario capitalista liberal que nos ha querido ofrecer un mundo con pretensión universal, expresando básicamente los intereses de un conjunto de fuerzas económicas multinacionales que dan más importancia a lo económico que a lo político. Ello a llevado a la sociedad a una cesión del poder de los ciudadanos, sin debate crítico, en favor de unas fuerzas "invisibles" que al atender al nombre universal de mercados, se han apoderado, no sólo de la dirección económica de la sociedad, sino de la conducción de nuestra vida.

Este credo, repetido constantemente en todos los medios de comunicación –controlado por los mayores beneficiarios del pensamiento único–, por tecnócratas, políticos, ya sean de izquierda, centro o de derecha, ha llegado a tener tal fuerza de intimidación que ahoga toda tentativa de reflexión libre y hace muy difícil la discusión central de la democracia: la justicia y la libertad.

Sin embargo, el individuo y la sociedad pueden romper el cerco cognitivo propio de la heteronomía –pensar que su sentido le es dado desde algo exterior– y abordar como posibilidad efectiva de la colectividad, la autonomía, esto es, la creación de individuos y sociedades donde sus instituciones no se den exclusivamente en la clausura de su sentido.

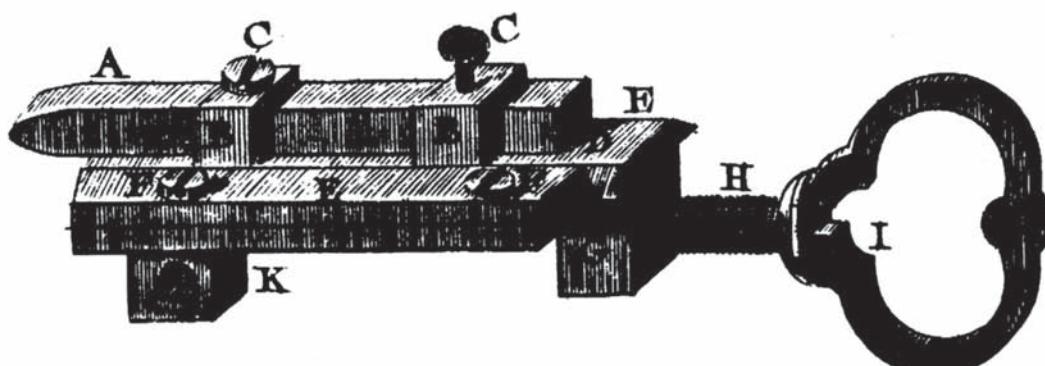
Autónomos nos dirá una y otra vez Castoriadis, son individuos o sociedades que están en capacidad de darse sus propias leyes: "soy autónomo en una sociedad si tengo la posibilidad real, y no sólo formal, de participar, junto con todos los demás, en un plano de igualdad efectiva, en la formación de la ley, las decisiones acerca de ella, su aplicación al gobierno y a todas las acciones de nuestra existencia". Esta es la enseñanza de este gran pensador, el ser-sociedad de la sociedad, son las instituciones y las significaciones imaginarias sociales que encarnan esas instituciones y las hacen existir en la efectividad social.

Esta propuesta se hace especialmente relevante en nuestra coyuntura política actual. La invitación al logro de una sociedad democrática, una sociedad donde la esfera público-pública sea efectivamente pública y no un objeto de apropiación privada por los grupos particulares. Hoy en día lo esencial de los asuntos públicos, es siempre asunto privado de los diversos grupos y clanes que se reparten el poder efectivo.

Una sociedad democrática, puntualiza Castoriadis, debe separar y articular al mismo tiempo tres esferas de la actividad humana: el oikos –la esfera privada, la

5 Castoriadis, Cornelius, *Una sociedad a la deriva*, en Revista Archipiélago No.17, Madrid,1994:106.

6 Ignacio Ramonet, director del mensual Le Monde Diplomatique, (París) ha denominado el pensamiento único como aquel que descansa sobre los dogmas religiosos de la globalidad, la competitividad, el fin de la historia y el funcionamiento libre de un mercado totalitario sin admitir ninguna otra política económica que el neoliberalismo, el cual, deja problemáticamente de lado los derechos sociales de la ciudadanía.



casa, la familia; el ágora– la esfera privada-pública, el mercado (lugar de reunión, donde los individuos se encuentran libremente, discuten, establecen contrato entre ellos y donde formalmente el poder no puede ni debe intervenir; la ecclesia –la esfera pública, el lugar del poder, el dominio público-público– el poder comprende a los poderes y estos deben estar a la vez separados y articulados.

La relación entre estas tres esferas no tiene nada de “natural” o de evidente; ellas son siempre instituidas. Para Castoriadis la política es la actividad lúcida y reflexiva que se interroga sobre las instituciones de la sociedad, y llegado el caso, apunta a transformarlas; actividad que persigue la transformación de las instituciones de la sociedad para hacerlas conforme a la norma de la autonomía de la sociedad permitiendo la auto-institución y el auto-gobierno explícitos, reflexivos y deliberados de ésta. La institución como tal es lo que busca la política, para a través de ella discutir las grandes opciones que afectan a la sociedad en su conjunto, se dirige al colectivo anónimo, presente y por venir.

La crítica punzante de Castoriadis resuena en una sociedad que no quiere ver

sus conflictos y potencialidades. ¡No hemos venido al mundo para tener más autos y más televisión!, fue el grito de batalla de este pensador, que al replantear y actualizar el principio de la democracia ateniense, se revela contra la dislocación del proceso identificatorio en sus diversas entidades socialmente instituidas: hábitat, familia, lugar de trabajo, relaciones de género.

El hombre y la mujer son y deben ser instituidos por las sociedades como polaridades irreversibles e inseparables, sobre nuevas significaciones imaginarias sociales que replanteen las formas de dominación no sólo en nuestra vida individual, sino en nuestra vida colectiva relativizando esa insuperable hostilidad psíquica de los seres humanos al proceso de socialización. Allí apunta lo esencial de la reflexión política de este Aristóteles moderno, problematizar y replantear el constructo cultural en su conjunto, y sobre las cenizas de varias de las instituciones y significaciones de la sociedad –teniendo como base la identidad masculina y femenina–, construir un individuo y una sociedad con mayor capacidad de deliberación y crítica.

Febrero 1998

Cornelius Castoriades
Filósofo francés.

Transformaciones actuales del capitalismo y sus impactos sociales y económicos¹

Cornelius Castoriades

Quisiera en primer lugar, agradecerles a todos por haber venido, en particular a la Universidad de Santiago, al Instituto de Ecología Política, al Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública de la Universidad de Santiago y a mi amigo Sergio Zorrilla, que tuvo un papel esencial en esta invitación, permitiéndome hoy día estar con Ustedes y discutir una serie de temas que considero muy importantes, tanto para nuestra vida en la época contemporánea, como para nuestro porvenir.

Existe una singularidad de la época moderna, a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos en que las sociedades estaban fundadas sobre un sólo sistema de significaciones imaginarias sociales, un sólo sistema de valores, de normas, de orientaciones. Nuestra época se encuentra asentada sobre dos sistemas de significaciones, de valores y de



normas. El primero, es la continuación de la búsqueda de autonomía individual y colectiva, que encuentra sus raíces en la Grecia antigua y que después de un largo eclipse renace en los tiempos modernos, a partir del siglo XI, con el movimiento de las comunas en Europa Occidental, que exigen su independencia. Es el movimiento emancipatorio democrático y revolucionario que se prolonga posteriormente en las «Luces», en la Revolución Francesa y Americana, y en todas las revoluciones del siglo XIX y XX, y que culmina posteriormente con el movimiento obrero y que

¹ Conferencia realizada el 7 de mayo de 1996, en el centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile. Actividad coorganizada por el Cibisap y el Instituto de Ecología Política. Tomado de “El laberinto contemporáneo: sociedad, individuo, cultura.” Documentos de trabajo No.1, Centro de investigaciones en Bioética y Salud Pública (Cibisap) Universidad de Santiago de Chile, 1996.

vuelve a manifestarse nuevamente en el movimiento de emancipación de las mujeres, de los jóvenes y de los estudiantes, de las minorías culturales y nacionales.

El segundo sistema es el sistema capitalista, en donde la significación central no es aquella de la autonomía, ni de la libertad y la justicia, sino la expansión ilimitada de una dominación racional, que es un seudo dominio y una seudo racionalidad como lo vemos alrededor de nosotros todos los días. Dominio ilimitado de la naturaleza, pero también sobre la sociedad, sobre la producción, sobre el trabajo de los seres humanos e incluso sobre el consumo. No es difícil ver que estos dos sistemas de valores, de normas y de orientaciones son totalmente antagónicos, aunque durante el siglo XIX y el siglo XX se hayan contaminado recíprocamente.

La segunda mitad del siglo XX tiene algo de especial. Existe una especie de retirada y repliegue de la autonomía, del «sentido» actual y concreto de la misma y una dominación creciente de la significación capitalista. El resultado es un cambio vital de esta sociedad, que se acompaña de una especie de crisis permanente, soterrada. Es esta crisis la que voy a tratar de explicar y examinar en tres niveles. En primer lugar, un nivel económico; en segundo lugar, un nivel político; y finalmente, un nivel cultural antropológico.

I. El nivel económico

Comenzo con el nivel económico, no porque crea que es el más importante, sino porque es precisamente la sociedad que ha puesto la economía capitalista en el centro, como fundamento de todo, y que ha intentado convencer a los seres humanos de que la economía, el dinero, la ganancia, el nivel material, es el centro, de la vida social y el único valor verdadero de la vida humana: y casi lo logró.

Tomemos entonces, en primer lugar, la economía capitalista. Nadie pensó en un primer momento, al menos no todo el mundo, que esta economía iba a seguir una carrera victoriosa durante dos siglos, dada la inmensa pobreza que ella generaba, la cesantía,

las crisis periódicas de la economía y las crisis de sobreproducción.

Hubo un pensador importante en el siglo XIX, cuyo nombre es Karl Marx, que no es muy «chic» recordar en estos días. Este pensador estudió este sistema y pensó en poder anticipar las grandes tendencias que iban a determinar su evolución. Estas grandes tendencias se expresaban, en primer lugar, a través de una pauperización creciente en la sociedad, en particular de los trabajadores. Es decir, la pauperización, el empobrecimiento, ya sea absoluto o relativo en comparación con el aumento de la riqueza de la sociedad; pero, incluso, absoluto, ya que Marx pensó que el salario obrero iba a permanecer inalterado en términos reales o que incluso iba a disminuir en circunstancias que el producto del trabajo iba a aumentar constantemente. Su segunda idea era que se generaría una sobreproducción creciente, ya que si la productividad aumentaba constantemente se crearía una especie de ola creciente de mercancías que no encontrarían un poder de compra frente a ellas, como consecuencia justamente de la pauperización del conjunto de la población.

La tercera conclusión era que la cesantía aumentaría constantemente, porque la productividad expulsaba a los trabajadores de la producción, es decir, ella aumentaba permanentemente con el progreso técnico, de tal manera que iba a aparecer lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva. Al mismo tiempo, él pensaba que esta sobreproducción se traduciría sobre todo en crisis periódicas, durante las cuales una gran parte de la fuerza de trabajo se encontraría cesante y las mercancías acumuladas no encontrarían ningún mercado.

Estas previsiones, sin embargo, no se verificaron. Y no se verificaron en función de dos factores. El primero, es que durante el período que va desde el 1800 a 1950 existieron importantes luchas obreras que obtuvieron importantes resultados, pero que tuvieron, más aún, como resultado, un aumento constante a mediano y largo plazo del salario real, del nivel de vida de la clase obrera. De tal manera que se crearon mercados internos siempre crecientes, lo que permitía consumir, de manera permanente, la producción constante del capitalismo.

Al mismo tiempo, las luchas obreras obtuvieron una reducción importante de la duración del trabajo, de la duración semanal, mensual y anual del tiempo de trabajo en el conjunto de la vida del obrero. Así, por ejemplo, en lo relativo a la duración mensual del trabajo, ésta fue reducida de 72 horas semanales en el año 1840, a 40 horas solamente en 1940. Si esta reducción hubiese continuado al mismo ritmo, la semana de trabajo sería hoy día de 25 horas.

Otro efecto muy importante de las luchas obreras fue la de reducir la irracionalidad interna del proceso capitalista de producción y del proceso del trabajo. Efectivamente, al mismo tiempo que la mecanización constante de la organización del trabajo generaba una racionalidad creciente, esta racionalización y la organización semanal del trabajo en la empresa capitalista se realizaba a través de la tendencia a tratar a los seres humanos como cosas, como máquinas; más directamente como simples apéndices de máquinas, intentando reglamentar hasta el absurdo, el proceso de trabajo y los más mínimos gestos de los obreros. El hecho de que esta organización del trabajo fue y sigue siendo absurda, podemos demostrarlo con un ejemplo muy simple: lo que llamamos en francés «la huelga de celo». Esta es el exceso de aplicación de reglamento, el trabajar absolutamente según las reglas. Y esta huelga es una de las más eficaces de todas, puesto que si los obreros aplican al pie de la letra los reglamentos, durante una o dos horas, la empresa se detiene. Si, por ejemplo, los trabajadores de los aeropuertos tuviesen la idea de comenzar una huelga de este tipo, yo tendría el placer de permanecer por mucho más tiempo del presupuestado junto a Ustedes.

El segundo aspecto es que a partir de 1930-1940 aproximadamente, los diferentes gobiernos capitalistas enfrentaron otro problema que las luchas obreras por sí mismas no podían resolver: las crisis periódicas. Como Ustedes saben bien, en 1929 comenzó una crisis bastante grande, la más importante de todas, en la historia del capitalismo. Después de un cierto tiempo los gobiernos capitalistas respondieron a esta crisis con políticas como la del New Deal rooseveltiano en Estados Unidos y otros similares en Alemania. Más generalmente, sobre todo des-

pués de los años 30, se inauguraron las políticas keynesianas, instaurando una intervención del Estado en la macroeconomía, a través de intervenciones explícitas en las políticas presupuestarias, es decir, que para sostener la demanda que se debilita, el gobierno seguía una política consciente de aumento del déficit presupuestario, interviniendo en la política del crédito, bajando las tasas de interés, para poder, por ejemplo, es-



timular las inversiones. Aparece, entonces, una política de tasas de cambio, cuya manipulación permite el aumento de las exportaciones y disminuye las importaciones, reforzando de esta manera la producción nacional.

Lo que ocurre, más o menos desde hace 4 o 5 lustros, es que estos dos factores, no tienen ningún rol. El primer factor ya no asume ningún papel porque hubo un retroceso considerable de los procesos sociales y políticos, un decaimiento constante de las luchas de los trabajadores, lo que facilitó el regreso ofensivo del liberalismo, de aquello que conocemos nosotros como neoliberalismo, lo que llevaba al retiro del Estado

–Estado, por supuesto, capitalista–, del rol que éste había tenido durante el período anterior en el interés general de la economía capitalista. Este decaimiento de la lucha de los trabajadores hizo imposible continuar estas intervenciones del Estado en lo económico.

Voy a volver a este punto, que según mi modo de ver es el más importante, es decir, el retroceso de las luchas de los trabajadores, pero antes voy a hacer dos observaciones sobre el neoliberalismo y sus efectos. Esto prolongará el tratamiento del tema económico, y espero que no tengan miedo de ello. En la gente existe generalmente la idea que las matemáticas son espantosas, que la economía es algo totalmente incomprendible. Bueno, no vamos a hacer matemáticas, ni economía matemática, pero les voy a explicar en pocas palabras lo que ocurre con el neoliberalismo. Antes que nada, cómo el neoliberalismo logró esta victoria.

La victoria del neoliberalismo no tiene que ver con la economía puesto que se trata, antes que nada, de política. Durante los años 60 y 70, la presión de los trabajadores sobre el salario era permanente y creaba una presión inflacionista sobre los precios. Los capitalistas no veían con malos ojos esta presión, el aumento del salario repercutía también en el aumento de los precios de las mercancías y en los bancos, ya que después de un clima de dulce inflación, la situación se vuelve muy favorable para las inversiones capitalistas porque las empresas se endeudan con el dinero que tiene un valor en el banco, lo devuelven diez años después, cuando el valor de este dinero ha disminuido mucho. Por supuesto, que la diferencia la paga la población en su conjunto y no seguramente los bancos. Pero comienza a producirse una reacción ante esta inflación por parte de algunos sectores de la clase capitalista.

Además, hubo un accidente, resultado de las dos crisis del petróleo, las que crearon pánico, puesto que el precio del petróleo, producto esencial para el funcionamiento de la economía moderna, se encontró multiplicado por diez, quince o más, en el espacio de dos o tres años y se temió una inflación que iba a minar el fundamento de la economía capitalista.

A partir de este momento comenzaron a producirse políticas restrictivas muy fuertes. Una ofensiva contra el aumento de los salarios, una propaganda que aterrorizó a la población, (estoy hablando de los países industrializados) presintiendo la catástrofe había que apretarse más el cinturón. Estos dos factores, combinados con una crisis interna del movimiento de los trabajadores, tuvieron un efecto importantísimo, de tal manera que en el año 1978, por ejemplo, se constató un fenómeno que era desconocido anteriormente: los sindicatos obreros aceptaban firmar acuerdos en que los salarios son disminuidos. Y después se produce la gran ofensiva política de la Thatcher y Reagan, que modifican la política económica, liberalizando totalmente la economía, intentando privatizar todo aquello que podían privatizar, intentando reducir considerablemente el déficit, se convirtió en herética, heterodoxa, casi diabólica. Esto no tuvo un éxito económico, sino un inmenso éxito político y se propagó también, en otros países. En Francia, los miembros del gobierno socialista de Mitterrand tuvieron la gloria de haber aplicado esta política, que luego se implantó en los países escandinavos, y en la España de Felipe González.

Ya no se hace más política presupuestaria para combatir la debilidad de la demanda, eliminando la posibilidad de actuar sobre la tasa de interés del crédito. La estabilidad monetaria, en cambio, se ha convertido en un nuevo dogma religioso y estamos asistiendo a una situación en la cual efectivamente la inflación retrocedió mucho en los países industriales, pero la cesantía ha alcanzado proporciones inmensas, aumentando en consecuencia la pobreza en la sociedad. Esto es lo que en Francia se llama la fractura social; fractura entre los que tienen trabajo y más o menos se ganan la vida, pero que al tener miedo de la cesantía no se mueven, y aquella población que está cesante y que forma en los barrios marginales una masa que no puede expresar reivindicaciones, salvo provocar esporádicamente explosiones periódicas que no conducen a ninguna parte.

Todo esto se combina con otra tendencia que es la mundialización, llamada también globalización de la producción, deslo-

calización de las diferentes producciones. La mundialización quiere decir que el capitalista invierte de ahora en adelante allí donde le parece más ventajoso, sin ninguna otra condición. Esto implica que, por ejemplo, mientras existe una cesantía importante en Francia, Inglaterra y en Alemania, las inversiones se hacen sobre todo en los países del Asia del este y el Sudeste donde los salarios son bajísimos y donde hay una abundante mano de obra muy disciplinada a causa de la miseria, que no se atreve a reivindicar nada, que está muy contenta con tener al menos un pedazo de pan, pero donde hay expertos, técnicos e ingenieros que, por supuesto, pueden construir las fábricas y hacerlas funcionar, contando solamente con la ayuda de dos o tres ingenieros occidentales, más algún personal adhoc. Para ilustrar esto bastaría con tener presente que los salarios medios de un ingeniero en Alemania, Francia e Inglaterra, actualmente son del orden de 30 dólares la hora -estoy hablando de los salarios y las imposiciones-, el mismo salario es de 8 y 10 dólares la hora en Polonia, Brasil y me imagino que también en Chile. El salario horario de un ingeniero vietnamita muy bien formado es de apenas 1 o 2 dólares.

Otro ejemplo que yo les puedo dar, sin entrar en detalles de esta historia, es cuando la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos, quiso producir lo que se llama un tesoro de la lengua griega, es decir, un inmenso repertorio de todas las palabras de la lengua griega, con todas las utilizaciones de estas palabras y de los autores que las utilizan en diferentes textos. Después de un trabajo preparatorio, se enviaron las ediciones completas de estos autores a Filipinas. Ahí



se contrató a jóvenes analfabetas y se les explicó que cada vez que ellas vieran un signo griego debían apretar un botón del computador. El trabajo se hizo entonces en Filipinas, las niñas ganaban más o menos un dólar por día, y deberían estar seguramente muy contentas. Cuando esta fase se terminó, se llevó el material a Berkeley y ahí los estudiantes postgraduados, por cinco dólares a la hora, controlaban la transcripción que habían hecho las niñas, ya que la tarea era bastante simple. De esta manera produjeron un Cd rom

que cuesta quinientos dólares. Para alguien que quiera trabajar con autores griegos es una herramienta fantástica. Ustedes pueden obtener de inmediato todas las utilizaciones de tal palabra en un autor específico, con la dimensión y el contexto que Ustedes deseen. Se podrían encontrar miles de ejemplos en la industria, yo sólo tomé éste que podríamos pensar como más calificado, más difícil de hacer por profesores importantes de la Universidad. Y bien, el 95% del trabajo fue realizado por jovencitas analfabetas. Este es el poder de la automatización y de la información.

Por supuesto que hay un raciocinio de la economía política clásica, sobre todo de David Ricardo, que se llama la Teoría de los costos comparativos, según la cual todo el mundo debería ganar en el comercio internacional libre, porque cada país en este caso va a especializarse en la producción en la cual es más productivo y más eficaz. Por ejemplo, en su época era más interesante que Portugal produjera Oporto y no textiles, porque el Oporto era exportado a Inglaterra, y con el dinero ganado importaba el textil producido mucho mejor en Inglaterra. De esta

manera, Portugal desde 1700 queda convertido casi en una colonia de Gran Bretaña, estuvo mucho más al servicio de la economía inglesa y se contentó con producir, hasta la caída de Salazar, únicamente Oporto, caucho y sardinas.

Pero algo podemos decir sobre las razones que han conducido, más exactamente, sobre los factores que han condicionado esta apatía social y política que caracteriza a estos países desde hace varias décadas. Digo los factores que han condicionado y no las razones que explican, porque no creo que haya razones que expliquen las cosas en la historia de la humanidad. Hay condiciones que facilitan o vuelven más difícil el surgimiento de ciertas cosas, pero no hay causas rigurosas que rijan los acontecimientos.

Entre estos factores que condicionaron la evolución hay que mencionar en primer lugar, lo que habría que llamar el fracaso de las organizaciones obreras. Que este fracaso tomó la forma de la burocratización blanda, como en el caso de la socialdemocracia, lo que hace que no puede distinguir en absoluto a los socialdemócratas de los conservadores que, por ejemplo en Francia, el señor Beregovoy prosiguió la política del señor Balladur, que en seguida cuando los conservadores volvieron, Balladur prosiguió la política de Beregovay y luego hubo elección presidencial en 1995 y el señor Chirac explicaba que la política del señor Balladur arruinaba el país y cuando Chirac tomó el poder, continuó aplicando la misma política. Con esto quiero decir que la política económica de los socialistas y de los conservadores en Francia es absolutamente igual y podemos encontrar lo mismo en los países escandinavos, donde los partidos socialdemócratas aplican de manera concienzuda la ortodoxia neoliberal.

Pero se ha producido, al mismo tiempo, el fracaso terrible de las organizaciones obreras que habían tomado la vía totalitaria, con la evolución del comunismo en Rusia. Esto ya desde la toma del poder. Lo que el ejemplo ruso y de los otros países dominados por el sistema comunista mostró a los demás países europeos, fue algo así como un ejemplo por evitar. En 1953 tuvieron lugar las huelgas en Checoslovaquia y Berlín Este, las revoluciones húngara y polaca en

1956, los acontecimientos en Checoslovaquia en 1968, el nuevo movimiento polaco en 1980 con Solidaridad; luego la dictadura de Jeruselski, y, finalmente, el derrumbe o la caída del muro de Berlín, que reveló al mundo un Estado aún más monstruoso; Estado que los más duros en la crítica de este régimen, como yo, no nos atrevíamos ni siquiera a imaginar anteriormente. Todo esto decepcionó, le quitó fuerza a los trabajadores y, al mismo tiempo, descalificó a sus ojos la forma tradicional de organización de los trabajadores, como el Partido y el sindicato. Por supuesto, los dejó desorientados totalmente, en relación los objetivos que pudiera tener una lucha radical, puesto que los capitalistas y sus ideólogos no dejaron de repetir permanentemente, «ya lo ven, se lo habíamos dicho, y si quieren cambiar la sociedad, la única cosa que logaría realizar son campos de concentración y Gulags». Lo que evidentemente es un sofisma, pero que tiene a pesar de todo un cierto impacto.

Hubo, al mismo tiempo, un segundo factor, la enorme disminución del proletariado industrial, que dejó de aumentar en países como, por ejemplo, EE.UU desde 1914; en otros países industriales desde 1930 a 1950. El aumento enorme de la productividad explica esta disminución, es decir, que las máquinas hacen cada vez más el trabajo de los seres humanos y el productor que era expulsado desde la industria pudo encontrar un empleo en los diferentes sectores llamados de servicios. Pero en los servicios las condiciones desde el punto de vista del trabajo no son las mismas que en las fábricas. Por ejemplo: si Marx pensaba que el proletariado era una clase revolucionaria era también porque constataba que la vida en las empresas cambiaba cualitativamente la vida de la gente. Era evidentemente, una vida de opresión considerable, pero también era una vida de solidaridad colectiva, de toma de conciencia de la explotación, que preparaba a la gente para cambiar su condición.

Las condiciones de trabajo y de vida en los servicios son totalmente diferentes. Los trabajos son fragmentados, no hay uniformización, no hay solidaridad entre los trabajadores, hay una jerarquización mucho más fuerte, siempre con una esperanza de promoción, lo que explica que los

trabajadores de servicios rara vez han demostrado la combatividad o la capacidad de luchar que habían demostrado los trabajadores industriales.

En tercer lugar, hubo un desarrollo de lo que podemos llamar el consumismo. De la misma manera que la clase capitalista había comprendido, a partir de cierto momento, que el aumento de salarios lejos de arruinarla le creaba mercados internos -es lo que llamaban el Fordismo-, de la misma manera comprendió, a partir de un cierto momento, que podía perfectamente manipular la población y fijarla en su condición presente a través del aumento del consumo, de formas del consumo popular, con el crédito al consumo, etc. De tal manera que la gente se ocupa de la búsqueda continua del consumo. Entre otras cosas se endeudaron cada vez más para poder consumir bienes durables. Pienso que este mismo proceso tiene lugar fuertemente en estos momentos en Chile, y que los chilenos se instalaron en un modo de vida lleno de algunos bienes de consumo, pero que los repliega sobre su esfera privada, al mismo tiempo, que existe una gran decepción en relación con los partidos y las organizaciones sindicales, lo que los hace abandonar absolutamente la esfera pública; intentando vivir sus vidas en círculos estrechos de la familia la que ya no es más la familia amplia, puesto que se reduce sólo a la familia nuclear, de tal manera que lo que se denunciaba en Francia en mayo de 1968, diciendo: «metro, boulot, dodo» (metro, pega, sueño) se puede decir ahora: «metro, boulot, tele, dodo» (metro, pega, tele y sueño). Todo esto condujo también a una descomposición de los mecanismos de dirección política de la sociedad.

II. Nivel político

Y llegamos entonces al segundo nivel que deseaba considerar, el *nivel político*. Si consideramos el personal político, como el dirigente actual, es difícil no verse impactado por la superficialidad de las personas que lo componen, su incoherencia, su versatilidad y la esterilidad política e ideológica que los domina; no voy a citar nombres para no ofender a na-

die, pero creo que basta con mirar en torno a uno. ¿Quién es responsable de esta situación? Yo no pienso, por ejemplo, que la raza humana haya degenerado. Creo, en primer lugar, que han cambiado los mecanismos de selección y reclutamiento del personal dirigente. La política siempre fue un oficio extraño que exigía de la gente dos capacidades, que no tienen ninguna relación la una



con la otra. Una es acceder al poder y, la otra, es utilizar ese poder para gobernar realmente. Para acceder al poder hoy en día basta saber nadar y flotar en las luchas entre clanes y capillas, que es lo que constituye la vida de los partidos políticos. Pero la capacidad de subir, de montarse en la escala partidaria, de manipular a la gente en el seno del partido, no conlleva en absoluto la capacidad de gobernar una vez que se está en el poder y eso uno lo constata. El segundo factor, es la mediatisación de la vida política, la televisualización de la política; por ejemplo, los norteamericanos eligieron dos veces al Sr. Reagan como presidente y el pobre Sr. Reagan antes de tener la enfermedad de Alzheimer que tiene en estos momentos, ya

se portaba como alguien que tuviera dicha enfermedad. Por ejemplo, estaba en Colombia y decía: «Estoy muy contento de estar en Perú», y creo que en Brasil se eligió hace cinco o seis años un Presidente de la República porque era buen mozo y que aparecía en trajes de tenis y en cruceros de placer.

Si tomamos ahora los propios partidos vamos a ver que hay un vacío ideológico total, tanto en la derecha como en la izquierda, y además los partidos y los sindicatos se han transformado en lobbies corporativos. La sociedad, entonces, se vuelve sociedad de lobbies.

Yo creo que esto se va a generalizar en todos los países. Por ejemplo, la reglamentación americana establece incluso la cantidad de dinero que pueden recibir las organizaciones políticas, como es el caso de los congresistas en las elecciones, que cuestan cantidades enormes de dinero. También reglamentan las actividades de los lobbies, indagan el oficio que pueden haber ejercido los políticos antes y muchas otras cosas de este tipo. En una sociedad fragmentada a tal punto en torno a intereses particulares, donde evidentemente cada uno barre para su lado, la fuerza resultante de todo este movimiento, como se diría en mecánica, es necesariamente nula. El uno tira para la derecha, el otro para la izquierda y, por supuesto, que el objeto no se mueve, es por eso entonces que la sociedad está inmóvil.

III. Nivel antropológico

Se constata también una evolución antropológica y cultural completamente negativa. Primero que nada hay una desaparición de tipos antropológicos que habían hecho funcionar la sociedad e, incluso, la sociedad capitalista hasta hoy. Hay que recordar, para comenzar, que cada sociedad construye un cierto número de individuos que son capaces de hacerla funcionar y, a su vez, estos individuos construyen esta sociedad. Por ejemplo, Ustedes no podrían hacer funcionar la corte de los faraones con los Golden Boy de Wall Street, y tampoco podrían hacer funcionar la bolsa de Nueva York con los cortesanos de Luis XIV: harían reverencias todo el tiempo, le dirían adelante señor, pero, puesto que Usted tie-

ne una buena información compre antes que yo. Una bolsa no puede funcionar con estos principios. Para que la bolsa funcione uno tiene que caminar sobre los pies de los demás. ¿Y cuáles eran los tipos antropológicos que habían hecho funcionar la sociedad capitalista? Primero, los obreros conscientes, aunque estos obreros no eran una creación de la sociedad capitalista, eran herencia del artesanado; también los funcionarios competentes, que eran una herencia del antiguo régimen de la monarquía absoluta, lo mismo en el caso de los jueces íntegros.

El único tipo antropológico que creó el capitalismo es el que podríamos llamar «el empresario shumpeteriano» (este autor, es un economista y sociólogo austriaco). ¿Qué es lo que era tipo antropológico shumpeteriano? Era un tipo de individuo bastante extraño, que no existió en ninguna otra sociedad. Era alguien capaz de hacer, por ejemplo, él mismo, una invención técnica u oler una investigación técnica y comprender que ésta podría tener un futuro y podría permitir fabricar objetos que podían venderse, traducir esta invención técnica en proceso industrial y juntar todos los capitales necesarios para poner todo esto en acción, reunir a los obreros e ingenieros para hacer funcionar todo esto y saber al mismo tiempo vender.

Por ejemplo, Henry Ford, realmente no fue el autor de ninguna invención, pero supo transplantar la producción en cadena de los mataderos de Chicago a la producción de automóviles. Supo también encontrar a ingenieros dotados, reunir a los capitalistas y persuadir a toda América de que él no trabajaba por el dinero sino para los obreros y que los automóviles que producía la industria Ford en los años 20, el célebre modelo T, que se ven comúnmente en las películas de Chaplin, era el auto que necesitaba todo buen americano. Este tipo de individuo ya no tiene necesidad de existir hoy en día. Y los últimos tipos parecidos que existen son Billy Gates, los creadores de Microsoft.

El resto de las grandes empresas capitalistas son dirigidas por la burocracia empresarial y para convertirse en presidente, director general de esta burocracias es necesario tener las mismas cualidades que yo acabo de describir, para la ascensión a la burocracia del partido.

Los obreros conscientes ya no tienen una necesidad de seguir existiendo o de

esforzarse en existir, no solamente porque su producción no les interesa, sino porque todo lo que tenía interés fue reemplazado por las máquinas.

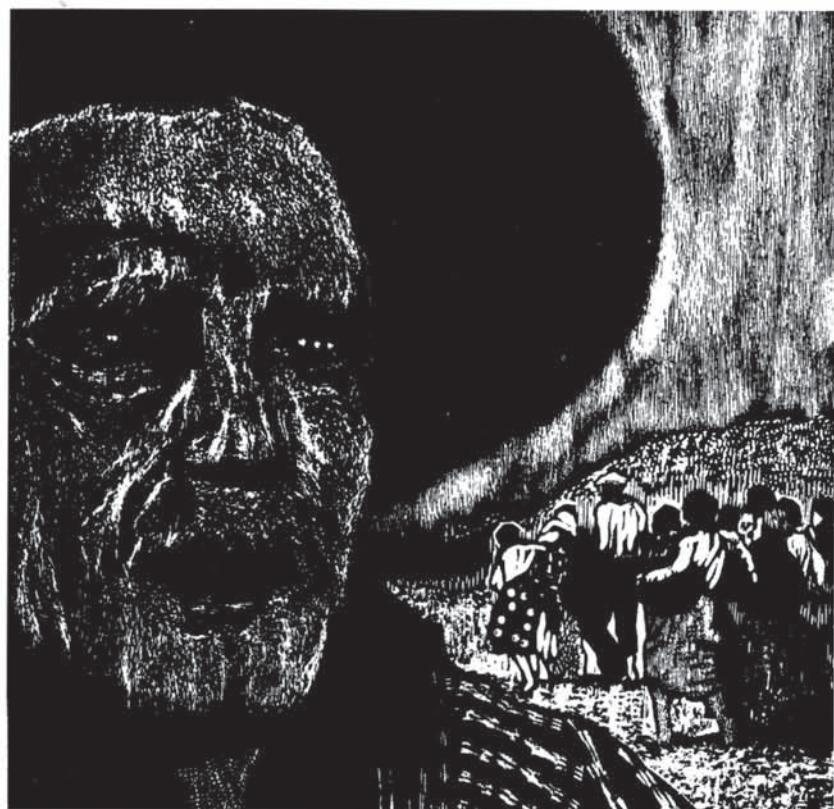
Los funcionarios competentes e íntegros se habían inspirado en un ideal, que era el servicio al Estado y la sociedad. Pero hoy día si hablamos de interés del Estado y la sociedad, independientemente de los intereses personales, yo creo que la gente va a pensar que somos imbéciles o se van a reír de Ustedes en su cara.

La misma cosa podemos decir de los jueces incorruptibles - si realmente existen - lo que es, por otra parte, un gran enigma de la sociedad actual. El hecho de que continúen existiendo aún jueces incorruptibles es absurdo, pero eso no va a poder continuar por mucho tiempo.

¿Por qué razón un juez no va a vender en un remate el juicio que fallará? No públicamente, por supuesto, sino en un lugar privado. ¿Cuánto da Usted por esto? ¿100? y ¿Usted? ¿120?. Entonces vamos a hablar con el primero de nuevo, me dan 120, ¿no me puede dar Usted un poquito más? se podría responder a lo que estoy diciendo que en toda sociedad hay controladores pero, como los romanos lo sabían muy bien: ¿quién controlará a quien controla?

De esta manera, podemos afirmar que un nuevo tipo de individuos está apareciendo en todos los sectores de la sociedad. Un individuo arribista, interesado solamente en lo que gana, conformista, que no se atreve a tener una opinión propia, que le da mucho miedo lo que dirán los otros, cínico, por supuesto, porque sólo se puede ser cínico cuando se es todo esto a la vez y totalmente irresponsable. Se puede preguntar uno, ¿cuánto tiempo más podrá funcionar una sociedad con individuos de este tipo?

Esta descripción sería totalmente incompleta si no se describiera la crisis de dos grandes instituciones, que están encargadas en la sociedad de producir individuos sociales: la familia y la educación. En la familia nos encontramos frente a una crisis que es doble: primero, está la crisis del rol de la mujer y del hombre, que viene desde antes de la crisis de la familia. Nadie sabe ya qué es ser mujer y, por tanto, en consecuencia, nadie sabe tampoco qué es ser hombre.



En las sociedades tradicionales, por ejemplo, una mujer sabía muy bien lo que tenía que hacer en tanto mujer, tenía que bajar los ojos cuando se la miraba, debía saber mantener el interés del hombre, siempre bajando los ojos. Pero, una vez había logrado casarse, ella sabía que su rol era hacer funcionar la casa. No hay ninguna duda que esto nos parece obviamente insoportable para nosotros, que era muy opresivo y alienante. Pero al menos en este marco preciso, aunque alienado, la mujer sabía lo que tenía que hacer y el hombre también sabía lo que tenía que hacer. El tenía que ser el proveedor para su familia y tenía que mantener el orden en la casa, era un poco la ley.

Esto también podemos criticarlo, yo también lo critico, pero también en este caso el hombre sabía lo que tenía que hacer. Estos roles ya no existen hoy en día. Y no existe tampoco el rol del padre, es decir, no se sabe más lo que un padre debe hacer.

La descomposición de estos roles ha llegado a un grado ridículo con lo que ocurre en Estados Unidos, en lo que atañe al problema del acoso sexual, por la conjunción de los antiguos restos del movimiento feminista y de la obsesión por el poder judicial que tie-

ne este país. Por supuesto que hubo acoso sexual en la sociedad patriarcal, que esto era inaceptable, tanto bajo la forma del acoso a la mujer en la calle y en otras partes, como sobre todo el acoso sexual en el trabajo, donde era obvio que los patrones y la jerarquía podían explotar su posición para obtener beneficios sexuales y no se privaban de hacer esto. Pero, ¿qué ocurre con el acoso sexual en EE.UU? El caso más extremo es la reglamentación propuesta por la Universidad de Georgia, donde se prescribe entre otras cosas: «que el joven debe conseguir el consentimiento de la joven, en cada nueva etapa del proceso», -¿es que va a tener que pedirle primero «puedo sacarte la blusa» y una vez que se la sacó, va a tener que preguntarle si puede sacarle el sostén también? No se va hasta el extremo de decir que sería necesario tener prácticamente un testigo, y levantar un acta notarial. Tampoco se explica bien cómo, después de pasar estas etapas el joven o la niña tendrán ganas de continuar. Pero en fin, esto ocurre en EE.UU. Esto es un ejemplo real, aunque parezca una caricatura.

Pero esto muestra lo que puede ocurrir cuando, por ejemplo, la gente ya no sabe en qué puede consistir su rol o cuál es su rol. Incluso en esta actividad antediluviana de la humanidad que es el juego del acercamiento sexual.

Lo mismo ocurre con el rol de los padres. Si Ustedes son padres, ¿pueden decir acaso claramente lo que Ustedes permiten, lo que Ustedes prohíben a cada edad del niño? Ustedes pueden decirle, por ejemplo, y ¡cuánta gente lo ha dicho!, que no hay que prohibir nada. Intenté hacerlo, y verá a dónde los va a llevar esto. Y si Ustedes tienen una distinción entre lo que permiten y lo que prohíben, ¿de dónde saca Usted los criterios para esta distinción?

A lo mejor Ustedes tienen todavía algunos criterios en relación con los grandes valores de la vida. Por ejemplo, no van a tener problemas para prohibirles a los niños que roben los juegos a los compañeros o amigos. Pero los niños crecen, tienen 10, 12, 14, 16 años y en un momento dado, yo no sé en qué momento, comienzan a pedirle permiso para salir en la noche con los amigos y las amigas. ¿Hasta qué edad no los dejan salir

de noche o después de la cena, y a qué hora tienen que volver? Ustedes establecen dichos permisos a partir de un horario, o sea, Ustedes pueden salir hasta las 11 horas, etc. Y así, más adelante, hay una edad en que ustedes están seguros que pueden entregar las llaves al adolescente. Si lo hace, ¿cómo puede justificarlo? Ustedes están obligados a navegar a la vista. Cuando no se tiene la brújula, ni un mapa, navegan a la loca, sólo ven un poquito de tierra en alguna parte, pero eso es todo.

Todo esto puede aparecer desde cierto punto de vista muy positivo, porque con esto quiere decir que la gente, las personas, han abandonado o están obligados a abandonar los viejos estereotipos, las viejas reglas heterónomas. Pero eso les pasa a los individuos a quienes, por lo demás, nada está dado, y no se les han entregado puntos de referencia para orientarse, más bien actúan según la fuerza interior de las convicciones, y no porque los niños del vecino lo hacen de esta manera.

Esta misma situación se encuentra en la escuela y en las instituciones educativas. Nos encontramos allí con una desorientación fundamental, porque los educadores ya no saben realmente cuál es su rol y lo que ellos pueden exigir de aquellos que educan, pero más profundamente porque en función del cinismo de la sociedad y de la idea de que lo único que cuenta y que tiene valor es el dinero, no hay más referencias válidas. La escuela se transforma en un instrumento, en algo instrumentalizado.

Cuando yo era niño había en Grecia una expresión, incluso entre los campesinos, cuando los padres le decían a sus hijos: "te envío al colegio para que te conviertas en **antropos**, es decir, un ser humano". Esos padres, conceptuados como iletrados, consideraban que el haber engendrado un hijo, haberlo alimentado y cuidado hasta los 6 años no significaba todavía haber hecho de él un ser humano. Sería en la escuela donde este niño se volvería humano.

Sin embargo, hoy día, se envía a los niños al colegio, por un lado, porque la ley lo obliga y, por otro, para que puedan aprender un oficio, pero ni siquiera tener

un oficio, sino tener un papel con el cual, tal vez, puedan obtener un empleo. Es decir, para los padres, la escuela ya no representa un lugar valorado positivamente, es un instrumento.

¿Para los niños acaso es fácil volverse un instrumento, el niño puede soportar la visión de un lugar no valorizado, al cual se ve obligado a ir, donde debe concurrir en función y por un interés futuro? ¡Raro, muy raro!, sería el niño que pudiera funcionar “sanamente” de esta manera.

Y finalmente, por el lado de los educadores, también es posible constatar que fueron obligados desgraciadamente a instrumentalizar su oficio, porque existe la crisis de los valores en general y porque ellos también, por supuesto, deben ganarse la vida, y porque también se encuentran desamparados frente a lo que hay que enseñar y cómo enseñarlo. Pero sería necesario comprender otra cosa, y es que la educación es en sí un oficio raro, extraño. Uno no puede ser realmente educado en el seno de la escuela, ya desde la básica, incluso en la enseñanza media, si de alguna manera uno no quiere a la profesora básica, o si uno no se enamora de algún profesor. Uno no puede ser educador si uno no quiere a los niños y si no se ama aquello que se quiere transmitir. Todo esto, un viejo tipo que tampoco es muy “chic” citar ahora, que se llamaba Platón, lo había visto, cuando afirmaba “que la educación sólo puede hacerse en el **eros**”. Bueno, traten de buscar el **eros** en la escuela actual.

Finalmente, en esta sociedad, tomada ya sea desde el punto de vista del individuo así como globalmente, ya no hay más perspectiva de futuro, de porvenir, ya no hay más proyecto para el futuro, ni para el porvenir, porque la idea que existía anteriormente del progreso está también desconsiderada. La gente puede seguir pensando, y de hecho lo hace, que la técnica y la ciencia avanzarán, incluso que habrá un poco más de riqueza, pero nadie le concede a la idea de progreso el significado prácticamente religioso que tenía durante todo el siglo XIX y mitad del XX. Y fuera de este progreso no sabemos lo que hay en el futuro, así como no hay un lazo auténtico y fecundo con el pa-

sado de la sociedad. No estoy hablando de una sujeción, de una dependencia con este pasado, estoy hablando de un verdadero conocimiento de esta tradición. El pasado ya sólo se encuentra en los museos, en las obras de los eruditos y en las agencias turísticas, que proponen visitar el “valle de los Reyes”, en tantos días y según tal cantidad de dólares.

Llego ahora a mi conclusión. Es necesario constatar que, en estas condiciones, el trabajo o la lucha o como ustedes quieran llamarlo, por una transformación de la sociedad, es difícil. La idea de la autonomía es todavía válida, pero todo sucede como si ella se hubiera vuelto por el momento socialmente ineficaz, porque ella estaría prácticamente escondida: Por un lado, bajo los escombros del movimiento obrero y, por el otro, bajo el parloteo multiplicado de los televisores de la sociedad de consumo.

Los individuos con los que nos encontramos están privatizados, los lugares de socialización que existían anteriormente, que eran el lugar de trabajo, la escuela, el pueblo, el barrio, la fábrica; han desaparecido o están siendo monstruosamente deformados.

La experiencia cotidiana vuelve muy difícil la invención de nuevas formas de organización y es muy difícil encontrar objetivos intermedios que permitan a la gente otorgarle al trabajo o a su lucha un contenido concreto. Es muy desesperanzador encontrarse con gente que está enfrentada ante una perspectiva del todo o la nada. O bien transformamos la sociedad absolutamente, o bien no hay nada que hacer. Estoy esquematizando, está claro. Hay muchas cosas particulares que podemos realizar y hay gente de izquierda o derecha que desea hacerlo. Así como hay gente que continúa no siendo cínica, ni irresponsable, que no soporta esta situación y que intenta transformarla allí donde puede hacerlo. Peor, creo que la imagen general es aquella que les ha entregado y si nada sucede, y si la gente no hace algo, si nosotros no hacemos algo, esa tendencia se agravará y ampliará.

No hay que decir que este es un punto de vista pesimista, la cuestión no es saber si se es optimista o pesimista. La cuestión es saber si es correcto o incorrecto, porque lo más importante, para hacer algo efectivamente, es ser lúcido y tener los pies en la tierra.

Oscar Epinosa
Médico psiconalista.

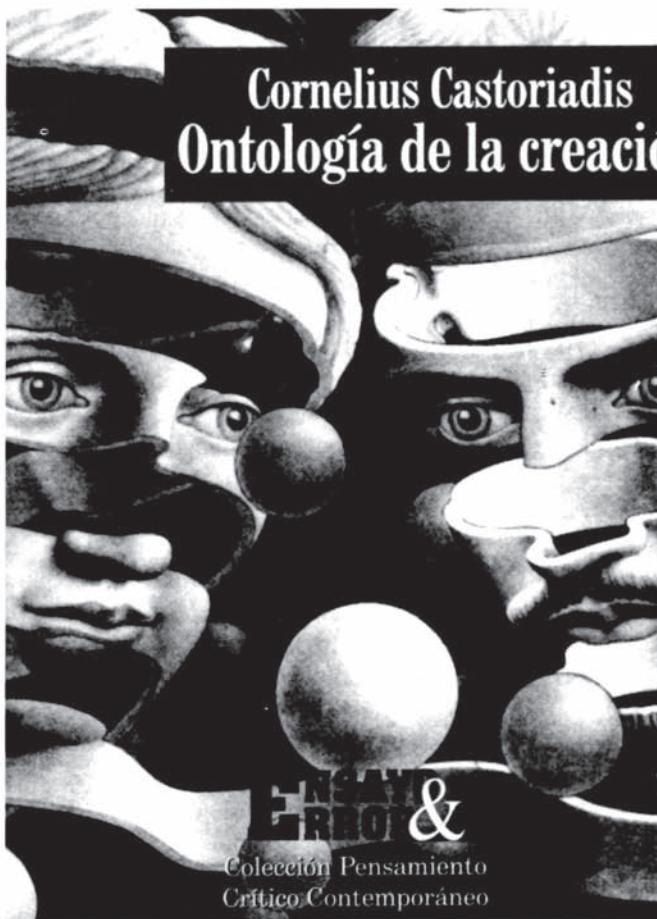
Ontología de la creación

Cornelius Castoriadis

Oscar Epinosa

Con este título la revista *Ensayo y Error* inicia su Colección Pensamiento crítico contemporáneo. Se trata de una antología de la fecunda producción teórica de Cornelius Castoriadis sobre el hombre y la sociedad contemporáneos, la cual abarca prácticamente medio siglo de trabajo y temas tan variados como: *Tiempo y creación* tomado de *Les carrefours du labyrinthe III*, *Complejidad, magmas, historia* publicado originalmente en el volumen conmemorativo *Sistema et paradoxe*, *Imaginación, imaginario, reflexión* que apareció en *L'inconscient et la science y*, finalmente, lo más importante del balance que él mismo hace de su obra en *Fait et à faire* que corresponde al tomo V de *Carrefours du labyrinthe*.

Estos textos van precedidos de *El Laberinto del pensamiento y la creación*, ensayo introductorio de Fabio Giraldo y José Malaver, síntesis ilustrativa de lo más destacado de esa arriesgada aventura a la que



se lanza el pensamiento de Castoriadis para esclarecer lo específicamente humano del hombre y lo específicamente social de la sociedad, a partir de la crítica de la teoría marxista de la historia y el enriquecimiento de la visión freudiana del psiquismo.

Me parece un gran acierto el título escogido: Ontología, para presentar la obra de Castoriadis, porque si algo caracteriza este pensamiento, desde que surge en el ambiente intelectual francés de los años cincuenta hasta el presente, es la insistencia en la creativi-

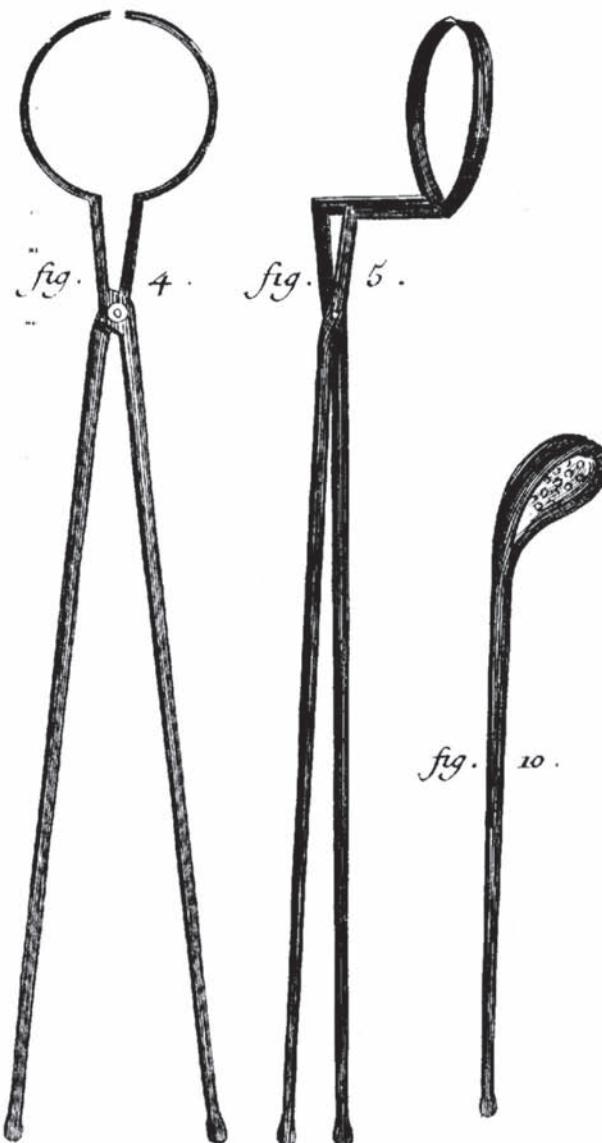
dad de los sistemas sociales y de los humanos al constituirse unos a otros mutuamente. Llegar a ser hombre o mujer es un arduo trabajo de creación continuada que se da dentro del campo de las *significaciones imaginarias sociales*.

Castoriadis rompe los esquemas deterministas cerrados que pretenden dar fundamento filosófico o científico a la *historia y a los cambios pretendidamente acumulativos y/o progresivos que se producirían en el curso de sucesivas decadencias y revoluciones de los procesos sociales e, igualmente, avanza en la superación del determinismo positivista que a veces ahoga los inmensos logros del pensamiento de Freud; rescata la ilimitada posibilidad de desarrollo y transformación que tuvo que generar la especie humana para hacerse a sí misma posible. En esa tarea supera los modelos marxistas de corte hegeliano y enriquece el psicoanálisis cuestionando la*

indigencia sociológico-filosófica de los analistas contemporáneos y la ignorancia psicoanalítica de los sociólogos.

La dimensión que Castoriadis le da a su trabajo, de alguna manera, es una respuesta a una exigencia que se siente en el texto de Freud. Por ejemplo, cuando afirma en las nuevas aportaciones al psicoanálisis (OC Biblioteca Nueva, II: 787; Santiago Rueda, XVII:7):

“No es ni de su concepción de la historia ni de las previsiones sobre el porvenir que obtiene de esta concepción que el marxismo extrae su poder, sino más bien de su ingeniosa demostración de la influencia conectiva que ejerce la situación económica sobre la actividad intelectual, moral y artística de los hombres. Una serie de contactos y de desencadenamientos, hasta entonces casi ignorados, fueron descubiertos de esta manera. Pero es imposible admitir que los motivos económicos sean los únicos que determinan el comportamiento de los hombres en las sociedades (...) Es inadmisible descuidar el panel de los factores psicológicos cuando se trata de las reacciones de *seres humanos vivos* (...) En un estudio precedente hemos resaltado las exigencias considerables del superyo determinados por una nueva situación económica. En fin, no olvidemos que por debajo



de la colectividad humana sometida a necesidades económicas, el proceso de la evolución cultural, que algunos llaman civilización, prosigue y que, al mismo tiempo que sufre la influencia de todos los otros factores, es, en su origen, independiente de ellos”. Castoriadis convierte las agudas observaciones freudianas en un fecundo desarrollo teórico que se organiza como un nuevo campo del conocimiento en *La ins-*

titución imaginaria de la sociedad; no sólo refuta el determinismo económico sino que con una multifacética conceptualización de las relaciones entre lo psíquico y lo social llena el vacío teórico del psicoanálisis contemporáneo, que se esteriliza en lo unilateral de algunas de sus explicaciones de los fenómenos culturales.

En el balance que realiza en *Lo hecho y lo por hacer* cabe destacar los ho-

rizontes que ahí se abren para luchar contra lo que críticamente Castoriadis denomina “el conformismo generalizado” que amenaza de extinción a la sociedad contemporánea. Muy bien lo expresa en la reseña que hace Robert Redeker de dicho texto para *Le Monde Diplomatique* (agosto 1997 p 24): “Castoriadis nos da herramientas para confrontar, para edificar barricadas, para contemplar un socialismo del futuro, para pensar el cambio del mundo, para desear cambiar la vida políticamente”.

No es posible decir que la lectura de Castoriadis sea fácil, pero su dificultad no es un invento estilístico para intimidar al lector, como si se quisiera anular de entrada las posibilidades de su reflexión autónoma, de una crítica del texto que tiene entre manos. No, la dificultad de la lectura de Castoriadis es inherente a la complejidad de aquello que continuamente está revelando: la imposibilidad de establecer compartimientos cerrados en las diversas dimensiones del conocimiento filosófico, psicoanalítico, económico y entre estos integrados campos de investigación y la acción política creadora de democracia real. En la exposición se expresa la totalidad en cada uno de los temas aislados que aborda; el concepto más densamente integrador de la totalidad de lo filosófico, político y psicoanalítico

en el psiquismo y en lo social es la “imaginación radical”.

El ya citado Redecker se pregunta: “¿Qué es eso de imaginación trascendente, centro alrededor del cual gravita todo el pensamiento de Castoriadis?” Y él mismo contesta: “Castoriadis renueva en forma absoluta la cuestión. La imaginación radical es la actividad por medio de la cual todo ser viviente se fabrica su mundo propio, singular cada vez. En el hombre, esta imaginación radical

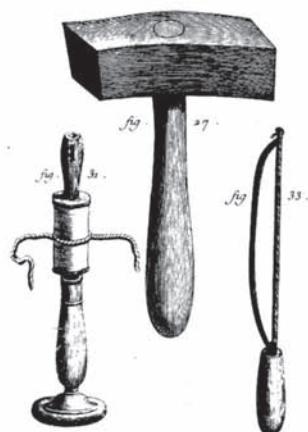
na: vitales, psíquicas y socio-políticas. Castoriadis le da vuelta a la vulgata filosófica: las construcciones políticas, jurídicas y morales, lejos de ser producciones de la razón son creaciones de la imaginación (la razón misma es un derivado de la imaginación).

De una manera general, la imaginación radical, en las tareas que son las de la vida, de la psiquis, de la sociedad, inventa cada vez un “mundo propio”, un mundo para sí, que invariablemente se caracteriza por el cierre.

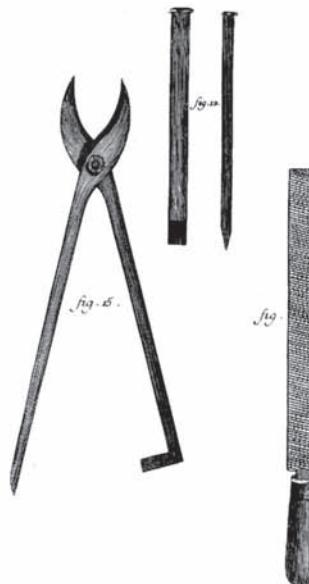
La imaginación radical humana, desfuncionalizada, crea formas que son, a la vez, significaciones e instituciones del imaginario social y político; como instituyente secreta nuevas leyes, nuevas instituciones, como instituido está fijado en leyes, reglamentos, instituciones establecidas”.

Otro norte de la investigación de Castoriadis es el de la autonomía, y la búsqueda de la autonomía. La define como autoposición de un individuo de actuar deliberada y explícitamente para modificar su ley, es decir, su forma”. Es una tarea que deben compartir el psicoanálisis y la política guiados por la filosofía.

“Devenir autónomo” es el imperativo de Castoriadis, es el antídoto del “confor-



crea, además, las “significaciones imaginarias sociales”, base de la vida colectiva, de las religiones, de las instituciones, del derecho etc. Más particularmente, “la imaginación radical del sujeto humano y el imaginario social instituyente crean, y crean ex nihilo”. Es ex nihilo que esta imaginación confecciona las estructuras de la existencia huma-



mismo generalizado” en que hemos caído y lo único que puede seguir diferenciándonos entre los vivientes y para ello hay que “destruir lo económico como valor central y, de hecho, único”. Pero ¿en qué consiste esa destrucción de lo económico? Castoriadis nos indica el camino: “reapropiación del poder por la colectividad, la abolición de la división política del trabajo, la circulación sin trabas de la información políticamente pertinente, la abolición de la burocracia, la descentralización más extrema de las decisiones, la soberanía de los consumidores, el autogobierno de los productores”.

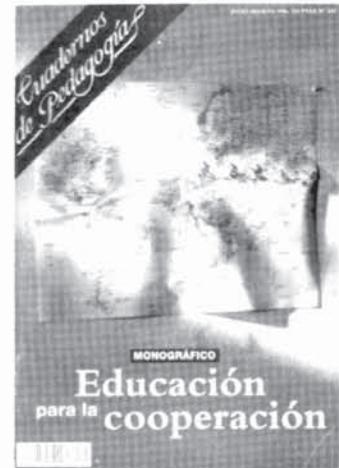
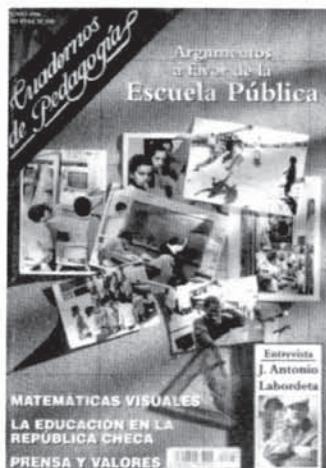
También la tarea la tiene que compartir el psicoanálisis. En la presentación que hace Redecker ”el psicoanálisis puede liberar a

los hombres para la verdadera política, aquella que busca realizar la autonomía.... El fin del análisis consiste en la emergencia en el paciente de una subjetividad reflexionante y deliberante, es decir, la más autónoma posible. A la manera de la verdadera pedagogía, el análisis auténtico es una praxis, vale decir, una actividad que considera que el otro puede devenir autónomo, el cual, por consiguiente, trata de ayudar a acceder a dicha autonomía. El psicoanálisis prepara a los hombres para la libertad política, los libera para hacerlos capaces de construir esa libertad, igualmente el análisis proporciona un modelo reducido, un prototipo de cámara de lo que la actividad política podría ser”.

Creemos nosotros, y lo afirmamos, que no es posible entender el mundo actual e influir en su futuro sin estudiar a Castoriadis. *La Ontología de la Creación*, el libro que acaba de editar Ensayo y Error es una muy buena oportunidad de comenzar a leerlo y pensar los agudos problemas que nos plantea. Problemas cuya solución permitirá liberarnos de la trampa económica más arreta que se ha armado contra la autonomía humana: la llamada globalización neoliberal.

Quadernos de Pedagogía

Cada mes presenta información pedagógica para docentes, profesionales y practicantes de la educación en los diferentes grados de enseñanza.

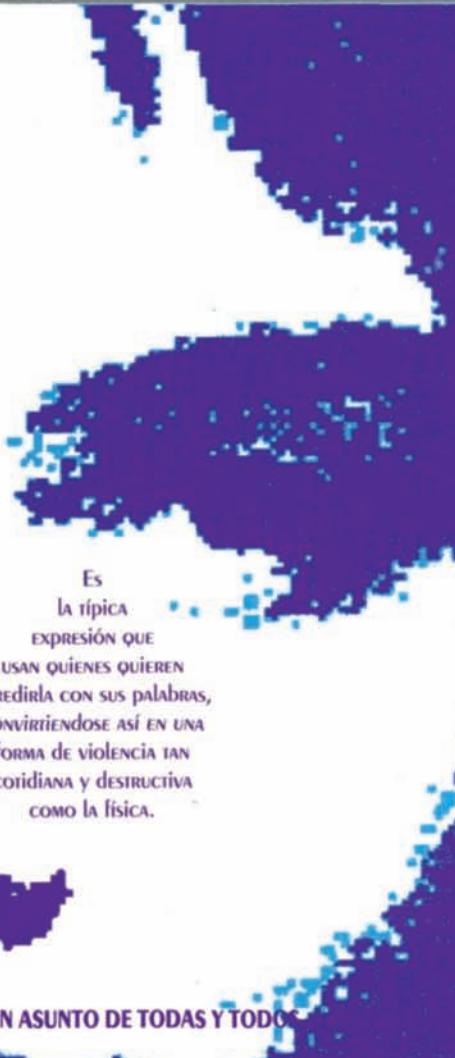


Costo \$ 7.000

Pídalos en:
EDICIONES FORO NACIONAL POR COLOMBIA
Teléfonos: 2835982-2822550-3340967-2861488
Fax: 2836045



TENÍA QUE SER MUJER...



Es
la típica
expresión que
usan quienes quieren
aqüediría con sus palabras,
convirtiéndose así en una
forma de violencia tan
cotidiana y destructiva
como la física.



LA JUSTICIA CON EQUIDAD ES UN ASUNTO DE TODAS Y TODOS



EN EL GOBIERNO DE LA GENTE.



Dirección Nacional de
Equidad para las Mujeres

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA